
La creación de riqueza y pobreza

Neoliberalismo y desigualdad

Hassan Bougrine

Traducción y prólogo de Juan F. Valerio Quintero
Presentación de Santiago Cantalapiedra

La creación de riqueza y pobreza

Neoliberalismo y desigualdad

Hassan Bougrine

Traducción y prólogo de Juan F. Valerio Quintero
Presentación de Santiago Cantalapiedra

Índice

AGRADECIMIENTOS

PRESENTACIÓN, por Santiago Álvarez Cantalapiedra

PRÓLOGO, por Juan Francisco Valerio Quintero

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. EL ESTADO, EL MERCADO Y LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES DE CLASE

1. Introducción
2. El Estado primitivo y su función económica
3. El Estado neoliberal y las políticas de pauperización
4. Conclusión

CAPÍTULO 2. LA DEMOCRACIA EN EL GOBIERNO: EL PODER DE LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS

1. Introducción
2. La democracia en el Gobierno
3. Democracia económica y social
4. Conclusión

CAPÍTULO 3. RIQUEZA PRIVADA.... Y DEUDA PÚBLICA

1. Introducción
2. De activos y pasivos
3. Política pública y creación de riqueza
4. Conclusión

CAPÍTULO 4. PLENO EMPLEO FRENTE A ESCASEZ

1. Introducción
2. La austeridad y la creación de escasez artificial
3. La necesidad del pleno empleo
4. Conclusión

CAPÍTULO 5. INNOVACIÓN, APROPIACIÓN Y PROGRESO

1. Introducción
2. El gran salto adelante de la humanidad: la innovación y el papel del Estado
3. La mercantilización del conocimiento y las perspectivas de progreso
4. Conclusión

CAPÍTULO 6. ATRASO INDUSTRIAL, COMERCIO INTERNACIONAL Y FINANZAS

1. Introducción
2. El peso de la historia, la gran divergencia y la política industrial
3. El poder de las finanzas: eliminación de la restricción externa
4. Conclusión

CAPÍTULO 7. LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA CRISIS ECOLÓGICA

1. Introducción
2. La economía fósil y el auge de la industrialización capitalista
3. La economía verde como alternativa
4. Conclusión

SOBRE EL AUTOR

NOTAS

FUHEM ECOSOCIAL

Espacio de reflexión, encuentro y debate que analiza las tendencias y los cambios profundos que configuran nuestro tiempo desde una perspectiva crítica y transdisciplinar.
<https://www.fuhem.es/ECOSOCIAL/>

Hassan Bougrine

La creación de riqueza y pobreza

NEOLIBERALISMO Y DESIGUALDAD

**Traducción del inglés de
Juan Francisco Valerio Quintero**



COLECCIÓN ECONOMÍA INCLUSIVA

DISEÑO DE COLECCIÓN: PABLO NANCLARES

TRADUCCIÓN Y PRÓLOGO DE JUAN FRANCISCO VALERIO QUINTERO

© HASSAN BOUGRINE, 2024

**© FUHEM ECOSOCIAL
AVDA. DE PORTUGAL, 79 POSTERIOR
28001 MADRID
TEL. 91 575 21 09
WWW.FUHEM.ES**

**© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2024
FUENCARRAL, 70**

28004 MADRID
TEL. 91 532 20 77
WWW.CATARATA.ORG

**LA CREACIÓN DE RIQUEZA Y POBREZA.
NEOLIBERALISMO Y DESIGUALDAD**

ISBN: 978-84-1067-011-2
ISBN: 978-84-1352-955-4
DEPÓSITO LEGAL: M-6.465-2024
THEMA: KCP/KPCB/KCM/KCSA

ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONSTAR EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

*A mis hijos, Salma Bougrine y Karim Bougrine.
Con mi amor para siempre.*

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría dar las gracias a muchos amigos y colegas que leyeron varios capítulos del libro y me proporcionaron valiosos y útiles comentarios, que dieron lugar a importantes revisiones del manuscrito dándole un mejor enfoque. Este libro se ha beneficiado de las sugerencias, preguntas y ánimos de Santiago Álvarez Cantalapiedra de FUHEM y de Carmen Pérez, editora de la Catarata; y por sus esfuerzos les estoy especialmente agradecido. Por último, quiero agradecer especialmente las sugerencias de los siguientes colegas: Fletcher Baragar, Roy Culpeper, Radhika Desai, Adrien Faudot, Marc Lavoie, John Loxley, Brian K. MacLean, Thomas Michl, Anthony E. Myatt, Alain Parguez, Louis-Philippe Rochon, Sergio Rossi, Mario Seccareccia, John Serieux, John Smithin, Brenda Spotton-Visano y Matías Vernengo.

PRESENTACIÓN

Este libro de Hassan Bougrine muestra de forma elocuente que la pobreza no es natural ni inevitable, sino una elección a partir de las reglas e instituciones que se diseñan en una sociedad y de las políticas públicas que se aplican en un momento determinado. Nada impediría aliviarla si así lo decidiéramos. Incluso las severas restricciones que nos impone actualmente la crisis ecológica no nos condenan irremediablemente a la pobreza, sino a repensar los fines que perseguimos y los medios para lograrlos.

Enumeraré algunas de las principales ideas que animan el libro:

- Primera: en las sociedades modernas la riqueza y la pobreza se encuentran vinculadas dialécticamente y, por eso mismo, en ellas asistimos a un proceso de “coproducción” de ambas. Dicho con otras palabras: los mecanismos de producción de riqueza y pobreza bajo el capitalismo van de la mano.
- Segunda: los mecanismos a través de los que se crea riqueza y pobreza se relacionan con las instituciones y las relaciones de poder; así pues, las fuentes de la riqueza y de la pobreza son las del poder y las instituciones por él diseñadas.
- Tercera: resulta enormemente relevante saber cómo se diseñan las instituciones y las políticas económicas y sociales, pues dependiendo de quién detenta el poder y qué intereses prima, podemos encontrarnos ante un “Estado depredador” que

contribuye con sus políticas a la explotación y opresión de clases sociales, territorios, mujeres y naturaleza o bien, por el contrario, ante agentes y procesos que podrían contribuir a la justicia social y de género, a la prosperidad compartida y a la preservación de la naturaleza.

Cabe ilustrar esta argumentación atendiendo a la institución de la propiedad. Cuando los recursos vitales y productivos eran comunes, la subsistencia y el bienestar de una sociedad eran de hecho tareas colectivas. Pero cuando el acceso a esos recursos se volvió privativo (es decir, cuando adoptaron la forma de propiedad privada), la escasez económica empezó a recrearse como un problema individual, de manera que los estados de privación de las personas pasaron a estar marcados por quienes detentan el poder de apropiarse —generalmente a través de la coacción— de unos recursos que anteriormente eran compartidos. La implantación generalizada de la propiedad privada de los medios de vida y de producción bajo el capitalismo ha venido unida a un fuerte deseo de posesión, algo que no estaba presente en las pasiones humanas con anterioridad, definiendo la estratificación social e introduciendo privilegios y un desigual grado de respeto a personas, grupos y clases sociales. En la evolución histórica del sistema de propiedad privada las formas son tan variadas que se han ido extendiendo más allá de los recursos tangibles, para incluir el control de los bancos privados sobre la creación del dinero y el acceso al crédito, privilegiando así a ricos y poderosos y excluyendo o dificultando el acceso al resto de los miembros de la sociedad. Más aún, el sistema de propiedad privada envuelve ahora también el conocimiento y las ideas (a través de los derechos de autor, marcas, licencias y patentes) hasta llegar incluso a los afectos, como nos muestra toda la literatura gerencial acerca de la identificación y entrega que exigen actualmente las corporaciones modernas a sus empleados. La propiedad devino así en un dispositivo de control social y de transferencia generacional de riqueza (a través de la herencia) que no solo produce desigualdad y pobreza, sino que también la perpetúa.

En sociedades como las capitalistas, en las que el poder se asienta en la riqueza, el poder económico se fusiona con el político, y el Estado se convierte en un agente al servicio y protección de los intereses de la clase económicamente dominante. De ahí que la profundización y extensión de la democracia y la soberanía nacional, más allá del estricto perímetro conceptual y político en que han sido confinadas, resulten fundamentales para que la prosperidad pueda llegar a ser distribuida equitativamente entre los miembros de una sociedad y las transformaciones socioeconómicas puedan ser llevadas a cabo para afrontar la profunda crisis ecosocial que atravesamos.

La importancia de utilizar el poder político del Estado ha quedado perfectamente acreditada en la era neoliberal. No bastaba con generar un consenso pasivo que garantizara el consentimiento a través de la difusión e inoculación de su cuerpo doctrinal (individualismo competitivo, deseo de posesión, primacía del mercado, etc.), también era necesaria la aplicación de políticas derivadas del uso del poder del Estado. Las políticas neoliberales de privatización y mercantilización crecientes tuvieron como consecuencia inmediata la creación de una escasez artificial que ha sumergido a muchos miembros de la sociedad en la privación y la pobreza mientras se lograba construir un marco general que permitía el logro de los fines privados. De esta experiencia convendría extraer las debidas enseñanzas. Por ejemplo, un Estado reformado a partir de las ideas de democracia real y soberanía nacional, acompañado de un multilateralismo que reflejara una cooperación honesta en la política internacional para abordar los desafíos globales y facilitar el acceso de los países empobrecidos a la tecnología y a la financiación necesaria, constituirían piezas claves de la construcción de alternativas.

Esta tarea requiere de un doble movimiento que ejecuta con maestría Bougrine. Por un lado, se hace necesaria la combinación de enfoques y disciplinas para mostrar la raíz de los problemas y desvelar los mecanismos a través de los que se recrea la riqueza y la pobreza. Solo un diálogo interdisciplinar desde un enfoque integrador permite desvelar las fuentes de poder. Por otro lado, si la historia cuenta, si las situaciones que

se viven son dependientes de las trayectorias seguidas, es necesario completar el movimiento anterior con otro que nos permita aprender de la historia. El análisis de los distintos aspectos de la realidad económica que aborda este libro no se hace desde una economía autista, sino desde el diálogo con los conocimientos que nos proporcionan otras disciplinas (como la antropología, la etnografía, la politología o las ciencias naturales), y se hace además en comparación con lo acontecido en otras épocas. El resultado es una sugerente indagación en los factores que contribuyen a mejorar la comprensión de nosotros mismos y de los fenómenos en la sociedad y en la naturaleza, permitiéndonos identificar qué vectores podrían impulsar una prosperidad verdaderamente inclusiva que diera sentido y contenido a la idea de progreso humano.

SANTIAGO ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA
Director del Área Ecosocial de FUHEM
Febrero de 2024

PRÓLOGO

A pesar de su aparente brevedad, el presente texto de Hassan Bougrine es un libro completo. En siete equilibrados capítulos, el autor convoca la historia y la geografía, la economía y la política, la sociología y la filosofía con sabiduría y previsión. Da muestra, asimismo, de una profunda comprensión de los temas tratados y el conocimiento necesario para ofrecer al lector un programa de acción bien diseñado, provisto con el potencial requerido para impulsar nuestras sociedades del sur global más allá de la dependencia y el atraso, es decir, hacia la libertad y la prosperidad.

De hecho, el libro ofrece propuestas prácticas para implementar políticas económicas que permitan a nuestras sociedades combatir la pobreza y la desigualdad, avanzando hacia la justicia social, el progreso y la prosperidad compartidos. El autor es un investigador crítico y acucioso, escritor y pensador que ha sido capaz de analizar la trayectoria de las sociedades modernas y estudiar sus sistemas políticos para exponer la raíz fundamental de la pobreza, el desempleo y el subdesarrollo. Es gracias a ello que el presente libro muestra los requisitos necesarios para obtener el pleno empleo, crear riqueza y asegurar el progreso.

El primer capítulo presenta un análisis del surgimiento del Estado primitivo y su papel económico para mostrar, de este modo, cómo desde la antigüedad fue y ha sido un agente al servicio y protección de los intereses de la clase económicamente dominante. Este diagnóstico ayuda a comprender la situación actual resultante de las políticas de

empobrecimiento aplicadas por el Estado neoliberal. Por ello el autor insiste, en el segundo capítulo, sobre la importancia de la democracia en el Gobierno, la cual permitiría a las masas influir e, incluso, contribuir directamente a la elaboración de políticas económicas que sirvan a sus intereses.

En el tercer capítulo Bougrine muestra la manera en la que el Estado puede crear riqueza y distribuirla equitativamente entre todos los miembros de la sociedad. La soberanía del Gobierno nacional en el ámbito financiero es muy importante porque elimina las limitaciones presupuestarias y permite al Gobierno financiar todos los proyectos de desarrollo, desde la política de pleno empleo (tema del cuarto capítulo) hasta la inversión en educación, la investigación científica y la innovación para lograr el progreso tecnológico e industrial, que es el tema del quinto capítulo.

El sexto capítulo es de particular importancia para América Latina y el sur global, que ha sufrido —y sigue sufriendo— el flagelo del colonialismo. En dicho capítulo, el autor aborda lo que él mismo ha denominado “el peso de la historia” para explicar las razones de la disparidad entre los países colonizadores y las colonias, así como el papel de la política industrial seguida en aquella época, que incluía la imposición de un régimen comercial, por la fuerza de las armas, a fin de garantizar el crecimiento y la prosperidad de los países coloniales, lo que redundó en perjuicio de los países colonizados.

En el séptimo capítulo, Bougrine concluye prestando atención a la crisis ecológica resultante de la industrialización que se basa en la energía de los combustibles fósiles, patrón sobre el que se han construido las economías capitalistas desde su creación. También advierte que el cambio hacia una economía ecológica no traerá por sí mismo la justicia social y económica de manera automática y que, para alcanzar este objetivo, debemos trabajar incansablemente a fin de construir una sociedad mejor.

Universidad Autónoma de Zacatecas
15 de noviembre de 2023

INTRODUCCIÓN

El proceso a través del cual son creadas la riqueza y la pobreza a menudo se escapa a la mayoría de las personas en razón de la sutileza con la que funciona dicho mecanismo. Nada en él resulta obvio porque su mecánica está intrincadamente entrelazada en las instituciones que gobiernan nuestra vida diaria, lo que nos conduce a aceptar el resultado de su funcionamiento como si se tratara de nuestro destino, por muy desafortunado que este sea. Pero cuando las contradicciones entre la riqueza y la pobreza obligan a las clases sociales a enfrentarse, el proceso queda al descubierto: reside en el poder de diseñar y aplicar determinadas políticas económicas y sociales. Nuestras instituciones construidas, desde la obligación de pagar impuestos y cumplir contratos, pasando por el sistema educativo y el requisito del respeto absoluto de los derechos de propiedad, simplemente legitiman ese resultado y hacen que las obligaciones sean no solo morales, sino también jurídicamente vinculantes. Cada vez que una sociedad diseña un sistema para asegurar alguna forma de orden en la producción, distribución y consumo de los recursos, siempre depende del poder de estas instituciones para hacer cumplir el funcionamiento cotidiano de ese proceso.

Este reconocimiento nos obliga a estudiar de cerca las fuentes de poder que se confieren a quienes están a cargo de la formulación de políticas. Algunos de los principales estudiosos de la desigualdad y la pobreza han llegado a la conclusión de que la arraigada elite que hoy dicta sus políticas de austeridad al resto de la población se beneficia de un fuerte

apoyo de una oligarquía que utiliza su riqueza para obtener el control del proceso político y, por lo tanto, de la elaboración de la política económica (por ejemplo, Galbraith, 2016, 2012; Hudson, 2015; Stiglitz, 2016, 2013). La estratificación social, es decir, la división de la sociedad en pobres y ricos —aunque no es peculiar del capitalismo— se ha polarizado recientemente y la oligarquía ha logrado convertir al Gobierno en un “Estado depredador” (véase Galbraith, 2008) y a la política económica en un instrumento de “lucha de clases”: según la OIT (2014) y la OCDE (2015, 2012), la aplicación de políticas de austeridad desde la década de los ochenta ha convertido el desempleo de larga duración y el trabajo a tiempo parcial en la nueva normalidad, lo que ha dado lugar a una caída de la proporción de la renta nacional correspondiente al trabajo en la mayoría de los países de la OCDE.

Una de las explicaciones más populares de la existencia de la pobreza es la noción de escasez, lo que significa que no hay suficiente para todos, ya se trate de comida o dinero. La escasez de dinero, como resulta ser, es el argumento general utilizado para justificar todos los males de la sociedad. Justifica el hambre y la malnutrición, la falta de vivienda y el analfabetismo, la falta de atención sanitaria y todas las demás manifestaciones de la pobreza. En el presente análisis se considera que la pobreza no es inevitable. No es el sino y no debería ser el destino de las personas débiles e impotentes en una sociedad moderna. La pobreza es creada por el ser humano y como tal también puede ser eliminada por medio de políticas económicas y sociales inteligentes¹. Stiglitz (2015: 6) considera la desigualdad como el resultado de “una elección que hacemos con las reglas que creamos para estructurar nuestra economía”.

A pesar de que la lucha contra la pobreza en los llamados países en desarrollo ha estado en la agenda de las Naciones Unidas por lo menos desde la década de los setenta y el lema del Banco Mundial ha sido “un mundo libre de pobreza” durante este mismo periodo, una evaluación superficial indica que sus políticas han sido un fracaso total. De hecho, el propio Banco Mundial (2016) nos advierte en su informe de 2016 que solamente en África la pobreza extrema ha aumentado en otros 100

millones de personas desde 1990, que atribuye al crecimiento demográfico. Incluso, a pesar de que el Banco Mundial ha cambiado su definición de pobreza y su medición —por ejemplo, sustituyendo la PPA (paridad del poder adquisitivo) de 2011 por la de 2017—, la situación ha empeorado drásticamente para África, con un aumento del número de personas en situación de pobreza extrema en el área subsahariana de 271,5 millones en 1990 a 389 millones de personas en 2019². Además del crecimiento de la población, el Banco Mundial ha encontrado otro culpable en la pandemia de COVID-19. Su informe más reciente, *Pobreza y prosperidad compartida 2022*, afirma que “sobre la base de los datos adicionales recopilados en los dos últimos años, ahora está más claro que la pandemia de COVID-19 ha desencadenado efectivamente el retroceso más pronunciado en la lucha contra la pobreza mundial desde 1990, y muy probablemente desde la Segunda Guerra Mundial” (Banco Mundial, 2022: 46). Muchos académicos han cuestionado la seriedad de tales objetivos de lucha contra la pobreza y señalan la hostilidad del discurso político e intelectual dominante hacia una estrategia general que busca seriamente *erradicar* la pobreza.

La existencia de riqueza y pobreza, a menudo literalmente una al lado de la otra, es quizás la contradicción más fundamental y duradera de la historia de la humanidad. La propiedad de los recursos vitales y productivos es lo que diferencia a los ricos de los pobres. En las sociedades antiguas, cuando las necesidades humanas eran básicas y la riqueza significaba obtener los bienes de la naturaleza para satisfacer estas necesidades “naturales”, el aumento de la riqueza se traducía simplemente en un mayor consumo y un mejor bienestar. Riqueza significaba entonces todas las cosas que eran útiles para satisfacer las necesidades y asegurar el bienestar de su poseedor. La posesión de estas “cosas” se convirtió en una necesidad. En las sociedades modernas, el deseo de acumular riqueza ya no está necesariamente dictado o justificado por tales necesidades.

En su estudio clásico *La sociedad antigua*, Morgan (1877: 537) nos informa que, en las primeras etapas de la evolución humana, con la

excepción de algunos artículos personales, la pasión por la posesión de las cosas no había entrado en la mente humana: “Las tierras, que aún no son objeto de propiedad, eran propiedad de las tribus en común, mientras que las casas de vecindad eran propiedad conjunta de sus ocupantes”. La evidencia antropológica nos dice que en estas sociedades la subsistencia y el bienestar eran de hecho una tarea colectiva, por lo que la gente se organizaba de manera que pudiera maximizar el bienestar de toda la comunidad. Los valores sociales fomentaron la capacidad de reunir y producir más bienes y servicios comunitarios. Los miembros se enorgullecían de hacerlo porque la protección de su comunidad contra las calamidades de la naturaleza significaba su propia protección individual. Juntos eran más fuertes, y lo sabían instintivamente. Este comportamiento se garantizó —y reforzó— a través de la práctica democrática de la *reciprocidad* y la *redistribución* estricta de los recursos (véase Polanyi, 1944). La escasez económica, es decir, la pobreza, no era un problema individual. Al igual que las catástrofes naturales, se enfrentó de forma colectiva y se resolvió mediante el reparto y la redistribución equitativa.

La escasez económica se convirtió en un problema individual cuando la redistribución dejó de ser igual. Ese trágico punto de inflexión en la historia de la humanidad ocurrió cuando la función de distribución fue arrebatada por “familias poderosas de hombres influyentes ... la aristocracia gobernante, [y]... la burocracia administrativa” (Thurnwald, 1932: 106). Porque fue entonces cuando estos “distribuidores” aseguraron su control directo sobre la distribución de la tierra fértil, los derechos de agua y otros bienes y servicios esenciales para la supervivencia, lo que les dio entonces el “poder de gobernar por medio de recompensas y castigos al proveer y retener” los recursos bajo su control y “despojar de los medios de subsistencia a aquellas personas que no contribuyeron con el trabajo que se les exigía, que no produjeron suficientes recursos o que acumularon recursos en secreto” (Haas, 1981: 96-8). La propiedad, la posesión de recursos vitales, se convirtió en el instrumento de control social.

En este contexto, Morgan (1877: 560-1) señaló que “la propiedad y el

cargo administrativo eran los cimientos sobre los que se asentaba la aristocracia” y comenzó a perturbar “el equilibrio de la sociedad introduciendo privilegios desiguales y grados de respeto a los individuos entre personas de la misma nacionalidad, convirtiéndose, así, en fuente de discordia y lucha”. Es cierto que hubo oposición a tal estratificación, pero hay pruebas abrumadoras de que el Estado primitivo que surgió en adelante recurrió al uso de la fuerza bruta para sostener las decisiones tomadas por estos distribuidores que disfrutaban de un poder cada vez mayor al retener los recursos de sus conciudadanos, es decir, al crear una escasez artificial para hacerlos pasar hambre, sufrir la falta de vivienda, frío, etc., con el fin de obligarlos a la sumisión y la obediencia.

Hoy en día, el Estado neoliberal utiliza políticas de austeridad, que se basan en la noción de escasez, para lograr el mismo objetivo de desviar más recursos a la clase dominante —que está armada y potenciada por su propiedad de recursos vitales—, el más importante de los cuales es el capital financiero. Sin embargo, a diferencia de las sociedades primitivas, en las que la exclusión y la privación del acceso a los recursos adoptaban una forma física directa y en las que se podía confiar en esbirros para imponer la distribución desigual, en las democracias parlamentarias preferimos hacerlo a través del mercado. En las economías de mercado, el acceso a los bienes y servicios y la adquisición de activos dependen de los ingresos de la persona, de modo que los desempleados y las personas de bajos ingresos están legalmente sujetos a la privación y la exclusión a través de las fuerzas del mercado.

Desde entonces, el deseo de poseer, la pasión por la posesión y la “avidez de la ganancia” han crecido tanto que se han convertido en fuerzas muy dominantes en la definición de la estratificación social y en la configuración de las relaciones entre los individuos y entre las clases. En el último cuarto del siglo XIX, Morgan (1877: 561) escribió que, en la sociedad moderna, “el crecimiento de la propiedad [privada] ha sido tan inmenso, sus formas tan diversificadas, sus usos tan expandidos y su gestión tan inteligente en beneficio de sus propietarios [...] que la mente humana se encuentra desconcertada en presencia de su propia creación”.

Obviamente, Morgan no sabía nada de los productos financieros esotéricos de hoy en día, pero probablemente no se habría sorprendido dado que había notado la tendencia hacia una “carrera inmobiliaria” y esperaba que no se convirtiera en el destino final de la humanidad. Desgraciadamente, nuestra sociedad capitalista moderna está construida sobre un sistema de propiedad privada que se extiende más allá de los recursos tangibles para incluir el conocimiento y las ideas como derechos de propiedad de “invenciones” o “innovaciones”, que ahora están protegidas por leyes estándar universalmente reconocidas sobre la propiedad intelectual en forma de derechos de autor, marcas comerciales y patentes, y que se han convertido en una fuente de ingresos y riqueza para sus propietarios.

El propósito de la ley de propiedad es asegurar la exclusión y proporcionar la garantía de que el patrimonio permanezca “en la familia”, transmitiéndolo a los herederos. Por eso muchas de las familias ricas de hoy en día también eran ricas hace varios siglos (véase Barone y Mocetti, 2016). Aunque hay casos de movilidad social, ya que algunos ricos afortunados “pueden surgir de entre la multitud”, por utilizar la expresión de Tocqueville, la herencia de la riqueza sigue desempeñando un papel importante y garantiza que los niños nacidos en familias ricas sigan siendo ricos, mientras que los pobres pueden incluso experimentar peores niveles de vida que sus padres. La pobreza, aunque vivida y sufrida por individuos, es un problema colectivo; un problema social en el sentido de que afecta solo a ciertas personas y nunca a otras. Mientras no haya políticas activas de redistribución gubernamental, el *statu quo* se mantiene y puede continuar durante generaciones, incluso siglos. La riqueza y la opulencia son la base del poder e influencia personal en la sociedad. Por eso es importante insistir en la democracia en el Gobierno para beneficiarse del poder de la formulación de políticas, que puede utilizarse como palanca para eliminar la pobreza y lograr la democracia en las esferas económica y social.

La pobreza es una forma perversa de retribución social, pues no hay peor castigo que dejar que una persona sufra hasta que sucumba a la

muerte por falta de alimento. Las Naciones Unidas estiman que alrededor de tres millones de niños menores de cinco años mueren cada año a causa de la desnutrición. A pesar de todo el alboroto de las ONG, que ganan mucho dinero con el negocio de ayudar a los pobres (véase Rashid, 2006), existe la aceptación tácita de un veredicto aparentemente vengativo de “dejarlos morir” —para reducir la población—, debido a algunos temores maltusianos profundamente arraigados. Durante el apogeo de los “programas de ajuste estructural” (PAE) en África y Asia, el Banco Mundial había ideado una solución aún más radical al “problema maltusiano”, abogando y apoyando financieramente un programa denominado planificación familiar, que consistía esencialmente en promover las píldoras anticonceptivas entre los pobres, pero a menudo la solución preferida era cortar las trompas de Falopio de las mujeres pobres, una operación conocida clínicamente como esterilización. Estas operaciones clínicas se realizaron en hospitales públicos “de forma gratuita” y se presentaron como evidencia del cumplimiento del programa de ajuste estructural para garantizar que los Gobiernos reciban asistencia financiera del Banco Mundial (véase Connelly, 2008).

El control de la población mediante la esterilización forzada de las mujeres en los países pobres tenía sus justificaciones teóricas en un libro de Ehrlich (1968: 3, 18), en el que advertía de la hambruna masiva porque había “demasiada gente” y “muy poca comida”. Estas afirmaciones se vendieron como hechos y rápidamente un coro de individuos, organizaciones e instituciones adoptaron la idea de la superpoblación como el problema número uno de la humanidad: las Naciones Unidas con su PNUD, UNICEF, UNESCO, FAO, la OMS, la OCDE y muchos más sostuvieron que el crecimiento de la población no era sostenible y que había que hacer algo. Para resolver los problemas de la pobreza, la escasez de alimentos, la contaminación y los daños al medioambiente, es necesario reducir el crecimiento demográfico y para ello es preciso controlar por la fuerza la procreación. El asesinato masivo a través de “pequeñas” guerras permanentes (véase Amin, 2004) y la muerte por inanición se convirtieron tácitamente en soluciones

aceptables, y sorprendentemente muchas personas se resignaron a este destino y se olvidaron de las tragedias —viendo impasiblemente cómo se desarrollaban en sus pantallas de televisión como si los actores y las víctimas fueran solo elfos y troles—.

He aquí una razón para la apatía de los espectadores. Desde la época colonial, los misioneros, reporteros, novelistas y académicos de Occidente han retratado a menudo a las antiguas civilizaciones del este y del sur con “sus millones de habitantes” como amenazas potenciales. Ehrlich (1968: 1-2, 128-9), por ejemplo, comenzó el capítulo 1 de su libro afirmando que llegó a comprender el problema de la explosión demográfica “emocionalmente” una noche en la que él y su esposa e hija regresaban a su hotel en Delhi. Las calles de Delhi, dijo, “parecían estar llenas de gente. Gente comiendo, gente lavando, gente durmiendo. Gente de visita, discutiendo y gritando. Gente metiendo las manos por la ventanilla del taxi, pidiendo limosna. Gente defecando y orinando. Gente agarrada a los autobuses. Gente pastoreando animales. Gente, gente, gente, gente”.

Después de atribuir el problema de la pobreza extrema en la India y otros países a “demasiada gente”, preguntó: “¿Se morirán de hambre elegantemente, sin hacer zozobrar el barco? ¿O intentarán abrumarnos para conseguir lo que consideran su parte justa?”. De ahí las palabras tácitas de la frase “dejémoslos morir” o, mejor aún, “evitemos que nazcan”. Obsérvese, sin embargo, que al mismo tiempo se estaba generalizando en la mayoría de los países industrializados una política pública extensiva de “bonos de lactancia” con el fin de aumentar las tasas de fertilidad, ya que la población estaba envejeciendo. Los responsables de la formulación de políticas en estos países también han recurrido —y siguen haciéndolo— a la inmigración procedente de Asia, África y el resto de las Américas para lograr el aumento deseado de la población, porque sabían que la población era buena para el desarrollo, y no necesariamente un obstáculo para este, como lo ha demostrado China, por ejemplo.

En un aparente intento de disipar la ira de quienes están genuinamente preocupados por la pobreza y el desarrollo humano, y tal vez para

apaciguar la angustia de los pobres, algunas organizaciones internacionales y sus economistas han recurrido recientemente al uso cada vez más frecuente de la palabra “felicidad” y han elaborado un “índice de felicidad” para argumentar que, entre otras cosas, los africanos pueden ser pobres pero son felices, y eso es lo que cuenta (véase, por ejemplo, Layard, 2005). Como parte de sus nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas se han dado, una vez más, otra ampliación de sus propios plazos y ahora se proponen eliminar la pobreza extrema para el año 2030². Su Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible también publica el *Informe sobre la felicidad en el mundo* que, irónicamente, en 2015 clasificó a Libia —un país destruido, desgarrado por la guerra y gobernado por milicias— como sexagésimo tercero, por delante de Grecia, que ocupó el puesto 102 en la escala de felicidad (véase Helliwell, Layard y Sachs, 2015: figura 2.2). Pero eso no explica por qué los refugiados corren el riesgo de ahogarse en el mar Mediterráneo con la esperanza de llegar a Grecia en lugar de quedarse en Libia para disfrutar de su “felicidad”.

Utilizando el caso de Grecia y otros países periféricos europeos, Galbraith (2016) cuenta la historia de la creación de la riqueza y la pobreza con detalles vívidos. Muestra cómo la elite política de Europa, apoyada por los poderosos oligarcas y acreedores, logra imponer a Grecia políticas que determinan el curso de los acontecimientos —es decir, lo que sucede con el sustento de los desempleados, los empleados del sector público, los pensionistas y la mayoría de la población— principalmente porque Grecia no tiene su propio dinero. La principal lección que deben aprender las naciones es que la soberanía nacional importa cuando se trata de la creación de riqueza y pobreza.

La soberanía monetaria, tal como han sostenido durante mucho tiempo los economistas poskeynesianos, es de hecho crucial para financiar las iniciativas de desarrollo nacional y, por lo tanto, para luchar contra la pobreza. En este sentido, la presente argumentación sostiene que la mecánica de la creación de dinero está *deliberadamente* envuelta en el misterio y que, en realidad, un Gobierno soberano (nacional), con su

propio banco central, no se enfrenta a limitaciones presupuestarias. Usando su propia moneda, el Gobierno soberano puede pagar cualquier gasto — ya sea relacionado con la construcción de un nuevo hospital, una escuela o una autopista, o con la contratación de maestros, enfermeras, ingenieros o barrenderos— simplemente creando nuevo dinero. Siempre que hay necesidad de mejorar la infraestructura pública o de crear puestos de trabajo, el Gobierno simplemente ordena a su banco central que cargue en su cuenta y transfiera los fondos a los destinatarios correspondientes, acreditando sus cuentas en los bancos comerciales con una cantidad igual. El Gobierno se endeuda con su banco central, pero los beneficiarios del sector privado se benefician de un ingreso, que pueden utilizar para comprar bienes y servicios o adquirir activos y empezar a construir su riqueza. Tras este análisis, descubrimos que la deuda que el Gobierno tiene con su banco central es, en realidad, una fuente de riqueza privada. Comprender el dinero y cómo se financia el gasto público es esencial porque libera efectivamente al Gobierno de estar sujeto a una restricción presupuestaria imaginaria y le permite aplicar activamente políticas para lograr el pleno empleo y eliminar la pobreza.

Cabe señalar que este análisis se centra principalmente en dos cuestiones interrelacionadas: i) la democracia en el Gobierno y ii) el poder de la formulación de políticas que, incidentalmente, coinciden con las dos prioridades por las que Rodrik (2011) opta en su trilema político —la tercera es la globalización económica—. La búsqueda de la *democracia directa* es crucial porque da a las masas la posibilidad de influir en el proceso político, permitiéndoles tener voz y participación directa en el diseño de las políticas económicas y sociales que afectan sus vidas —o en la reescritura de las reglas que rigen la economía, como diría Stiglitz (2015)—. Estos son los ingredientes esenciales de la soberanía nacional. Desde esta perspectiva, la democracia política es, necesariamente, solo un componente de una democracia inclusiva que se extiende a las esferas económica y social, todo ello en el contexto del respeto y el cuidado de la naturaleza y el medioambiente.

Sin embargo, en lo que respecta al trilema político, los países pobres no pueden permitirse el lujo de renunciar a la globalización y tratar de crecer como economías cerradas, ya que esto sería aventurarse por un camino más largo y sinuoso. Necesitan acceso a la tecnología extranjera para el desarrollo de su capital, así como tener acceso a la financiación. Estas son las dos principales limitaciones que frustran los proyectos de desarrollo y solo pueden superarse a través de la cooperación internacional para elaborar una reforma radical del actual sistema monetario internacional. La industrialización en los países en desarrollo es esencial para el progreso y para la transformación estructural de estas economías a fin de crear puestos de trabajo y luchar contra la pobreza, pero no debe reproducir la experiencia de la industrialización capitalista que se basó en la energía procedente de los combustibles fósiles. Esta obra concluye con la recomendación, en cambio, que el Estado democrático desempeñe un papel crucial en la realización de todo esto, apoyando la economía verde mediante iniciativas de política pública coherentemente integradas en una estrategia de desarrollo global.

BIBLIOGRAFÍA

- AMIN, S. (2004): *The Liberal Virus: Permanent War and the Americanization of the World*, Nueva York, Monthly Review Press.
- BANCO MUNDIAL (2022): *Pobreza y prosperidad compartida: Corregir el rumbo*, Washington, D. C., Grupo Banco Mundial.
- BARONE, G. y MOCETTI, S. (2016): “Intergenerational Mobility in the Very Long Run: Florence 1427-2011”, *Banca d’Italia: Working Papers*, n° 1060.
- BEEGLE, K. L. *et al.* (2016): *Poverty in a Rising Africa: Africa Poverty Report*, Washington, D. C., The World Bank.
- CONNELLY, M. J. (2008): *Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population*, Cambridge, Harvard University Press.
- EHRlich, P. R. (1968 [1978]): *The Population Bomb*, Nueva York, Ballantine Books.
- GALBRAITH, J. K. (2008): *The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too*, Nueva York, Free Press.
- (2012): *Inequality and Instability: A Study of the World Economy Just Before the Future of Europe*, New Haven, Yale University Press.
- (2016): *Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Great*

- Crisis*, Oxford, Oxford University Press.
- HAAS, J. (1981): “Class Conflict and the State in the New World”, en G. D. Jones y R. R. Kautz (eds.), *The Transition to Statehood in the New World*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 80-102.
- HELLIWELL, J. F.; LAYARD, R. y SACHS, J. D. (2015): *World Happiness Report*, Nueva York, The Earth Institute, disponible en <https://bitly.ws/3cYXk>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- HUDSON, M. (2015): *Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy*, Petrolia, Counterpunch Books.
- LAYARD, R. (2005): *Happiness: Lessons from a New Science*, Nueva York, Penguin.
- MORGAN, L. H. (1877): *Ancient Society: Or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization*, Nueva York, Holt & Co., disponible en <https://bitly.ws/3cZDB>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- OCDE (2012): *OECD Employment Outlook 2012*, París, OECD Publishing.
- (2015): *OECD Employment Outlook 2015*, París, OECD Publishing.
- OIT (2014): *Global Wage Report 2014/2015: Wages and Income Inequality*, Ginebra, International Labour Office.
- POLANYI, K. (1944): *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Boston, Beacon Press.
- RASHID, S. (2006): “Watchman, Who Watches Thee? Donors and Corruption in Less-Developed Countries”, *Independent Review*, 10(3), pp. 411-18.
- RODRIK, D. (2011): *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*, Nueva York, W. W. Norton & Company.
- STIGLITZ, J. E. (2013): *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*, Nueva York, W. W. Norton & Company.
- (2015): *Rewriting the Rules of the American Economy: An Agenda for Shared Prosperity*, Nueva York, Roosevelt Institute.
- (2016): *Rewriting the Rules of the American Economy: An Agenda for Growth and Shared Prosperity*, Nueva York, W. W. Norton & Company.
- THURNWALD, R. (1932 [1969]): *Economics in Primitive Communities*, Londres, Oxford University Press.

CAPÍTULO 1

EL ESTADO, EL MERCADO Y LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES DE CLASE

“Exigen la libre empresa, pero son los portavoces del monopolio y de los intereses creados. El objetivo final hacia el que se dirige todo su engaño es capturar el poder político para que, usando el poder del Estado y el poder del mercado simultáneamente, puedan mantener al hombre común en una eterna servidumbre”.

HENRY A. WALLACE, vicepresidente
de Estados Unidos. Citado en Culver
y Hyde (2000).

1. INTRODUCCIÓN

Los recientes avances en antropología, etnografía, historia económica y diversos campos de otras ciencias dan testimonio de la complejidad y diversidad de las formas en que los seres humanos han organizado históricamente sus relaciones para formar comunidades y construir instituciones. Sin embargo, si nos centramos en ciertos aspectos de la vida económica de estas comunidades, se hace relativamente más fácil identificar al menos los elementos esenciales que desempeñaron un papel importante en dicha evolución. En este capítulo, nuestra atención se dirige al estudio del surgimiento y la evolución de dos instituciones importantes: el Estado y el mercado, en virtud de que ambas representan el centro del poder en las sociedades modernas. Tanto el uno como el otro ejercen una enorme influencia en la vida de los individuos, las familias y las comunidades, al hacerlos sanos o enfermos, educados o ignorantes, ricos o pobres, sin mencionar el impacto en importantes rasgos de carácter como la amabilidad o la antipatía, el altruismo o el egoísmo, etcétera. Es cierto que, *a priori*, el Estado y el mercado aparecen como unas superestructuras místicas que están por encima de todos y escapan al control o manipulación de cualquiera. Pero se trata de una apariencia.

Como veremos más adelante, el Estado y el mercado son instituciones *creadas* por los seres humanos y, como tales, no son más que instrumentos que pueden ser —y son rutinariamente— utilizados por sus creadores para alcanzar metas y objetivos definidos.

En la mayoría de las sociedades actuales, la clase económicamente dominante ha adquirido algunos poderes extraordinarios y hegemónicos, convirtiendo al Estado en un agente subordinado a través de cuyos poderes (judiciales y militares, o el “ministerio de policía”, como lo llamaría Jeremy Bentham) afirma los ideales del mercado y pone en práctica las acciones y decisiones necesarias para lograrlos. Este escenario se denomina aquí el *laissez-faire* o el modelo neoliberal de organización económica y social, que en la práctica se traduce en una relación dialéctica entre el poder y la riqueza: la concentración de la riqueza conduce a una concentración del poder, que a su vez refuerza la concentración de la riqueza —afirmando así la dinámica “riqueza llama riqueza”, como se dice coloquialmente—. De qué manera podemos liberar al Estado de semejante esclavitud respecto de los poderosos intereses privados es el tema principal de este capítulo y del siguiente. El escenario alternativo en el que el Estado surge como el agente dominante que utiliza y dirige el mercado para alcanzar metas más altas de desarrollo social y crecimiento en beneficio de todos —o al menos de la gran mayoría de la población— se denominará modelo igualitario. Al estudiar y comparar los dos modelos, espero dilucidar las complejidades inherentes a la relación entre el Estado y el mercado. Esto es de suma importancia porque la principal preocupación hoy en día, tanto entre los intelectuales como entre los activistas de base, es el tipo de modelo económico y de políticas que deben prevalecer en una sociedad democrática.

Aunque en la literatura más reciente los neoliberales hablan de Gobierno pequeño e, invariablemente, intentan equiparar la idea de un mercado libre y autorregulado con la ausencia del Estado, en realidad piden un Gobierno grande y omnipresente con todos los poderes necesarios para asegurar que los principios del *laissez-faire* se cumplan.

Como comentaba Polanyi (1944: 140, 250), “el camino hacia el libre mercado se abrió y se mantuvo abierto por un enorme aumento del intervencionismo continuo, organizado centralmente y controlado”; sostuvo, asimismo, que “el mercado ha sido el resultado de una intervención consciente y a menudo violenta por parte del Gobierno que impuso la organización del mercado a la sociedad con fines no económicos”. Este esfuerzo consciente y tenaz de utilizar el aparato estatal para promover e imponer el sistema de mercado durante más de dos siglos nos dice ahora claramente dos cosas: (i) sin el Estado, el sistema de mercado no habría evolucionado hasta ser lo que es hoy; y (ii) debido a que se impone a la sociedad por un Gobierno que carece de credenciales democráticas, la ideología del libre mercado no puede sobrevivir si la sociedad recurre al sufragio universal como medio de organizar su sistema político —de ahí que lleguemos a la conclusión de que el modelo neoliberal no es compatible con la democracia *directa*—.

Las observaciones anteriores nos llevan a examinar más de cerca el surgimiento del Estado y del mercado como mecanismos organizadores de las relaciones sociales desde las primeras etapas de la evolución humana. El regreso a las sociedades antiguas es importante porque nos permite entender cómo llegaron a existir estas dos instituciones. Si bien no se pretende ofrecer aquí un relato histórico detallado o exhaustivo del surgimiento y la evolución del mercado y el Estado, sí nos proponemos hacer un repaso de algunas de las publicaciones pertinentes para destacar los acontecimientos cruciales y los puntos de inflexión en su larga trayectoria a medida que evolucionaban desde su forma primitiva arcaica hacia sus manifestaciones modernas. El propósito es estar informado sobre el pasado y usarlo como fondo para compararlo con el sistema neoliberal actual. De este modo, se intenta responder a una pregunta fundamental: ¿por qué los seres humanos, incluso en sus comunidades primitivas, pensaron alguna vez en crear un Estado y un mercado? En otras palabras, ¿cuál fue su motivación para querer crear estas instituciones y con qué propósito las necesitaban?

2. EL ESTADO PRIMITIVO Y SU FUNCIÓN ECONÓMICA

Debido a que viven y deben vivir unos con otros por necesidad, en grupos (pequeños o grandes), en comunidades (cercanas o lejanas), las personas necesariamente mantienen relaciones con sus semejantes en el hogar (para hacer las tareas domésticas), en el trabajo (para producir las necesidades de la vida) y en el juego (para mostrar y exhibir sus creencias, para celebrar la vida). La evidencia antropológica nos dice que estas relaciones no son las mismas en todas partes, sino que toman formas diversas y variadas a lo largo del espacio y el tiempo. El comportamiento de las personas entre sí no permanece aleatorio e impredecible. Con el tiempo, con la costumbre, y tal vez con la creencia religiosa, se codifica, se institucionaliza en acuerdos tácitos o escritos, por ejemplo, de cooperación y asistencia mutua, como la prestación de ayuda mutua mediante el suministro de mano de obra o bienes gratuitos. Las mercancías pueden ser intercambiadas de diferentes maneras. Por ejemplo, el donante de los bienes puede llevarlos al hogar del necesitado, el receptor, o ambos pueden acordar reunirse en un lugar determinado en un momento dado, es decir, en un mercado⁴. Por lo tanto, el mercado cubre solo un aspecto de la diversa y compleja red de relaciones humanas y su aparición no puede explicarse por los fríos cálculos del individuo y su deseo de obtener ganancias materiales y beneficios, como en la “propensión a permutar, cambiar y negociar una cosa por otra” formulada por Adam Smith (1979: 16).

Estos códigos de conducta se respetan a menudo, e incluso siempre de buena gana, pero su respeto también está garantizado por la autoridad moral, religiosa y política de los jefes y líderes locales, regionales o nacionales que, por supuesto, pueden imponerse como déspotas, pero que a menudo son elegidos por su sabiduría, conocimiento o valor para velar por el buen funcionamiento del sistema (relaciones económicas y sociales) y proteger así a los miembros de su comunidad de cosas como el abuso de otros o la agresión de los miembros de otras comunidades. Además, los jefes, es decir, el Estado “primitivo”, también debían prestar

ayuda y socorro colectivos ante las amenazas de desastres naturales que pudieran conducir a la escasez de recursos. La seguridad económica y social de los miembros individuales estaba garantizada por toda la comunidad. Esto es lo que ha hecho el Estado “primitivo” y esto es lo que se supone que debe hacer el Estado moderno: ofrecer protección, seguridad económica y social a todos los miembros de la sociedad, incluyendo protección contra el desempleo, la explotación y la escasez. Cuando fracasa o se niega intencionalmente a hacerlo, debemos entender que la justicia y la protección social ya no constituyen una prioridad en la agenda de nuestros líderes políticos, los jefes modernos, y que en su lugar se han armado para defender los intereses de la poderosa clase económica. En ese caso, la elección es clara y el impulso humano natural, el impulso de protección, exige el Estado alternativo y democrático.

Además de su función política, el Estado siempre ha tenido un papel económico. De hecho, como veremos más adelante, el Estado nació principalmente por razones económicas. Su muy destacado papel de mantener la “ley y el orden” siempre ha estado —y sigue estando— centrado en el mantenimiento del *orden económico*. En su influyente libro, *La gran transformación*, Karl Polanyi (1944) señaló que ninguna sociedad humana puede sobrevivir durante mucho tiempo sin un sistema que asegure alguna forma de orden en la producción, distribución y consumo de los recursos. Polanyi también señaló que un orden económico se determina necesariamente dentro de su contexto social, lo que le da su forma y estructura particular de conformidad con el conjunto de valores culturales prevalecientes —de ahí la diversidad de formas de organización económica y social—. Esta es una observación general que se aplica tanto a las sociedades modernas como a las primitivas. Para comprender la cuestión de cómo se forman las diversas organizaciones económicas y sociales, cómo se reproducen y cómo evolucionan, debemos ir más allá de la separación arbitraria entre la historia y la antropología, la sociología y la economía. Las relaciones económicas son solo un aspecto de la vida humana y ya sea que se refieran a la producción de bienes (y servicios), a la redistribución e intercambio, o al consumo de los

mismos, reflejan —y necesariamente son producto de— las condiciones históricas prevalecientes, que incluyen el nivel de desarrollo (social, tecnológico) con sus modos de pensamiento, creencias, religión y cultura (Godelier, 1974).

El antropólogo George Dalton (1961: 21, énfasis de HB), que estudió las economías primitivas en diferentes partes del mundo, concluyó que “las transacciones de bienes materiales en la sociedad primitiva son expresiones de una obligación social que no tiene mecanismo ni significado propio al margen de los lazos sociales y las situaciones sociales que expresan”. Thurnwald (1932: 13) lo expresó de manera aún más enfática al afirmar que “el rasgo característico de la economía primitiva es la ausencia de todo deseo de obtener beneficios de la producción o del intercambio [...] Los regalos generosos, sin embargo, son incuestionablemente recibidos con gratitud, aunque tal prodigalidad debe ser generalmente devuelta con la correspondiente prodigalidad”. Thurnwald (1932: 106) añadió que “[...] la idea es que la persona que recibe su parte esté lista mañana para dar la misma al distribuidor de hoy. La donación de hoy será recompensada por la toma de mañana. Este es el resultado del principio de reciprocidad que impregna todas las relaciones de la vida primitiva y se ejemplifica de muchas otras maneras”.

Aquí, el intercambio de bienes (así como su producción y consumo) se organiza de acuerdo con las costumbres, hábitos y el “código de conducta” general. La entrega recíproca de regalos y la distribución equitativa de los bienes entre los miembros de la comunidad son dos características importantes de las primeras sociedades primitivas “simples”, es decir, *no estratificadas*. Tras los trabajos antropológicos de Thurnwald (1932), Malinowski (1939) y Sahlins (1958, 1972), hoy en día se acepta ampliamente que la organización social en las sociedades primitivas se basaba en los principios de *reciprocidad* y *redistribución*. Polanyi (1944: 50-53) sostiene que en las sociedades igualitarias y democráticas, la reciprocidad y la redistribución estricta funcionaban como un sistema maravilloso, concluyendo que “[...] el resultado es un estupendo logro organizativo en el campo económico”. Tal sistema

merece, en efecto, ser elogiado, porque aunque los individuos no reciben ninguna remuneración por su trabajo y no obtienen ninguna ganancia personal o beneficio al regalar el producto de su trabajo, siguen trabajando duro por el objetivo común de “[...] producir y almacenar para la satisfacción de los deseos de los miembros del grupo”⁵.

Las razones subyacentes que aseguran el funcionamiento continuo y la reproducción de tal organización están bien resumidas por Polanyi (1944: 46, énfasis de HB) y vale la pena citarlo ampliamente:

El interés económico del individuo raramente es primordial, ya que la comunidad evita que todos sus miembros mueran de hambre a menos que ella misma se vea afectada por una catástrofe, en cuyo caso los intereses se ven amenazados de nuevo colectivamente, no individualmente. Por otra parte, el mantenimiento de los lazos sociales es crucial. En primer lugar, porque al no respetar el código de honor aceptado, o la generosidad, el individuo se separa de la comunidad y se convierte en un paria; en segundo lugar, porque, a la larga, todas las obligaciones sociales son recíprocas, y su cumplimiento sirve también a los intereses de dar y recibir del individuo. Tal situación debe ejercer una presión continua sobre el individuo para eliminar de su conciencia el interés económico propio [...] Esta actitud se refuerza por la frecuencia de las actividades comunales como la participación en la comida de la pesca común o la participación en los resultados de alguna expedición tribal lejana y peligrosa. *El premio a la generosidad es tan grande cuando se mide en términos de prestigio social, que cualquier otro comportamiento que no sea el del olvido de sí mismo simplemente no vale la pena.*

En cuanto a la redistribución, se puede decir que mientras consistió en devolver a los miembros del grupo lo que “produjeron y almacenaron”, funcionó muy bien. Carneiro (1981: 60) escribió que la redistribución en las comunidades igualitarias significaba “la reasignación completa y equitativa de la cosecha de un pueblo a sus productores por un jefe que es meramente un custodio temporal y benigno de la misma”. Lamentablemente, la dinámica de las relaciones sociales es tal que no siempre se puede predecir el resultado de su evolución. La redistribución en comunidades más grandes requeriría, comprensiblemente, mucho más

que el trabajo diligente del jefe benevolente. En su estudio de las comunidades primitivas, Thurnwald (1932: 106-8, énfasis de HB) informó que:

[...] Entre algunas tribus [...] hay un intermediario en la persona de un jefe, u otro miembro prominente de la comunidad. Recibe y distribuye todos los suministros. Las consecuencias que se derivan de este hecho parecen ser de gran alcance. Con estas personas la distribución todavía se efectúa sobre una base democrática, pero en las sociedades diversificadas y *estratificadas* la distribución es función de familias poderosas, de hombres influyentes, de la aristocracia gobernante, o de la burocracia administrativa; y a menudo se abusa de ella. Los distribuidores de cualquier poder político reservan *un porcentaje de las ganancias para ellos mismos*.

La pregunta, por supuesto, es qué tan grande es el porcentaje que estos distribuidores guardan para sí mismos⁶. No es de extrañar que la distribución sea posiblemente *el* tema más problemático y más debatido en las sociedades humanas desde sus etapas primitivas. Thurnwald también señaló que “[...] la función de distribución aumenta con el creciente poder político de unas pocas familias y el aumento de los déspotas. El jefe recibe los regalos de los campesinos, que ahora se han convertido en ‘impuestos’, y los distribuye entre sus funcionarios, especialmente los de su corte”, añadiendo que “una zona más extensa controlada por un déspota requiere un aumento del número de almacenes, graneros y tesoros, y el correspondiente aumento del número de funcionarios necesarios para su gestión”, justificando así las peticiones de más “regalos” y contribuciones, es decir, la recaudación de impuestos aún más elevados.

Aunque la mayoría de los antropólogos consideran que la “redistribución” es la base para el surgimiento de los cacicazgos y el Estado, Carneiro (1981: 58) hizo la interesante observación de que “lo que un jefe gana con la redistribución propiamente dicha es la estima, no el poder. El poder se le otorga solo cuando *deja* de redistribuir alimentos y bienes al por mayor y comienza a apropiarse de ellos y a concentrarlos”.

En otras palabras, el jefe obtiene el poder *reteniendo* recursos de sus conciudadanos, es decir, creando una escasez artificial para mantenerlos hambrientos, sin hogar, con frío, etc. y obligarlos a la sumisión, la obediencia y la lealtad. Y cuando da comida y otros bienes a través de la redistribución, los hace sentir no solo agradecidos sino mayormente en deuda con él, de modo que cuando venga la próxima vez a recaudar “los impuestos”, ¡todos ellos contribuyen obligatoriamente! En cualquier caso, a estas alturas los impuestos ya no son voluntarios. El uso de la fuerza, la coerción y la violencia contra la población para obligarles a pagar impuestos al jefe, pero también para suministrar mano de obra, se ha constatado en cacicazgos de varias partes del mundo. Así, los faraones de Egipto, los jefes zulúes de Sudáfrica o los jefes tahitianos de Polinesia habían acumulado “el poder de gobernar por medio de la recompensa y el castigo al proveer y retener los bienes y servicios económicos que controlan” (Haas, 1981: 96). Del jefe polinesio, Sahlins (1958: 19) dijo que “[...] el jefe aplicó la fuerza coercitiva para castigar a los que infringían sus derechos, especialmente si los transgresores tenían un estatus bajo”. Carneiro (1981: 61) señaló que

[...] mediante la distribución selectiva de alimentos, bienes, botín, mujeres y similares, el jefe recompensa a quienes le han prestado servicio. De esta manera, forma un núcleo de oficiales, guerreros, esbirros, criados y similares que le serán leales personalmente y a través de los cuales puede dar órdenes y hacerlas obedecer. En resumen, es a través del desembolso sagaz e interesado de los impuestos que se construye la maquinaria administrativa del cacicazgo (y del Estado).

El interés por el origen del Estado y su naturaleza surgió muy pronto entre los filósofos e investigadores de diversos campos de las ciencias sociales que han debatido el tema durante mucho tiempo. Un conciso repaso histórico de sus puntos de vista, especialmente desde el periodo de la Ilustración, lo ofrece Service (1975) en su libro *Origins of the State and Civilization*. Una revisión posterior de la vasta literatura sobre el tema se encuentra en Haas (1981), quien resumió el debate clasificando

las numerosas explicaciones en dos teorías principales: 1) teorías de *conflicto* (o coercitivas, de clase, radicales); y 2) teorías de *integración* (o de contrato, de consenso, conservadoras). Haas (1981: 80) comentó que “[...] el argumento básico de las teorías de conflicto es que el Estado se desarrolló principalmente como un mecanismo coercitivo para resolver el conflicto interno que surge entre las clases económicamente estratificadas dentro de una sociedad”, mientras que en las teorías de integración el Estado es visto “[...] como un mecanismo integrador para coordinar y regular las diferentes partes de las sociedades complejas. Básicamente, ven al Estado como una institución de gobierno no partidista que proporciona beneficios organizativos a la sociedad en su conjunto”. Haas (1981) puso ambas teorías a prueba, y citando evidencia arqueológica de Perú y Mesoamérica, concluyó que los que eran *gobernantes* y ejercían el poder político también estaban bien dotados económicamente, es decir, eran ricos, tenían una mejor dieta y vivían en casas y palacios lujosos mientras que los *gobernados* eran pobres; con un claro *patrón* de acceso restringido a recursos básicos como alimentos, herramientas y dispositivos de protección, lo que confirma la explicación de clase sobre el origen del Estado.

Además, Haas (1981: 88-95) también dio evidencia de que los jefes, como representantes del Estado, tenían control gerencial directo sobre la distribución de la tierra, los derechos de agua y otros bienes y servicios esenciales para la supervivencia, lo que les daba el poder de “[...] despojar de los medios de subsistencia a las personas que no contribuían con la mano de obra que se les exigía, que no producían suficientes recursos o que acumulaban recursos en secreto” (Haas, 1981: 98). Lo que es aún más importante es que las personas de alto estatus, la clase alta de los ricos y los gobernantes, tenían gente de estatus inferior trabajando para ellos y que se existía hostilidad y antagonismo, incluso rebelión y revuelta⁷ dentro de la sociedad porque “las personas con acceso restringido a los recursos impugnarían, en lugar de aceptar, la distribución desigual de esos recursos”. El antagonismo entre las clases sociales fue la premisa básica sobre la cual Karl Marx y Friedrich Engels

construyeron su teoría del Estado. Su punto de vista se resume en la siguiente declaración de Engels (1995: 318-319) en su libro *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*, donde afirma que: “Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y como, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida”.

El principal argumento de los teóricos de la integración (Service, 1962, 1975) es que el origen del Estado no se basa en el antagonismo de clase, pero ninguno de ellos puede negar que, una vez que el Estado ha surgido como una entidad política con poder para controlar y comandar a los ciudadanos bajo su jurisdicción, es entonces vulnerable a ceder a la influencia de los miembros económicamente bien dotados de la comunidad o incluso a defender voluntariamente sus intereses, ya que estos también coincidirán con, y ayudarán a, reforzar los intereses y el poder de los “políticos”. En cualquier caso, la diferencia de enfoque entre estas teorías sobre si el origen del Estado se basaba o no en la clase no es realmente crucial para el propósito de este libro, que se ocupa de las políticas económicas en las sociedades actuales. Y hoy en día nadie puede negar que el capitalismo es una sociedad de clases y que la clase capitalista —representada no solo por los industriales, como ha dicho Godelier (1974: 8), sino también por los financieros— tiene mucho poder sobre el diseño y la aplicación de las políticas del actual Estado neoliberal.

3. EL ESTADO NEOLIBERAL Y LAS POLÍTICAS DE PAUPERIZACIÓN

Actualmente existe un gran número de libros y artículos sobre el significado, la naturaleza y la historia del neoliberalismo. Una búsqueda electrónica de “neoliberalismo” muestra varios miles de entradas

académicas revisadas por pares. La gran mayoría de estos escritos examina el neoliberalismo desde un punto de vista crítico, haciendo hincapié en varios aspectos de lo que el neoliberalismo hace al lugar de trabajo, a las familias, al consumo y a la cultura, al comercio y a las finanzas y así sucesivamente. Un buen relato de estos efectos negativos lo proporciona Smith (2016) en su *Imperialism in Twenty-First Century*. A pesar de las divergentes inspiraciones teóricas presentes en estos análisis, todos ellos llegan a la misma conclusión: el neoliberalismo perjudica a los pobres y a la clase obrera, y beneficia a los ricos, a la elite y a la clase capitalista. Esta conclusión constituye la base de la oposición política al modelo o agenda neoliberal, como a menudo se denomina en la literatura política de izquierda. Sin embargo, un examen más detallado de esta literatura crítica revela que no hay acuerdo sobre lo que es el neoliberalismo. De hecho, a menudo se encuentran definiciones vagas, ambiguas e incluso contradictorias del neoliberalismo —identificando a este último como una etapa superior del capitalismo, el imperialismo, la globalización, el libertarismo, el neoconservadurismo y los Gobiernos conservadores de derecha (véase Kotz, 2015)—.

El tipo de análisis anterior podría ser suficiente si el objetivo fuera solo conseguir un apoyo más amplio para oponerse al neoliberalismo y denunciar sus repercusiones. Pero si el objetivo es proponer una alternativa, necesitamos un análisis más sistemático que ponga al descubierto los fundamentos filosóficos del neoliberalismo, sus premisas y postulados, y lo que es más importante, la manera en que estos planteamientos se convierten en políticas económicas y sociales concretas, es decir, la puesta del aparato estatal al servicio de intereses específicos. Para este propósito, el neoliberalismo se define aquí como: (a) un sistema de pensamiento que exalta el individualismo y el papel de los mercados; y (b) la presencia de un conjunto de intelectuales políticamente activos y comprometidos cuyo objetivo es literalmente *capturar* las instituciones (nacionales e internacionales) y utilizarlas para implementar sus ideas en forma de un paquete de políticas (véase Ostry, Loungani y Furceri, 2016).

¿Significa esto que el neoliberalismo es un partido político? No. ¿Una sociedad secreta? No. Pero para estar seguros, Hayek (1944) y sus colegas no se limitaron a poner sus ideas “en el mercado” y luego se fueron a dormir⁸. Buscaron la cobertura de los medios de comunicación para difundir sus ideas y cortejaron activamente a personas y corporaciones influyentes para que adoptaran y defendieran su causa, estableciendo y financiando una red dedicada al pensamiento de la derecha —reclutando así un ejército de intelectuales y políticos, de varias partes del mundo, que trabajan en la búsqueda de formas de transformar las estructuras sociales actuales de conformidad con los ideales neoliberales (véase Desai, 1994)—. En resumen, no solo se dedican a lo que Herman y Chomsky (1988) llamaron la “fabricación de consentimiento”, sino también a la elaboración de políticas, es decir, a utilizar el poder político del Estado —ya sea una democracia política o una dictadura militar— para aplicar sus ideas e institucionalizar sus políticas. A este respecto, es importante recordar que los primeros experimentos con el neoliberalismo tuvieron lugar en Chile bajo la dictadura fascista de Augusto Pinochet a principios de los años setenta (véase Monbiot, 2016). Posteriormente, a partir de 1979, las recetas neoliberales se generalizaron a prácticamente todos los países africanos en forma de “programas de ajuste estructural” (PAE) patrocinados por el Banco Mundial y el FMI, instituciones que ya habían sido parcial o totalmente capturadas por los ideólogos neoliberales (véase Mirowski, 2013).

En la introducción de la edición del 50.º aniversario de *Camino de servidumbre* de Hayek (1994: 15), Milton Friedman sonó exasperado por lo que llamó “el hecho de un creciente apoyo intelectual al colectivismo”. Después de preguntarse “por qué las clases intelectuales de todas partes se ponen casi automáticamente del lado del colectivismo —incluso cuando proclaman consignas individualistas— y denigran y vilipendian el capitalismo”, pasó a afirmar que la batalla debe ganarse y que los socialistas deben ser derrotados. Esto nos dice que el neoliberalismo tiene una causa. Quiere derrotar el socialismo, el colectivismo y cualquier

forma de organización social cooperativa⁹. La ayuda a los demás a través de acciones concertadas de la comunidad, como los programas sociales, debe descartarse porque implica que los individuos se ven obligados a pagar impuestos para apoyar dichos programas y ayudar a los demás, lo que supone una pérdida de libertad e independencia (Nozick, 1974). Según Friedman (1962: 190-1), una forma de ayudar a los demás “[...] y en muchos aspectos la más deseable, es la caridad privada. Cabe señalar que en el apogeo del *laissez-faire*, a mediados y finales del siglo XIX en Gran Bretaña y Estados Unidos, se produjo una extraordinaria proliferación de organizaciones e instituciones caritativas privadas. Uno de los principales costos de la ampliación de las actividades de bienestar del Gobierno ha sido la correspondiente disminución de las actividades caritativas privadas”.

Además, Friedman y Friedman (1980: 5) consideraron los programas sociales como parte de un sistema paternalista en el que predomina “la opinión de que el papel del Gobierno es servir como un padre encargado del deber de coaccionar a algunos para que ayuden a otros”. Este punto de vista se hace eco de la declaración anterior de Friedman (1962: 195) sobre el tema de la igualdad cuando escribió: “Él [el igualitario] defenderá el tomar de algunos para dar a otros, no como un medio más efectivo por el cual los ‘algunos’ pueden lograr un objetivo que quieren alcanzar, sino por razones de ‘justicia’. En este punto, la igualdad entra en conflicto con la libertad; hay que elegir. No se puede ser a la vez igualitario, en este sentido, y liberal”. De hecho, como argumenta Plant (2009: 6-7), los neoliberales van más allá. Consideran que el Estado de derecho es “un marco de normas generales para el logro de fines privados” y sostienen que: “[...] No existe un bien común sustantivo que el Estado deba perseguir y que la ley pueda encarnar, por lo que la búsqueda política de algo como la justicia social o un mayor sentido de solidaridad y comunidad queda fuera del Estado de derecho”.

Como sistema de pensamiento, aunque no es homogéneo y está cambiando a medida que evoluciona con el tiempo, el neoliberalismo sigue siendo la encarnación de una ideología que predica abiertamente la

codicia, el egoísmo y el individualismo (Hayek, 1944; Friedman, 1962; Nozick, 1974). Los neoliberales, a menudo, pero no siempre, lo hacen según las reglas. Es como si su proyecto aún no estuviera terminado, lo que lo hace muy flexible, incluso maleable, ya que es una amalgama de algunas ideas ingenuas y otras muy extremas —de ahí la aparente discrepancia entre las proposiciones teóricas y las aplicaciones concretas: el neoliberalismo prospera bajo Gobiernos benévolos con un extenso sistema de bienestar social, bajo dictaduras militares sin disposiciones sobre derechos laborales y políticos, pero también bajo la democracia política, donde la elite todavía recurre al uso del Estado para imponer políticas como las basadas en la austeridad.

Mirowski (2014) tiene razón al llamar a este proyecto en constante evolución el “colectivo de pensamiento neoliberal”, un “movimiento político que no se atrevió a decir su propio nombre”. La descripción que ofrece Mirowski sobre el neoliberalismo se hace eco de la ofrecida por Polanyi (1944) sobre el liberalismo clásico. De hecho, la similitud es bastante sorprendente, ya que lo que Mirowski dice de la praxis de los neoliberales es exactamente lo que Polanyi dijo sobre los liberales cuando argumentó que ellos dependen en gran medida del uso del poder del Estado para moldear el mercado con el fin de lograr sus objetivos deseados. Polanyi (1944: 140-1) escribió:

[...] La introducción de los mercados libres, lejos de eliminar la necesidad de control, regulación e intervención, aumentó enormemente su alcance. Los administradores tenían que estar constantemente en guardia para asegurar el libre funcionamiento del sistema. Así, incluso aquellos que deseaban ardientemente liberar al Estado de todas las obligaciones innecesarias y cuya filosofía entera exigía la restricción de las actividades estatales, no podían sino confiar al mismo Estado los nuevos poderes, órganos e instrumentos necesarios para el establecimiento del *laissez-faire*.

Polanyi-Levitt y Seccareccia (2016) también han señalado la relevancia del análisis de Polanyi (1944) para la comprensión de la ideología neoliberal actual.

En cuanto a la actitud ambivalente de los neoliberales con respecto al Estado, observemos que el propio Friedman cambió de opinión sobre la necesidad de un Estado fuerte para garantizar la competencia. En 1944, Hayek había aceptado la idea de algún tipo de ingreso mínimo garantizado para los necesitados. Hayek llegó a sugerir que el Estado puede desempeñar un papel importante para garantizar la protección social. Puede sonar inconsistente con el proyecto neoliberal, pero esto es lo que Hayek (1944: 125) escribió:

[...] No puede haber duda de que un mínimo de alimento, refugio y ropa, suficiente para preservar la salud y la capacidad de trabajar, puede ser asegurado a todos [...] Tampoco hay ninguna razón por la que el Estado no deba ayudar a los individuos a proveer para aquellos peligros comunes de la vida contra los cuales, debido a su incertidumbre, pocos individuos pueden hacer provisiones adecuadas. Cuando, como en el caso de la enfermedad y el accidente, ni el deseo de evitar tales calamidades ni los esfuerzos para superar sus consecuencias se ven por lo general debilitados por la prestación de asistencia, cuando, en definitiva, se trata de riesgos realmente asegurables, el argumento a favor de que el Estado contribuya a organizar un sistema integral de seguridad social es muy fuerte.

Las primeras ideas de Hayek se mezclaron voluntariamente en el vasto conjunto de propuestas del “colectivo de pensamiento neoliberal” ya mencionado, que se ha venido desarrollando bajo la dirección de la Sociedad Mont Pelerin, creada en 1947 por Hayek para reunir en una red a filósofos, economistas, periodistas y fundaciones privadas cuyo objetivo es promover las ideas del libre mercado. De hecho, fue durante los años cincuenta y sesenta que los neoliberales empezaron a afinar sus ideas y a centrarse en la libertad y el papel de los mercados. Con Friedman como su líder declarado, los escritores neoliberales repitieron incansablemente que la realización de sus valores solo puede ocurrir en una sociedad “libre” y a través del funcionamiento de mercados libres y sin restricciones. Friedman (1962: 191), por ejemplo, insistió en que cualquier “[...] programa debe, mientras opera a través del mercado, no distorsionar el mercado o impedir su funcionamiento”. Es necesario

desmantelar los programas que prestan servicios públicos como la educación, la atención de la salud o las prestaciones de desempleo; y la prestación de estos servicios debe confiarse a empresas privadas. El neoliberalismo quiere que todos los aspectos de las relaciones humanas estén regidos por el mercado, incluyendo el trabajo y la naturaleza (véase Polanyi, 1944). Cuando no existen mercados, hay que crearlos (véase Harvey, 2005). Aquí es donde los neoliberales han estado activos y aquí es donde han tenido mucho éxito. Han creado mercados para casi todo¹⁰. ¿Cómo lo han hecho?

Esto es el neoliberalismo en la práctica y la lógica es, de hecho, bastante simple, pues el objetivo primordial es empoderar a ese individuo (no a cualquier individuo, sino a ese) que ya está “bien dotado” para ganar más dinero (véase Baker, 2006). Dado que esa tarea solo puede realizarse mediante transacciones con otros miembros de la sociedad, es obvio que deben crearse mercancías (de cualquier naturaleza, bienes o servicios). Y los productos básicos requieren mercados. Aquí es donde los neoliberales despliegan la mayor parte de sus esfuerzos. Además de maquinar el consentimiento entre la población cultivando una cultura de mercado mediante el uso intensivo de imágenes y mensajes de *marketing* chocantes y provocativos, también hacen un uso sagaz del poder político y de las instituciones. Este trabajo lo lleva a cabo un ejército de “empresarios ideológicos” muy bien organizados en una red mundial de *think tanks* que “ayudaron a convertir el pensamiento neoliberal en un programa político neoliberal” (Stedman Jones, 2012: 184). El uso de diversas instituciones por los neoliberales para lograr sus objetivos también ha sido señalado por Desai (1994), Bougrine (2012) y Mirowski (2013), entre otros. Mirowski (2013, 2014) ofrece un buen resumen de la proliferación de estos grupos de reflexión en todo el mundo y de cómo trabajan duro para capturar el centro de la formulación de políticas.

Por ejemplo, la estrategia seguida por los neoliberales en la privatización de los servicios públicos es sorprendentemente similar de Chile a México, de Gran Bretaña a Egipto y de Marruecos a Sudáfrica: primero se apoderan del poder político, ya sea a través de elecciones o de

un golpe de Estado militar —ya que el fin justifica los medios—. El Gobierno, entonces, legisla y legitima los recortes a la financiación pública de estos servicios, haciendo así que su provisión sea problemática (en términos de disponibilidad y calidad) para los receptores, mientras que al mismo tiempo ofrece subsidios considerables para fomentar la creación de empresas privadas competidoras. Cuando las corporaciones públicas y los sectores que ofrecen servicios públicos se desploman y empiezan a desmoronarse, el Estado procede a venderlos a intereses privados, generalmente en tratos dudosos y a precios muy baratos; con poca o ninguna objeción por parte del público en general, que ahora ha sido ampliamente apaciguado. Esto ha ocurrido en campos como los de la educación, la salud, el agua, la electricidad y los servicios telefónicos y postales, entre otros. La ironía es que la privatización en Marruecos, por ejemplo, fue manejada por un ministro “socialista” y en Sudáfrica ocurrió bajo la presidencia del difunto Nelson Mandela y sus compañeros excomunistas¹¹. Pero la ironía se volvió perversa en Grecia donde, como señala Galbraith (2016): “En el caso del Puerto del Pireo, en el proceso de venta a la empresa estatal china Cosco, se tuvo el interesante giro posmoderno de un Gobierno de izquierda en un país capitalista imponiendo normas laborales a una empresa de derechas de un país comunista”.

Además, con el fin de generalizar el ambiente de negocios, los responsables políticos de todo el mundo, empecinados como están con el neoliberalismo, adoptaron lo que se conoció como la “nueva gestión pública”. Esta modalidad de “buena” o “mejor práctica” de gobierno de las instituciones públicas utiliza como referencia el modelo corporativo de búsqueda de beneficios. Los empleados del sector público ya no son “funcionarios públicos” que trabajan para el bien común de la sociedad. En cambio, se les dice que se comporten como gerentes automotivados que trabajan para entregar bienes y servicios a sus “clientes” de la manera más eficiente. Los “clientes” ahora incluyen a los pacientes que buscan atención médica en un hospital y a los estudiantes que buscan conocimiento y aprendizaje en una universidad (véase Weeks, 2014: 88-

89). Las entidades gubernamentales y las empresas públicas se comportarán ahora como empresas privadas y deberán someterse a los criterios habituales de análisis de costo-beneficio, evaluación basada en el desempeño, etc., para medir su competitividad (véase Steger y Roy, 2010). Utilizando un truco llamado descentralización o devolución, los responsables de las políticas neoliberales sacan a las entidades que prestan servicios públicos de la responsabilidad de los Gobiernos centrales y las ponen bajo la responsabilidad financiera de los Gobiernos de nivel inferior o locales —una medida estratégica que facilitaría su cierre o venta a los inversores privados cuando se vuelvan no competitivos o insolventes, ya que ahora dependen de los impuestos locales (esencialmente los impuestos sobre la propiedad) y de las tarifas a los usuarios de servicios públicos.

La introducción de los mercados o su liberalización no se basó únicamente en medios democráticos. El uso de la fuerza, el choque y el miedo forma parte del “tratamiento de choque”, que fue concebido por Milton Friedman y sus “Chicago Boys”¹² a principios de los años setenta para Chile bajo la dictadura de Pinochet. Más tarde, a lo largo de las décadas de los ochenta y noventa, los países acostumbrados a regímenes despóticos en África y América Latina, así como los del bloque soviético en desintegración, proporcionaron un terreno fértil para experimentar con diferentes grados de “choque” y formas de neoliberalismo (Campbell, 2013). En Europa oriental y en las exrepúblicas soviéticas, los mercados fueron introducidos de la noche a la mañana para ayudar a construir apresuradamente un tipo de capitalismo salvaje con una privatización acelerada y donde todos los derechos hasta ahora logrados por los trabajadores en Europa occidental fueron rechazados y negados a la nueva clase obrera de estos países: fue la “terapia de choque” de Jeffrey Sachs; una versión actualizada de la política de choque de Friedman.

La peor y más brutal versión de la terapia de choque se aplicó a Irak después de su ocupación en 2003, con una súbita privatización y despidos masivos del sector público, incluyendo el desmantelamiento, incluyendo el desmantelamiento de todo el Ejército nacional. La guerra y

la destrucción resultaron muy rentables no solo para el complejo militar-industrial, sino también para las empresas involucradas en la “reconstrucción” —un escenario que recuerda al descrito por Daniel Guérin (1945: 288) en su libro *Fascism and Big Business*, en el que demostró que “la verdadera naturaleza del Estado fascista” era no más que una “dictadura militar y policial al servicio de las grandes empresas”—. Más recientemente, Asimakopoulos (2014) y Pauwels (2013) dieron un relato de algún modo detallado de las corporaciones estadounidenses que efectivamente apoyaron y suministraron al régimen nazi de Hitler y a los fascistas de España e Italia no solo equipo y municiones, sino también servicios y mercancías que son vitales para una guerra. A este respecto, varios autores (por ejemplo, Duncan y Coyne, 2013; Chossudovsky, 2005; Amin, 2004) han hecho hincapié en el recurso al gasto militar y en la necesidad de una “economía de guerra permanente” para resolver los problemas internos de desempleo y declive económico —una política denominada keynesianismo militar, pero verdaderamente querida por los neoliberales que ahora llevarían los sombreros de los neoconservadores—.

En África, las políticas neoliberales se pusieron en marcha bajo la bandera de ampliar aún más los “programas de ajuste estructural” (PAE), con el fin de construir los llamados fundamentos macroeconómicos; tal como lo establecen los ideólogos del FMI y el Banco Mundial. Este paquete de políticas ha formado parte de la condicionalidad del FMI desde los años ochenta y se ha convertido en el “consejo” favorito de todos los tiempos y en todas partes, dado por sus llamados expertos, sin ninguna preocupación por los efectos devastadores sobre las poblaciones locales. Los efectos netos de estos programas han sido un drástico aumento de la pobreza en todo el continente (Banco Mundial, 2016). En Sudamérica, Stokes (2004: 45-52) informó sobre lo que ella llamó “neoliberalismo por sorpresa”, en los primeros años de la década de los noventa, cuando los candidatos presidenciales hicieron campaña y ganaron usando una plataforma “antineoliberal”, “antichoque”, pero una vez en el poder se convirtieron en neoliberales acérrimos: eliminaron los subsidios a los

alimentos básicos, aumentaron los precios, despidieron a los empleados del sector público, privatizaron las corporaciones públicas y así sucesivamente. En el caso de Fujimori, en Perú, el cambio ocurrió diez días antes de que tomara posesión del cargo —por supuesto, después de reunirse con banqueros internacionales y asesores neoliberales—.

La consecuencia inmediata de la privatización ha sido un incremento del desempleo debido a los despidos que típicamente preceden a la venta de las corporaciones públicas. Aquí, los paralelismos entre el Estado neoliberal y el Estado primitivo aparecen demasiado evidentes: mientras que los jefes primitivos creaban una escasez artificial simplemente *reteniendo* los recursos, forzando así a algunos miembros de la comunidad a la privación y la pobreza, los gobernantes modernos crean una escasez artificial *negando* el acceso a los recursos a través de medios legales y sofisticados, siendo el desempleo uno de ellos. La creación de la pobreza y la privación a través del desempleo ha sido reconocida desde hace mucho tiempo por estudiosos de diversas convicciones. La transferencia de la apropiación/propiedad del bien colectivo a algunos individuos refuerza la posición de una clase cuyo papel y función en la sociedad recuerda a los intermediarios primitivos (los jefes) que se encargaban de la distribución en nombre del jefe, con una diferencia fundamental: los intermediarios primitivos estaban armados con palos, mientras que los intermediarios modernos están armados con *derechos de propiedad* y están facultados por el marco legal e institucional.

Como se mencionó anteriormente, aunque los neoliberales hacen hincapié en el libre mercado y desprecian públicamente al Estado, implícitamente admiran un Gobierno fuerte y coercitivo, y en sus programas más pragmáticos combinan tanto el mercado como el Estado para lograr sus objetivos. Se apoyan en el Gobierno para utilizar su poder a fin de asegurar la sumisión de las masas y garantizar así la aceptación de los ideales neoliberales como parte de un proyecto mundial¹³. Entienden que el poder para implementar las políticas neoliberales reside en instituciones como los parlamentos, los cargos ministeriales, las ONG locales e internacionales o las instituciones internacionales como el FMI,

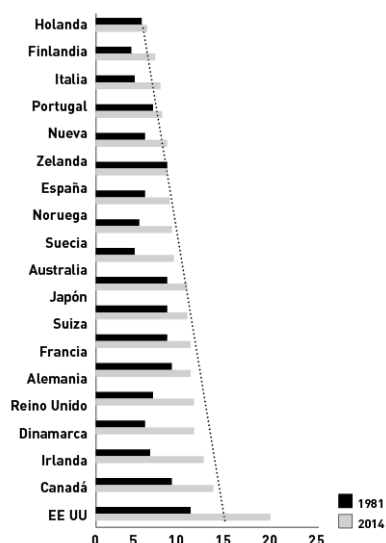
el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC), las Naciones Unidas y sus diversos organismos. Por ejemplo, en su análisis de “las actividades de los individuos y organizaciones asociadas con la Sociedad Mont Pelerin (MPS)”, Bair (2009) expone minuciosamente el ataque bien coordinado del *think tank* Heritage Foundation contra el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales (UNCTC) y su trabajo sobre la independencia económica y la soberanía, que en última instancia condujo al desmantelamiento del UNCTC. Por eso, la principal preocupación de los neoliberales, desde la creación de la MPS, ha sido cómo hacerse con el control de estas instituciones clave.

Esta “larga marcha” a través de las instituciones solo ocurrió dos veces durante el siglo XX. La primera vez fue instrumentada por los fascistas y los nazis, como lo documentó detalladamente Guérin (1945); la segunda corrió a cargo de los neoliberales a partir de los años setenta. Como resultado, en gran parte del mundo actual, tanto en política como en economía, el neoliberalismo se ha convertido, con mucho, en la visión dominante y el enfoque de “sentido común” para la elaboración de políticas y la organización social entre conservadores y socialistas por igual (Bougrine, 2000: 2; Parguez, 1993). Incapaces de cuestionarlo o de pensar que podría haber alternativas a él, ven el neoliberalismo como la “forma natural de hacer las cosas”. Cabe señalar, sin embargo, que mientras el fascismo gozaba de cierto apoyo popular gracias a que los fascistas conservaban, e incluso desarrollaban, algunas instituciones que proporcionaban bienestar a la clase obrera, mientras que bajo el neoliberalismo se reducían o eliminaban, causando descontento, ansiedad y revueltas entre las masas. Las protestas populares antineoliberales son hoy en día una práctica común en prácticamente todos los países donde se aplican estas políticas (Amin, 2012a, 2012b; Silva, 2009; Plehwe, Walpen y Neunhöffer, 2006). También hay cada vez más pruebas de que “la marea está cambiando” en contra del neoliberalismo; como en América del Sur (Silva, 2009; Ponniah y Eastwood, 2011) y en otras partes del mundo (Westra, 2010). Estas reacciones expresan, ciertamente, movimientos sociales que, más allá de la indignación, intentan proteger a

la sociedad y a la naturaleza de los efectos devastadores del neoliberalismo, tal y como esperaba Karl Polanyi (véase Polanyi-Levitt y Seccareccia, 2016; Jessop, 2007).

Dado que los neoliberales ponen tanto énfasis en el individualismo y en la optimización de los resultados del libre mercado, veamos cómo se han comportado los los ingresos individuales durante la era neoliberal desde los años ochenta. Podemos hacerlo observando los ingresos del mercado y cómo han cambiado a lo largo del tiempo, antes de tomar medidas correctivas a través de impuestos o transferencias. La base de datos de los Ingresos Máximos Mundiales, disponible públicamente, ofrece información sobre la proporción de ingresos del 10 y el 1% más rico de la población durante un periodo relativamente largo en varios países.

FIGURA 1.1
PROPORCIÓN DEL INGRESO ANTERIOR A IMPUESTOS
DEL 1% DE LA POBLACIÓN (1981-2014)



Fuente: Cálculo del autor con información de la base de datos de los Ingresos Máximos Mundiales, disponible en <https://wid.world/>.

La figura 1 muestra que la proporción del 1% superior de la población en el ingreso total aumentó entre 1981 y 2014 en los 18 países de la OCDE considerados, incluyendo los países nórdicos, donde la distribución del

ingreso ha sido más equitativa en el pasado. Estos aumentos han sido particularmente grandes en Estados Unidos, donde el 1 % más alto ha duplicado con creces su participación en los ingresos, puesto que ha pasado del 11% en 1981 al 20,2% en 2014. Un patrón similar se observa en Canadá, Irlanda, Dinamarca, el Reino Unido y Alemania. La línea de tendencia indica que la desigualdad de ingresos es mucho mayor en los países ubicados hacia la derecha, lo que significa que la brecha entre las personas más ricas y el resto de la población de estos países se ha ampliado mucho más y que los muy ricos se enriquecen en mayor medida. La base de datos referida indica que esto también es cierto para el 10% más rico de la población, cuya participación en el ingreso total de Estados Unidos aumentó del 32% en 1980, al 46% en 2010. En Canadá, Japón y el Reino Unido, el 10% más rico de la población aumentó su participación en el ingreso total a más del 40% para 2010. A pesar de que la proporción que se destina al 10% superior aumentó en todos los demás países, siguió rondando el 30% de los ingresos totales, convirtiendo así a Estados Unidos en el país con mayor desigualdad de ingresos.

Estas tendencias en la distribución del ingreso tienen importantes implicaciones para la riqueza y la pobreza. Por ejemplo, un estudio de Statistics Canada (véase Morissette, Zhang y Drolet, 2002) indica que mientras que el 10% más rico de la población en Canadá aumentó su participación en la riqueza total de 51,8 % en 1984 a 55,7 % en 1999, el 10 % más pobre de la población vio caer su participación de un 0,5% negativo a un 0,6% negativo, lo que significa que se endeudaron en mayor medida. De hecho, el aumento del endeudamiento afectó en conjunto al 20% más pobre de la población, ya que su deuda total saltó de 4,16 mil millones de dólares en 1999 a casi 11 mil millones de dólares en 2012, un aumento de 160%. Los datos de los extremos son relevantes: mientras el 20% de quienes recibieron ingresos más bajos permanecieron recibiendo un 0,1% negativo de la riqueza total, al 20% que recibió los ingresos más altos le correspondió el 67,4%. (véase tabla 1.1).

TABLA 1.1
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA EN CANADÁ

	1999		2012	
	Patrimonio neto total (en mil millones)	Patrimonio neto en porcentaje	Patrimonio neto total (en mil millones)	Patrimonio neto en porcentaje
El 20% más pobre	-4,16	-0,1	-10,83	-0,1
2 ^{do} quintil	102,04	2,3	180,3	2,2
3 ^{er} quintil	343,42	8,4	728,65	9,0
4 ^{to} quintil	785,53	20,2	1.735,01	21,5
5 ^{to} quintil	2.676,20	69,2	5.440,45	67,4

Nota: Valores en dólares canadienses constantes (2012).
Fuente: Statistics Canada (2014).

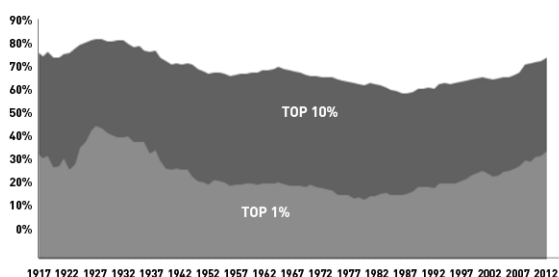
La distribución desigual de la riqueza y su concentración en manos de una pequeña minoría de la población es ahora un hecho evidente en la mayoría de los países industrializados, como lo documenta Piketty (2014). Los críticos del actual modelo económico, entre ellos Stiglitz (2011, 2013, 2016) llegaron a la conclusión de que el neoliberalismo es “la economía del 1%”. Por ejemplo, como se muestra en la figura 1.2, el 1% de la población de Estados Unidos había visto disminuir su participación en cierta medida durante los treinta años gloriosos en los que el Estado de bienestar intentaba crear una sociedad más igualitaria, pero desde la década de los ochenta esta participación ha aumentado de forma constante para volver a casi el 42% de la riqueza neta total en 2012.

El gráfico anterior muestra, asimismo, que la proporción del 10 % superior de la población sigue un patrón similar, alcanzando casi el 80% de la riqueza neta total —niveles no vistos desde el eclipse de los dorados años veinte—. Lo que es importante señalar acerca de esta concentración de la riqueza es que no es enteramente ganada. Piketty y Zucman (2015) estiman que, en 2010, la riqueza heredada representaba entre el 60 y el 70% de la riqueza total en Francia y una proporción más o menos similar en otros países industrializados.

Dadas estas grandes recompensas para los ricos, no es de extrañar que generalmente apoyen las políticas neoliberales. Esto también explica la alianza históricamente obstinada entre la clase económicamente dominante y el Estado. Por eso decimos que los mercados son creados, planificados y manipulados por el Estado neoliberal para producir los efectos esperados y dar resultados determinados en favor de la elite. Ahora bien, el hecho de que el neoliberalismo se atreva o no a decir su nombre no es tan importante; lo que importa son los resultados y la “prueba está en el pastel”, como se dice, o sea, la prueba está en el resultado.

FIGURA 1.2

PARTICIPACIÓN DE LOS HOGARES CON EL 10% Y EL 1% DE INGRESOS MÁS ALTOS EN LA RIQUEZA NETA EN EE UU



Fuente: Elaborado a partir del conjunto de datos sobre la riqueza en EE UU, accesible en línea cortesía de Saez y Zucman (2014).

El aumento del endeudamiento del 20% más pobre de la población y la caída de su participación relativa en la riqueza total en Canadá, y en otros países industrializados, se tradujo en un aumento de la pobreza entre los ciudadanos de bajos ingresos. Hay una grave falta de datos coherentes y comparables sobre las tasas de pobreza, pero la OCDE publica lo que denomina “tasas de pobreza expresadas como ratios del número de personas cuyos ingresos caen por debajo del umbral de la pobreza; tomadas como la mitad de los ingresos medios del hogar de la población total”. La base de datos de la OCDE contiene información sobre las tasas de pobreza antes y después de los impuestos y las transferencias, es decir, lo que podemos llamar pobreza como resultado del funcionamiento de los

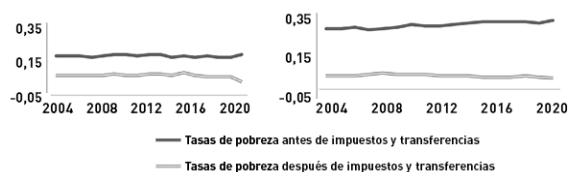
“mercados sin restricciones” y el “resultado corregido” después de la intervención del Estado. Utilizando esta definición, las tablas publicadas por la OCDE¹⁴ indican que las tasas de pobreza aumentaron en todos los países para los que se dispone de datos desde los años ochenta y que, en 2012, al menos una cuarta parte de la población (y hasta un tercio en algunos países como Francia, Finlandia, Alemania, Italia, etc.) vive por debajo del umbral de pobreza y, por lo tanto, necesitaría la ayuda y la asistencia del Gobierno.

Esto nos lleva a un punto en el que podemos realmente medir el tamaño y la importancia de la intervención del Gobierno, e incluso hacer una evaluación del papel que desempeña el Estado en la reducción de la pobreza. Esto puede hacerse comparando dos países como, por ejemplo, Canadá y Finlandia que, como se sabe, tienen programas sociales algo “generosos” y una red de seguridad social relativamente sólida. La figura 1.3 muestra las tasas de pobreza antes y después de la intervención gubernamental en Canadá y Finlandia para el periodo 2004-2020. Como puede observarse, antes de cualquier intervención gubernamental, la tasa de pobreza en Canadá rondaba el 25%, mientras que en Finlandia oscilaba entre el 30% y el 35% de la población. La intervención gubernamental mediante el uso de impuestos y pagos de transferencias logró reducir sustancialmente las tasas de pobreza en ambos países. Sin embargo, la política fiscal fue mucho más agresiva en Finlandia, donde consiguió reducir las tasas de pobreza alrededor del 6%, mientras que en Canadá se mantuvieron muy por encima del 10%, excepto en el último año del periodo estudiado. Obviamente, cabe preguntarse por qué un Gobierno determinado se fijaría como objetivo una tasa de pobreza del 10% o del 6% en lugar de 0 y, por lo tanto, eliminar la pobreza por completo. La respuesta tiene que ver con la naturaleza del sistema económico y los límites de la política fiscal. Ello indica, no obstante, que la política gubernamental es importante para la gestión de la economía y que puede fijar y alcanzar objetivos importantes, como la mejora del nivel de vida de amplios segmentos de la población.

FIGURA 1.3

**TASAS DE POBREZA ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO:
PAPEL DEL ESTADO EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA. CANADÁ VS. FINLANDIA**

Canadá Finlandia



Fuente: Cálculo del autor con datos de la base de datos de la OCDE, disponible en <https://stats.oecd.org/>. Para la definición de tasa de pobreza, véase <https://bitly.ws/3dyBa>.

Obviamente, esta última observación se aplica a todos los demás países. Las políticas gubernamentales pueden eliminar la pobreza y no hay razón para que nos dirijamos a tasas como el 5 o el 6% en lugar de 0. La eliminación de la pobreza es posible y debe hacerse. La negativa a adoptar y aplicar políticas para eliminar la pobreza solo puede explicarse por la falta de voluntad, que en última instancia se basa en el hecho de que los responsables políticos siguen siendo hoy prisioneros de los principios del mercado neoliberal, en particular los relativos a las finanzas públicas, un tema sobre el que volveremos en los capítulos siguientes. Pero tal como Chomsky (2014: 43) afirmó enfáticamente: “Hasta cierto punto, podemos crear el futuro en lugar de simplemente observar el flujo de los acontecimientos. Dado lo que está en juego, sería criminal dejar pasar oportunidades reales sin explorar”.

4. CONCLUSIÓN

En este capítulo se ha examinado el papel del Estado y del mercado en la configuración de la organización de las relaciones humanas en el contexto de la producción y la distribución de los recursos. El estudio del surgimiento y la evolución de estas dos instituciones indican que el aparato estatal ha sido históricamente utilizado como un instrumento por la clase social económicamente dominante para proteger y promover sus propios intereses. Se demostró que las relaciones sociales construidas en

torno a las actividades de producción e intercambio de recursos han sido gradualmente enmarcadas e integradas en la institución llamada mercado. Desde el surgimiento del Estado primitivo, el tema central ha sido la garantía de la protección social de los individuos en forma de acceso a los recursos. Bajo el Estado neoliberal, la manipulación del mercado ha tomado una forma particularmente violenta para asegurar un resultado que está en gran parte a favor de la clase dominante, con la riqueza concentrada en las manos de una minoría de la población. Esta gran desigualdad en la distribución de la riqueza y los altos niveles de pobreza asociados a ella destacan como la principal característica de la sociedad moderna y ponen en tela de juicio la ética e incluso la eficiencia del sistema en el que se basa.

BIBLIOGRAFÍA

- AMIN, S. (2004): *The Liberal Virus: Permanent War and the Americanization of the World*, Nueva York, Monthly Review Press.
- (2012a): *The People's Spring: The Future of the Arab Revolution*, Dakar, Pambazuka Press.
- (2012b): *The Arab Revolutions: A Year After*, Pambazuka News Online, disponible en <https://bitly.ws/3d5sp>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- ASIMAKOPOULOS, J. (2014): *Social Structures of Democracy: On the Political Economy of Equality*, Leiden, Brill.
- BAIR, J. (2009): "Taking Aim at the New International Economic Order", en P. Mirowski y D. Plehwe (eds.), *The Road From Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective*, Cambridge, Harvard University Press.
- BAKER, D. (2006): *The Conservative Nanny State: How the Wealthy Use the Government to Stay Rich and Get Richer*, Washington, D. C., Center for Economic and Policy Research.
- BOUGRINE, H. (ed.) (2000): *The Economics of Public Spending: Debts, Deficits and Economic Performance*, Cheltenham, Edward Elgar.
- (2012): "Fiscal Austerity, the Great Recession and the Rise of New Dictatorships", *Review of Keynesian Economics*, 1(1), pp. 109-125.
- CAMPBELL, H. (2013): *Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya*, Nueva York, Monthly Review Press.
- CARNEIRO, R. L. (1981): "The Chieftdom: Precursor of the State" en G. D. Jones y R. R. Kautz (eds.), *The Transition to Statehood in the New World*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 37-79.

- CHOMSKY, N. (2014): *Masters of Mankind: Essays and Lectures 1969-2013*, Chicago, Haymarket Books.
- CHOSSUDOVSKY, M. (2003): *The Globalization of Poverty and the New World Order*, Pincourt, Global Research.
- (2005): *America's "War on Terrorism"*, Pincourt, Global Research.
- (2014): *Regime Change in Ukraine and the IMF's Bitter "Economic Medicine"*, Pincourt, Global Research, disponible en <https://bitly.ws/3d5ve>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- CONNELL, R. (2010): "Understanding Neoliberalism" en S. Braedley y M. Luxton (eds.), *Neoliberalism and Everyday Life*, Montreal, McGill-Queen's University Press.
- CULVER, J. C. y HYDE, J. (2000): *American Dreamer: A life of Henry A. Wallace*, Nueva York, W. W. Norton & Company.
- DALTON, G. (1961): "Economic Theory and Primitive Society", *American Anthropologist*, 63(1), pp. 1-25.
- DESAI, R. (1994): "Second-Hand Dealers in Ideas: Think-Tanks and Thatcherite Hegemony", *New Left review*, 1(230), pp. 27-64.
- DUNCAN, T. K. y COYNE, C. J. (2013): "The Origins of the Permanent War Economy", *The Independent Review*, 18(2), pp. 219-240.
- ENGELS, F. (1995): "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado", en Marx-Engels, *Obras Escogidas*, t. II, Moscú, Editorial Progreso.
- FRIEDMAN, M. (1962 [2002]): *Capitalism and Freedom*, Chicago, The University of Chicago Press.
- (1994): "Introduction to the Fiftieth Anniversary Edition" en F. A. Hayek (1944 [1994]), *The Road to Serfdom*, Chicago, University of Chicago Press.
- FRIEDMAN, M. y FRIEDMAN, R. (1980): *Free to Choose*, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich.
- GALBRAITH, J. K. (2016): *Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future of Europe*, New Haven, Yale University Press.
- GODELIER, M. (1974): *Un domaine contesté: l'anthropologie économique*, París, Mouton.
- GUÉRIN, D. (1945 [1965]): *Fascisme et grand capital*, París, Maspero.
- HAAS, J. (1981): "Class Conflict and the State in the New World", en G. D. Jones y R. R. Kautz (eds.), *The Transition to Statehood in the New World*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 80-102.
- HARVEY, D. (2005): *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford, Oxford University Press.
- HAYEK, F. A. (1944 [1994]): *The Road to Serfdom*, Chicago, University of Chicago Press.
- HERMAN, E. S. y CHOMSKY, N. (1988): *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, Nueva York, Pantheon Books.
- JESSOP, B. (2007): "Knowledge as a Fictitious Commodity: Insights and Limits of a Polanyian Analysis", en A. Bugra y K. Agartan, (eds.), *Reading Karl Polanyi for the*

- Twenty-First Century: Market Economy as a Political Project*, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 115-133.
- KOTZ, D. R. (2015): *The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism*, Cambridge, Harvard University Press.
- MCDONALD, D. A. y SMITH, L. (2004): "Privatizing Cape Town: From *Apartheid* to Neoliberalism in the Mother City", *Urban Studies*, 41(8), pp. 461-84.
- MALINOWSKI, B. (1939): "Anthropology as the Basis of Social Science", en R. B. Cattell, J. Cohen y R. Travers (eds.), *Human Affairs*, Londres, Macmillan.
- MIROWSKI, P. (2013): *Never Let a Serious Crisis Go to Waste*, Nueva York, Verso.
- (2014): "The Political Movement that Dared not Speak its own Name: The Neoliberal Thought Collective Under Erasure", *Institute for New Economic Thinking*, working paper n° 23.
- MONBIOT, G. (2016): "Neoliberalism -the ideology at the root of all our problems", *The Guardian*, disponible en <https://bitly.ws/3d5Bw>, consultada el 15 de abril de 2016.
- MORISSETTE, R.; ZHANG, X. y DROLET, M. (2002): *The Evolution of Wealth Inequality in Canada, 1984-1999*, Ottawa, Statistics Canada.
- NOZICK, R. (1974 [1999]): *Anarchy, State and Utopia*, Oxford, Blackwell Publishers Ltd.
- OSTRY, J. D.; LOUNGANI, P. y FURCERI, D. (2016): "Neoliberalism: Oversold?", *Finance & Development*, 52(2).
- PARGUEZ, A. (1993): "L'austérité Budgétaire en France", en P. Paquette y M. Seccareccia (eds.), *Les pièges de l'austérité*, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, pp. 83-103.
- PAUWELS, J. (2013): *Big Business avec Hitler*, Bruselas, Aden.
- PIKETTY, T. (2014): *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge, Harvard University Press.
- PIKETTY, T. y ZUCMAN, G. (2015): "Wealth and Inheritance in the Long Run" en A. B. Atkinson y F. Bourguignon (eds.), *Handbook of Income Distribution*, vol. 2, pp. 1303-68.
- PLANT, R. (2009): *The Neoliberal State*, Oxford, Oxford University Press.
- PLEHWE, D.; WALPEN, B. y NEUNHÖFFER, G. (eds.) (2006): *Neoliberal Hegemony: A Global Critique*, Nueva York, Routledge.
- POLANYI, K. (1944): *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Boston, Beacon Press.
- POLANYI-LEVITT, K. y SECCARECCIA, M. (2016): "Thoughts on Mirowski and Neoliberalism from a Polanyian Perspective", *Symposium on Neoliberalism*, INET, <https://bitly.ws/3d5DV>, consultada el 25 de mayo de 2016.
- PONNIAH, T. y EASTWOOD, J. (eds.) (2011): *The Revolution in Venezuela: Social and Political Change Under Chávez*, Cambridge, Harvard University Press.
- ROY, A. (2014): *Capitalism: A Ghost Story*, Chicago, Haymarket Books.

- SAEZ, E. y ZUCMAN, M. (2014): “Wealth Inequality in the United States Since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data”, *NBER*, working paper 20625, disponible en <https://bitly.ws/3d5EP>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- SAHLINS, M. D. (1958): *Social Stratification in Polynesia*, Seattle, University of Washington Press.
- (1972): *Stone Age Economics*, Chicago y Nueva York, Aldine Atherton Inc.
- SAUL, J. S. y BOND, P. (2014): *South Africa -The Present as History: From Mrs. Ples to Mandela and Marikana*, Rochester, Boydell & Brewer Inc.
- SERVICE, E. R. (1962): *Primitive Social Organization*, Nueva York, Random House.
- (1975): *Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution*, Nueva York, W.W. Norton & Company.
- SILVA, E. (2009): *Challenging Neoliberalism in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.
- SMITH, A. (1776 [1979]): *Una Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, México, FCE.
- SMITH, J. (2016): *Imperialism in the Twenty-First Century: Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism's Final Crisis*, Nueva York, Monthly Review Press.
- STATISTICS CANADA (2014): *Survey of Financial Security, 2012*, Ottawa, Statistics Canada, disponible en <https://bitly.ws/3d5Hc>, consultada el 15 de junio de 2016.
- STEDMAN JONES, D. (2012): *Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics*, Princeton, Princeton University Press.
- STEGER, M. B. y ROY, R. K. (2010): *Neoliberalism: A Very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press.
- STIGLITZ, J. (2011): “Of the 1%, by the 1%, for the 1%”, *Vanity Fair*, disponible en <https://bitly.ws/3d5I8>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- (2013): *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*, Nueva York, W. W. Norton & Company.
- (2016): *Rewriting the Rules of the American Economy: An Agenda for Growth and Shared Prosperity*, Nueva York, W. W. Norton & Company.
- STOKES, S. C. (2004): *Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.
- THURNWALD, R. (1932 [1969]): *Economics in Primitive Communities*, Londres, Oxford University Press.
- WEEKS, J. F. (2014): *Economics of the 1%: How Mainstream Economics Serves the Rich, Obscures Reality and Distorts Policy*, Nueva York, Anthem Press.
- WESTRA, R. (2010): *Confronting Global Neoliberalism: Third World Resistance and Development Strategies*, Atlanta, Clarity Press.
- BEEGLE, K. L. et al. (2016): *Poverty in a Rising Africa: Africa Poverty Report*, Washington, D. C., The World Bank.

ZIPF, G. (1949): *Human Behavior and the Principle of Least Effort*, Cambridge, Addison-Wesley.

CAPÍTULO 2

LA DEMOCRACIA EN EL GOBIERNO: EL PODER DE LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS

“Prácticamente todos los senadores de Estados Unidos, y la mayoría de los representantes en la Cámara, son miembros del 1% más rico cuando llegan, se mantienen en el cargo con el dinero del 1% más rico, y saben que si sirven bien al 1% más rico serán recompensados por el 1% más rico cuando dejen el cargo. En general, los principales responsables de las políticas de la rama ejecutiva en materia de política comercial y económica también provienen del 1% más rico”.

JOSEPH E. STIGLITZ (2011)

1. INTRODUCCIÓN

Tanzi (2011: 1) citó al renombrado filósofo ruso Nikolai A. Berdyaev diciendo que “el Gobierno existe no para convertir la vida en la Tierra en un paraíso, sino para evitar que se convierta en un completo infierno”. El uso de metáforas del paraíso y el infierno se debe obviamente a la profunda creencia de Berdyaev en el cristianismo, pero parece algo incongruente que un filósofo tan célebre, y aparentemente un cristiano comprometido, se conformara con un resultado que es infernal, aunque menos que un “completo infierno”. La relación entre las acciones del Gobierno y cómo afectan a la vida en la Tierra se subsume hoy en día bajo el epígrafe de “políticas económicas y sociales”. La vida en la Tierra no puede ser menos que un “completo infierno” cuando los humanos sufren los males de la pobreza y la privación como resultado de estas políticas. Las sugerencias de Berdyaev implicarían que, si todo lo que el Gobierno puede hacer es evitar que la vida en la Tierra “se convierta en un completo infierno”, entonces la gente debería aceptarlo y no esperar más¹⁵. Esto es problemático, particularmente cuando sabemos que Berdyaev fue un escritor prominente dentro del movimiento

existencialista, el cual considera que los seres humanos crean su propia existencia eligiendo el significado particular que quieren darle a sus vidas.

Contra esta actitud fatalista, Jean-Paul Sartre, otro filósofo existencialista, sonaba como si le estuviera gritando directamente a Berdyaev cuando escribió: “Compréndanlo de una vez: si la violencia acaba de empezar, si la explotación y la opresión no han existido jamás sobre la Tierra, quizás la pregonada ‘no violencia’ podría poner fin a la querella. Pero si la totalidad del régimen —y hasta sus ideas sobre la no violencia— está condicionado por una opresión milenaria, su pasividad no sirve sino para alinearlos del lado de los opresores” (Sartre, 1973: 23)¹⁶.

En *Los condenados de la tierra*, Frantz Fanon (1973: 136) reaccionó diciendo que “la falta de preparación de las elites [intelectuales], la ausencia de vínculos prácticos entre ellas y las masas, su pereza y, hay que decirlo, la cobardía en el momento decisivo de la lucha, van a dar origen a trágicas desventuras” pero, agregó (p. 181), que “en un plazo más o menos largo un pueblo tiene el Gobierno que merece”.

¿Qué tipo de Gobierno se merece el pueblo? Irónicamente, fue un político, el tercer presidente de Estados Unidos de 1801 a 1809, Thomas Jefferson (1812, vol. 13: 135), quien dio la respuesta inequívoca cuando afirmó que “el único objetivo ortodoxo de la institución del Gobierno es asegurar el mayor grado de felicidad posible a su población”, poniendo el énfasis en que “[...] la felicidad y la prosperidad de nuestros ciudadanos [...] es el único objetivo legítimo del Gobierno y el primer deber de los gobernantes” (Jefferson, 1811, vol. 13: 41). En el ámbito político, se puede decir que el mayor logro del siglo xx ha sido la aceptación del principio de “una persona, un voto”. Cuando cada persona, libre de toda influencia, ejerce su derecho al voto, existe un cierto sentido de igualdad. El sufragio directo universal posibilita la democracia en el Gobierno, pero para que esto sea efectivo, debería ser tan fácil destituir a los representantes políticos de sus cargos como elegirlos para cualquier nivel de gobierno. Para que los representantes políticos sean dignos de la

confianza de la gente, deberían aspirar a hacer, precisamente, el tipo de cosas que pretenden convertir “la vida en la Tierra en un paraíso”.

Debe entenderse que la igualdad en el campo político es solo un medio para lograr la igualdad en las esferas económica y social, lo que significa que los políticos no solo deben tener talento y ser creativos en su pensamiento sobre el proceso político, sino también, y sobre todo, deben ser conocedores de las cuestiones de “políticas económicas y sociales”, cuyo objetivo general debe ser siempre la mejora continua del bienestar general de toda la población, es decir, una vida digna para todos y en armonía con la naturaleza. Riesgos agregados para la sociedad en forma de amenazas económicas como el desempleo y la pobreza requieren una acción permanente y colectiva. El Gobierno es, en efecto, el único organismo equipado para hacer frente a los efectos de esos peligros a lo largo del tiempo y garantizar la protección social de todos los ciudadanos. Por esta razón, el Gobierno puede convertirse en “la gran agencia para lograr la felicidad”, tomando prestada la expresión de Polanyi (1944: 139), pero es responsabilidad de la gente asegurarse de que realmente reciben el Gobierno “que se merecen”. En los dos siguientes apartados, el capítulo explora las formas en que el Estado en las sociedades modernas puede ser reformado y utilizado como un instrumento para construir una sociedad basada en la democracia social y económica.

2. LA DEMOCRACIA EN EL GOBIERNO

La necesidad de democracia en el Gobierno está dictada por el hecho de que el poder para diseñar el sistema económico y el tipo de organización social reside principalmente en el Estado y que dicho poder es crucial para el control y la distribución de los recursos. Wright (2004: 48) señaló que “en las sociedades de cazadores-recolectores [...] si un líder se vuelve autoritario, o si una minoría no está de acuerdo con una decisión de la mayoría, la gente puede irse. En un mundo sin fronteras ni pertenencias fijas, era fácil votar con los pies”. El alejamiento de los regímenes dictatoriales mediante “el voto con los pies” no siempre es una

opción en los tiempos modernos. Hoy en día, la confrontación es la forma dominante de resolver conflictos y desacuerdos. En las democracias parlamentarias, la confrontación toma la forma de una lucha política entre los partidos políticos, cada uno con el objetivo de acceder al poder. Pero los políticos no se basan solo en la persuasión política y la argumentación intelectual. También dependen del apoyo de los miembros económicamente influyentes de la sociedad y de la cantidad de dinero que pueden conseguir para financiar una campaña de propaganda exitosa. El candidato o partido ganador siempre termina implementando políticas y medidas que sirven a los intereses de los patrocinadores. Las políticas económicas y sociales, por lo tanto, no son ni pueden ser ideológicamente neutras. De hecho, todo el marco institucional y legal que rige la organización social está diseñado para preservar los intereses de la clase dominante. Esta es una característica tanto de las aristocracias como de las democracias parlamentarias.

En el capítulo 1 se presentó evidencia de que, a partir de 1980, en gran parte como resultado de las políticas neoliberales, se ha producido un aumento mundial de las desigualdades de ingresos y riqueza (véase Piketty, 2014; Oxfam, 2015). Los que se ven afectados por estas políticas han protestado, pero, al otro lado de la valla, aquellos que ejercen el poder político fueron aún más desafiantes. La “multitud furiosa” podría despotricar y protestar todo lo que quisiera (por ejemplo, Occupy Wall Street, las revueltas árabes, las manifestaciones griegas, españolas, francesas, etc.), pero el Estado no cedería porque tiene una misión. Cuando esas protestas cobran impulso y se convierten en una amenaza, el Estado simplemente interviene para prohibirlas y declararlas ilegales: tiene el poder de hacerlo. Las medidas punitivas drásticas son rutinarias. Por ejemplo, tras las protestas contra la austeridad, el Gobierno español aprobó una ley que multaría a los manifestantes con hasta 600.000 euros por ocupar en bloque infraestructuras públicas clave, como un aeropuerto (Águeda, 2013). De hecho, en la mayoría de los casos, el Estado ha utilizado incluso la fuerza y la violencia para evitar la oposición a su programa. ¿O de quién es la agenda? ¿Es el Estado una especie de

agencia supraindividual, paternalista y neutral que actúa para el mejor interés de todos los miembros de la sociedad? El político elegido que se sienta en el parlamento o en el ejecutivo, ¿representa y defiende *por igual* los intereses de todos los votantes?

Hay quienes se apresuran a descartar estas cuestiones como malintencionadas, pasadas de moda o, incluso, ingenuas. Pero los académicos serios que han sometido las democracias modernas a un minucioso escrutinio han observado el predominio de un comportamiento colusorio entre el Estado y la clase dominante. Si restringimos nuestro estudio al periodo actual, que hemos identificado anteriormente como la era neoliberal del capitalismo, entonces podemos decir que toda la evidencia disponible indica que los políticos electos en las actuales democracias parlamentarias muestran un claro sesgo al adoptar políticas económicas y sociales que sirven principalmente a los intereses de la clase dominante y que el Estado está lejos de actuar como una agencia neutral. La relación entre la clase política y la clase económicamente dominante es tan intrincada que las dos son a menudo una sola. No hablemos de África y otras partes del mundo donde la corrupción y el amiguismo son desenfrenados. El economista estadounidense y premio nobel Joseph Stiglitz (2011) describió la situación en su propio país de la siguiente manera:

La Corte Suprema, en su reciente caso de *Citizens United*, ha consagrado el derecho de las corporaciones a comprar el Gobierno, al eliminar las limitaciones de los gastos de campaña. Los intereses personales y políticos están hoy en día en perfecta alineación. Prácticamente todos los senadores de Estados Unidos, y la mayoría de los representantes en la Cámara de Representantes, son miembros del 1% más rico cuando llegan, se mantienen en el cargo gracias al dinero del 1% más rico, y saben que si sirven bien al 1% más rico serán recompensados por el 1% más rico cuando dejen el cargo. En general, los principales responsables de las políticas de la rama ejecutiva en materia de política comercial y económica también provienen del 1% más rico. Cuando las compañías farmacéuticas reciben un regalo de tres billones de dólares —a través de una legislación que prohíbe al

Gobierno, el mayor comprador de medicamentos, regatear el precio—, no debería ser motivo de asombro. No debería caer en saco roto el que un proyecto de ley de impuestos no puede salir del Congreso a menos que se pongan en marcha grandes recortes de impuestos para los ricos. Dado el poder del 1% más rico, esta es la forma en que *se espera* que el sistema funcione.

El control del proceso político es crucial para mantener el tipo de sistema económico que beneficia a la clase dominante y a sus socios comerciales. Como señaló Roberts (2014):

[...] En los últimos años, los grupos de interés privados parecen haber tomado el control del Gobierno. Wall Street, el complejo de seguridad militar, la agroindustria, las industrias extractivas —*sus donaciones de campaña eligen a la Cámara de Representantes, el Senado, el presidente, y luego escriben la mayoría de los proyectos de ley que el Congreso aprueba y el presidente firma*—, por lo que es una forma de capitalismo de Estado en la que los capitalistas parecen tener la ventaja (énfasis de HB).

Después del cúmulo de elogios y las tersas declaraciones sobre las últimas elecciones del Congreso, Paul Krugman (2014), otro premio nobel, replicó que “los Amos del Universo [los banqueros]... se compraron un Congreso”. Galbraith (2006) ya había llamado al sistema político estadounidense una “democracia corporativa” y se refirió al Gobierno como un “Estado depredador” (Galbraith, 2008). La situación tiende a ser bastante similar en otras democracias occidentales, independientemente del partido político que acceda al poder. Stiglitz (2013: 361) concluyó que: “[...] Si vamos a preservar un sistema de una persona, un voto —en lugar de un dólar, un voto— serán necesarias reformas en nuestro sistema político; pero es improbable que logremos un sistema político justo y receptivo dentro de un sistema económico que se caracteriza por el grado de desigualdad que marca el nuestro”.

En su estudio empírico, *Testing Theories of American Politics*, Gilens y Page (2014: 572, 575) utilizaron un conjunto de datos de 1779 sobre problemas políticos para estimar la influencia de cuatro grupos de actores

en la formulación de políticas de los Estados Unidos. Los cuatro actores identificados por ellos son el ciudadano medio o “votante medio”, las elites económicas, los grupos de base masiva y los grupos de interés o industrias orientadas a las empresas. Los autores concluyeron que:

El impacto estimado de las preferencias del ciudadano medio cae precipitadamente, hasta un nivel no significativo, cercano a cero. Es evidente que el ciudadano medio o “votante medio”, que ocupa el centro de las teorías de la democracia electoral mayoritaria, no funciona cuando se enfrenta a las elites económicas y a los grupos de interés organizados [...] Los ciudadanos comunes no solo no tienen un poder sustancial único sobre las decisiones políticas, sino que tienen poca o ninguna influencia independiente en la política. Por el contrario, se estima que las elites económicas tienen un impacto independiente bastante sustancial y altamente significativo en la política.

Observemos de paso que en países como Canadá y el Reino Unido, bajo el sistema electoral común de “primero en el puesto”, un partido político a menudo termina gobernando con menos del 40% del total de los votos. En el caso de Estados Unidos, Burnham y Ferguson (2014) informan que la participación en las elecciones al Congreso de Estados Unidos en 2014 fue de alrededor del 36% del electorado potencial que tenía derecho legal a emitir un voto y que en algunos estados la participación fue tan baja como el 26% —índices similares a los registrados a finales del siglo XVIII cuando el voto era exclusivo de los hombres blancos propietarios—. Esta situación ha llevado a Chomsky (2014) a llamar al sistema político estadounidense “una oligarquía, no una democracia”.

Si consideramos ahora el drama que se desarrolló en Grecia y en otros países europeos periféricos, donde se ha demostrado claramente la influencia de las elites económicas en la elaboración de políticas e imposición de programas de austeridad, el veredicto es que la democracia parlamentaria le ha fallado a las masas o, digamos, al “ciudadano medio”. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos reformar el sistema político para lograr la democracia económica y social? Para que cualquier reforma

tenga un efecto significativo, debe ir al corazón del *proceso de toma de decisiones*, porque es ahí donde reside el poder. La reforma debe tener como objetivo la creación de un Estado con el poder político para diseñar e implementar políticas económicas y sociales que busquen permanentemente la eliminación de todas las formas de pobreza y desigualdad¹⁷.

La historia de las democracias modernas indica que tal Estado no podría crearse por la política tradicional de los partidos y la representación parlamentaria. Se han propuesto varios modelos políticos como alternativas (véase, entre otros, Emerson, 2006; Dalton, Bürklin y Drummond, 2001), pero aquel que tiene el potencial de alcanzar los objetivos mencionados es la *democracia directa* (véase Cockshott y Cottrell, 2005; Fotopoulos, 2005; Asimakopoulos, 2014). Este es un modelo en el que las masas tendrán influencia en el proceso político, permitiéndoles tener voz y participar directamente en el diseño de las políticas económicas y sociales que afectan a su vida. Desde esta perspectiva, la democracia política es necesariamente solo un componente de una democracia inclusiva que se extiende a las esferas económica y social, todo ello en el contexto del respeto y el cuidado de la naturaleza y el medioambiente.

La democracia directa suele asociarse con el sufragio universal, al que algunos países tienden a recurrir para la aprobación de leyes clave como las constituciones o para votar en las elecciones presidenciales, pero se trata de una interpretación limitada. Definimos aquí la democracia directa como un proceso por el cual los ciudadanos toman *colectivamente* decisiones sobre *todos los asuntos* que conciernen a su comunidad, ya sea a nivel local, regional o nacional. Obviamente, en las grandes sociedades existe el problema de cómo los organismos ciudadanos locales pueden estar “representados” a nivel regional o nacional. Esta es la zona en la que tantas pendientes resbaladizas pueden llevarnos fácilmente a la democracia representativa y liberal o a lo que Castoriadis (1991) llama “oligarquía liberal”, en la que los representantes tienden a ser elegidos repetidamente por su gran talento, capacidad o conocimiento, es decir,

por su pericia. Una vez que los llamados expertos se convierten en políticos profesionales, se vuelven personalidades distinguidas, socialmente eminentes, notables, y adquieren poder político sobre sus conciudadanos, transformándose así en miembros de la elite política. No debemos sorprendernos, entonces, de que los “representantes” elegidos terminen realmente representándose a sí mismos y defendiendo los intereses de su clase social y no los intereses de quienes los votaron. Por esta razón, filósofos griegos como Platón, Isócrates y Aristóteles prefirieron ver la sociedad gobernada por aquellos que muestran un menor afán por la tarea y no por aquellos que muestran una ambición excesiva. Como señaló Hansen (1991: 307), se trata de un viejo problema que afectaba incluso a la democracia ateniense¹⁸:

Los atenienses sabían perfectamente que un demagogo hábil podía ganarse a los ciudadanos con su propuesta, independientemente de que fuera realmente lo mejor para ellos: la competencia entre los líderes políticos podía llevar a que se enfrentaran entre sí con promesas al pueblo y a que el pueblo se dejara seducir por sus promesas [...] El propósito de algunas instituciones atenienses era contrarrestar precisamente esos riesgos. Los demagogos estaban abiertos a todas las persecuciones públicas que hemos visto: romper una promesa al pueblo era un crimen por el cual un hombre podía ser acusado por *eisangelia* o *probole* [equivalentes aproximados a la denuncia y la culpa].

Para evitar la formación de políticos profesionales de elite en un régimen de democracia directa, será necesario adoptar normas estrictas de representación. También en este caso la solución de los atenienses es esclarecedora. Hansen (1991: 308) escribió que en Atenas:

Todos los ciudadanos debían participar, si lo deseaban, en la dirección del Estado, pero todos debían ser aficionados [...] El profesionalismo y la democracia se consideraban, en el fondo, contradictorios. Los atenienses aseguraron la ausencia de profesionalismo en su administración insistiendo en que la mayoría de los magistrados debían ser elegidos por sorteo y podían llenar una magistratura en particular solo una vez y por un año solamente; y evitaron la continuidad en la

administración al reemplazar siempre a todos los miembros de una junta al mismo tiempo...

En la democracia representativa o parlamentaria moderna, la gestión de los asuntos públicos se lleva a cabo habitualmente mediante lo que se ha denominado acertadamente decisiones administrativas descendentes o gobernando por decreto administrativo. La gran mayoría de la población actual no solo está excluida del proceso de toma de decisiones, sino que también sufre los efectos de las medidas draconianas adoptadas por la pequeña elite política (véase Gilens y Page, 2014). Por lo tanto, es fundamental que dispongamos de un mecanismo que garantice que la democracia directa no degenera en democracia representativa. Fotopoulos (2005: 202) propuso que:

[...] Donde la delegación de autoridad tiene lugar en segmentos del cuerpo de ciudadanos, para llevar a cabo tareas específicas (por ejemplo, servir como miembros de tribunales populares, o de consejos regionales y confederales, etc.), la delegación se asigna, en principio, por sorteo, sobre una base de rotación, y siempre es revocable por el cuerpo de ciudadanos. Por otra parte, en lo que respecta a los delegados de los organismos regionales y confederados, los mandatos deben ser específicos. Este es un paso efectivo hacia la abolición de las relaciones jerárquicas, ya que tales relaciones hoy en día se basan, en gran medida, en el mito de los “expertos” que se supone que pueden controlarlo todo, desde la naturaleza hasta la sociedad.

Para hacer hincapié aún más este punto, Fotopoulos (2005: 205) añadió que: “Los miembros de estos consejos confederales tienen un mandato estricto, son revocables y responsables ante las asambleas que los eligen con el fin de coordinar y administrar las políticas formuladas por las propias asambleas. Por lo tanto, su función es puramente administrativa y práctica, no de formulación de políticas, como la función de los representantes en la democracia ‘representativa’”.

Solo así los órganos ciudadanos, las asambleas y los comités de empresa tendrán alguna vez la posibilidad de construir un Estado que les

sirva, en lugar de un Estado del que terminen siendo servidores. Las políticas económicas serán decididas por las asambleas y juzgadas por sus efectos sobre la población en su conjunto en un marco que evoca el principio de optimización. Este es el Estado creativo que toda persona democrática merece.

Los escépticos y los críticos que sostienen que la democracia directa es una utopía irrealizable son también los que quieren preservar la democracia representativa capitalista y la defienden como el orden *natural*. A lo largo de la historia reciente de la humanidad se han producido varias experiencias de diferentes formas de democracia directa. Por ejemplo, además de la democracia ateniense, de la que Hansen (1991: 3) dijo que es “el mejor caso de un Estado significativo gobernado por la democracia directa” hay otros casos, como el de Suiza, donde “[...] desde la Edad Media cuatro cantones suizos y cuatro semicantones han sido gobernados por asambleas del pueblo (*Landsgemeinden*), cinco de los cuales existen hasta el día de hoy” (Hansen, 1991: 2). El Manual de IDEA Internacional (2008) menciona varios casos de todo el mundo en los que existen algunas formas más débiles de democracia política directa. Según Dalton, Bürklin y Drummond (2001: 143), otras partes de Europa también tienen alguna forma de democracia directa, por ejemplo, en Alemania:

[...] Desde 1990, siete estados [...] han aprobado nuevas constituciones con disposiciones para el referéndum. De hecho, las nuevas constituciones de los estados del este presentan una serie de dispositivos de participación directa, que van desde iniciativas legislativas estatales hasta la destitución de alcaldes elegidos localmente. Otras reformas están ampliando la participación ciudadana en los procesos administrativos y de planificación locales, y varios estados están incorporando los referendos e iniciativas ciudadanas en los asuntos de la comunidad local. Así, algunos analistas alemanes afirman que parece haber una “tendencia irreversible a largo plazo de la democracia representativa a una democracia participativa ampliada”.

La tendencia hacia la democracia participativa directa es, en efecto,

una aspiración de la mayoría de las personas en todo el mundo. Dalton, Bürklin y Drummond (2001: 144-5), por ejemplo, informan de que un estudio electoral alemán de 1998 confirmó que “la mayoría de los alemanes se inclinan por otorgar al público una mayor participación en las decisiones políticas importantes” y que, según la encuesta del Eurobarómetro (1997), “entre los europeos que expresan una opinión, el 70% valora positivamente la democracia directa del sistema político suizo”. De manera similar, Asimakopoulos (2014: 74-75) cita las preferencias generalizadas de los trabajadores en muchos países de organizarse en “comités de empresa”, que les permiten una participación directa en la gestión de sus lugares de trabajo.

Evidentemente, todos los ejemplos anteriores de democracia participativa directa se dan solo a nivel de empresa, de cantón o de provincia y no representan la práctica dominante en ningún país. Esto ha llevado a los críticos y escépticos a argumentar que la democracia directa es imposible de implementar a nivel nacional o federal, al menos por razones técnicas y prácticas como la gran escala de la población. Una rápida y lúcida refutación a estas afirmaciones fue dada por Hansen (1991: 1) quien escribió que: “[...] La afirmación de que la democracia directa ya no existe [...] tiende a ir seguida por la afirmación de que tal democracia ya *no puede* existir debido al tamaño de las sociedades modernas (la cual, en realidad, ignora el hecho de que la tecnología moderna ha hecho bastante factible el retorno a la democracia directa — si es deseable o no es otra cuestión)—”.

Las dificultades para transformar una sociedad capitalista en una democracia inclusiva son numerosas. Una de esas dificultades es lo que Hirschman (1991) llama la “retórica reaccionaria”. En efecto, la oposición y el desprecio de los neoliberales al sufragio universal directo y, en general, a cualquier sistema político que dé voz a las masas, constituye un serio obstáculo a superar. Esta oposición contraviene, obviamente, la ampliación de la democracia a la esfera económica, ya que, como se ha señalado anteriormente, es el poder económico, y el temor a perderlo, lo que motiva la oposición de los capitalistas a la democracia directa en la

esfera política.

3. DEMOCRACIA ECONÓMICA Y SOCIAL

La mayoría de la gente aprobaría fácilmente un cambio a la democracia directa en la esfera política. Hay menos acuerdo sobre los méritos de la democracia económica. Pero si se limita a la esfera política, la democracia directa no tendría sentido. De hecho, la democracia directa, tal como la definimos aquí, no sería sostenible —ni siquiera alcanzable— si no se combina con la democracia en los ámbitos económico y social. El premio nobel de economía Angus Deaton (2013: 213) señaló que “si la democracia se convierte en una plutocracia, los que no son ricos se ven efectivamente privados del derecho al voto [...] La igualdad política que requiere la democracia está siempre amenazada por la desigualdad económica, y cuanto más extrema es la desigualdad económica, mayor es la amenaza a la democracia”.

Esto es así en virtud de que quienes tienen el poder económico pueden simplemente sentarse y, de variadas y sutiles maneras, manipular el resultado de las elecciones —y por lo tanto elegir el tipo de políticas económicas que deben ser implementadas—. Dada la importancia del poder político en la configuración del resultado económico, es sorprendente —y de hecho decepcionante— que quienes lideran la lucha contra la desigualdad económica rara vez presten atención a una reforma del sistema político. Las políticas económicas son un instrumento tan poderoso que pueden aliviar la pobreza y reducir las desigualdades de ingresos y riqueza, tal como lo demuestran las experiencias de los “Estados de bienestar” después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, debido a la estructura de clases de estas sociedades, la eficacia de dichas políticas se ha debilitado —particularmente con la implementación de las políticas neoliberales desde los años ochenta—. Este resultado era el que cabía esperar porque el tipo de políticas en vigor refleja necesariamente la orientación y el pensamiento filosófico de la elite política gobernante. Es por esta razón que las políticas

tradicionales del Estado de bienestar solo pueden llegar hasta cierto punto para mejorar el nivel de vida de las masas, pero nunca podrán eliminar la pobreza y la desigualdad, porque eso socavaría el poder económico de la elite gobernante. Los impuestos y las transferencias, independientemente de lo progresivos que sean —por definición— solo pueden atenuar las desigualdades de ingresos *a posteriori* y no abordan la causa principal de la distribución desigual de la riqueza.

El pilar central del poder económico hoy en día es la propiedad privada de los recursos productivos. El sistema político, ya se trate de una democracia o no, simplemente legitima esa propiedad institucionalizando los derechos de propiedad y haciéndolos cumplir, hasta el punto de santificarlos a través de su sistema judicial. Los académicos de todas las tendencias reconocen ahora que la propiedad privada de los recursos productivos es la base de la existencia de las clases sociales y la causa fundamental de la distribución desigual de la riqueza. Pero los derechos de propiedad sobre los recursos productivos no son inmutables. Están socialmente establecidos y, por lo tanto, también pueden cambiarse por la gente que hace las leyes de la tierra. Y esto es, en efecto, lo que las sociedades han hecho a lo largo de su historia reciente. La tierra, por ejemplo, como un importante recurso productivo, no siempre ha sido propiedad privada. De hecho, ya en los siglos XIX y principios del XX, en diferentes partes del mundo, la tierra seguía siendo propiedad comunal y los individuos solo tenían derecho a su uso, es decir, el derecho a disfrutar de los productos que pudieran obtener de ella a través de la agricultura o la pesca y la caza, etc. (véase, entre otros, Ike, 1984).

Es importante ser consciente de las diferencias fundamentales en el significado que las distintas civilizaciones dan a la idea de la propiedad y los derechos de propiedad. En toda África y hasta hoy, como en Marruecos, la propiedad comunal de la tierra sigue siendo bastante común. Por ejemplo, Ike (1984: 469) nos informa de que en Nigeria “la posición legal de un miembro es la de tener derecho a un bloque de tierra para su cultivo” y que “un miembro es uno de los ‘muchos muertos, los pocos vivos e innumerables otros no nacidos’, que en el derecho

consuetudinario son los propietarios de la tierra”. Morgan (1877: 537) fue uno de los primeros escritores que observó la ausencia de la idea de la propiedad en las sociedades antiguas. Escribió que “las tierras, que hasta ahora apenas eran objeto de propiedad, eran propiedad de las tribus en común, mientras que las casas de vecindad eran propiedad conjunta de sus ocupantes”. Wright (2004: 48) añadió que:

En las sociedades de cazadores-recolectores (salvo algunos casos especiales) la estructura social era más o menos igualitaria, con solo ligeras diferencias de riqueza y poder entre los mayores y los menores [...] La tierra era de propiedad comunitaria o se pensaba que no tenía otro dueño que los dioses. Los granjeros cuyo esfuerzo y habilidad los hacía más ricos tenían la obligación de compartir con los necesitados, a los que estaban vinculados por parentesco.

En su excelente pero no tan popular libro, *Economics and Power*, Bartlett (1989: 151-153) presentó un lúcido y penetrante análisis de las formas de los derechos de propiedad y su evolución durante la historia reciente de la civilización occidental. Su análisis de los resultados de los procesos legislativos que instituyen, hacen cumplir y defienden los derechos de propiedad es especialmente pertinente para comprender el actual aumento de la pobreza y la indigencia, por un lado, y la concentración de la riqueza, por otro. Por esta razón, vale la pena citarlo *in extenso*:

Bajo el feudalismo, los siervos [en Inglaterra] tenían un derecho socialmente determinado y defendían el derecho al uso de varias tierras para cultivos y pastoreo. Esos derechos pervivieron durante muchas generaciones. Con el aumento del valor de la lana, había ganancias potenciales que se podían obtener al convertir esa tierra para la cría de ovejas. Los siervos, sin embargo, no tenían derechos de intercambio sobre la tierra, solo derechos de uso. Sus derechos no podían ser comprados, ni ninguno de los siervos podía haber comprado los derechos de otros [...] Para aprovechar estos beneficios potenciales [...] había que “evolucionar” hacia nuevas formas de derechos. En este caso, la “evolución” de los derechos significaba quemar las casas de los siervos, matar su ganado y, en ocasiones, matarlos a ellos. Después de décadas de este violento “surgimiento” de los nuevos derechos, el Parlamento ratificó el cambio con las Actas de

Cercamiento o de Cierre de los terrenos comunales en el siglo XVIII.

La expansión de los territorios de Estados Unidos durante los años centrales del siglo XIX es otro ejemplo del cambio en las formas de los derechos dentro de un grupo social [...] Las tierras de las Grandes Llanuras fueron claramente ocupadas mucho antes de la expansión europea. Los derechos de uso de esa tierra también se establecieron claramente dentro de los límites de los grupos sociales que la habitaban. En la mayoría de los casos, la forma de los derechos era el derecho de uso comunal. Cualquier miembro de la tribu que usara un recurso tenía derecho a él hasta que dejara de usarlo. Entonces cualquier otro podría usarlo a voluntad. No existía en absoluto el concepto de derechos de intercambio de recursos. La sociedad pertinente no los ha definido como tales y ciertamente no los defenderá.

A medida que crecía el contacto con la sociedad blanca, nuevos conceptos de derechos se abrían paso en la región. Los blancos querían los derechos totalmente excluyentes y totalmente intercambiables en la tierra común de su sociedad, aunque este concepto no tenía sentido para los ocupantes originales [...] Los nativos americanos, sin embargo, percibían esas incursiones como claras violaciones de los sistemas de derechos tribales comunales que definían su sociedad. El camino hacia la resolución estaba claro. Decidir mediante el recurso a la fuerza qué sistema de derechos prevalecerá. Un nuevo sistema de derechos “evolució”. [...] Cientos de miles de nativos americanos murieron, y los que quedaron fueron trasladados o reclusos dentro de reservas específicas.

La imposición de derechos de propiedad transferibles fue crucial para establecer y generalizar el sistema de mercado y, por lo tanto, para el desarrollo del propio capitalismo. Desde el principio, esto significó la movilización de todos los partidarios de la naciente clase capitalista. La definición de los derechos de propiedad negociables se convirtió en la misión de los pensadores de la Ilustración, mientras que la implementación y la aplicación se relegaron al Ejército y a la policía. Hoy asistimos a la movilización de las mismas fuerzas que trabajan en tándem bajo la bandera neoliberal. Y así, en lo que se refiere al suelo, cada parcela en las zonas urbanas es de propiedad privada y está sujeta a intercambio en medio de una frenética especulación de precios¹⁹. Muchos de los pequeños agricultores de África y Asia se ven obligados a emigrar a la ciudad para servir como mano de obra barata mientras que sus

granjas son acaparadas para formar el *latifundio* necesario para la producción a gran escala de productos específicos destinados a la exportación, incluyendo los productos genéticamente modificados²⁰.

Siempre en relación con la tierra, pero más allá de la agricultura, se están aprobando nuevas leyes de cercamiento para cerrar las áreas costeras a los habitantes locales, con el objetivo de construir hoteles *resort* y condominios de lujo a lo largo de las mejores playas de los océanos Atlántico e Índico. La propiedad privada de la tierra y de todo lo que está en su superficie ha causado ciertamente miseria a todos aquellos que fueron excluidos por las Actas de Cercamiento²¹ (desde los siervos de la Inglaterra del siglo XVIII hasta los nativos americanos y los actuales marginados de África y Asia), pero la propiedad privada de las riquezas que están bajo la superficie es la más dramática según todos los indicadores (Bougrine, 2006, 2014).

En efecto, desde el inicio de la explotación del petróleo y otros recursos naturales en África y al este del Mediterráneo a principios del siglo XX, millones de personas han perdido no solo la fuente de su sustento, sino también sus vidas, ya sea directamente en guerras por la propiedad y el control de estos recursos o como resultado de la pobreza y las enfermedades que se derivaron de dicha explotación. El pillaje de los recursos naturales por parte de las corporaciones transnacionales (CTN) y sus aliados locales en los llamados países en desarrollo está bien documentado (véase Rodney, 1972; Maddison, 2006; Vries, 2015) y ha prevalecido durante mucho tiempo, desde los primeros tiempos coloniales. La dominación colonial a través de conquistas sangrientas, saqueos y esclavitud resultó ser tan gratificante para las potencias europeas que tuvo que seguir siendo un principio rector en sus tratos con las colonias. Bajo varias apariencias y justificaciones, las potencias imperiales han buscado dominar el petróleo, el gas y otros recursos estratégicos, o por lo menos asegurar el acceso a ellos derrocando Gobiernos, coaccionando a los políticos y con una ocupación militar directa (por ejemplo, el derrocamiento de Mossadegh en Irán en 1953, la ocupación de Irak en 2003, la continua destrucción de Libia, Siria, etc.).

A lo largo de esta historia, el escenario ha sido el mismo: la clase dominante local está en posición de firmar contratos “legitimando” la explotación de petróleo y otros recursos naturales por parte de las CTN y estas últimas recompensan obligatoriamente a la elite local mientras mantienen al resto de la población fuera de la participación en los beneficios económicos extraídos de su propia tierra. Como resultado, África y la región al este del Mediterráneo tienen ahora las tasas más altas de pobreza e indigencia, pero también varios de los individuos más ricos del mundo, algunos de los cuales están en la lista de las 80 personas que poseen tanta riqueza como la mitad de toda la población mundial (véase Oxfam, 2015).

La propiedad de la tierra convierte al individuo en señor, en terrateniente; en miembro influyente en la sociedad y le da credibilidad y garantía no solo cuando se presenta para ocupar cargos políticos, sino también cuando se relaciona con un banco. Esto le permite acceder al dinero y a la financiación y, por lo tanto, le abre un mundo de oportunidades para iniciar nuevos negocios mediante la adquisición de materias primas, maquinaria y equipos y la contratación de mano de obra. La historia del inglés William Knox D’Arcy, que comenzó como especulador en tierras y terminó siendo uno de los principales fundadores de la industria petrolera y petroquímica, es arquetípica en este sentido. La supuesta oposición entre los terratenientes y los capitalistas, tal como la relatan David Ricardo y otros economistas clásicos, es en gran medida ficticia y, de hecho, carece de un análisis lúcido y de una justificación creíble. El capitalista emprendedor ciertamente no surgió de los siervos o de los trabajadores pobres. Karl Marx, y más tarde Joseph Schumpeter y John Maynard Keynes, han reconocido que el acceso al crédito (financiación) se limita a una clase privilegiada y desempeña un papel crucial en la puesta en marcha de la actividad empresarial (véase Bougrine y Seccareccia, 2009). La aplicación de los derechos de propiedad que excluye a los pobres de la propiedad de la tierra y otros recursos también lleva a su exclusión del acceso a la banca y las finanzas —y, por lo tanto, contribuye a mantenerlos en la pobreza—.

Sin embargo, desde que los bancos descubrieron el truco de la “titulación” se ha dado un nuevo giro a esta regla general de exclusión. Los bancos comenzaron a alentar a los hogares de ingresos medios, e incluso a los pobres, a solicitar préstamos para comprar casas, automóviles y electrodomésticos nuevos y bienes de consumo ordinarios. Estos préstamos fueron reempaquetados en “títulos” y vendidos en los mercados financieros como nuevos productos financieros, lo que contribuyó al crecimiento fenomenal y ficticio de la riqueza en el sector financiero. El cambio hacia esta era de la “financiarización” fue facilitado por la colusión entre los banqueros, los terratenientes y la elite política. La llamada crisis *subprime* de 2007-8, que se convirtió en una Gran Recesión, es la última manifestación de esta flagrante colusión de intereses, la que resumimos a continuación mediante los siguientes hechos verificables²²:

- Los Gobiernos derogaron leyes clave que regulaban la banca y las finanzas (por ejemplo, la Ley Glass-Steagall en Estados Unidos), dejándolo todo en manos de las “fuerzas del mercado”.
- Los bancos atraieron a los trabajadores pobres para que solicitaran hipotecas y obtuvieran las “casas de sus sueños” en términos que claramente no podían permitirse (una práctica que se conoció como préstamos depredadores).
- Mientras tanto, los bancos y otras instituciones financieras se dedicaron a una elevada especulación al empaquetar y vender las mismas hipotecas que los nuevos activos financieros, denominadas obligaciones de deudas colateralizadas o CDO, CDO al cuadrado, y así sucesivamente.
- Las mismas instituciones financieras apostaron por el impago de las hipotecas y adquirieron seguros contra sus apuestas (los tristemente célebres *credit default swaps* o CDS).
- Cuando se produjo el impago de las hipotecas, las instituciones financieras obtuvieron recompensa por sus apuestas, los bancos ejecutaron las hipotecas y los trabajadores pobres se quedaron

sin hogar²³.

La dinámica de esta lucha de clases fue bien entendida por Bertolt Brecht (1934), quien la expresó hábilmente en este poema:

Hombre rico, hombre pobre,
se toparon frente a frente en una camioneta.
Dijo el pobre con un tic:
si no fuera pobre, no serías rico.

La democracia económica requiere la eliminación de las desigualdades económicas y sociales. En su libro *Rewriting the Rules of the American Economy*, Stiglitz (2016: 100) reconoció la “necesidad de abordar las reglas e instituciones que han generado una baja inversión, un crecimiento lento y una acumulación desbocada de ingresos y riqueza en la cima y han creado una colina más empinada de subir al resto [de la población]”. La doble agenda de Stiglitz para arreglar la economía busca esencialmente: (a) domar el comportamiento de búsqueda de rentas; y (b) promover políticas de pleno empleo. Pero si se mira más de cerca, parece que las reglas solo se están reescribiendo para salvar al capitalismo de sí mismo, una vez más. La principal causa de la desigualdad es la propiedad privada de los recursos productivos, incluyendo las fuentes de creación de dinero, es decir, los bancos. Y mientras esto permanezca intacto, es probable que la situación no sea diferente para las próximas generaciones. A menos que se cambien los arreglos institucionales que permitan que nuestro sistema económico, político y cultural particular se modifique para eliminar la propiedad privada de todos los recursos productivos, los problemas de la desigualdad y la pobreza no desaparecerán. Para que la riqueza se comparta equitativamente entre los miembros de la comunidad, la propiedad de los recursos productivos debe hacerse pública, y las empresas de producción real deben ser propiedad de los trabajadores y ser gestionadas por ellos, y los bancos deben convertirse en empresas estatales —un tema que desarrollamos en el capítulo 3—.

4. CONCLUSIÓN

En este capítulo se argumentó que en una democracia representativa el Estado no puede ser equiparado con una institución neutral que defienda por igual los intereses de todas las clases sociales. Tomando como ejemplo las experiencias de las democracias occidentales, observamos que existe una fuerte alianza entre el Estado y la clase económicamente dominante, que utiliza su poder y su dinero para determinar quiénes son elegidos y el tipo de políticas que deben implementar una vez en el cargo. Esta práctica de larga data ha obligado al sistema político a degenerar en una forma disfrazada de oligarquía en la que las políticas económicas y sociales se diseñan con el objetivo de servir a los intereses de la elite. Reconociendo la importancia del poder de la formulación de políticas y la forma en que estas pueden dar forma a los resultados económicos, se han propuesto aquí alternativas para reformar el proceso político y ofrecido sugerencias sobre cómo lograr la democracia económica y social.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁGUEDA, P. (2013): “Multas de 600.000 euros por convocar una protesta en Twitter ante el Congreso”, *elDiario.es*, disponible en <https://bitly.ws/3eaJE>.
- ASIMAKOPOULOS, J. (2014): *Social Structures of Democracy: On the Political Economy of Equality*, Leiden, Brill.
- BARTLETT, R. (1989): *Economics and Power: An inquiry Into Human Relations and Markets*, Cambridge, Cambridge University Press.
- BOUGRINE, H. (2006): “Oil: Profits of the Chain Keepers”, *International Journal of Political Economy*, 35(2), pp. 35-53.
- (2014): “A Societal Natural Monopoly for Natural Resources”, en D. Leadbeater (ed.), *Resources, Empire and Labour: Crises and Alternatives*, Halifax, Fernwood Publishing, pp. 262-276.
- BOUGRINE, H. y SECCARECCIA, M. (2009): “Financing Development: Removing the External Constraint”, *International Journal of Political Economy*, 38(4), pp. 44-65.
- BRECHT, B. (1934): *Alfabet*, Berlín, POS Weißensee.
- BRISTOW, W. (2011): “Enlightenment”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, disponible en <https://bitly.ws/3d6Wb>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- BURNHAM, W. D. y FERGUSON, T. (2014): “Americans are Sick to Death of Both Parties:

- Why Our Politics Is in Worse Shape Than We Thought”, *AlterNet*, disponible en <https://bitly.ws/3d6WB>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- CASTORIADIS, C. (1991): *Philosophy, Politics, Autonomy: Essays in Political Philosophy*, Oxford, Oxford University Press.
- CHOMSKY, N. (2014): *Masters of Mankind: Essays and Lectures, 1969-2013*, Chicago, Haymarket Books.
- COCKSHOT, W. P. y COTTRELL, A. (2005): “Reflections on Economic Democracy”, *The Capitalist State and Its Economy; Democracy in Socialism, Research in Political Economy*, vol. 22, pp. 217-258.
- DALTON, R. J.; BÜRKLIN, W. y DRUMMOND, A. (2001): “Public Opinion and Direct Democracy”, *Journal of Democracy*, 12(4), pp. 141-153.
- DEATON, A. (2013): *The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality*, Princeton, Princeton University Press.
- EMERSON, P. (2006): *Designing an All-Inclusive Democracy*, Berlín, Springer-Verlag.
- EUROBAROMETER (1997): *47.1: Images of Switzerland*, (marzo-abril).
- EVERS, S.; SEAGLE, C. y KEIJTENBURG, F. (2013): *¿Africa for Sale?*, Leiden, Koninklijke Brill NV.
- FANON, F. (1961 [1973]): *Los condenados de la tierra*, México, FCE.
- FOTOPOULOS, T. (2005): “The Multidimensional Crisis and Inclusive Democracy”, *The International Journal of Inclusive Democracy*, número especial, agosto.
- GALBRAITH, J. K. (2006): *Unbearable Cost: Bush, Greenspan and the Economics of Empire*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- (2008): *The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too*, Nueva York, Free Press.
- (2012): *Inequality and Instability: A Study of the World Economy Just Before the Great Crisis*, Oxford, Oxford University Press.
- GEORGE, H. (1879 [2006]): *Progress and Poverty*, Nueva York, Fundación Robert Schalkenbach, disponible en <https://bitly.ws/3d6Zt>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- GILENS, M. y PAGE, B. I. (2014): “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”, *Perspectives on Politics*, 12(3), pp. 564-581.
- HANSEN, M. H. (1991 [1999]): *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes*, Norman, University of Oklahoma Press.
- HIRSCHMAN, A. O. (1991): *The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy*, Cambridge, Harvard University Press.
- HUGO, V. (1883): *L’homme qui rit*, París, J. Hetzel & Cie.
- IKE, D. N. (1984): “The System of Land Rights in Nigerian Agriculture”, *American Journal of Economics and Sociology*, 43(4), pp. 469-480.
- MANUAL DE IDEA INTERNACIONAL (2008): *Direct Democracy*, Estocolmo, IDEA Internacional.

- JEFFERSON, T. (1811 y 1812): *The Writings of Thomas Jefferson*, edición de A. E. Bergh (1905), Washington, D. C., The Thomas Jefferson Memorial Association, disponible en <https://bitly.ws/3d75x>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- KRUGMAN, P. (2014): “Wall Street’s Revenge”, *The New York Times*.
- MADDISON, A. (2006): *The World Economy: A Millennial Perspective*, París, Estudios del Centro de Desarrollo de la OCDE.
- MORGAN, L. H. (1877): *Ancient Society: Or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization*, Nueva York, Holt & Co., disponible en <https://bitly.ws/3cZDB>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- OXFAM (2015): *Wealth: Having it All and Wanting More*, disponible en <https://bitly.ws/3d76T>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- PIKETTY, T. (2014): *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge, Harvard University Press.
- POLANYI, K. (1944): *The Great Transformation: The Political and Economics Origins of Our Time*, Boston, Beacon Press.
- ROBERTS, P. C. (2014): *Conversation between Noam Chomsky, Paul Craig Roberts and Rob Kall: The future of Capitalism, Climate Change and Suicidal Russia Policy*, disponible en <https://bitly.ws/3d77E>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- RODNEY, W. (1972): *How Europe Underdeveloped Africa*, Londres, Bogle-L’Ouverture.
- ROY, A. (2014): *Capitalism: A Ghost History*, Chicago, Haymarket Books.
- SARTRE, J-P. (1973): “Prefacio” en F. Fanon, *Los condenados de la tierra*, México, Breviarios del FCE, cuarta reimpresión, p. 23.
- SAUL, J. S. y BOND, P. (2014): *South Africa -The Present as History: From Mrs. Ples to Mandela and Marikana* Rochester, Boydell & Brewer Inc.
- STIGLITZ, J. E. (2011): “Of the 1%, by the 1%, for the 1%”, *Vanity Fair*, disponible en <https://bitly.ws/3d78x>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- (2013): *The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future*, Nueva York, W. W. Norton & Company.
- (2016): *Rewriting the Rules of the American Economy: An Agenda for Growth and Shared Prosperity*, Nueva York, W. W. Norton & Company.
- TANZI, V. (2011): *Government versus Markets: The Changing Economic Role of the State*, Cambridge, Cambridge University Press.
- VRIES, P. (2015): *State, Economy and the Great Divergence: Great Britain and China, 1680-1850*, Nueva York, Bloomsbury Academic.
- WRAY, R. (2011): “Anatomy of Mortgage Fraud, Part II: The Mother of All Frauds”, disponible en <https://bitly.ws/3d79b>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- WRIGHT, D. (2004): *A Short History of Progress*, Toronto, House of Anansi Press, Inc.

CAPÍTULO 3

RIQUEZA PRIVADA... Y DEUDA PÚBLICA

“Hemos eliminado el hambre, la miseria, la necesidad de posesiones -
La adquisición de riqueza ya no es la fuerza motriz de nuestras vidas.
Trabajamos para mejorarnos a nosotros mismos y al resto de la
humanidad”.

CAPITÁN JEAN-LUC PICARD, *Star Trek* en el siglo XXIV.

1. INTRODUCCIÓN

En su conocido libro *Democracia en América*, Alexis de Tocqueville (1840: 932-4) sostiene que las revoluciones en las sociedades aristocráticas son menos probables porque la gente se acostumbra a su pobreza y no se esfuerza por conseguir el bienestar material, “porque se desesperan por conseguirlo y no lo conocen lo suficiente como para desearlo”. Sin embargo, sostiene que, en las democracias, todo el mundo quiere las comodidades de la buena vida y por eso “el deseo de obtener el bienestar se le ocurre a la imaginación de los pobres y el miedo a perderlo a la mente de los ricos”, tanto que “el amor al bienestar se ha convertido en el gusto nacional y dominante”. ¿Significa esto que debemos esperar que las revoluciones se produzcan más fácilmente en las sociedades democráticas? No. Tocqueville ofrece una explicación meditada y sutil a esta respuesta aparentemente decepcionante. En primer lugar, señala que

[...] casi todas las revoluciones que han cambiado el rostro de los pueblos se han hecho para sancionar o destruir la *desigualdad*. Si se eliminan las causas secundarias que han producido las grandes agitaciones de los hombres, casi siempre se llegará a la desigualdad. Son los pobres los que han querido robar la propiedad de los ricos, o los ricos los que han intentado encadenar a los pobres.

Por lo tanto, si se puede establecer un estado de la sociedad en el que cada hombre tenga algo que guardar y poco que tomar, se habrá hecho mucho por la paz del mundo (énfasis de HB).

Para clarificar su argumento, Tocqueville agrega que mientras las aristocracias confieren una riqueza permanente y, por tanto, un poder permanente a una elite arraigada, las sociedades democráticas ofrecen igualdad de oportunidades para que todos se enriquezcan, lo que le lleva a creer que, en las democracias, los pobres son poco numerosos. Tocqueville (1840: 1135-1150) subraya que en tales sociedades “los ricos [...] no tienen privilegios que atraigan la atención; su riqueza misma, ya no incorporada y representada por la tierra, es esquiva y como si fuera invisible” y que “[...] emergen cada día de entre la multitud y vuelven a ella constantemente. Por lo tanto, no forman una clase separada que se pueda definir y expropiar fácilmente; y como, además, los ricos están unidos por mil hilos secretos a la masa de sus conciudadanos, el pueblo apenas puede esperar golpearlos sin golpearse a sí mismo”²⁴.

La implicación del análisis de Tocqueville es que, en las sociedades democráticas, la riqueza misma se vuelve democrática ya que circula y se propaga entre individuos emprendedores y ambiciosos para crear una clase media, que forma la mayoría, haciendo así que la desigualdad sea menos problemática. Una mirada retrospectiva muestra con claridad que las afirmaciones de Tocqueville sobre la movilidad social y la desaparición de la desigualdad eran ciertamente exageradas y que, en cualquier caso, su noción de “riqueza democrática” no podía equipararse con la justicia económica y social tal como la definimos en el capítulo 2. Clark (2014, 2015) ha demostrado que “el sueño americano es una ilusión” y que “la movilidad social apenas existe”. Galbraith (2000: 69) comentó cínicamente que “las madres solteras no pasan de la asistencia social a *Forbes 400*”, mientras que Mahfouz Saber, ministro de Justicia de Egipto, despreció abiertamente a los pobres y declaró con desdén que “los hijos de los recolectores de basura no pueden crecer para convertirse en jueces” porque “un juez tiene prestigio, por lo que debe provenir de

un medio respetable; debe ser respetable económicamente, moralmente y así sucesivamente”²⁵.

En cualquier caso, la desigualdad es hoy el problema más pernicioso que deben afrontar las sociedades democráticas y es una característica destacada de todas las economías capitalistas modernas; particularmente en el país estudiado por Tocqueville, es decir, Estados Unidos. También hay que señalar que la movilidad que se desprende de la noción de “riqueza democrática” no es el resultado de la aplicación deliberada de los ideales democráticos por parte de la sociedad, sino más bien una consecuencia de la mayor libertad y derechos en una economía de mercado. Sin embargo, la evidencia empírica sobre las tendencias históricas y sobre el estado actual de la distribución de los ingresos y la riqueza en todo el mundo (Piketty, 2014; Stiglitz, 2013) indica que la desigualdad en realidad ha ido aumentando paralelamente a la implementación de políticas neoliberales promercado. La riqueza se ha concentrado tanto que solo 80 individuos poseen tanta riqueza como la mitad de toda la población de la tierra, es decir, unos 3.500 billones de personas (véase Oxfam, 2015).

Las economías de mercado, que funcionan bajo las instituciones de la democracia representativa, no han logrado, por lo tanto, acercar a nuestras sociedades a ese estado en el que “todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades de adquirir riqueza” y, lo que es más importante, de escapar de la pobreza. La pregunta ahora es si queremos seguir experimentando con la economía de mercado y la democracia parlamentaria durante dos siglos más, o si debemos buscar modos alternativos de organizar nuestro sistema económico. Phelps (2013) parece tener fe en que el capitalismo de *laissez-faire* a la americana todavía puede dar lugar a lo que llama “floreCIMIENTO de masas”, que él define como la buena vida que todo el mundo obtendrá de los beneficios del dinamismo y la innovación. Sin embargo, Skidelsky (2010: 335) hace un llamamiento a “la rehabilitación del Estado como instrumento del interés público”. Stiglitz (2013), a su vez, llega a la conclusión de que el capitalismo del *laissez-faire* “pone en peligro nuestro futuro” por haberse

transformado en una oligarquía que sirve a los intereses de los superricos mientras condena a las masas a una pobreza insoportable. El historiador Gareth Stedman Jones (2004) hizo un recorrido por la idea de “acabar con la pobreza” desde el siglo XVIII y enumeró las distintas propuestas realizadas en este sentido, desde el papel asistencial de las organizaciones benéficas hasta la reforma de las Leyes de Pobres, pasando por el actual Estado de bienestar. Pero hay una curiosa omisión en la lista, por lo demás bastante completa, de propuestas que él revisó, y es la extraña e inhumanamente viciosa proposición de Jeremy Bentham (1797), en la que queremos hacer hincapié aquí por su parecido con las propuestas actuales del régimen neoliberal.

En medio del debate entre filósofos, economistas, sociólogos y políticos sobre cómo tratar el problema social de la pobreza mediante la reforma de la sociedad y su sistema económico, Jeremy Bentham (1797) tuvo la astuta idea de encerrar a los pobres en casas de trabajo donde se verían obligados a realizar un trabajo rentable por el que recibirían alimentos, un programa al que se refirió como “mejora de la gestión de los pobres”. Los reclusos debían clasificarse según varios criterios, pero sobre todo por “manos”, es decir, según sus distintos grados de capacidad para realizar un trabajo. Las casas de trabajo o fábricas se inspiraron y modelaron en su espeluznante cárcel, a la que llamó orgullosamente el panóptico. Los trabajadores, o las manos trabajadoras, estaban sujetos a lo que él llamaba el principio de “ganar primero”, según el cual: “Cuando se tiene la certeza de que la capacidad es adecuada para la tarea y se sospecha que hay pereza, no se da de comer hasta que no se haya realizado la tarea por la que se gana. Sin esto, o algún estímulo más severo y menos intachable, los perezosos no harían nada” (Bentham, 1797: 383).

Dado que la historia es relevante para el presente, recordamos aquí la “solución” de Bentham al problema de la pobreza con el fin de poder analizar adecuadamente algunas propuestas actuales para tratar el desempleo y la pobreza, como el *workfare* (sistema de trabajo) para sustituir al *welfare* (bienestar) y otras medidas draconianas similares inspiradas en el principio *earn-first* (ganar primero).

Nuestra propuesta en este capítulo difiere diametralmente de la de Bentham. El objetivo es mejorar el bienestar de todos los miembros de la sociedad, pero reconocemos que nuestro sistema económico se construye sobre un antagonismo permanente de intereses en el que la distribución de la riqueza está necesariamente sesgada a favor de la clase económicamente dominante, como hemos demostrado en los dos capítulos anteriores. Confiar en el sistema de mercado para corregir el problema de la desigualdad y lograr una convergencia en la distribución de la riqueza debe reconocerse como lo que es: una quimera. El propósito de este capítulo es mostrar que, contrariamente a la creencia común, la prosperidad y la “riqueza democrática” en una economía capitalista dependen de manera crucial de una mayor intervención del Gobierno. Un corolario de esta afirmación es que al sector privado —y a la sociedad en su conjunto— le interesa desarrollar un sector público fuerte, capaz de proporcionar no solo la ley y el orden, sino también, y sobre todo, los servicios sociales y los bienes públicos esenciales para el crecimiento, la prosperidad y la igualdad. De esta manera, se espera que “podamos establecer un estado de la sociedad en el que cada hombre tenga algo que guardar y poco que tomar” para que contribuyamos a hacer “mucho por la paz del mundo”.

2. DE ACTIVOS Y PASIVOS

El principal deseo de cada individuo es disfrutar de una vida cómoda asegurando el acceso a bienes materiales como una casa, un coche, etc., además de una cuenta bancaria con dinero para garantizar el poder adquisitivo. Idealmente, la gente quiere tener sus propios bienes materiales y financieros. Cuando dichos bienes pertenecen a los individuos, decimos que tienen sus propios activos. El tema de la riqueza y la prosperidad gira esencialmente en torno a asegurar que todos tengan sus propios activos y que estos se amplíen con el tiempo para satisfacer la creciente demanda y los requisitos para disfrutar de la vida.

La adquisición de activos o, como lo llamaremos, “la acumulación de

riqueza” en una sociedad capitalista está limitada por la cantidad de ingresos que uno es capaz de obtener. En general, estos ingresos pueden agruparse en dos grandes categorías: la compensación directa por el trabajo (sueldos y salarios) y la compensación por la propiedad (beneficios, cobro de intereses, alquiler de propiedades y ganancias de capital) —siendo los ingresos del empleo la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de la población en cualquier país—. La consecuencia inmediata de esto es que los pobres y los desempleados nunca podrán estar en condiciones de adquirir activos. En cambio, puede que tengan que pedir prestado, digamos de un banco, para pagar su vivienda y otros gastos, en cuyo caso están incurriendo en un pasivo. La realidad actual es que incluso los que trabajan recurren a los préstamos para poder acumular activos y mejorar su riqueza, lo que explica el aumento del endeudamiento de los hogares en la mayoría de los países industrializados (véase Seccareccia, 2005). Basándose en los trabajos seminales de Hyman Minsky y Wynne Godley, Keen (2015) argumentó que la última crisis que comenzó en 2007-8, o la Gran Depresión, como otros la llaman, fue una consecuencia directa de la dinámica de dicha deuda privada.

Los activos y pasivos financieros son dos caras de la misma moneda. El dinero disponible en la cuenta bancaria de un individuo es un activo para él, pero un pasivo para el banco. Del mismo modo, un préstamo bancario es obviamente un pasivo para la persona que pidió el dinero prestado, pero un activo para la entidad financiera.

Podemos aprender más sobre las relaciones que vinculan a los diferentes sectores de la economía si nos centramos ahora en el *stock* de activos y pasivos de cada sector. Centrémonos en el caso de una economía cerrada y dividámosla en un sector privado y otro público. El sector privado estaría compuesto por hogares, empresas y bancos, mientras que el sector público está generalmente representado por el Gobierno, con el banco central a menudo en un segundo plano.

Una forma fácil de llevar un registro de los activos y pasivos es utilizando la contabilidad de doble entrada. Este trabajo es rutinario para

los contables de las empresas y bastante familiar para la mayoría de los hogares. Sin embargo, los detalles pueden complicarse bastante a medida que alcanzamos el nivel macroeconómico. Godley y Lavoie (2007) han propuesto una técnica ordenada basada en el uso de lo que ellos llaman una “matriz de balances sectoriales”.

Este método utiliza la contabilidad coherente de los *stocks* y los flujos, en la que, según Godley y Lavoie (2007: 38), “todo viene de alguna parte y todo va a alguna parte”. La contabilidad coherente de flujos y existencias es, en efecto, una forma clara de captar las transacciones y sus contrapartidas en todo el sistema macroeconómico. Aquí, debido a que los activos se suman al patrimonio o al patrimonio neto de sus titulares, se registran con signo (+), mientras que los pasivos se registran con signo (-); (véase la tabla 3.1).

TABLA 3.1

BALANCE DEL SECTOR PRIVADO VS. BALANCE DEL SECTOR PÚBLICO

	HOGARES	EMPRESAS DE PRODUCCIÓN	BANCOS	GOBIERNO	BANCO CENTRAL	
Capital tangible	$+K_h$	$+K_f$				$+K$
Bonos	$+B_h$	$+B_f$	$+B_b$	$-B$	$+B_{cb}$	0
Efectivo	$+H_h$	$+H_f$	$+H_b$		$-H$	0
Depósitos	$+M_h$	$+M_f$	$-M$			0
Préstamos	$+L_h$	$+L_f$	$+L$			0
Acciones	$+E_h$		$+E_b$			0
Patrimonio neto	$-NW_h$	$-NW_f$	$-NW_b$	$-NW_g$	0	$-K$
	0	0	0	0	0	0

Digamos que usted compra un valor del Gobierno, como una letra del Tesoro (denotado por B). Esto sería un activo para usted ($+B_h$) y un pasivo para su emisor, es decir, el Gobierno ($-B$). Del mismo modo, cuando solicita un préstamo (L) al banco; si el préstamo es aprobado, el banco registra la cantidad como un activo propio ($+L$) y en el registro de los

hogares aparece como un pasivo ($-L_h$); por lo tanto, usted está endeudado con el banco. Pero, para poder utilizar ese préstamo, es necesario que el dinero esté disponible para usted. Por lo tanto, el banco abre una cuenta en la que deposita el monto del préstamo inscribiendo en ella un crédito para usted. Nótese, por cierto, que esta es la práctica actual por la que los bancos privados crean dinero, tal y como lo demuestran los teóricos poskeynesianos del dinero endógeno²⁶. Los depósitos bancarios en poder de los hogares ($+M_h$) y de las empresas ($+M_f$) son activos para ellos, pero aparecen como un pasivo en el balance del banco ($-M$).

Lo que es importante tener en cuenta en este punto es que si sumamos su pasivo (lo que usted debe al banco) y el activo del banco (el crédito que el banco tiene sobre usted), la suma es necesariamente igual a cero. Y esto es así para todos los pasivos de los hogares con los bancos y los activos correspondientes de los bancos. Lo mismo ocurre con los pasivos que vinculan a las empresas ($-L_f$) con los bancos ($+L$). De hecho, es válido para todos los demás sectores de la economía, de modo que, por ejemplo, si añadimos todo el efectivo (denotado por H) mantenido como activo por los hogares ($+H_h$), por las empresas ($+H_f$) y por los bancos ($+H_b$) al pasivo total del banco central ($-H$), la suma horizontal de la fila “efectivo” es necesariamente cero. Del mismo modo, si se suman todas las letras del Tesoro (B) mantenidos como activos por los hogares ($+B_h$), las empresas (B_f), los bancos (B_b) y el banco central (B_{cb}) a los pasivos emitidos por el Gobierno ($-B$), la suma es, de nuevo, necesariamente cero. Los activos y pasivos monetarios (o financieros) se cancelan necesariamente entre sí, como se muestra más adelante al añadir los activos y pasivos relativos a las filas “préstamos” (L) y “acciones” (E).

Obviamente, esta regla no se aplica a los bienes materiales reales, como las casas ($+K_h$), ya que estos solo pertenecen a sus propietarios o a la maquinaria y el equipo ($+K_f$) que son propiedad exclusiva de las empresas, lo que nos da la suma positiva de ($+K$) en la fila “capital material”. Las celdas vacías de la tabla 3.1 indican que ignoramos algunos activos (y sus pasivos) ya sea porque son insignificantes o

irrelevantes para el análisis. Por ejemplo, para el “capital tangible” podríamos añadir los activos inmobiliarios en manos de los bancos y toda la infraestructura pública como hospitales, escuelas, etc. que se pueda atribuir al Gobierno, pero estas complicaciones no cambian las conclusiones de manera fundamental.

Un principio general bien conocido en la contabilidad es que un balance debe estar equilibrado, lo que significa que la suma de todas las partidas del lado izquierdo del balance debe ser igual a la suma de las partidas del lado derecho. Anteriormente mencionamos que los activos se registran con signo (+), mientras que los pasivos se registran con signo (-). La diferencia entre el valor total de los activos y el valor total de los pasivos se denomina *patrimonio neto*. Cuando el valor de los activos supera el valor de los pasivos, el patrimonio neto es positivo, pero como hay que añadirlo al lado del pasivo para asegurar que se mantenga la igualdad o el equilibrio, se introduce con el signo (-). Por consiguiente, la suma de todos los elementos de cada columna de la tabla 3.1 es necesariamente cero. Obviamente, cuando los pasivos superan a los activos, el patrimonio neto es negativo y se dice que el agente o sector está endeudado. Tal es el caso del Gobierno, por ejemplo, que normalmente tiene una deuda pendiente, conocida como *deuda pública*.

En la tabla 3.1 la deuda pública o el patrimonio neto del Gobierno es una cantidad negativa, pero precedida por un signo menos ($-NW_g$) se convierte en una entrada positiva, asegurando así el equilibrio del balance. Por lo tanto, como subrayan Godley y Lavoie (2007: 27), “estas convenciones asegurarán que todas las filas y todas las columnas de la matriz del balance sumen cero, proporcionando así consistencia y coherencia en nuestra contabilidad de las existencias”.

El punto más interesante de toda esta discusión radica en la información proporcionada por la última fila denominada valor neto en la tabla 3.1. El patrimonio neto total de toda la economía, que se obtiene sumando los patrimonios netos de todos los sectores, se indica en la última columna como el importe del capital tangible existente (K). Si dejamos de lado, por el momento, el capital tangible y nos centramos solo

en los activos financieros, es evidente que la suma del patrimonio neto de todos los sectores es cero²⁷. Esto se debe a que, como se ha explicado anteriormente, los activos financieros tienen un lado pasivo. Su dinero en efectivo, depósitos de dinero, bonos y acciones, valores del Gobierno, etc. son todos pasivos para sus emisores. Por lo tanto, la suma del patrimonio financiero neto del sector privado: hogares, empresas, bancos ($NW_h + NW_f + NW_b$) y el del sector gubernamental (NW_g) es:

$$(NW_h + NW_f + NW_b) + NW_g = 0$$

O

Saldo del sector privado + Saldo del sector Gobierno = 0 (Ecuación 3.1)

$$(NW_h + NW_f + NW_b = - NW_g)$$

Se trata simplemente de afirmar que el patrimonio financiero neto del sector privado (o la riqueza financiera privada) es igual a la deuda pública, conclusión que es crucial para comprender los efectos de la política gubernamental. La relevancia de este resultado para nuestro estudio es que deja clara la relación entre la riqueza financiera privada y la deuda pública, y nos obliga a reconocer que un aumento de la deuda pública conduce lógicamente a un aumento de la riqueza financiera privada. Desde el punto de vista de las políticas, esto es muy importante porque le da al Gobierno un instrumento poderoso en su búsqueda de la creación y expansión de la riqueza y, en última instancia, en la lucha contra la pobreza.

A este respecto, todos los pagos realizados por el sector público fluyen necesariamente como ingresos y esto es lo que representan para el sector privado. La compra de bienes y servicios al sector privado por parte del Gobierno es una fuente de ingresos para las empresas y los hogares, y es una *inyección* de dinero en el sector privado. De manera similar, cuando el Gobierno recauda impuestos, los agentes privados pierden parte de sus ingresos y se empobrecen un poco, ya que el dinero *se retira* del sector privado. Idealmente, los agentes privados desearían que el Gobierno no les quitara todo lo que acaba de pagarles. Pero para que eso suceda, el

Gobierno debe pagarles más de lo que recauda en impuestos, es decir, debe aceptar estar en una posición de *déficit*. Obviamente, el sector privado será mucho más pobre si se ve forzado a una situación en la cual el Gobierno decide tener un *superávit* retirando más dinero del que había inyectado en la economía durante un periodo dado.

Una pregunta obvia que se desprende de la discusión sobre el gasto gubernamental es: ¿de dónde obtiene el Gobierno el dinero que gasta? Un momento de reflexión nos lleva a excluir la posibilidad de los impuestos como fuente de ingresos para el Gobierno, ya que los agentes privados deben recibir primero el dinero antes de estar en condiciones de devolverlo al Gobierno en forma de impuestos, es decir, el Gobierno debe primero gastar y luego recaudar los impuestos. La misma observación se aplica también a los préstamos del Gobierno al sector privado (a través de la venta de bonos): el gasto público debe preceder a cualquier retirada de liquidez del sector privado. Esto nos deja con una sola fuente de financiación y es a través de la creación de dinero por parte de los bancos y principalmente de los bancos centrales. Esta es la práctica para financiar el gasto público y ha sido reconocida desde hace mucho tiempo por los poskeynesianos, pero también por los banqueros centrales. Como ya se ha dicho, dado que el proceso de creación de dinero ha sido durante mucho tiempo controvertido y ha estado deliberadamente envuelto en el misterio, vale la pena leer cuidadosamente lo que dicen estos banqueros centrales.

Cuando los bancos conceden préstamos a sus clientes, crean dinero acreditando las cuentas de sus clientes [...] La forma en que el Banco de Inglaterra expande la oferta de dinero es comprando bonos del Gobierno al sector privado no bancario y acreditando las cuentas bancarias de las personas a las que se compran los bonos. Por favor, tenga en cuenta que no estamos regalando dinero.

MERVYN KING, gobernador del Banco de Inglaterra (2003-2013)²⁸

“¿Es el dinero de los impuestos lo que la Reserva Federal está gastando?”
Presidente Bernanke: “No es dinero de los impuestos. Los bancos tienen cuentas en la Reserva Federal, de la misma manera que usted tiene una cuenta en un banco comercial. Por lo tanto, para prestar a un banco, simplemente utilizamos el

ordenador para marcar el tamaño de la cuenta que tienen con la Reserva Federal”.

BEN S. BERNANKE, presidente de la Reserva Federal (2006-14)²⁹

Pregunta: Pero ¿no hay duda de que los bancos crean ese medio de intercambio?

Sr. Towers: Así es. Para eso están. *Pregunta:* ¿Y emiten esa forma de intercambio cuando compran valores o hacen préstamos? Sr. Towers: Ese es el negocio de la banca, de la misma manera que una planta siderúrgica hace acero. Cada vez que un banco hace un préstamo (o compra valores) se crea un nuevo crédito bancario —nuevos depósitos— dinero nuevo. En términos generales, todo el dinero nuevo sale de un banco en forma de préstamos. *Pregunta:* Cuando se presentan al banco bonos por valor de 1.000.000 de dólares (por parte del Gobierno), ¿se crea un millón de dólares de dinero nuevo o su equivalente? Sr. Towers: Sí. *Pregunta:* ¿Es un hecho que se crea un millón de dólares de dinero nuevo? Sr. Towers: Así es.

GRAHAM TOWERS, gobernador del Banco de Canadá (1934-1954)³⁰

Pregunta: ¿Cómo consiguió usted el dinero para comprar esos 2.000.000.000 de dólares de valores del Gobierno [y adelantar ese dinero al Gobierno]? Sr. Eccles: Nosotros lo creamos. *Pregunta:* ¿De qué? Sr. Eccles: Por el derecho a emitir crédito, dinero. *Pregunta:* Y no hay nada detrás de esto, ¿verdad?, excepto el crédito del Gobierno. Sr. Eccles: Tenemos los bonos del Gobierno. *Pregunta:* Así es, el crédito del Gobierno. Sr. Eccles: Eso es lo que es su sistema monetario.

MARRINER S. ECCLES, presidente de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos (1934-1948)³¹

Ahora, como dijo Samuelson (1966: 583), “si todo esto causa dolores de cabeza a los nostálgicos de las viejas parábolas de la escritura neoclásica, debemos recordar que los eruditos no nacen para vivir una existencia fácil. Debemos respetar y valorar los hechos de la vida”.

Tradicionalmente, los Gobiernos dependían de sus propios bancos, es decir, de los bancos centrales, para la creación de ese dinero siempre que necesitaban financiación. La práctica y los procedimientos tienden a variar de un país a otro, pero siempre se reduce a lo mismo: el Gobierno obtiene un préstamo o una línea de crédito de su banco central. Como se ha explicado anteriormente, el préstamo al Gobierno se registra como un activo en el balance del banco central y como un pasivo en el propio balance del Gobierno. Y por este proceso el banco central adelanta dinero al Gobierno simplemente poniendo un crédito en su cuenta, es decir,

inscribiendo un signo (+) en la cuenta del Gobierno. Habiendo asegurado ahora una cantidad positiva de dinero en su cuenta (un crédito que le ha otorgado el banco central), el Gobierno puede empezar a hacer pagos a sus empleados y a otros proveedores de bienes y servicios transfiriéndoles algunos de esos créditos. Todos estos gastos provocan un flujo de liquidez (dinero) del sector público al sector privado, que se suma a las tenencias de liquidez (o activos monetarios) de este último. En efecto, a medida que los agentes privados reciben sus pagos, estos se depositan en sus cuentas bancarias (ya sea a través de depósitos directos o mediante cheques) y representan un aumento de sus depósitos que, como se explicó anteriormente, son activos para sus depositantes y pasivos para los bancos (Wray, 2015; Mosler, 2010).

Obsérvese que de esta manera el Gobierno nacional soberano puede pagar cualquier gasto —ya sea relacionado con la construcción de un nuevo hospital, una escuela o una autopista, o con la contratación de maestros, enfermeras, ingenieros o barrenderos— simplemente con un crédito en sus cuentas bancarias (en los bancos comerciales) y un débito en su propia cuenta en el banco central. Este análisis invalida la afirmación ampliamente popular de que el Gobierno a menudo cuenta con escasos fondos y se enfrenta a una limitación presupuestaria vinculante.

De hecho, el proceso puede implicar varios pasos sucesivos, que pueden resumirse de la siguiente manera: los cheques o depósitos electrónicos que aumentaron los depósitos de los agentes privados son mantenidos por los bancos como activos frente al Gobierno y, por lo tanto, se registran como un aumento igual de sus activos. De esta manera, los activos de los bancos frente al Gobierno se denominan reservas. Los bancos pueden reclamar estas reservas presentando los cheques o depósitos electrónicos al banco central, que mantiene cuentas tanto para el Gobierno como para los bancos comerciales. El banco central, en cuanto brazo bancario del Gobierno, ejecuta la operación simplemente *colocando* un (+) en las cuentas de los bancos comerciales (es decir, añadiendo a sus reservas)³² y *asentando* un (-) de igual cantidad en la cuenta del Gobierno. El gasto del Gobierno resulta en una inyección neta

de liquidez (dinero) en el sector privado; el Gobierno tiene ahora un *déficit*, pero el sector privado tiene un *superávit*. Concluimos que el gasto público aumenta los ingresos del sector privado y, por lo tanto, que los déficits acumulados —la deuda pública— se suman a la riqueza financiera del sector privado, como muestra la ecuación 3. 1.

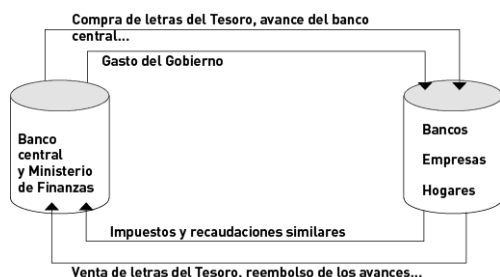
Sin embargo, a partir del auge del monetarismo y las ideas asociadas de “responsabilidad fiscal” y “finanzas sanas”, las políticas neoliberales han logrado imponer severas restricciones a la forma en que los bancos centrales pueden participar en la financiación de los gastos de los Gobiernos y, en algunos casos, hacer que sea ilegal que los bancos centrales adelanten fondos a sus propios Gobiernos —por lo tanto, obstaculizando gravemente el papel de la política pública en la lucha contra la pobreza y otros problemas económicos y sociales. Los Gobiernos, como los de la Unión Monetaria Europea, se ven ahora obligados a depender de los impuestos y los préstamos de los prestamistas privados, es decir, de los bancos comerciales. Una solución a este obstáculo es la propiedad pública de todos los bancos, incluidos los bancos comerciales, que actuarían entonces como bancos estatales de desarrollo, como argumentamos en el siguiente apartado.

Cuando el Gobierno permanece endeudado con el banco central (siendo este de propiedad pública y, por lo tanto, brazo bancario de aquel), la emisión de la deuda del Gobierno con su propio banco se convierte en gran medida en una cuestión técnica, a la que volveremos con más detalles en el próximo apartado. Sin embargo, ya podemos señalar en esta etapa que cualquier impuesto recaudado por el Gobierno es depositado en su propia cuenta en el banco central como crédito y, por lo tanto, serviría para disminuir el monto de la deuda (préstamo). Si el Gobierno está ansioso por pagar su deuda al banco central, puede retirar más dinero del sector privado de varias maneras y utilizar los ingresos de la misma manera que los impuestos. Todas estas retiradas conducen a una disminución de la liquidez en el sector privado y, desde una perspectiva contable, se registran exactamente de la manera opuesta a la de los gastos del Gobierno. Las interacciones descritas anteriormente pueden

resumirse convenientemente en el diagrama siguiente (véase la figura 3.1), desarrollado por la teoría de circuitos monetarios para captar los flujos de fondos entre los diversos agentes de la economía nacional (véase Parguez, 2002; Bougrine y Seccareccia, 2002).

FIGURA 3.1

FLUJO DE FONDOS ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO



Vale la pena hacer una observación más a este respecto. Las inyecciones sostenidas, por ejemplo, a través del gasto público, necesariamente resultan en un aumento de las reservas de los bancos comerciales y, por lo tanto, en el monto de la liquidez del sistema bancario. El aumento de la liquidez puede tener dos consecuencias: 1) provocar la caída de los tipos de interés, ya que los préstamos interbancarios se abaratan; y 2) provocar la inflación. Este último efecto, que es el único subrayado por los economistas neoclásicos, es de hecho altamente improbable mientras la economía esté por debajo del pleno empleo y, de todas formas, como Lerner (1943) demostró, esto se resuelve fácilmente a través de los impuestos. El primer efecto es más bien de corta duración y tiende a manifestarse casi inmediatamente. El tipo de interés de los préstamos interbancarios también es sensible a la disminución de la liquidez y tiende a subir cuando las reservas de los bancos caen. Es por esta razón que los bancos centrales hoy en día confían mucho en la técnica de aumentar o disminuir las reservas para manipular la tasa interbancaria y acercarla al objetivo elegido por el banco central. El gasto público y los impuestos —inyecciones y retiros de liquidez— son importantes herramientas de política que ayudan al

Gobierno y a su banco central a alcanzar la tasa objetivo de interés deseada y el “equilibrio” entre ambos se hace con este propósito en mente —no por las preocupaciones de evitar un déficit o intentar lograr un superávit en el presupuesto público, como los economistas neoclásicos quieren hacernos creer.

3. POLÍTICA PÚBLICA Y CREACIÓN DE RIQUEZA

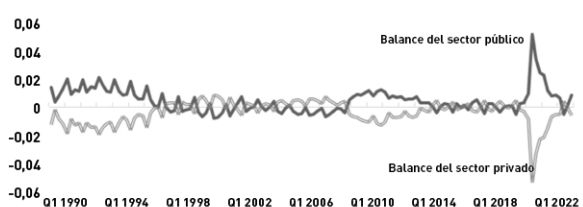
A estas alturas, nuestro debate debe haber dejado claro que el valor neto de un sector, como las empresas o los hogares, puede verse muy afectado por lo que ocurre en el sector gubernamental, es decir, por el tipo de políticas económicas aplicadas por el Gobierno, en particular en lo que respecta al gasto y a los impuestos, o lo que llamamos política fiscal. Es importante señalar aquí que el resultado de nuestra contabilidad en la ecuación 3. 1 no es una hipótesis o una teoría, sino más bien una identidad que es empíricamente verdadera y está fuertemente apoyada por la evidencia de las experiencias reales de varios países (véase, entre otros, Bougrine, 2010 para Canadá; Wray, 2011 para Estados Unidos). Sin embargo, ese resultado se centró en el caso de la economía cerrada e ignoró las transacciones con el resto del mundo. En términos de datos y evidencia empírica, esto significó que la suma de los balances nacionales respectivos de los sectores privado y gubernamental no siempre sumaba cero porque algunos fondos habrían entrado o salido de la economía nacional. Por lo tanto, un mapeo más realista del flujo de fondos entre los diferentes sectores de la economía debe incluir, sin duda, los préstamos al sector extranjero y los préstamos de este a la economía nacional. Entonces, la ecuación contable para una economía abierta es:

$$\begin{aligned} &\text{Saldo privado nacional} + \text{Saldo público nacional} \\ &+ \text{Saldo del sector exterior} = 0 \text{ (Ecuación 3. 2)} \end{aligned}$$

La idea de que la deuda pública es una fuente de riqueza privada debe resultar exasperante para los economistas de la corriente dominante/neoclásica, a quienes les gusta insistir en el mito de que es

una carga para nuestras generaciones futuras, pero se trata de un principio contable realmente demostrado por los hechos y respaldado por pruebas empíricas, utilizando datos de las cuentas nacionales. Tomando como ejemplo la economía canadiense, la figura 3.2 muestra la capacidad o necesidad neta de financiación de los principales sectores de la economía. Para aclarar el impacto de un déficit presupuestario en el sector privado, la economía canadiense se divide en dos grandes sectores: (1) el sector público y (2) el sector privado. En los datos utilizados aquí, el sector público incluye todos los niveles de gobierno de Canadá, mientras que el sector privado incluye los hogares, las empresas, así como el saldo de las transacciones de Canadá con el resto del mundo, resumido en la posición neta de préstamos o empréstitos. El conjunto de datos, facilitado por Statistics Canada, abarca un periodo de más de 30 años, de 1990 a 2022, y ofrece el saldo neto de cada sector trimestralmente. Todos los valores se expresan en porcentaje del PIB para los periodos correspondientes. Como puede observarse, siempre que el sector público es deficitario, el sector privado en su conjunto es excedentario, y viceversa. Por lo tanto, el déficit presupuestario público refleja realmente —casi como un espejo— la acumulación neta de ahorro del sector privado.

FIGURA 3.2
BALANCES SECTORIALES EN CANADÁ (1990-2022)



Fuente: Statistics Canada, tabla 36-10-0578-01 sobre cuentas de flujo financiero y tabla 36-10-0104-01 sobre el producto interior bruto.

Por ejemplo, un superávit en el presupuesto público se logra reduciendo el gasto público o aumentando los impuestos, pero esto se traduce directamente en una reducción de los ingresos recibidos por

aquellos que suministran bienes y servicios al Gobierno (empresas y hogares), lo que obliga al sector privado, a veces incluyendo al sector externo, a ser deficitario. Esto es, en efecto, lo que ocurrió en Canadá desde finales de la década de los noventa hasta el comienzo de la crisis mundial de 2007-08, como se muestra en la figura 3.2. El lento desempeño de la economía, e incluso el crecimiento negativo durante este periodo, han obligado a muchos Gobiernos de todo el mundo a ser más pragmáticos con respecto al gasto deficitario. De hecho, solo después de que estos Gobiernos invirtieran sus políticas de austeridad, las economías nacionales comenzaron a salir lentamente de la recesión, y el balance del sector privado se fue haciendo lentamente positivo a partir de 2008, como puede verse en la figura 3.2. En resumen, la relación entre el déficit público y el ahorro privado, y por extensión entre la deuda pública y la riqueza privada, puede verse claramente durante la pandemia de COVID-19 (2019-2022), cuando el Gobierno canadiense aumentó sustancialmente su gasto deficitario para apoyar tanto a los hogares como a las empresas privadas (véase Lin and Hoffarth, 2023).

La importancia del déficit público y su impacto en el desempeño del sector privado puede aclararse aún más volviendo nuevamente a la contabilidad del ingreso nacional. La identidad del ingreso nacional básico establece que el ingreso disponible (Y) es igual a la suma del gasto total de los hogares (C), las empresas (I), el Gobierno ($G-T$) y el sector externo, que puede ser aproximado por ($X-M$):

$$Y = C + I + (G-T) + (X-M) \text{ (Ecuación 3.3)}$$

Que puede ser reescrito como sigue:

$$Y - C - I = (S-I) = (G-T) + (X-M) \text{ (Ecuación 3.3')}$$

Donde S representa el ahorro total del sector privado, I la inversión, G el gasto del Gobierno, T los impuestos, X las exportaciones y M las

importaciones. La ecuación 3.3' reafirma la idea, ya conocida, de que el ahorro neto privado es equivalente al déficit público más la balanza de pagos. También implica que, para una posición dada de la balanza de pagos, cualquier intento de equilibrar el presupuesto público o lograr un superávit resultará necesariamente en una reducción de los ahorros del sector privado y, por lo tanto, de su riqueza. Además, dado que un superávit público significa, por definición, que el Gobierno está retirando más recursos de la economía privada de los que está inyectando en ella, ($G-T < 0$), el superávit del Gobierno necesariamente reduce la demanda agregada, lo que se traduce en menores ventas y menores beneficios para las empresas privadas y, en última instancia, conduce a prolongadas recesiones y crisis económicas (véase Mosler, 2010; Bougrine, 2004).

Para subrayar la relación directa entre las ganancias de las empresas y los déficits públicos, podemos descomponer el ahorro total del sector privado (S) en ahorros de los hogares (S_h) y ahorros de las empresas o, más precisamente, sus ganancias (P), y reordenar la ecuación 3.3' para obtener la conocida ecuación de las ganancias de Kalecki:

$$P = (I - S_h) + (G - T) + (X - M) \text{ (Ecuación 3.4)}$$

La ecuación 3.4 indica claramente que los beneficios de las empresas se ven afectados positivamente por la inversión, el gasto público y las exportaciones (véase Bougrine, 2000; Halevi y Kriesler, 2000; Lavoie, 2000). También es evidente que los ahorros, los impuestos y las importaciones de los hogares disminuyen los beneficios de las empresas porque actúan como fugas, ya que retiran fondos del flujo de gasto de los ingresos nacionales. En otras palabras, los beneficios de las empresas a largo plazo pueden ser sostenidos por una combinación de tres factores:

- ahorros bajos o negativos de los hogares (endeudamiento),
- un déficit presupuestario público o,
- una mejora en la balanza de pagos.

Dado que los déficits presupuestarios son claramente una fuente de

beneficios para las empresas, nos parece irónico que los expertos del libre mercado aboguen por una política basada en presupuestos equilibrados o superávit. Dada la centralidad del beneficio en una economía de mercado y la importancia conexas de las empresas en el sector de la producción real, creemos que es imperativo explorar más a fondo el papel y las limitaciones de cada uno de los tres factores mencionados anteriormente, así como la relación entre ellos.

En cuanto al tercer factor, como observó Bougrine (2004: 35), mejorar la balanza de pagos es una posibilidad, pero tiene sus limitaciones:

- Se puede lograr si un país utiliza los instrumentos comerciales tradicionales (aranceles, cuotas, etc.), pero estas medidas ya no están permitidas por las normas de la OMC.
- En un mundo globalizado, es efectivamente difícil ejercer, con algún grado de eficacia, el control sobre los flujos de capital. La situación es particularmente problemática para los países en desarrollo pobres, ya sea porque carecen de las instituciones que les permitirían hacerlo o porque son vulnerables a las amenazas de los prestamistas internacionales.
- Un país no puede mejorar su balanza de pagos sin afectar negativamente a sus socios comerciales. Por lo tanto, si la posibilidad de mejorar la balanza de pagos es factible para un país, no puede ser factible para todos.

De manera similar, en cuanto al segundo factor, Godley (2000: 4) argumentó que el efecto negativo de un superávit presupuestario puede ser compensado por un aumento del endeudamiento privado, pero: “Un aumento de la deuda privada en relación con los ingresos puede durar mucho tiempo, pero no puede durar para siempre porque la limitación decisiva del endeudamiento puede provenir no de la medida en que se hipoteque el patrimonio neto, sino de la medida en que los pagos de los intereses y los reembolsos del principal [...] puedan ser satisfechos con los ingresos convencionales”.

Esta limitación será, en efecto, vinculante, ya que los ingresos de los hogares se verán continuamente mermados por los superávits presupuestarios a largo plazo. Además, una vez que los hogares deciden dejar de endeudarse y comenzar a ahorrar o a reducir su deuda, la demanda agregada y, por consiguiente, la producción, deben caer, lo que conduce a una recesión, a menos que el Gobierno invierta la política de superávit y comience a aumentar su gasto neto. Por lo tanto, una política de superávit presupuestario a largo plazo no es viable porque obligaría a los hogares a endeudarse de manera insostenible. Esta es, en efecto, la situación actual de los hogares en muchos países de la OCDE, en particular en Canadá y Estados Unidos (véase Seccareccia, 2005), donde el endeudamiento de los hogares (y la inflación de los precios de los activos) se han convertido en el nuevo motor del crecimiento de la demanda, un modelo al que Seccareccia (2005) se refiere como un estado de “afluencia” y Palley (2013) como “el paradigma agotado de América”.

Por lo tanto, el único instrumento de política sostenible que queda para mejorar la riqueza del sector privado es el déficit público, es decir, a través del primer factor. Esto nos lleva a examinar más de cerca el controvertido tema de la eficacia de los déficits públicos en la creación de riqueza y en la resolución de los problemas de la pobreza, lo que puede hacerse evaluando los efectos diferenciales de los diversos tipos de gasto público. Como se ha sugerido anteriormente, la aplicación de una política fiscal socialmente responsable requeriría que el gasto público beneficie directamente a los pobres y a los desempleados y, al mismo tiempo, se dirija a los sectores productivos clave de la economía y no al rescate de las instituciones financieras. Además de la inversión en infraestructura pública, que es crucial para el despegue de la economía, para el crecimiento y el desarrollo de las empresas privadas, el Estado también debería centrarse en “[...] inversiones en tecnología y capital humano que fomenten el crecimiento” (Mazzucato, 2014: 34). Estas inversiones son las que realmente marcan la diferencia hoy en día entre los países más industrializados y aquellos a los que, eufemísticamente, se les llama economías “en desarrollo” o “emergentes”.

La financiación de I+D (Investigación y Desarrollo) es especialmente importante para la innovación y el progreso. Mazzucato (2014) ha demostrado que el Estado está realmente detrás de los inventos centrales de la tecnología moderna y sus aplicaciones, incluyendo internet, la biotecnología farmacéutica, la nanotecnología y más recientemente la tecnología verde. La inversión en innovación es costosa y arriesgada, y por esta razón los inversores privados no se atreven a aventurarse más allá de los caminos trillados. Como explica Mazzucato (2014: 23): “[...] Es ingenuo esperar que el capital de riesgo lidere la etapa inicial y más arriesgada de cualquier nuevo sector económico hoy en día (como la tecnología limpia). En la biotecnología, la nanotecnología e internet, el capital de riesgo llegó 15-20 años *después* de que las inversiones más importantes fueran hechas por fondos del sector público”.

Por ello, el Estado debe tomar la iniciativa y actuar como un “Estado proactivo y *emprendedor*, capaz de asumir riesgos y de crear un sistema de actores muy interconectados que aprovechen lo mejor del sector privado para el bien nacional en un horizonte temporal de medio a largo plazo. Es el Estado que actúa como principal inversor y catalizador lo que hace que la red actúe y difunda el conocimiento” (Mazzucato, 2014: 21, énfasis en el original).

Hay otra razón por la que el gasto del déficit público debe ser canalizado hacia la innovación: los nuevos inventos son, obviamente, una gran fuente de creación de riqueza y de la que tendemos a cosechar beneficios durante bastante tiempo. Las innovaciones afectan a varias empresas y sectores de la economía y tienen el potencial de extender los beneficios a más personas en la sociedad, contribuyendo así a la creación de una riqueza más democrática. Sin embargo, como ha argumentado Mazzucato (2014: 182), si bajo el modelo económico actual los costos de la innovación son en gran medida colectivos y socializados, las recompensas y los beneficios tienden a acumularse para los propietarios privados de las empresas que tienen el poder de presionar e influir en las decisiones gubernamentales. Esta distribución sesgada de las ganancias de la innovación ha sido ampliamente criticada como un “sistema

disfuncional de riesgos socializados y recompensas privatizadas” (véase Salvemini, 1936; Chomsky, 1999; Feige, 2008)³³.

La cuestión de la mala distribución de los beneficios de la innovación es obviamente solo un aspecto del problema más amplio de la distribución desigual de la riqueza y los ingresos, que encuentra su causa fundamental en la propiedad privada de los recursos productivos. Para mitigar los efectos negativos de una distribución tan distorsionada de los riesgos y las recompensas de la innovación, y para hacer que el crecimiento “no solo sea inteligente, sino también inclusivo”, Mazzucato (2014: 185-191) propuso lo siguiente:

- El Gobierno debería obtener un retorno directo de sus inversiones de riesgo a través de las regalías. Estos rendimientos se destinarían a un “fondo de innovación” nacional y servirían para financiar futuras innovaciones o cubrir las pérdidas que se produzcan en áreas de alto riesgo.
- El Gobierno debe obtener ingresos mediante la retención de participaciones en las empresas que financia y mediante la concesión de préstamos y subvenciones a las empresas supeditadas a la recepción de una parte de los beneficios obtenidos.
- El Gobierno debería obtener ingresos directamente financiando la inversión en innovación y nuevos proyectos tecnológicos a través de bancos de inversión de propiedad estatal.

El Gobierno debería ciertamente cobrar impuestos y obviamente debe recuperar el dinero adelantado para subvencionar proyectos exitosos a través de los medios mencionados anteriormente, pero hay que subrayar que la capacidad del Gobierno de continuar su búsqueda de nuevas ideas y de sostener sus inversiones en proyectos innovadores arriesgados *no depende* de estos fondos —como se desprende de la suposición de Mazzucato—. Si bien estoy de acuerdo con el principio general de justicia que motiva los argumentos de Mazzucato, me inclino a agregar

que su propuesta no aborda el tema más grande y espinoso de la desigualdad del ingreso y la riqueza que se discutió anteriormente, ya que la propuesta se limita a la forma en que el Estado trataría a las empresas involucradas en el negocio de la innovación. La parte de los trabajadores en los frutos del crecimiento se limita a la creación de empleo mientras que el capital sigue cosechando altos beneficios. Pero, como ella misma dice (Mazzucato, 2014: 190), este es el capitalismo “puro y simple”. Y así, al final, los riesgos permanecen socializados y las recompensas privatizadas. Por supuesto, existe la suposición implícita de que el Gobierno también utilizaría los ingresos mencionados para pagar los programas sociales que benefician a los trabajadores y a sus comunidades.

Pero no es a través de los impuestos progresivos y el aumento del gasto social en programas dirigidos a los pobres —aunque estos sean importantes y necesarios— que podemos alcanzar el objetivo más elevado de la democracia económica y social. Para que no sea el “capitalismo de siempre”, necesitamos instituciones sociales que busquen eliminar todas las formas de desigualdad económica y social —de ahí nuestra propuesta, que plantea: 1) la propiedad comunal y de los trabajadores de los recursos productivos; y 2) la propiedad pública de los bancos. Es una propuesta similar a la de Mazzucato, salvo porque va un paso más allá en el sentido de que convierte a todos los bancos en “bancos estatales de desarrollo” e incluye a los trabajadores y a las comunidades como accionistas de las empresas que operan en su propio entorno. En este escenario, el Estado democrático tendría más influencia, permitiéndole continuar asumiendo riesgos e invirtiendo en proyectos innovadores y emocionantes. Este es el Estado creativo y empresarial, y no es una utopía.

La evidencia histórica indica que los bancos públicos han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de muchos países industrializados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, incluyendo, entre otros, a Francia y Alemania (véase Matthey, 2010). Como señalaron Bougrine y Seccareccia (2013: 153), “en la mayoría de los países desarrollados, los bancos públicos han sido tradicionalmente una

fuente importante de financiación para las pequeñas empresas, el desarrollo de infraestructura, la construcción de viviendas y otras inversiones con fines sociales”. La importancia de los bancos públicos en la sociedad democrática proviene del hecho de que desempeñan una función social y económica basada en el interés público: deben proporcionar la financiación necesaria y eliminar el problema de la escasez artificial de dinero para el mayor interés público, que es —y debería ser— la creación de riqueza y prosperidad para toda la sociedad. El sistema de bancos públicos es un medio por el cual la sociedad democrática puede lograr el control colectivo de la creación de dinero y la distribución equitativa de la financiación entre sus miembros.

Hasta la década de los setenta y justo antes de la ola de privatizaciones neoliberales, Canadá, por ejemplo, tenía un fuerte sector público, con sus icónicas y mundialmente famosas “corporaciones de la corona” (empresas estatales) que operaban en prácticamente todos los sectores de la economía, desde la minería (petróleo, gas) hasta el transporte (aéreo, ferroviario), los medios informativos y las comunicaciones, la banca, etc. El Estado financió proyectos de innovación de alto riesgo e invirtió en áreas tan variadas como ingeniería aeroespacial (Avro Canada Jetliner, Canadarm), generación de energía (el reactor CANDU), internet/telecomunicaciones (CANARIE, la primera red nacional de investigación y educación en internet óptica del mundo para la transferencia de archivos de datos de gran tamaño), agricultura y artes (la Orquesta del Centro Nacional de las Artes y su apoyo a otras artes escénicas). El número de organizaciones gubernamentales (federales y provinciales) dedicadas exclusivamente a la investigación científica, sin contar las universidades que son todas de propiedad pública, sigue siendo bastante impresionante para la mayoría de los estándares. Sin embargo, el hecho es que la riqueza generada a través de estas y otras actividades no llega de manera uniforme a todas las clases sociales. De hecho, como se muestra en el capítulo 1, la riqueza en Canadá sigue concentrada en gran medida en manos del 20 % más rico de la población.

4. CONCLUSIÓN

La pobreza y la cuestión conexas de la distribución desigual de la riqueza siempre han estado en el centro del debate sobre las cuestiones sociales. Las intervenciones del Gobierno para aliviar la pobreza a menudo se enfrentan a una feroz oposición con el argumento de que los fondos públicos están limitados a la cantidad que el Gobierno puede recaudar de los impuestos y que los responsables de las políticas no deberían aventurarse más allá de estos límites. La opinión prevalente es que los impuestos son la única fuente legítima de ingresos del Gobierno —la *fuerza primaria y principal* de las finanzas del Gobierno—, y que los préstamos y la creación de dinero deben evitarse porque, supuestamente, conducen a tasas de interés más altas y a la inflación. Los déficits públicos y la deuda pública se consideran una amenaza para la economía y la sociedad. El capítulo ha demostrado que esta visión se basa en un serio y peligroso malentendido sobre el dinero, los impuestos y las finanzas públicas. En particular, se demostró que los déficits son una fuente de ingresos para el sector privado y que un Gobierno nacional soberano no se enfrenta a tales restricciones presupuestarias, ya que la financiación se asegura rutinariamente a través de su banco central. Mediante evidencias empíricas, el capítulo ofreció una interpretación alternativa por la cual los déficits públicos son de hecho equivalentes a los superávits del sector privado y la deuda pública es una importante fuente de crecimiento para la riqueza privada.

BIBLIOGRAFÍA

- BENTHAM, J. (1797 [1841]): “Tracts on Poor Laws and Pauper Management”, en J. Bentham, *The Works of Jeremy Bentham*, parte XVI, Edimburgo, William Tait.
- BOUGRINE, H. (2000): “Fiscal Policy and the Current Crisis: Are Budget Deficits a Cause, a Consequence or a Remedy?” en H. Bougrine (ed.), *The Economics of Public Spending: Debts, Deficits and Economic Performance*, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 6-29.
- (2004): “Public Debt and Private Wealth”, en L. Randall Wray y M. Forstater (eds.), *Contemporary Post-Keynesian Analysis*, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 24-43.

- (2010): “The Stabilizing Role of Government Spending” en H. Bougrine, H y M. Seccareccia, (eds.), *Macroeconomic Analysis: Competing Views*, Toronto, Emond Montgomery Publications.
- BOUGRINE, H. y SECCARECCIA, M. (2002), “Money, Taxes, Public Spending, and the State Within a Circuitist Perspective”, *International Journal of Political Economy*, 32(3), pp. 58-79.
- (2013): “Rethinking banking institutions in contemporary economies: are there alternatives to the status quo?”, en L. P. Rochon y M. Seccareccia (eds.), *Monetary Economies of Production Banking and Financial Circuits and the Role of the State*, Cheltenham, Edward Elgar.
- CHOMSKY, N. (1999): *Profit over People - Neoliberalism and Global Order*, Nueva York, Seven Stories Press.
- CLARK, G. (2014): “The American Dream is an Illusion”, *Foreign Affairs*.
- (2015): “Social Mobility Barely Exists But Let’s Not Give Up on Equality”, *The Guardian*.
- FEIGE, D. (2008): “Socializing Risks, Privatizing Profits”, *The Huffington Post*, disponible en <https://bitly.ws/3dbHJ>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- GALBRAITH, J. K. (2000): “The Burden of Wealth”, *Public Interest*, vol. 141, pp. 68-74.
- GODLEY, W. (2000): “Drowning in Debt”, *Policy Note*, n° 2000/6, Jerome Levy Economics Institute, disponible en <https://bitly.ws/3dbI8>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- GODLEY, W. y LAVOIE, M. (2007): *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- HALEVI, J. y KRIESLER, P. (2000): “On the Limitations of Fiscal Policy: A Radical Kaleckian View”, in H. Bougrine (ed.), *The Economics of Public Spending: Debts, Deficits and Economic Performance*, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 135-149.
- KEEN, S. (2015): “Post Keynesian Theories of Crisis”, *American Journal of Economics and Sociology*, 74(2), pp. 298-324.
- LAVOIE, M. (1985): “Credit and Money: The Dynamic Circuit, Overdraft Economics, and Post Keynesian economics”, in M. Jarsulic (ed.), *Money and Macro Policy*, Boston-Dordrecht-Lancaster, Springer.
- (2000): “Government deficits in simple Kaleckian models”, en H. Bougrine (ed.), *The Economics of Public Spending: Debts, Deficits and Economic Performance*, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 122-134.
- LERNER, A. P. (1943): “Functional Finance and the Federal Debt”, *Social Research*, vol. 10, pp. 38-51.
- LIN, X. y HOFFARTH, M. (2023): *An Analysis of Canadian Business Support Programs in Response to the Global COVID-19 Pandemic*, Statistics Canada, catálogo n° 13-605-X.
- MATTEY, A. (2010): “Do Public Banks Have a Competitive Advantage?”, *European Journal of Finance*, 16(1), pp. 45-55.

- MAZZUCATO, M. (2014): *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*, Nueva York, Anthem Press.
- MOSLER, W. (2010): *The Seven Deadly Innocent Frauds of Economic Policy*, St Croix, Valance Co., Inc.
- MOORE, B. (1988): *Horizontalists and Verticalists: The Macroeconomics of Credit Money*, Cambridge, Cambridge University Press.
- OXFAM (2015): *Wealth: Having it All and Wanting More*, disponible en <https://bitly.ws/3d76T>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- PALLEY, T. I. (2013): "America's Exhausted Paradigm: Macroeconomic Causes of the Financial Crisis and Great Recession", en B. Z. Cynamon, S. Fazzari y M. Setterfield (eds.), *After the Great Recession: The Struggle for Economic Recovery and Growth*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 31-60.
- PARGUEZ, A. (2002): "A Monetary Theory of Public Finance", *International Journal of Political Economy*, 32(3), pp. 80-97.
- PARGUEZ, A. y SECCARECCIA, M. (2000): "The Credit Theory of Money: The Monetary Circuit Approach", en Smithin, J. (ed.), *What is Money?*, Londres y Nueva York, Routledge, pp. 101-23.
- PHELPS, E. S. (2013): *Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change*, Princeton, Princeton University Press.
- PIKETTY, T. (2014): *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge, Harvard University Press.
- ROCHON, L. P. y ROSSI, S. (2007), "Central Banking and Post-Keynesian Economics", *Review of Political Economy*, 19(4), pp. 539-554.
- (2013): "Endogenous Money: The Evolutionary versus Revolutionary Views", *Review of Keynesian Economics*, 1(29), pp. 210-229.
- SALVEMINI, G. (1936): *Under the Axe of Fascism*, Londres, Victor Gollacz.
- SAMUELSON, P. A. (1966): "A Summing up", *Quarterly Journal of Economics*, 80(4), pp. 568-583.
- SECCARECCIA, M. (2005): "Growing Household Indebtedness and the Plummeting Saving Rate in Canada: An Explanatory Note", *The Economic and Labour Relations Review*, vol. 16, pp. 133-151.
- STEDMAN JONES, G. (2004): *An End to Poverty? A Historical Debate*, Nueva York, Columbia University Press.
- SKIDELSKY, R. (2010): "The Crisis of Capitalism: Keynes Versus Marx", *The Indian Journal of Industrial Relations*, 45(3), pp. 321-335.
- SMITHIN, J. (2016a): "Endogenous Money, Fiscal Policy, Interest Rates and the Exchange Rate Regime: A Comment on Palley, Tymoigne and Wray", *Review of Political Economy*, 28(1), pp. 64-78.
- (2016b): "Some Puzzles about Money, Finance and the Monetary Circuit", *Cambridge*

Journal of Economics.

STIGLITZ, J. E. (2013): *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*, Nueva York, W. W. Norton & Company.

TOCQUEVILLE, A. (1840 [2009]): *Democracy in America*, vol. 4, Indianapolis, Liberty Fund.

WRAY, R. (2011): “Recent USA Sectoral Balances: Goldilocks, the Global Crash, and the Perfect Fiscal Storm”, *New Economic Perspectives*, disponible en <https://bitly.ws/3dc9V>, consultado el 20 de marzo de 2016.

— (2015): *Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems*, Nueva York, Palgrave Macmillan.

CAPÍTULO 4

PLENO EMPLEO FRENTE A ESCASEZ

“La creencia conservadora de que hay alguna ley de la naturaleza que impide que los hombres sean empleados, que es ‘imprudente’ emplear a los hombres, y que es financieramente ‘sano’ mantener a una décima parte de la población en la ociosidad por un periodo indefinido, es locamente improbable —el tipo de cosas que ningún hombre podría creer que no haya tenido la cabeza llena de tonterías durante años y años...”.

“Nuestra principal tarea, por lo tanto, será confirmar el instinto del lector de que lo que *parece* sensato *es* sensato, y lo que *parece* una tontería *es* una tontería. Intentaremos mostrarle que la conclusión de que si se ofrecen nuevas formas de empleo se emplearán más hombres, es tan obvia como suena y no contiene ningún inconveniente oculto; que poner a los hombres desempleados a trabajar en tareas útiles hace lo que parece, es decir, aumenta la riqueza nacional; y que la noción de que, por razones intrincadas, nos arruinaremos financieramente si utilizamos este medio para aumentar nuestro bienestar, es lo que parece: una patraña”.

KEYNES (1972: 90-92)

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los conceptos clave de la economía neoclásica es la “escasez”. Se utiliza para explicar la determinación de los precios en los mercados de bienes y servicios, los altos niveles de los tipos de interés, el valor del dinero y la asignación de todos los recursos, lo que explica tácitamente el problema de la distribución desigual de la riqueza y los ingresos. La noción de escasez impregna tanto los modelos neoclásicos que la mayoría de los libros de texto introductorios definen el campo de la economía como “el estudio de la asignación de recursos *escasos* entre necesidades *ilimitadas*”, —reduciendo así el “problema económico” de la humanidad

a uno solo: la “escasez”—. En resumen, la escasez es la base de todo el sistema neoclásico de pensamiento. El problema, sin embargo, es que la existencia de la escasez siempre se asume, pero nunca se demuestra. Ya sea que se trate de la cuestión trivial de satisfacer el apetito de un hombre glotón o de una cuestión más fundamental como la necesidad de financiación de la construcción de una escuela o un hospital, los economistas neoclásicos se apresuran a plantear el argumento de una limitación vinculante de la escasez —ya sea de alimentos o de dinero—. La escasez de dinero, como resulta ser, es el argumento general utilizado para justificar todos los males de la sociedad. Justifica el hambre y la malnutrición, la falta de vivienda, el analfabetismo y todas las demás manifestaciones de la pobreza.

A nivel microeconómico, es comprensible e incluso tautológico decir que una persona es pobre porque no tiene mucho dinero y que —por razones objetivas—, no puede conseguir más por mucho que lo intente. Los trabajadores no pueden estirar sus salarios para hacerlos más altos (a menos que obtengan un aumento de sueldo) y los más pobres ni siquiera pueden estirar sus salarios lo suficiente como para hacerlos durar hasta el próximo día de pago. Muchos de los trabajadores pobres terminan cayendo aún más en la pobreza cuando recurren a préstamos de día de pago, alquiler con opción a compra, etc., por los que pagan tasas de interés de usura y precios más altos a través de cuotas y honorarios. En su libro, *The Cost of Being Poor*, Barnes (2005) resume algunos de los costos económicos y no económicos adicionales que enfrentan los pobres. Desde nuestra perspectiva, este es el problema de la distribución desigual de la renta y la riqueza, que hemos tratado en los tres capítulos anteriores.

Sin embargo, a nivel macroeconómico, la noción de escasez de dinero es mucho más problemática por varias razones, la más importante de las cuales es la diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y los ciudadanos privados, ya sean empresas u hogares, en lo que respecta al acceso al dinero. Mientras que los hogares y las empresas son receptores y usuarios finales de lo que llamamos dinero, el Gobierno nacional, a través de su banco central, es su emisor; su *creador*. Aunque las teorías

ortodoxas sobre el dinero y las finanzas públicas insisten en que los Gobiernos nacionales, al igual que los hogares, están sujetos a una restricción presupuestaria, los hechos y las experiencias de los bancos centrales modernos nos dicen lo contrario. En la actualidad, los profesionales de los bancos centrales (véase Banco de Inglaterra, 2014) y los responsables de la formulación de políticas pragmáticas reconocen ampliamente que el dinero es, en efecto, una “criatura del Estado” (véase Lerner, 1943) y que no existe ningún límite físico en cuanto a la cantidad que puede crearse. Las restricciones presupuestarias sobre el gasto del Gobierno son arbitrarias y autoimpuestas.

Hace dos décadas, Krugman (1996) escribió un artículo en el que mostraba por qué es importante distinguir entre un país y una empresa. Aunque su principal preocupación era el efecto de los desequilibrios comerciales internacionales sobre el empleo interno, terminó por introducir el papel de la Reserva Federal (el banco central de Estados Unidos) como creador de *dinero*. Krugman (1996: 41, énfasis de HB) reconoció que la Reserva Federal puede crear tanto dinero como quiera y utilizarlo para estimular la economía y crear más puestos de trabajo, pero sugirió que no debería hacerlo porque “[...] el resultado sería inaceptable y aceleraría la inflación. En otras palabras, la limitación del número de empleos en Estados Unidos no es la capacidad de la economía estadounidense para generar demanda [...] sino el nivel de *desempleo* que la Reserva Federal cree que la economía necesita para mantener *la inflación* bajo control”.

La admisión de que el desempleo es *necesario* (solo) para mantener la inflación bajo control demuestra insensibilidad hacia aquellos que sufren privaciones y pobreza como resultado de no poder conseguir un trabajo.

El argumento de que el desempleo es el precio que la sociedad debería pagar para *mantener* el dinero escaso y evitar la inflación se resume en la literatura económica en la famosa curva de Phillips, que se desarrolló en la década de los cincuenta, pero que sigue dominando la actual formulación de políticas y sigue siendo la principal justificación y principio rector de las políticas de austeridad (véase Feldstein, 2015).

Cabe señalar aquí, en su descargo, que Krugman ha cambiado su opinión sobre la lucha contra el desempleo y se ha convertido en un activista contra la austeridad (véase, entre otros, Krugman, 2012: 11). De hecho, en la introducción de su libro *End This Depression Now* (2012), afirma que “intenta romper el dominio de esa sabiduría convencional destructiva y argumentar a favor de las políticas expansivas y creadoras de empleo que deberíamos haber seguido todo el tiempo”, enfatizando que “ahora es el momento de que el Gobierno gaste más, no menos, hasta que el sector privado esté listo para llevar la economía hacia adelante de nuevo —sin embargo, las políticas de austeridad que destruyen el empleo se han convertido en la regla—”. Krugman (2015a) ha argumentado, incluso, que el gasto público financiado por la deuda del Gobierno es en realidad algo bueno y que “las políticas de austeridad no solo impusieron pérdidas de empleo y producción a corto plazo, sino que también paralizaron el crecimiento a largo plazo” (Krugman, 2015b).

Los economistas conservadores no solo apoyan la pobreza generalizada, sino que, lo que es más importante, tratan de perpetuarla abogando por políticas basadas en un razonamiento erróneo y en la pura demagogia, cuyo objetivo final es la subyugación del trabajo y su sometimiento a un estado perpetuo de escasez *artificial* de empleos, hogares, educación y servicios de salud. Y para este propósito, la austeridad fiscal demostró ser un medio útil porque obliga a los grupos de ingresos medios y bajos a asumir costes adicionales para tener acceso a estos servicios a medida que se van privatizando. En el contexto de un aumento del desempleo y de un estancamiento o caída de los salarios reales, la reacción racional de los trabajadores pobres es recurrir a los préstamos, satisfaciendo así las expectativas de quienes están detrás del diseño de estas políticas, es decir, los financieros.

Sin embargo, es perfectamente factible lograr un estado de pleno empleo sin provocar un aumento de la inflación. En pocas palabras, el Gobierno puede diseñar políticas fiscales y monetarias expansivas para estimular el crecimiento económico y seguirlas hasta que se cree un empleo para todos los que estén dispuestos y sean capaces de trabajar.

Dado que cada nuevo trabajador se suma a la producción y oferta de bienes y servicios, al menos en teoría, no hay razón para que su demanda adicional de bienes y servicios provoque una inflación de precios. Si, como afirman los economistas conservadores (véase Feldstein, 2015), el dinero utilizado para financiar los programas de pleno empleo conduce a una situación extraordinaria en la que “demasiado dinero persigue muy pocos bienes”, entonces, en la práctica, el Gobierno tiene a su disposición un método centenario, probado y comprobado, para retirar efectivamente la liquidez extra, y ese es el impuesto. Esto nos lleva a concluir que el desempleo, y no la inflación, es “nuestro problema económico número uno”³⁴ y que los Gobiernos tienen no solo la obligación moral, sino también legal, de resolverlo. Y no olvidemos que el alto desempleo y *la deflación*, sin la intervención del Gobierno, fueron la receta para los daños de la Gran Depresión de la década de los treinta. En este capítulo, sostenemos que el pleno empleo debe ser una prioridad en el programa de los responsables de la formulación de políticas, pero para que tenga éxito debe formar parte de una estrategia más amplia que trate de eliminar la aplastante carga de la escasez artificial, garantizando una participación en el crecimiento económico y la prosperidad de todos los miembros de la sociedad mediante el acceso a una vivienda digna, una buena educación, la atención de la salud y otros programas de protección social que contrarresten los efectos imperceptibles de la austeridad.

2. LA AUSTERIDAD Y LA CREACIÓN DE ESCASEZ ARTIFICIAL

En las sociedades primitivas, como hemos visto en el capítulo 1, el esfuerzo por lograr el bienestar material era una tarea colectiva. Las comunidades se organizaron de manera que se maximizase el bienestar de toda la comunidad. Los valores sociales fomentaron la capacidad de reunir o producir más bienes y servicios para la comunidad. Los miembros se enorgullecían de hacerlo porque la protección de su comunidad contra las calamidades de la naturaleza significaba su propia protección individual. Juntos eran más fuertes; y lo sabían

instintivamente. Este comportamiento se garantizó —y reforzó— mediante la práctica de la reciprocidad y la redistribución estricta. Como ya hemos señalado, en las sociedades primitivas igualitarias y no estratificadas, la entrega recíproca de regalos y la redistribución equitativa de los recursos entre los miembros de la comunidad son sus dos características más destacadas. La escasez económica no era un problema individual. Al igual que las catástrofes naturales, se enfrentó de forma colectiva y se resolvió mediante el reparto y la redistribución equitativa. Como señaló Carneiro (1981: 60), la redistribución en comunidades igualitarias significaba “la reasignación completa y equitativa de la cosecha de un pueblo a sus productores por un jefe que no es más que un custodio temporal y benigno de la misma”.

La escasez económica se convirtió en un problema individual cuando la redistribución dejó de ser igual. Y la redistribución dejó de ser igual en el momento en que quienes están a cargo de ella acumularon el poder de mantener una mayor cuota desviando más recursos para ellos mismos y para sus aliados —privando así a otros miembros de la comunidad que se convierten en víctimas de una escasez artificial—. A medida que el interés propio se hizo dominante, la sociedad se “clasificó y estratificó”, y el acceso a los alimentos y otros recursos se convirtió en un juego de suma cero. El trágico punto de inflexión en la historia humana ocurrió cuando la función de distribución fue arrebatada por “familias poderosas de hombres influyentes [...] la aristocracia gobernante, o [...] la burocracia administrativa” (véase Thurnwald, 1932: 106), ya que fue entonces cuando estos “distribuidores” aseguraron su control directo sobre la distribución de la tierra, los derechos de agua y otros bienes y servicios esenciales para la supervivencia, lo que les proporcionó el poder “de despojar de los medios de subsistencia a aquellas personas que no contribuyeron con el trabajo que se les exigía, que no produjeron suficientes recursos o que acumularon recursos en secreto” (Haas, 1981: 98). Esto es lo que Haas (1981: 96) llama el “poder de los distribuidores para gobernar por medio de la recompensa y el castigo a través de la provisión y retención de los bienes y servicios económicos que

controlan”. Existen pruebas abrumadoras de que el Estado primitivo utilizó una fuerza brutal para mantener las decisiones tomadas por estos distribuidores, que disfrutaban de un poder cada vez mayor al negar recursos a sus conciudadanos, es decir, al crear una escasez artificial para hacerles pasar hambre, frío, etc., para forzarlos al sometimiento y la obediencia.

Hoy en día, el Estado neoliberal utiliza la austeridad para lograr el mismo objetivo. A diferencia de las sociedades primitivas, que podían confiar en esbirros para imponer la exclusión, en las democracias parlamentarias preferimos hacerlo a través del mercado³⁵. Así es como funciona: en las economías primitivas, las transacciones y el intercambio eran en su mayoría en especie, de modo que la privación o el acceso a los bienes y servicios tomaba una forma física directa³⁶. Las economías modernas son economías monetarias y el acceso a los bienes y servicios significa que hay que estar dotado de dinero; la falta del mismo te mantiene fuera. No hay ninguna disputa sobre cómo se gana el dinero en nuestras sociedades capitalistas. En la mayoría de los países, todas las diferentes fuentes de ingresos están específicamente enumeradas en cualquier formulario de impuestos. En general, estos ingresos pueden agruparse en dos grandes categorías: la compensación directa por el trabajo (sueldos y salarios) y la compensación por la propiedad (beneficios, alquiler de dinero, alquiler de propiedades y ganancias de capital)³⁷. El salario es la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de la población en cualquier país, pero mientras que las leyes de derechos de propiedad garantizan el vínculo entre los propietarios y su propiedad (protección de la propiedad y el flujo de ingresos derivados de la misma), no hay garantía para el derecho a un empleo. Pierdes tu trabajo y quedas a tu suerte. En la mayoría de los países en desarrollo no existen programas de seguridad social o de subsidios de desempleo. La austeridad es la política oficial del Estado que busca abiertamente mantener el gasto público bajo, incluso si esto significa dismantelar esos programas de “red de seguridad”, cuando existen. Así, por ejemplo, si en los países del G7 el desempleo significa pobreza relativa, en los países en

desarrollo significa indigencia. Al mantener el desempleo persistentemente alto y obligar a los salarios reales a estancarse o caer en la mayoría de los países industrializados (véase OIT, 2014), la austeridad ha logrado hacer de la escasez artificial un hecho de la vida cotidiana. Dada la sorprendente semejanza de los objetivos y las técnicas de gestión de las relaciones de clase, estamos tentados a decir que el Estado neoliberal parece ser la reencarnación moderna del Estado primitivo — un Estado primitivo 2.0—.

El núcleo del problema discutido anteriormente se reduce a este simple hecho: mientras que cada miembro de la sociedad siente que merece disfrutar de los beneficios de una mayor riqueza, la elite gobernante quiere excluir a las clases más bajas. Pero la gente rechaza naturalmente la pobreza y tiene un deseo innato de disfrutar de una vida cómoda. A lo largo de la historia conocida de la humanidad, siempre ha habido oposición a una distribución sesgada de la riqueza simplemente porque la pobreza hace que la gente se sienta oprimida, desobediente y a veces difícil de gobernar y lista para la revuelta, sobre todo cuando ven la riqueza y el estilo de vida fastuoso de la clase dominante³⁸ (véase Haas, 1981). Espoleados por estas contradicciones, los extremistas afirmarían que una vida de privaciones no vale ni siquiera la pena ser vivida. Por lo tanto, no solo cuestionarán la distribución desigual de la riqueza, sino que también intentarán —por cualquier medio disponible— cambiar el *statu quo*. La lucha de clases, como argumentó Marx (1867), es una fuerza dinámica de cambio en todas las sociedades de clasistas.

Aunque los antiguos filósofos hablaban de la vida en la tierra como un estado transitorio, muchos todavía querían que fuera una buena vida; una oportunidad para realizar “buenas obras” y lograr “prosperidad en la tierra”. Al alabar la moderación y “la riqueza del alma”, el pensamiento religioso tampoco buscaba consagrar la pobreza. De hecho, los libros sagrados de las principales religiones monoteístas condenan explícitamente a aquellos que por avaricia, escasez artificial y explotación causan pobreza a sus “hermanos en la fe”, insisten a menudo en el respeto de los cánones de justicia y equidad de Dios y advierten a los

transgresores sobre el castigo. La opinión de que Dios está quizás del lado de los pobres (porque a Dios no le gusta la injusticia) es representada y defendida por el movimiento de la teología de la liberación, que llama a la acción contra el pecado *institucionalizado* de la pobreza y la injusticia social³⁹ (Gutiérrez y Muller, 2015; Gutiérrez, 1971). El movimiento comenzó en los años cincuenta en América Latina, pero rápidamente ganó el apoyo mundial de los oprimidos.

Fue el mismo sentimiento de rechazo a la opresión, la pobreza y la injusticia el que impulsó el surgimiento de una crítica más radical, como la de Paulo Freire (1968), a todo el sistema de dominación económica, social y política de las elites en América Latina. En su libro, *Pedagogía del oprimido*, Freire (1968: 44) denunció “la injusticia, la explotación, la opresión y la violencia de los opresores”, pero también le llamó la atención la falta de conciencia y la “cultura del silencio” que sufrían los desposeídos; y así se embarcó en una misión educativa en el campo para lograr la *conscientização* —una profundización del conocimiento y la conciencia de las masas con el objetivo de lograr la liberación y la libertad—. Estos sentimientos se hicieron eco en África y Asia por los pueblos que buscaban la independencia del yugo de las potencias coloniales y sus vasallos. Durante esta larga lucha, Paulo Freire permaneció desafiante hasta sus últimos días, siempre soñando con un mundo “menos feo, más bello, menos discriminatorio, más democrático, menos deshumanizante y más humano” (citado en Macedo, 2000: 25).

Sin embargo, bajo el neoliberalismo, la explotación colonial volvió con un rostro todavía peor en las dos primeras décadas del siglo xxi, ya que el acceso a los recursos justificaba la invasión militar y la destrucción salvaje de países enteros y sus civilizaciones milenarias como Irak, Siria, Libia y otros. Tal destrucción, como se anticipó, resultó en la mayor ola registrada de personas desplazadas⁴⁰, que instintivamente parecen seguir el rastro de sus riquezas robadas —llevándolas a los centros de los poderes imperiales en Europa occidental y América del Norte—. Miles de personas murieron de *camino a* su destino, ya sea por inanición o por ahogamiento en el mar Mediterráneo, que se convirtió en una fosa común.

La lucha por la democracia y la justicia económica ha sido larga y ardua, y sería totalmente erróneo enmarcarla en términos de una batalla mística entre el bien y el mal, ya que esto solo desdibujaría las líneas, difuminaría las tensiones y prolongaría el *statu quo*⁴¹. La escasez económica existe porque una minoría de oligarcas y millonarios tiene el poder y los medios para imponerla. Y lo hace con el fin de asegurar y preservar su dominio económico sobre aquellos que están privados del derecho al voto. Esta realidad debe ser entendida en su contexto histórico si queremos cambiarla y proponer alternativas concretas. ¿Cuáles son, entonces, las herramientas utilizadas por esta minoría, en las circunstancias actuales, para mantener su dominio?

El método más eficaz para perpetuar la dominación es, con mucho, aquel por el cual la elite logra imponer al resto de la población su propia ideología y su visión del mundo, y que las defiendan como si fueran suyas. No hay nada más irónico que ver a los pobres y a los trabajadores unirse detrás del político que les promete eliminar los déficits del Gobierno y, al mismo tiempo, obligar al Gobierno a cumplir con las reglas de “responsabilidad fiscal” y “finanzas sanas” —lo que significa una aplicación estricta de los principios de austeridad—. Sin embargo, como lo demuestran las últimas elecciones canadienses, los partidos políticos de la izquierda y de la derecha utilizan esta retórica para conseguir el apoyo popular; y funciona. Esto se debe ciertamente a la falta de comprensión de todas las implicaciones de la austeridad, que tiene como objetivo claro el desmantelamiento de los programas sociales que fueron contruidos después de la Segunda Guerra Mundial por el Estado de bienestar en un esfuerzo por evitar un retorno de los efectos desastrosos de la Gran Depresión.

Por lo tanto, es de esperar que cualquier medida política basada en la austeridad sea rechazada por la mayoría de la población. Desafortunadamente, con la excepción de unas pocas voces disidentes en el mundo académico y algunas revueltas populares aisladas [por ejemplo, en Grecia (2014-5), España (2015), Argentina (2001-2)], la austeridad es ampliamente aplaudida por los responsables políticos de todo el mundo,

por los economistas profesionales e, irónicamente, por muchos de los que más se ven afectados por ella, es decir, las masas. Como muestra Galbraith (2016), la rebelión popular en Europa y en otros lugares está siendo hábilmente aplastada por la poderosa elite. El éxito de la minoría en la imposición de su agenda neoliberal gira en torno al uso inteligente de tres instrumentos: (i) imponer una atmósfera generalizada de inseguridad económica (desempleo, analfabetismo, ignorancia y miedo) para disciplinar a los trabajadores y al público en general a través de medidas de austeridad, (ii) redactar el currículo para asegurar el condicionamiento cultural y la difusión de su ideología a través del sistema educativo y (iii) participar en la falsificación de la historia con el propósito de engañar y defraudar a través de un ejército de *intellectuels fausaires*⁴² [“intelectuales falsificadores”, n. del t.] que venden la idea de que el mercado lo hace mejor (véase Bougrine, 2012). Hudson (2015: 180) se refiere a estas ideas como “economía basura” neoliberal que están “diseñadas para desactivar los mecanismos de defensa de la sociedad”.

3. LA NECESIDAD DEL PLENO EMPLEO

Para Martin Feldstein (2015), la economía estadounidense ya está en pleno empleo, pues, asegura,

la aceleración del crecimiento salarial implica que la economía se encuentra ahora en un punto en el que los aumentos de la demanda creados por una política monetaria más fácil o una política fiscal expansiva no lograrán un aumento sostenido de la producción y el empleo. En su lugar, esta demanda se canalizaría hacia salarios y precios más altos [...] [añade, luego, que] [...] desde principios de este año, los ingresos por hora han subido un 3,3%, y solo en mayo subieron a una tasa del 3,8%, una clara señal de pleno empleo.

Entonces, ¿de qué hay qué preocuparse?

Cuando varios de los galardonados con el Premio Orwell⁴³ se quejaron del creciente uso del *doble lenguaje* —palabras y frases que están intencionadamente diseñadas para oscurecer el significado del lenguaje

llano—, probablemente no estaban pensando en el “pleno empleo”. Sin embargo, este concepto, tal como se ha utilizado anteriormente, se refiere a una economía en la que oficialmente hay 15 millones de personas que están dispuestas a trabajar, pero no pueden encontrar un empleo, además de otros seis millones de personas que trabajan a tiempo parcial pero que desean encontrar un empleo a tiempo completo⁴⁴. El uso del concepto de “pleno empleo” en este sentido es tan frecuente entre los economistas que, para describir la realidad con precisión, uno se ve tentado a añadir otro adjetivo: el “verdadero” pleno empleo no puede existir cuando hay tantas personas desempleadas (véase Pollin, 2012: 12, para conocer las anécdotas)⁴⁵. Es decir, solo cuando todos los que estén dispuestos y sean capaces de trabajar hayan encontrado un empleo, podremos hablar realmente de pleno empleo (véase Wray, 1998a). Pero como no se puede ocultar el sol con un colador, se necesita algún tipo de explicación para justificar la existencia de estos millones de desempleados. La explicación típica, también reproducida por Feldstein (2015), es que estos están desempleados ya sea por elección o por las barreras a la creación de empleo, erigidas por el Gobierno, como las leyes de salario mínimo, los impuestos sobre la nómina y la disponibilidad de programas sociales.

En su mensaje especial al Congreso con motivo de la presentación de lo que resultó ser su único *Informe sobre la mano de obra del presidente*, John F. Kennedy (1963: 249) advirtió sobre los altos costes sociales y económicos del desempleo. Escribió:

Los costes del desempleo prolongado son altos. Tanto el individuo como la sociedad sufren —el individuo a través de los recortes en los ingresos, el agotamiento o la eliminación de los ahorros, las dificultades para la familia, la erosión de las habilidades no utilizadas y la enfermedad del espíritu que puede ser perjudicial de forma duradera— y la sociedad a través de la producción no realizada, la reducción de la demanda y los costes sociales de la pobreza.

Utilizando datos más recientes, Schneider, Harknett y McLanahan (2016) han demostrado que el desempleo crea una atmósfera de incertidumbre y ansiedad, que afecta negativamente a las relaciones

íntimas. Se podría pensar que cuando la sociedad es consciente de los costes del desempleo, buscará y utilizará todos los medios disponibles para eliminarlo⁴⁶. Este punto es compartido por Davidson (2010), quien comparó las amenazas económicas con las amenazas de guerra en el extranjero y llamó al Gobierno a luchar contra ambas con igual tenacidad. Pero cuando los estudiosos ignoran la existencia del desempleo o lo descartan, entonces debemos comenzar a hacer preguntas. Por ejemplo, el premio nobel de economía de 2015, Angus Deaton, mencionó la palabra “desempleo” *solo una vez* en su libro *Health, Wealth and the Origins of Inequality*. Deaton (2013: 176), quien ganó el premio por su trabajo sobre “consumo, pobreza y bienestar”, menciona el “desempleo” solo incidentalmente en la siguiente frase, diciendo que “¡la [riqueza] aumenta cuando la gente ahorra y disminuye cuando ‘desahorra’, gastando más de lo que gana, por ejemplo, en la jubilación o durante un periodo temporal de desempleo!”. En efecto, es extraño que en un libro que se supone trata sobre los “orígenes de la desigualdad” el desempleo no juegue ningún papel en el análisis. Obviamente, hay mucho más en juego que los intereses de los desempleados o el bien social común. En una sociedad de clases, como dijo Henry (2008: 16), “si los intereses de algunos deben prevalecer, los intereses de otros deben ser suprimidos”. Y así, el desempleo está ahí, pero se considera el resultado “normal” de la aplicación de los principios de eficiencia a nivel de empresa. Sin embargo, para la sociedad, el desempleo es un desperdicio neto, una pérdida de vidas y una expresión escandalosa de *ineficiencia sistémica*, mientras que “el pleno empleo sirve directamente a la eficiencia al evitar el desperdicio de la producción potencial por parte de los trabajadores desempleados” (Lerner, 1946: 169).

El desempleo ha sido y sigue siendo una característica crónica y destacada del capitalismo. En el análisis marxista, el desempleo desempeña una función importante en el sistema: impide que los salarios aumenten y mantiene a los sindicatos bajo control. El desempleo es un medio para asegurar una mano de obra dócil y “barata”. Por esta razón, ni siquiera las políticas económicas más progresistas tendrían como objetivo

eliminarlo porque, como reconoce Kalecki (1943), en su esencia están diseñadas para servir a los intereses y preservar la dominación de la clase capitalista. Los niveles de desempleo pueden subir y bajar con el ciclo económico, pero el desempleo no debe desaparecer. Varios economistas keynesianos suscriben este punto de vista; argumentan que la reducción del desempleo por debajo de un cierto umbral llevará a la inflación (Palley, 2015a, 2015b) y pocos están dispuestos a defender un programa que busque lograr el “verdadero” pleno empleo, porque, como señala de Brunhoff (2005: 216), “temen que el bajo desempleo pueda socavar la moderación salarial”. Después de revisar la exitosa experiencia de Suecia con un alto nivel de empleo en una economía capitalista, Pollin (2012: 33, énfasis de HB) sugirió que el modelo sueco podría funcionar en otros lugares, pero advirtió que el movimiento sindical “debería asumir la responsabilidad de diseñar un programa de pleno empleo viable hoy en día, reconociendo en ese programa la *importancia del control de la inflación a medida que se aproxima el pleno empleo*”.

No debería sorprender, entonces, que desde la Gran Depresión, exceptuando algunas iniciativas de creación directa de empleo por parte de los Gobiernos (por ejemplo, el New Deal en los EE UU), la política típica siempre se ha limitado a intentar reducir el desempleo pero nunca a eliminarlo —reivindicando así la afirmación de Keynes (1936: 373) de que “los defectos sobresalientes de la sociedad económica en la que vivimos son su incapacidad de proporcionar pleno empleo y su distribución arbitraria e inequitativa de la riqueza y los ingresos” (Kalecki, 1943: 331)—. Por el contrario, dio el más perspicaz análisis del pleno empleo en el capitalismo cuando señaló que:

Si el capitalismo puede ajustarse al pleno empleo, se habrá incorporado una reforma fundamental. Si no, se mostrará un sistema anticuado que debe ser *desechado*. Pero tal vez la lucha por el pleno empleo puede llevar al fascismo. ¿Quizás el capitalismo se ajustará al pleno empleo de *esta* manera? Esto parece extremadamente improbable. El fascismo surgió en Alemania en un contexto de tremendo desempleo y se mantuvo en el poder asegurando el pleno empleo

mientras que la democracia capitalista no lo hizo. La lucha de las fuerzas progresistas por el pleno empleo es al mismo tiempo una forma de *prevenir* la recurrencia del fascismo⁴⁷ (Kalecki, 1943: 331, énfasis en el original).

El capitalismo no se ha ajustado hasta ahora al pleno empleo. Y la “democracia capitalista” ha fracasado dramáticamente no solo en Grecia (Galbraith, 2016; Varoufakis, 2015), sino también en el resto de Europa y en otros países industrializados (Galbraith, 2016; Stiglitz, 2015). El estancamiento, con todo lo que conlleva, se ha convertido en la “nueva normalidad”. Anclar el desempleo a la inflación es una manera obstinada de empujar el capitalismo a sus límites para la realización del máximo interés propio, pero los expertos deberían entender que no es una buena idea. La aplicación de una política de austeridad durante tanto tiempo ha agotado prácticamente la cantidad de excedente que puede extraerse del trabajo en la economía de producción real. La evidencia que aportan los nuevos hechos es que el desempleo de larga duración ha ido en aumento y que la combinación de empleos se está desplazando más hacia el trabajo a tiempo parcial, lo que ha dado lugar a una disminución de la participación de la mano de obra en los ingresos nacionales desde el decenio deen la mayoría de los países de la OCDE (véase OIT, 2014; OCDE, 2012, 2015; Giovannoni, 2014). En este contexto, Green y Sand (2015) han documentado una polarización de los mercados laborales canadiense y estadounidense desde principios de los años ochenta, con un crecimiento más rápido del empleo en las ocupaciones de alta y baja remuneración que en las de media, lo que aumentó aún más la desigualdad en la distribución de los ingresos.

Durante el mismo periodo, observamos un recurso creciente a la financiarización como otro método para aumentar, aunque sea ficticiamente, la riqueza de la oligarquía financiera dominante (véase Bougrine y Rochon, 2015). La transformación del capitalismo en una economía dominada por las finanzas ha aumentado la vulnerabilidad del sistema y ha despertado en las masas sentimientos de militancia a favor de alternativas y en contra de la injusticia económica y social. El

capitalismo tal como lo conocemos parece estar evolucionando hacia una encrucijada y puede muy bien arriesgarse a ser “desechado”. Y así el castigo recaerá sobre los malhechores. Sin embargo, a la persona que sufre las penurias de la privación diaria no le importa la fatídica desaparición prevista o prometida del capitalismo que tanto prevalece en la retórica académica de izquierda. La privación hace que una persona se impaciente. “Un estómago vacío es una carga pesada”, como dice el adagio árabe. Los seres humanos sienten también la necesidad de estar sanos, la necesidad de florecer y de expresarse a través de diversas formas de arte y de ciencia. Es el impulso natural para la realización de nosotros mismos como personas. Pero esas aspiraciones solo pueden cumplirse en una sociedad que prohíba el desempleo y la pobreza mediante la eliminación de la desigualdad en la distribución de la riqueza, que es la causa fundamental de la escasez artificial y la privación forzosa.

Entonces, ¿qué hay que hacer? Lenin (1902: 33-34) reconoció que el trabajo de los sindicatos era “una importante palanca en la lucha económica [de los trabajadores]”, pero criticó severamente a los socialdemócratas por enfocarse demasiado estrechamente en estas actividades, argumentando que “[...] solo se ocupaban de las relaciones entre los trabajadores *de un determinado oficio* y sus empleadores, y todo lo que lograron fue que los vendedores de la fuerza de trabajo aprendieran a vender su “mercancía” en mejores condiciones y a luchar contra los compradores por un trato puramente comercial”.

Más de un siglo después, la crítica de Lenin sigue siendo válida. Hoy en día, incluso las propuestas políticas más radicales de los economistas keynesianos no buscan más que una mejora en los términos en los que los trabajadores venden su “mercancía”. Sin duda, la perniciosa cuestión de la distribución desigual de la riqueza y de los ingresos no se rechaza en estas propuestas y sigue siendo una característica fundamental de lo que Davidson (2015: 136-144) llama “un sistema económico capitalista civilizado”.

La construcción de una sociedad igualitaria es, sin duda, un proyecto

que puede tardar mucho tiempo en materializarse, pero los siguientes pasos hacia ese fin pueden ser implementados inmediatamente y sus resultados se verán dentro del mandato de un Gobierno elegido: a) la aplicación de una política de pleno empleo, garantizando un puesto de trabajo a toda persona que esté dispuesta y en condiciones de trabajar; y b) la eliminación de la escasez y las privaciones sociales, garantizando el acceso universal a un *mínimo social*⁴⁸ que incluya la educación y la salud, entre otras cosas. No es particularmente difícil lograr estos objetivos, ya que pueden ser parte del mandato de un Gobierno que se alía con la clase obrera y las masas. Sin embargo, el objetivo general de una estrategia de pleno empleo debería ser una alteración de la distribución de los ingresos y de la riqueza a favor de la clase obrera, porque de lo contrario simplemente habría aumentado la inscripción de los trabajadores en la relación salarial, manteniendo intacto el actual patrón de distribución, es decir, solo podría aumentar el número de trabajadores pobres. En este sentido, Seccareccia (2004) ha demostrado la inutilidad y el peligro de intentar lograr un tipo de empleo pleno con bajos salarios, ya que en este escenario sigue existiendo un desempleo masivo disfrazado que, de hecho, llevaría a la economía a la deflación y ampliaría la brecha de desigualdad. La implicación obvia es que el proyecto de una sociedad igualitaria requiere la implementación y el logro de una forma de pleno empleo con salarios altos. Como señala Seccareccia (2004), este objetivo es coherente con la propuesta original de Keynes (1936) y cuenta con el apoyo de otros poskeynesianos para quienes el pleno empleo y la redistribución de la riqueza y la renta no pueden disociarse.

En lo que sigue, se propone un plan de acción que puede acercarnos a tan noble objetivo (véase otras propuestas de Darity, 2010; Forstater, 2004). En otra parte se ha sugerido que, para aumentar su eficacia, la estrategia de pleno empleo debe basarse en dos pilares (véase Bougrine, 2006):

- En el sector privado, el Estado promoverá activamente la

creación de empresas de propiedad comunitaria o de trabajadores en la producción de bienes y servicios.

- El propio Estado mantendrá una amplia red de empresas públicas cuyo objetivo principal será la provisión y gestión de bienes públicos y servicios sociales, pero también operará en todas las demás industrias y sectores, incluyendo la banca y las finanzas, asegurando así un proceso de socialización de la inversión.

La proliferación en toda la economía de empresas propiedad de la comunidad y gestionadas por los trabajadores es crucial para el logro de un pleno empleo permanente y sostenible por varias razones. La primera y más obvia es que rompe con la lógica capitalista que se construye sobre la maximización del beneficio para los propietarios o accionistas privados; un objetivo que casi siempre se logra a expensas de los trabajadores, ya sea a través del esquema de salario/pago, de las condiciones en las que se realiza el trabajo, del uso intensivo de la tecnología de ahorro de mano de obra y así sucesivamente —cuestiones que están en el centro de la lucha de clases entre los trabajadores y los capitalistas—. Las empresas propiedad de los trabajadores y gestionadas por ellos producirán bienes y servicios útiles y saludables para sus comunidades locales, regionales y nacionales, y no tienen que atenerse a los principios de eficiencia de la empresa capitalista privada. Por ejemplo, pueden elegir la tecnología que mejor se adapte a sus intereses en términos de niveles de empleo, efectos sobre la salud y el medioambiente, etc., como se hace en las negociaciones entre los sindicatos, los directivos y el Estado en algunos países del norte como Suecia y Dinamarca (véase Jamison, 1991). Schutz (2011: 192-5), después de dar una lista de esas empresas propiedad de los trabajadores y gestionadas por ellos y de discutir sus méritos, argumentó que el verdadero obstáculo a su proliferación es obviamente el marco legal o institucional. Del mismo modo, Wolff (2012) ofrece detalles útiles sobre cómo se puede lograr que estas empresas sean exitosas y viables.

La otra razón importante es que, al administrar directamente sus propias empresas, los trabajadores eliminan la jerarquía esclerótica que es típica de la corporación capitalista privada y sobre la cual se construye la distribución desigual de ingresos y ganancias. Jossa (2015) considera que lo que él llama empresas gestionadas por la mano de obra representan un paso hacia un modo de producción alternativo, ya que en el capitalismo las empresas son propiedad de los capitalistas y están gestionadas por ellos. La implicación inmediata de este cambio es la eliminación de los altos salarios y beneficios que se pagan a los directores generales y a los altos ejecutivos y la apropiación de los beneficios —importantes sumas que pueden añadirse al superávit total para ser distribuidas equitativamente entre aquellos que lo producen, es decir, los trabajadores—. La idea, por supuesto, no es siempre distribuir la totalidad del excedente entre los trabajadores. Se retendrán fondos para la expansión de la empresa y la mejora o el desarrollo de otras actividades como el reciclaje profesional, el entretenimiento, las relaciones con los proveedores y los consumidores, etc. (véase Wolff, 2012). En un contexto relacionado, Schneider y Susman (2010: 1) muestran que las empresas cooperativas como Mondragon han desempeñado un papel importante en la creación de puestos de trabajo seguros y altamente cualificados, en la promoción de la educación local y la investigación y el desarrollo y, por lo tanto, han demostrado ser “un poder de contrapeso a las fuerzas del desarrollo desigual capitalista”.

Lo que es importante para nosotros aquí es entender que las empresas propiedad de los trabajadores y administradas por ellos tienen el claro potencial, y la ventaja, de crear más trabajos y absorber más trabajadores desempleados que las corporaciones capitalistas de propiedad privada. Lo que es aún más importante es que estos trabajadores ya no están vendiendo su fuerza de trabajo, su “mercancía” como dijo Lenin, a otros y, por lo tanto, escaparán de ese sentimiento opresivo de dependencia y subyugación (véase Jossa, 2015). Al ser dueños y administradores de sus empresas, los trabajadores podrán apropiarse y disfrutar de los frutos de su propio trabajo; de la misma manera que el agricultor puede hacer la

cena con verduras cultivadas en casa. Pero la propiedad de los trabajadores no debe contradecir el carácter público de estos recursos productivos, que en cualquier caso siempre puede ser declarado por ley como de dominio público.

La viabilidad de las empresas propiedad de los trabajadores y gestionadas por ellos estará en peligro si no son apoyadas y defendidas enérgicamente por el Estado —de ahí la importancia del segundo pilar de nuestra estrategia, el sector público—. La actividad de las empresas públicas no se limitará a la provisión de infraestructuras públicas y servicios sociales. No hay nada que les impida dedicarse también a la producción de bienes de consumo y de capital. Las empresas públicas son esenciales para el éxito de un programa de pleno empleo, no porque no estén motivadas por el beneficio, sino porque pueden ser fácilmente dirigidas a áreas y sectores donde el desempleo es alto (véase Schutz, 2011: 190-192). Los trabajadores necesitan las habilidades y la educación requeridas para realizar sus trabajos (por ejemplo, diseño, producción, ventas y *marketing*, gestión). Los trabajadores y sus familias necesitan estar sanos, tener una vivienda decente, acceso a instalaciones al aire libre y parques, teatros y artes. Necesitan tener todas estas cosas como un *mínimo social*, cuya provisión se garantiza mejor a través de las empresas públicas. El Estado de bienestar sí proporcionó algunos de estos recursos en algunos países, particularmente durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con el resurgimiento de las ideas neoliberales, que luego llegaron a dominar la formulación de políticas desde finales de los años ochenta, incluso la limitada contribución del Estado de bienestar al mínimo social ha sido severamente restringida por la implementación de los principios de “finanzas sanas” y “racionalización” del gasto público —que justificaron la privatización de la provisión de estos recursos, la congelación de los salarios en el sector público, la eliminación de los subsidios y los despidos masivos de empleados del sector público—. La consecuencia inmediata, ahora un hecho verificado, ha sido el aumento de los índices de pobreza y el empobrecimiento de los trabajadores que no pueden

permitirse pagar los precios más altos fijados por el mercado para acceder a estos recursos.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países industrializados avanzados han experimentado tanto con las estrategias intervencionistas como con las de libre mercado. Y si vamos a juzgar las políticas por sus efectos, entonces la elección de la estrategia no necesita realmente mucho debate y justificación. El capitalismo floreció y tuvo sus “años gloriosos” cuando la estrategia intervencionista alcanzó su apogeo. Las recesiones y crisis devastadoras se volvieron recurrentes cuando el Estado se retiró y cuando las regulaciones fueron desmanteladas y las fuerzas del mercado se liberaron. Las políticas orientadas al mercado han producido mucha miseria humana y eso puede y debe ser detenido. Existe una necesidad urgente de institucionalizar políticas sociales y económicas inteligentes para erradicar todas las formas de pobreza y privación. En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad moral y legal última de diseñar un sistema económico que asegure la distribución equitativa de los recursos para el bienestar de todos los ciudadanos y de desechar un sistema que sirve a los intereses de una clase social dominante a expensas de los demás.

La idea del Estado como empleador de primer recurso (EPR) puede sonar peculiar al principio, pero después de una seria reflexión, tiene sentido. Otros han argumentado que el Estado debería actuar en cambio como un empleador de último recurso (EUR) —contratando a los trabajadores solo cuando no encuentran trabajo en el sector privado (por ejemplo, Wray, 2010; Mitchell y Wray, 2005)—. Pero tal estrategia no cambia en nada la estructura de clases del capitalismo con su distribución desigual y su desarrollo desigual, que es la principal fuente de desempleo permanente y a menudo creciente. Seccareccia (2013) argumentó que los trabajadores del EUR continuarían jugando esencialmente el mismo papel que el conjunto de trabajadores desempleados existentes y que la estrategia no altera la relación de poder en el “mercado laboral”, lo que significa que los niveles de empleo seguirían dependiendo del “estado de confianza” del capitalista. Por el

contrario, el Estado como EPR puede dirigir sus empresas hacia sectores y actividades generadoras de empleo, creando así fácilmente puestos de trabajo cualificado, socialmente útiles y productivos que paguen buenos salarios y contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la economía.

Los economistas y los responsables políticos conservadores se oponen con vehemencia a esta estrategia de pleno empleo, alegando que: (i) el Gobierno no puede permitirse todos estos gastos; y (ii) si el Gobierno se aventurara más allá de los límites de las “finanzas sanas”, causaría un déficit presupuestario que arruinaría la economía a través de la inflación y el aumento de las tasas de interés. Sin embargo, Sardoni (2016) ha demostrado que el pleno empleo en una economía en crecimiento es compatible con el gasto deficitario siempre que el gasto público se dirija al aumento de la eficiencia productiva de la economía. Otros estudios han demostrado que los argumentos de las “finanzas sanas” son simplemente erróneos y fallan miserablemente en el intento de comprender los acontecimientos del mundo real (véase, entre otros, Smithin, 1999, 2016; Davidson, 2015; Lerner, 1949), quienes argumentan que los Gobiernos soberanos que utilizan su propia moneda no se enfrentan a limitaciones de financiación⁴⁹. Varios bancos centrales han coincidido en que este es el caso (véase el capítulo 3 para más detalles al respecto).

Si se puede hacer tan fácilmente, ¿por qué vemos tanto desempleo y pobreza a nuestro alrededor? La respuesta corta es que el nivel de empleo en nuestras economías capitalistas depende de manera crucial de la voluntad de los capitalistas, es decir, del estado de su confianza y de sus expectativas de inversiones rentables, o de lo que Keynes llamó “espíritus animales”. La mayoría de los economistas, en particular los académicos de inspiración keynesiana, reconocen este simple hecho (véase Davidson, 2015: 54). Por eso, todas las políticas económicas que buscan alcanzar niveles de empleo más altos no son en esencia más que un intento de engatusar a los capitalistas y tentarlos a tomar esas decisiones de inversión —como a través de recortes de impuestos, tasas de interés más bajas y demás—. Esto sucede solo porque en las democracias capitalistas

el Estado no es solo un aliado, sino un representante *de facto* de la clase dominante⁵⁰. Esta es la fuente de lo que Kalecki (1943) llamó “los obstáculos políticos al pleno empleo”. Si, en cambio, el papel del Estado fuera servir al interés público, y en particular a los intereses de los trabajadores, entonces las políticas de pleno empleo serían una prioridad.

Kalecki (1943: 326) esperaba que cualquier política que buscara alcanzar y mantener el pleno empleo sería rechazada por principio por la alianza tripartita entre los “capitanes de la industria”, los rentistas y la clase política porque en un estado de pleno empleo permanente, “la posición social del patrón sería socavada y la seguridad en sí mismo y la conciencia de clase de la clase obrera crecerían”. Afirma, asimismo, que desde un punto de vista estrictamente económico, las ventas y, por lo tanto, los beneficios serán mayores si hay una mayor demanda de bienes y servicios; que es lo que ocurre cuando hay un pleno empleo con altos salarios. El mayor costo de los salarios se incluiría en los precios de venta y, por lo tanto, es poco probable que afecte negativamente a los beneficios, pero como Kalecki (1943: 326) mantiene: “‘la disciplina’ en las fábricas y la ‘estabilidad política’ son más apreciadas por los líderes empresariales que los beneficios. Su instinto de clase les dice que el pleno empleo duradero no es sólido desde su punto de vista y que el desempleo debe ser una parte integral del sistema capitalista ‘normal’”.

Esto nos lleva a la conclusión de que la oposición a las políticas de pleno empleo no se debe a razones puramente presupuestarias. Más bien, son la posición política y los intereses a largo plazo de la clase dominante los que dictan tal oposición y por eso Kalecki (1943: 330) esperaba que:

[...] Es probable que se forme un poderoso bloque entre las grandes empresas y los intereses de los *rentistas*, y probablemente encontrarán más de un economista para declarar que la situación es manifiestamente insostenible. La presión de todas estas fuerzas, y en particular de las grandes empresas —por lo general influyentes en los departamentos del Gobierno— induciría muy probablemente al Gobierno a volver a la política ortodoxa de reducción del déficit presupuestario.

Y este retorno tuvo lugar. La austeridad y los principios de las

llamadas “finanzas sanas” son hoy en día el punto de vista dominante en la formulación de políticas; aunque ya en los años cuarenta Lerner (1949: 302) y los formados en el enfoque de las finanzas funcionales se habían quejado de que estos principios son más “apropiados para una tienda de comestibles”, y no para un Gobierno soberano de un país.

De hecho, como ha estado argumentando Lerner (1943, 1946), el Gobierno nacional soberano puede crear dinero para comprar lo que necesite, incluidos los servicios laborales, para regalar a las personas como prestaciones sociales o para prestar a los ciudadanos privados simplemente acreditando las cuentas de los destinatarios previstos cuando el objetivo es aumentar el gasto agregado total con el fin de mantener el pleno empleo y evitar la deflación. Si, por otra parte, el objetivo es reducir el gasto total de la economía, quizás para prevenir la inflación, entonces el Gobierno puede destruir el dinero retirándolo a través de impuestos, préstamos (venta de bonos del Gobierno) o vendiendo otros artículos que están en su posesión. Por eso Lerner (1949: 307) insistió en que “el propósito de los impuestos nunca es recaudar dinero, sino dejar menos en manos del contribuyente” —demostrando así que el principio básico de las “finanzas sanas” es fundamentalmente defectuoso—.

4. CONCLUSIÓN

La escasez económica se convirtió en un problema individual cuando la función de distribución de recursos entre los miembros de la sociedad fue arrebatada por una alianza de “familias poderosas de hombres influyentes [...] la aristocracia gobernante, y [...] la burocracia administrativa”, que utilizaron su posición social para desviar más recursos en beneficio propio. Desde entonces, la noción de escasez se ha convertido en el principio rector de la gestión de los asuntos económicos y sociales. En las sociedades capitalistas modernas, la escasez se utiliza para justificar la existencia del desempleo, el analfabetismo, la falta de vivienda y todas las formas de pobreza. Este capítulo demostró que tal escasez se

construye artificialmente y que un estado de pleno empleo y una distribución más equitativa de la riqueza son perfectamente posibles si dejamos de lado las concepciones erróneas de las “finanzas sanas” y las reemplazamos por una “financiación funcional” que busque crear las condiciones de un “florecimiento masivo”. Como dijo Engels (1884, [1972]: 165), “lo que es bueno para la clase dominante debe ser bueno para toda la sociedad con la que la clase dominante se identifica”. ¿Por qué no?

BIBLIOGRAFÍA

- BANCO DE INGLATERRA (2014): “Money in the modern economy: an introduction”, *Quarterly Bulletin*, 54(1), pp. 4-14, disponible en <https://bitly.ws/3dcce>, consultada el 3 de mayo de 2016.
- (2014): “Money creation in the modern economy”, *Quarterly Bulletin*, 54(1), pp. 14-27, disponible en <https://bitly.ws/3dcce>, consultada el 3 de mayo de 2016.
- BARNES, S. L. (2005): *The Cost of Being Poor: A Comparative Study of Life in Poor Urban Neighborhoods in Gary, Indiana*, Albany, State University of New York Press.
- BONIFACE, P. (2011): *Les Intellectuels Faussaires: Le Triomphe Médiatique des Experts en Mensonge*, París, Éditions JC Gawsewitch.
- BOUGRINE, H. (2006), “Un programme d’action pour l’élimination du chômage et de la pauvreté au Maroc”, *Revue Critique Économique*, n° 17, pp. 25-40.
- (2012): “Fiscal Austerity, the Great Recession and the Rise of New Dictatorships”, *Review of Keynesian Economics*, 1(1), pp. 109-125.
- BOUGRINE, H. y ROCHON, L. P. (2015): “Transformations of Entrepreneurial Capitalism, Crises and the Need for a Radical Change in Economic Policy”, *Review of Keynesian Economics*, 3(2), pp. 181-193.
- BOUGRINE, H. y SECCARECCIA, M. (2002): “Money, Taxes, Public Spending, and the State Within a Circuitist Perspective”, *International Journal of Political Economy*, 32(3), pp. 58-79.
- CARNEIRO, R. L. (1981): “The Chieftdom: Precursor of the State”, en G. D. Jones y R. R. Kautz (eds.), *The Transition to Statehood in the New World*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 37-79.
- DAVIDSON, P. (2010): “Making Dollars and Sense of the U.S. Government Debt”, *Journal of Post Keynesian Economics*, 32(4), pp. 661-665.
- (2015): *Post Keynesian Theory and Policy: A Realistic Analysis of the Market Oriented Capitalist Economy*, Cheltenham, Edward Elgar.

- DARITY, W. (2010): "A Direct Route to Full Employment", *Review of Black Political Economy*, vol. 37, pp. 179-181.
- DE BRUNHOFF, S. (2005): "Marx's Contribution to the Search for a Theory of Money", en F. Moseley (ed.), *Marx's Theory of Money: Modern Appraisals*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- DEATON, A. (2013): *The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality*, Princeton, Princeton University Press.
- ENGELS, F. (1884 [1972]): "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado", *Obras escogidas en dos tomos*, t. II, Moscú, Ed. Progreso.
- FELDSTEIN, M. (2015): "What is Full Employment?", *Project Syndicate*, disponible en <https://bitly.ws/3dcct>, consultada en 20 de mayo de 2016.
- FIELD, A. J. (2012): *A Great Leap Forward: 1930s Depression and U.S. Economic Growth*, New Haven, Yale University Press.
- FORSTATER, M. (2004): "Green Jobs: Addressing the Critical Issues Surrounding the Environment, Workplace and Employment", *International Journal of Environment, Workplace and Employment*, 1(1), pp. 53-61.
- FREIRE, P. (1968 [2000]): *Pedagogy of the Oppressed*, Nueva York, The Continuum International Publishing Group, Inc.
- GALBRAITH, J. K. (2016): *Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future of Europe*, New Haven, Yale University Press.
- GREEN, D. A. y SAND, B. M. (2015): "Has the Canadian Labour Market Polarized?", *Canadian Journal of Economics*, 48(2), pp. 612-646.
- GIOVANNONI, O. (2014): "What Do We Know About the Labor Share and the Profit Share? Part III: Measures and Structural Factors", *Levy Economics Institute of Bard College*, working paper n° 805, disponible en <https://bitly.ws/3dgnE>, consultada el 20 de mayo de 2016.
- GUÉRIN, D. (1945 [1965]): *Fascisme et grand capital*, París, Maspero.
- GUTIÉRREZ, G. (1971 [1975]): *Teología de la liberación: Perspectivas*, Salamanca, Ediciones Sígueme.
- GUTIÉRREZ, G. y MULLER, G. L. (2015): *On the Side of the Poor: The Theology of Liberation*, Nueva York, Orbis Books.
- HAAS, J. (1981): "Class Conflict and the State in the New World", en Jones, G. D. and R. R. Kautz (eds.), G. D. Jones y R. R. Kautz (eds.), *The Transition to Statehood in the New World*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 80-102.
- HENRY, J. F. (2008): "The Theory of the State: The Position of Marx and Engels", *Forum for Social Economics*, 37(1), pp. 13-25.
- HUDSON, M. (2015): *Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy*, Petrolia, Counterpunch Books.
- OIT (2014): *Global Wage Report 2014/2015: Wages and Income Inequality*, Ginebra,

International Labour Office.

JAMISON, A. (1991): “[National Styles in Technology Policy: Comparing the Swedish and Danish State Programmes in Microelectronics/Information Technology](#)”, en U. Hilpert (ed.), *State policies and techno-industrial innovation*, Londres y Nueva York, Routledge, pp. 305-327.

JOSSA, B. (2015): “Historical Materialism and Democratic Firm Management”, *Review of Political Economy*, 27(4), pp. 645-665.

KALECKI, M. (1943): “The Political Aspects of Full Employment”, *The Political Quarterly*, 14(4), pp. 322-330.

KENNEDY, J. F. (1963 [1964]): *Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy: Containing the Public Messages, Speeches, and Statements of the President, January 1 to November 22, 1963*, Washington, D. C., U.S. Government Printing Office.

KEYNES, J. M. (1936): *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Londres, Macmillan.

— (1972): *The Collected Writings of John Maynard Keynes, Volume IX, Essays in Persuasion*, Londres y Basingstoke, Macmillan.

KRUGMAN, P. (1996): “A Country is Not a Company”, *Harvard Business Review*, disponible en <https://bitly.ws/3dcdj>, consultada el 20 de mayo de 2016.

— (2012): *End This Depression Now*, Nueva York, W. W. Norton & Company.

— (2015a): “Debt is Good”, *The New York Times*, disponible en <https://bitly.ws/3dccK>, consultada el 20 de mayo de 2016.

— (2015b): “Austerity’s Grim Legacy”, *The New York Times*, disponible en <https://bitly.ws/3dccU>, consultada el 20 de mayo de 2016.

LENIN, V. I. (1902 [1929]): *What is to be Done? Burning Questions of Our Movement*, Nueva York, International Publishers.

LERNER, A. (1943): “Functional Finance and the Federal Debt”, *Social Research*, 10(1), pp. 38-51.

— (1944 [1949]): *The Economics of Control: Principles of Welfare Economics*, Nueva York, Macmillan.

— (1946): “An Integrated Full Employment Policy”, en A. P. Lerner y F. D. Graham (eds.), *Planning and Paying for Full Employment*, Princeton, Princeton University Press, pp. 163-220.

MACEDO, D. (2000): “Introduction” en P. Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, Nueva York, The Continuum International Publishing Group, Inc., pp. 11-26.

MARX, K. (1867 [1968]): *El Capital*, Moscú, Progress Publishers.

MITCHELL, W. y WRAY, L. R. (2005): “In Defense of Employer of Last Resort: A Response to Malcolm Sawyer”, *Journal of Economic Issues*, 39(1), pp. 235-244.

MOSLER, W. (2010): *The Seven Deadly Innocent Frauds of Economic Policy*, St Croix, Valance Co., Inc.

- OCDE (2012): *OECD Employment Outlook 2012*, París, OECD Publishing.
- (2015): *OECD Employment Outlook 2015*, París, OECD Publishing.
- PALLEY, T. I. (2015a): “Money, Fiscal Policy, and Interest Rates: A Critique of Modern Monetary Theory”, *Review of Political Economy*, 27(1), pp. 1-23.
- (2015b): “The Critics of Modern Money Theory (MMT) are Right”, *Review of Political Economy*, 27(1), pp. 45-61.
- POLLIN, R. (2012): *Back to Full Employment*, Cambridge, The MIT Press.
- ROWLING, J. K. (1998): *Harry Potter and the Sorcerer’s Stone*, Nueva York, Scholastic Press.
- SARDONI, C. (2016): “A Note on the Sustainability of Full Employment in the Presence of Budget Deficits”, *Review of Political Economy*, 28(1), pp. 79-89.
- SCHNEIDER, D.; HARKNETT, K. y McLANAHAN, S. (2016): “Intimate Partner Violence in the Great Recession”, *Demography*, vol. 53, pp. 471-505.
- SCHNEIDER, G. y SUSMAN, P. (2010): “Uneven Development and Grounded Comparative Institutional Advantage: Lessons from Sweden and Mondragon”, *Forum for Social Economics*, vol. 39, pp. 1-11.
- SCHUTZ, E. A. (2011): *Inequality and Power: The Economics of Class*, Nueva York, Routledge.
- SECCARECCIA, M. (2004): “What Type of Full Employment? A Critical Evaluation of ‘Government as the Employer of Last Resort’ Policy Proposal”, *Investigación Económica*, 63(247), pp. 15-43.
- (2013): “Budgetary Deficits and Overhanging Public Debt: Obstacles or Instruments to Full Employment? A Kaleckian/Institutionalist Perspective”, *Journal of Economic Issues*, 47(2), pp. 437-443.
- SMITH, A. (1776 [1979]): *Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, México, FCE.
- SMITHIN, J. (1999): “Money and National Sovereignty in the Global Economy”, *Eastern Economic Journal*, 25(1), pp. 49-61
- (2003-4): “Can We Afford to Pay for Social Programs?” *Studies in Political Economy*, vol. 71/72, pp. 163-176.
- (2016): “Endogenous Money, Fiscal Policy, Interest Rates and the Exchange Rate Regime: A Comment on Palley, Tymoigne and Wray”, *Review of Political Economy*, 28(1), pp. 64-78.
- STIGLITZ, J. E. (2015): “Europe’s Attack on Greek Democracy”, *Project Syndicate*, disponible en <https://bitly.ws/3dcd4>, consultada el 20 de mayo de 2016.
- THURNWALD, R. (1932 [1969]): *Economics in Primitive communities*, Londres, Oxford University Press.
- VAROUFAKIS, Y. (2015): “How Europe Crushed Greece”, *The New York Times*, disponible en <https://bitly.ws/3dcdg>, consultada el 20 de mayo de 2016.

- VEBLEN, T. (1899): *The Theory of the Leisure Class*, Nueva York, Macmillan.
- VICKERY, W. (1994): “Why Not Chock-Full Employment”, *Atlantic Economic Journal*, 25(1), pp. 39-45.
- WOLFF, R. (2012): *Democracy at Work: A Cure for Capitalism*, Chicago, Haymarket Books.
- WRAY, R. (1998a): “Zero Unemployment and Stable Prices”, *Journal of Economic Issues*, 32(2), pp. 539-545.
- (1998b): *Understanding Modern Money*, Cheltenham, Edward Elgar.
- (2010): “The Social and Economic Importance of Full Employment”, en H. Bougrine y M. Seccareccia (eds.), *Macroeconomic Analysis: Issues, Questions and Competing Views*, Toronto, Emond Montgomery.

CAPÍTULO 5

INNOVACIÓN, APROPIACIÓN Y PROGRESO

“Larga vida y prosperidad”.

MR. SPOCK, *Star Trek*.

1. INTRODUCCIÓN

Tras las primeras contribuciones de Schumpeter (1943), hoy en día se acepta como un hecho que la innovación tiene un efecto positivo en el progreso económico, que se basa en la producción, el uso y la difusión continua de nuevas ideas. El tema principal que nos ocupa en este capítulo es averiguar cuál es la fuerza que la impulsa y cómo la innovación puede ser utilizada con éxito para lograr el progreso. Al estudiar el proceso de generación de innovación, algunos han destacado la importancia de los requisitos de financiación y de la rentabilidad para los financiadores y los empresarios de inversiones de riesgo, mientras que otros dan más peso al papel de los incentivos para los posibles inventores y, por lo tanto, piden un sistema más eficaz de derechos de propiedad intelectual. Otros, sin embargo, se oponen a los derechos privados de propiedad intelectual argumentando que limitan la difusión de las ideas y sofocan la innovación al fomentar un comportamiento monopolístico (véase Polanyi, 1944; Baker, 2005; Nicholas, 2011). Pero más allá de las recompensas pecuniarias a los involucrados en la innovación, hay una pregunta más fundamental: ¿de dónde obtienen estos innovadores sus nuevas ideas? O, ¿cómo se produce la innovación?

La innovación no es ciertamente un maná del cielo ni puede ocurrir en el vacío. La innovación se basa en el progreso del conocimiento en general y en el desarrollo de la ciencia teórica en particular, y debe

beneficiarse de él. Sin embargo, algunos académicos como McCloskey (2010: 371) tienden a restar importancia a este punto porque consideran que “no es la ciencia la que ha sido la llave de la puerta de la modernidad, sino el acuerdo más amplio para permitir y honrar la innovación, abriendo los ojos a la novedad, probando las ideas” y que la ciencia es “más un resultado del crecimiento económico que una causa”.

Esta es una controversia importante en la historia del progreso y el desarrollo. ¿Es la ciencia una causa o un resultado del progreso económico? No se trata de una cuestión semántica, ya que tiene implicaciones reales para los países en desarrollo: ¿cómo pueden conseguir el desarrollo si la ciencia no es la clave? ¿Cuál fue la fuerza motriz de la industrialización y el desarrollo de Gran Bretaña y otros países europeos? ¿No fue la Revolución Industrial impulsada por la ciencia? El debate se refiere a lo que se ha dado en llamar la “gran divergencia”, en la que los historiadores económicos intentan explicar por qué la Revolución Industrial se produjo primero en Gran Bretaña y no en otros países como China, por ejemplo. Los dos lados del debate son: i) los que destacan el papel de la burguesía, su iniciativa privada y la difusión de sus valores de libertad y dignidad; y ii) los que insisten en el papel crucial del Estado y su aparato institucional, desde la banca hasta los sistemas jurídicos y el Ejército, para allanar el camino y apoyar el ascenso de la burguesía.

El siguiente apartado revisa y compara las ideas de ambos lados del debate e intenta sacar conclusiones sobre lo que puede ser una mejor práctica para fomentar la innovación. El tercer apartado examina más de cerca el sistema de patentes y evalúa sus implicaciones para el progreso y el desarrollo en las sociedades capitalistas modernas, en particular para los países pobres. Las observaciones finales se encuentran en el último apartado.

2. EL GRAN SALTO ADELANTE DE LA HUMANIDAD: LA INNOVACIÓN Y EL PAPEL DEL ESTADO

Prácticamente todos los historiadores están de acuerdo en que, sobre todo después de la Revolución Industrial, la humanidad ha dado un gran salto adelante en su búsqueda por superar las dificultades de la vida impuestas por la crueldad de la madre naturaleza. Este gran éxito se atribuye en gran parte a la mejora de una cosa: el conocimiento. De hecho, toda la historia de la humanidad podría resumirse en la evolución de su aprendizaje: aprender a hacer mejor las cosas y a poner más cosas a disposición para satisfacer sus necesidades. La acumulación relativamente rápida de tal conocimiento es, de hecho, lo que distingue a los humanos de otras criaturas. Gran parte de este conocimiento se ha adquirido ciertamente a través del aprendizaje práctico, pero este proceso no puede disociarse del pensamiento y la teorización, es decir, del desarrollo de nuestra comprensión científica y filosófica de las cosas y de las circunstancias que rodean nuestra existencia en la Tierra. Sin embargo, hay algunos estudiosos que afirman que el desarrollo tecnológico, incluida la Revolución Industrial, solo es atribuible a las ideas de los hombres prácticos y no a la ciencia teórica.

McCloskey (2010), por ejemplo, argumenta que la tecnología industrial puede desarrollarse independientemente de la ciencia y, por lo tanto, insiste en separar la una de la otra. Esto es algo sorprendente porque la tecnología es necesariamente la encarnación de ideas —ideas científicas, que surgen de pensar y teorizar sobre la forma y la estructura de las herramientas por hacer, los objetos por construir, y eso es ciencia teórica—. La teorización no solo la realiza el estudioso en el laboratorio, sino también el artesano en el taller. Por ello, los avances tecnológicos durante la Revolución Industrial se han basado en conceptos operativos desarrollados por la ciencia moderna y derivados de ella, que se basaban en el ensayo y el error, combinando así la formación práctica y teórica (véase De Santillana, 1964; Hall, 1964). Sin embargo, separar la tecnología de la ciencia tiene un propósito. Permite a McCloskey, por ejemplo, argumentar que el desarrollo industrial está impulsado por la innovación, y eso es claramente cierto; pero lo más importante es que legitima la pregunta de por qué esta innovación no ocurrió antes y por qué

no ocurre en todas partes. La respuesta clara de McCloskey es que el verdadero motor reside en los principios económicos liberales o lo que ella llama la “dignidad y libertad burguesa” —que es el tema de su libro—.

McCloskey (2010) duda de que la ciencia tenga mucho que ver con la Revolución Industrial y niega que la innovación necesite de la ciencia. Para ella, la tecnología y sus aplicaciones industriales son el gran regalo de la burguesía a la sociedad. Pero para que la burguesía haga su regalo, debe ganarse el respeto, es decir, debe prevalecer su dignidad y libertad. A fin de fundamentar su argumento, McCloskey (2010: 358) examina los “inspiradores descubrimientos del universo newtoniano como un mecanismo de relojería y la gran matematización europea de la mecánica terrestre y celestial en el siglo XVIII” y observa que “no tuvieron prácticamente ninguna aplicación industrial directa hasta finales del siglo XIX como muy pronto” —es decir, hasta que los valores burgueses florecieron en Europa occidental—. McCloskey (2010: 363) extiende su argumento a otras partes del mundo y afirma que: “[...] Un problema que tienen que enfrentar los defensores de la ciencia como causa [...] es que la ciencia y la tecnología china, y en un momento dado la islámica, por separado y en conjunto, y su erudición humanística, fueron hasta hace muy poco superiores a la ciencia y la Ilustración occidentales en la mayoría de los aspectos, y sin embargo no dieron lugar a ninguna Revolución Industrial”.

De manera similar, sostiene que “[...] la invención de Grecia de la mayoría de las artes y ciencias (con préstamos de fuentes orientales), y su libertad parcial para dudar de los dioses, no había revolucionado la economía griega ni enriquecido a sus pobres. La antigua sociedad griega despreciaba el trabajo físico como algo esclavo y femenino [...] y sobre todo despreciaba a la burguesía”.

La idea de que los valores burgueses de dignidad y libertad son *los* determinantes esenciales de la innovación impone un camino único de desarrollo a todas las sociedades y considera que el capitalismo de estilo occidental es el único camino exitoso para lograr la industrialización y el

progreso. Estos argumentos se basan en una lectura particular de la historia, que fue popularizada, entre otros, por Pollard (1968: 29-30) en su libro *The Idea of Progress*, en el que afirmaba que “[...] gran parte de la ciencia del propio Renacimiento surgió no en laboratorios aislados, sino en los talleres de artesanos y oficiales”, y que el progreso era obra de “los comerciantes y fabricantes, los propietarios de minas y molinos y de bancos, y sus técnicos y gerentes y médicos y oficinistas [...] [que] tenían poco respeto por los privilegios del nacimiento o por los derechos divinos, pero exigían en cambio recompensas por los méritos, la libertad de contacto, la protección de la propiedad y la indefensión del trabajo, y al final ganaron, porque su economía era la más eficiente”.

Hall (1964: 21-22), sin embargo, señaló que los llamados *tinkerers*⁵¹ eran de hecho profesionales tales como “profesores universitarios, profesores de matemáticas, anatomía y medicina” y practicantes: “médicos, topógrafos, marineros, boticarios, cirujanos y otros comerciantes”, quienes habían adquirido conocimientos científicos y ocupaban posiciones dentro de la jerarquía científica: “Algunos los habían ganado a través de estudios académicos, otros a través de la educación e investigación privada, otros nuevamente a través del aprendizaje y la búsqueda de una ocupación estrechamente relacionada con la investigación científica”. Y así “de esta manera, la cabeza y la mano se unieron para el beneficio de la ciencia” (Marsak, 1964: 2). En este sentido, cabe señalar que, obviamente, en la Edad de Piedra, ni siquiera el mejor de los artesanos podría haber conseguido el artilugio más tedioso que está disponible hoy en día. Sencillamente no tenían la capacidad teórica para imaginarlo ni el conocimiento científico para diseñarlo y fabricarlo. Sin embargo, como señaló Wright (2004: 26) “[...] un niño del paleolítico tardío arrebatado de una hoguera y criado entre nosotros ahora tendría una oportunidad equitativa de obtener un título en astrofísica o informática”.

James Watt no solo soñó con la máquina de vapor. Su abuelo era profesor de matemáticas y su padre era arquitecto y constructor de barcos, y desde muy joven hacía maquetas de máquinas en el taller de su

padre (véase Mantoux, 1928: 318). James Watt era un científico entrenado y solo mejoró la máquina de vapor que ya había sido inventada por Thomas Newcomen en 1712 (McCormick, 1998), quien, a su vez, como señala Spier (2010: 175), solo había “mejorado el diseño de un ‘coche de bomberos’ ya existente (que era una máquina de vapor primitiva)”. En cualquier caso, como observó Asimakou (2009:61), “[...] la innovación nunca es una idea de un hombre; las ideas se construyen socialmente y se redefinen durante un largo periodo de tiempo”. Al igual que James Watt, otros que han contribuido a las innovaciones tecnológicas durante la Revolución Industrial también han aprendido su ciencia mientras ejercían su oficio y no solo sentándose en los bancos y escuchando conferencias académicas en las universidades. Pero esto no debe ser visto de ninguna manera como un desacoplamiento de la tecnología de la ciencia.

La innovación, tanto en la tecnología como en otros campos, es un proceso dinámico e históricamente se ha movido en paralelo con el desarrollo de la ciencia y el conocimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque la máquina de vapor se inventó en 1712, se necesitaron 100 años para lanzar el primer barco de vapor con éxito comercial en 1807 por Robert Fulton (McCormick, 1998). Sin embargo, esto no hace que la innovación sea lineal ni impone las necesarias etapas sucesivas de desarrollo. Los países pueden dar un salto y la tecnología —y el conocimiento que conlleva— podría obviamente ser robada, copiada o “sacada de la estantería”, como dice McCloskey. Sin embargo, el supuesto simplista de sacar la tecnología de la estantería ignora dos importantes barreras que enfrentan los países pobres: las limitaciones impuestas por las leyes sobre patentes y derechos de propiedad intelectual y el acceso a la financiación internacional, temas que trataremos en el capítulo 6.

De hecho, esto es lo que han hecho los europeos. McCloskey (2010: 104-5) señaló que “a partir del siglo XVII los europeos, en una creciente ola de creatividad, robaron, copiaron, adoptaron, mejoraron, extendieron, hicieron ingeniería inversa y, sobre todo, aplicaron lo que habían

aprendido de los chinos y de cualquier otra persona con la que se encontraron en sus peregrinaciones fanáticas y provechosas”.

En su estudio de la gran divergencia entre Gran Bretaña y China durante el periodo 1680-1850, Vries (2015: 361) prestó especial atención al papel desempeñado por el Estado y concluyó que

como un número cada vez mayor de estudiosos se da cuenta, existían vínculos bastante estrechos entre el comercio, el intercambio y el imperio intercontinentales por un lado y el auge de la “ciencia”, o, si es una palabra demasiado grande, la acumulación de conocimientos útiles y fiables por el otro. Aunque las iniciativas (semi) privadas ciertamente jugaron un papel importante, la importancia del Estado en este sentido no puede ser pasada por alto. Tanto los particulares como los Gobiernos estaban muy interesados en recopilar información de cualquier tipo⁵².

En su estudio histórico, *The World Economy: A Millennial Perspective*, Maddison (2006: 23-25) proporcionó datos que se remontan al año 1000 y recordó importantes hechos históricos para mostrar que antes de su ascenso industrial, Gran Bretaña se había beneficiado enormemente de la hegemonía comercial que había asegurado mediante conflictos armados, leyes de navegación restrictivas, la práctica de la política de “empobrecer al vecino” y lo que él llamó “imperialismo de libre comercio”, que impuso a sus colonias. Mantoux (1928: 271), que estudió con gran detalle el auge de la manufactura en Gran Bretaña en su clásico *The Industrial Revolution*, señaló que “los comienzos de la industria de la maquinaria pertenecen a la historia de los oficios textiles, pero su triunfo final en todo el mundo solo fue posible gracias al desarrollo de las industrias del metal”. Añadió que:

El comercio británico de metales se encontraba en un estado precario y, si algunas de las industrias secundarias todavía tenían una vitalidad comparativa, esta se mantenía solo gracias a la importación de minerales suecos y rusos. Como no podía ser autosuficiente, Inglaterra pensó que al menos podía obtener todo su material en bruto o semielaborado de sus territorios de ultramar, manteniendo

contra ellos un estricto monopolio de los productos manufacturados. Fomentar la producción de hierro en barras o en lingotes en esas dependencias, mientras que por otro lado se prohibía toda competencia con las industrias de Sheffield y Birmingham, fue la política adoptada a partir de 1696 por el Gobierno nacional (1928: 280).

La intervención del Gobierno y el apoyo a la industria “nacional” fueron una parte esencial de la industrialización en Gran Bretaña desde los primeros días del capitalismo. De hecho, ya en aquellos días, la participación del Gobierno se extendió para apoyar incluso la investigación y la innovación. Sobel (1995: 6) escribió que, durante la Era de la Exploración, “a medida que más y más barcos de vela se ponían en marcha para conquistar o explorar nuevos territorios, para hacer la guerra, o para transportar oro y productos básicos entre tierras extranjeras, la riqueza de las naciones flotaba en los océanos”. Pero en ese momento nadie sabía cómo determinar la longitud de un barco en el mar. Como consecuencia, muchos barcos se hundieron y se perdieron miles de vidas. Uno de estos trágicos accidentes ocurrió el 22 de octubre de 1707 en las islas Sorlingas, donde “cuatro buques de guerra británicos encallaron y casi 2.000 hombres perdieron la vida”. Esto representó también una pérdida de honor para Gran Bretaña, que dependía del “dominio de los mares para la seguridad y el comercio” (véase Spencer, 2012). Para resolver el problema de la longitud, Sobel (1995: 8) recuerda que:

Los Gobiernos de las grandes naciones marítimas —incluyendo España, Países Bajos, y ciertas ciudades-estado de Italia— periódicamente enturbiaban el fervor ofreciendo bolsas de premio mayor por un método viable. El Parlamento británico, en su famosa Ley de Longitud de 1714, estableció la mayor recompensa de todas, fijando un premio igual al rescate de un rey (varios millones de dólares en la moneda actual) por un medio “práctico y útil” para determinar la longitud.

John Harrison, “el genio solitario” como lo llamó Sobel, respondió al anuncio y finalmente fue capaz de encontrar una solución y, como señaló

Spencer (2012: 40), “la Ley de Longitud resultó en la invención del cronómetro marino, lo que resolvió el problema que la ley buscaba abordar. Pero la ley en sí misma también fue un invento importante: el desafío de la innovación abierta, bien definida y orientada a objetivos”. De hecho, lo más importante es que este invento fue, al igual que muchos otros, el resultado de un apoyo y un estímulo activo por parte del Gobierno (la reina, el parlamento y el almirantazgo). En otras palabras, la dignidad y la libertad de la burguesía no tienen nada que ver con esto. Había una necesidad pública urgente de encontrar una solución a un problema desafiante y las instituciones públicas —no la burguesía— tomaron la iniciativa de patrocinar y financiar la búsqueda de esa solución, cuyos beneficios debían ser cosechados por toda la sociedad. Al inventor se le pagó una suma global con fondos públicos y se suponía que no debía retener ningún derecho de propiedad intelectual duradero sobre su descubrimiento. El concepto de la propiedad del conocimiento y las ideas se introdujo más tarde con el surgimiento de la ideología del libre mercado a principios del siglo XIX.

La recompensa prometida por la Ley de Longitud de 1714 por una solución innovadora a través de un premio a pagar con fondos públicos no era nueva ni única en su época, pero instituyó un proceso que se ha convertido en una tradición desde principios del siglo XVIII. Conscientes de la importancia del progreso tecnológico y de sus efectos en el desarrollo económico de sus países, los Gobiernos invitan regularmente a científicos y a mentes curiosas a participar en proyectos innovadores para resolver problemas concretos o para ampliar las fronteras del conocimiento científico. Desde la Francia de Napoleón Bonaparte hasta Estados Unidos bajo la administración de George Washington, los Gobiernos financiaron públicamente la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En la tabla 5.1 se presentan algunos de los ejemplos más conocidos de premios y financiación pública ofrecidos en varios países para fomentar la investigación y la innovación en diversos ámbitos. El equivalente moderno de la Ley de Longitud es el apoyo de los Gobiernos, a través de sus diversas agencias, a la Investigación y

Desarrollo (I+D) que está tan extendida, especialmente en los países más avanzados industrialmente.

TABLA 5.1

PREMIOS PÚBLICOS OFRECIDOS POR LA INNOVACIÓN

AÑO	FINANCIACIÓN PÚBLICA O PREMIO POR	OFRECIDO POR
1598	Longitud (intento de Galileo)	Gobierno de España (Rey Felipe III)
1666	Longitud (investigación en astronomía)	Gobierno de Francia (Rey Luis XIV)
1714	Longitud	Gobierno de Reino Unido (Ley de Longitud)
1794	Piezas intercambiables (por ejemplo, armas)	Gobierno de EE UU (George Washington)
1795	La conservación de los alimentos	Gobierno de Francia (Napoleón Bonaparte)
1810	Remolacha azucarera	Gobierno de Francia (Napoleón Bonaparte)
1810	El lino que gira	Gobierno de Francia (Napoleón Bonaparte)
1887	Medicina	Gobierno de Francia (Napoleón Bonaparte)
1919	Vuelo de Inglaterra a Australia	Gobierno de Francia (Napoleón Bonaparte)
1800s -	Innovación agrícola	Gobierno de EE UU (John F. Kennedy)
1900s	Innovación tecnológica	Gobierno de EE UU (Richard Nixon)
1800s -	La energía nuclear	Varios gobiernos (EE UU, Canadá, Francia, etc.)
1900s	Microchips	
1950s	Investigación biomédica	
1960s	Desarrollo de la industria informática,	
1970s	farmacéutica-biotecnológica	
1980s -	y nanotecnológica, internet y la tecnología verde	

Fuente: Basado en datos de Sobel (1995), Nicholas (2011), Breakthrough Institute (2010) y Mazzucato (2014).

Ya a finales del siglo XIX, los Gobiernos consideraban que la financiación estatal de la ciencia y la tecnología era una necesidad para asegurar no solo el crecimiento económico y el progreso en sus propios países, sino también para preservar la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad nacional, una cuestión de orgullo nacional. En consecuencia, la mayoría de los Gobiernos de Europa occidental y América del Norte ya habían adoptado una *política científica* y establecido consejos de investigación y ministerios de ciencia y tecnología para promover la investigación científica y el desarrollo de la tecnología (industrial). La financiación pública de la investigación básica fue una gran ayuda para la burguesía, que la consideró simplemente como un “cebado de la bomba”,

ya que se esperaba que los principales beneficios se obtendrían cuando las aplicaciones prácticas surgieran al final de la “tubería” de innovación en forma de “inventos” que luego se *patentarían*.

En un estudio de la política científica en Canadá, Clowater (2012: 110) señaló que:

Dado que se podría esperar que el sector privado invirtiera poco en la ciencia básica, era responsabilidad del Gobierno federal proporcionar esta inversión, ahora reconocida como un bien público. Dado que los avances fundamentales no podían preverse ni, al parecer, su curso estaba guiado por la política, el papel del Estado es proporcionar fondos “de buena fe” a los científicos, con el fin de preparar el canal que generaría los beneficios sociales y económicos de los descubrimientos. Sin embargo, la responsabilidad especial de la preparación no excluía la necesidad de una fuerte financiación gubernamental y la dirección de políticas en otras etapas del proceso de innovación lineal, ya sea a través de la adquisición, el estímulo directo a la I+D industrial o los proyectos de “gran ciencia” de importancia nacional más allá del alcance del sector privado.

Este enfoque intervencionista de la ciencia y la tecnología fue indiscutible durante más de dos siglos. Durante gran parte del siglo XX, la promoción de la ciencia se ha convertido en un principio central de la política gubernamental a medida que el Estado, tanto en los países industrializados como en los países de reciente industrialización (PRI), se ha vuelto mucho más agresivo y ha empezado a desempeñar el papel de líder en innovación al realizar inversiones de alto riesgo en proyectos innovadores. Como señalan Link y Link (2009: 19), la razón de esa deseada participación del Gobierno es obvia, ya que: “La oportunidad que se presenta con respecto a la política tecnológica es la provisión de un bien público o cuasi público —la propia infraestructura tecnológica— que aprovecha la capacidad de las empresas y otros actores de un sistema nacional de innovación para participar eficientemente en el proceso de innovación [...] y contribuir así al crecimiento económico basado en la tecnología”.

La política científica es a veces rechazada por los economistas

neoliberales y los políticos conservadores, quienes creen en la supremacía del mercado y atribuyen los grandes inventos a valores burgueses. Por ejemplo, en la introducción de su libro, McCloskey (2010: 15), después de dar las gracias a Google, escribió:

No puedo dar las gracias al propio internet, porque es un orden espontáneo que surge de gente innovadora y burguesa, y no tiene ningún empresario o burócrata identificable a quien agradecer. Sin embargo, pensándolo bien, las palabras electrónicas que se forman dentro de los salones virtuales de Gutenberg, Google y Wiki [...] también dependen en gran medida de los pedidos espontáneos y de la creatividad burguesa —que es el punto de este libro—.

Sin embargo, como ha demostrado Mazzucato (2014), el Estado ha hecho más que proporcionar una infraestructura tecnológica para aprovechar la capacidad de las empresas privadas; ha ido un paso más allá al invertir en tipos de innovación pioneros como los que llevan a internet, Google, iPhone, o el desarrollo de nuevos medicamentos farmacéuticos y tecnología verde. Así que cuando se trata de los grandes descubrimientos, es el Gobierno el que realmente merece el elogio, no la burguesía. A través de su lectura perceptiva de la historia de la innovación, Mazzucato (2014) ha documentado con fuerza el papel de liderazgo del Estado en el desarrollo y comercialización de estas y muchas otras innovaciones que fueron identificadas como cruciales y elegidas como ganadoras en los países más industrialmente avanzados.

En su reseña del libro de Mazzucato, *The Entrepreneurial State*, Madrick (2014) se refirió al conocido mantra antigubernamental de Milton Friedman observando que “tal vez podríamos perdonar los comentarios mal informados de Friedman como un estallido de entusiasmo ideológico si tantos economistas y ejecutivos de negocios no aceptaran este mito como en gran parte verdadero”. Sin embargo, el peligro de este mito es real y sus consecuencias se revelan desastrosas cuando los responsables políticos formulan sus políticas sobre esa base. No solo descarrila o retrasa el progreso en los países industrialmente avanzados, sino que literalmente lo mata *ab ovo* en aquellos países que necesitan

desesperadamente romper el ciclo de pobreza y dependencia. Lamentablemente, los responsables de la formulación de políticas en estos países aceptan el mito como verdadero porque se les vende en forma de asesoramiento político por parte de los llamados “expertos” de poderosas organizaciones internacionales. A menos que los países pobres y “emergentes” adopten estrategias de desarrollo orientadas a las políticas en las que el Estado desempeñe el papel principal, como en Corea y otros PRI, seguirán comprando y dependiendo de tecnología obsoleta y, por lo tanto, permanecerán como rezagados mientras que otros cantan las alabanzas del libre mercado y el capitalismo.

3. LA MERCANTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LAS PERSPECTIVAS DE PROGRESO

La esencia del desarrollo y el progreso humanos reside en la búsqueda del conocimiento científico y su difusión a la población en general, de manera que mejore nuestra comprensión de nosotros mismos y de los fenómenos en curso en la sociedad y en la naturaleza. Aunque, con el tiempo, el conocimiento científico tiende a llegar a la gente, de una forma u otra, para desempeñar su esperado papel emancipador y liberador, su producción sigue siendo el acto de ciertos grupos privilegiados de la sociedad⁵³.

También se plantea la cuestión de quién decide los criterios que deben utilizarse para evaluar la corrección de las interpretaciones que ofrece lo que llamamos conocimiento “científico”. Como señaló Potter (1962: 6), “la ciencia es conocimiento, pero no es sabiduría. La sabiduría es el conocimiento de cómo usar la ciencia y cómo equilibrarla con otros conocimientos”. En efecto, sin sabiduría la ciencia puede extraviarse y las invenciones o innovaciones pueden volverse erróneas. La filosofía de la ciencia puede ser una fuente de sabiduría en el sentido de que tiende a invitarnos a juzgar todas las proposiciones —tanto en la genética como en la economía— por sus efectos sobre nosotros como seres humanos y sobre nuestro medioambiente. Sin embargo, aunque se espera que el

conocimiento científico sea el medio por el cual la humanidad logre una mejora en su bienestar económico, cultural e intelectual, incluyendo la forma en que los individuos se relacionan entre sí y con su entorno, una serie de innovaciones (científicas) basadas en el conocimiento desde el comienzo de la Revolución Industrial han tenido un daño duradero en los medios sociales y naturales y sus constituyentes (Leiss, 1994). Por lo tanto, el desarrollo como un propósito superior de la vida requiere no solo que todos tengan derecho a disfrutar de los frutos de la innovación sino, con mayor razón, el derecho a ser protegidos de sus efectos nocivos.

De hecho, incluso una lectura superficial de la historia reciente de la innovación nos lleva a reconocer que no todas las innovaciones son o han sido beneficiosas para la humanidad; y, sin embargo, han sido legitimadas y adoptadas para su uso en nuestras sociedades modernas e industriales. Los ejemplos van desde la introducción de productos químicos tóxicos en la producción agrícola hasta las bombas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Esto pone de relieve la importante cuestión de por qué se adoptan ciertos tipos de innovaciones tecnológicas y otros no (por ejemplo, la energía de los combustibles fósiles frente a la energía solar) y, más en general, quién controla la producción de conocimientos científicos y quién se beneficia de ellos. Para responder a esta pregunta, es necesario estudiar las relaciones de poder entre los individuos, las clases sociales y las naciones, ya que es aquí donde se ejerce el poder, como ha argumentado Foucault (1980). Dado que el poder y el conocimiento no pueden ser estudiados por separado, las normas y direcciones para la investigación y el conocimiento científico, así como sus aplicaciones tecnológicas, también se establecen dentro de estas relaciones de poder.

McCormick (1998) ofrece un buen resumen de los principales acontecimientos históricos que dieron lugar a importantes invenciones durante la primera y la segunda Revolución Industrial. El único acontecimiento que verdaderamente revolucionó la sociedad capitalista fue la introducción de la producción masiva de mercancías que, como relata McCormick, surgió de la idea de hacer disponibles piezas intercambiables para reparar armas —un proyecto que fue financiado por

el Gobierno de EE UU en 1798 bajo la administración del presidente Thomas Jefferson—. Desde entonces, y con el auge del capitalismo industrial, se han establecido claramente las normas y direcciones: la tecnología se diseñaría principalmente para realizar tareas específicas con el objetivo de reducir los costes y aumentar la eficiencia para hacer que la inversión o toda la empresa valga la pena. La tecnología de la producción en masa se basa en la velocidad y la eficiencia, que tienen el resultado obvio de mejorar la rentabilidad, en particular mediante la reducción de los costes en términos de mano de obra. En su libro *Fascism*, Mark Neocleous (1997) explica cómo los fascistas y los nazis estaban tan fascinados, e incluso obsesionados, por la eficiencia, la velocidad y la innovación tecnológica bajo el capitalismo. Admiraban esta triple combinación, particularmente porque permitía aumentos sin precedentes de la productividad bajo la “gestión científica” tal como la aplicaban el taylorismo y el fordismo durante las décadas de los veinte y los treinta. Por lo tanto, el desarrollo del capitalismo y el progreso tecnológico estuvieron entrelazados desde el comienzo de la revolución industrial, particularmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos.

La burguesía de estos países, a diferencia de aquella de los “imperios orientales”, ya había desarrollado una comprensión práctica del papel potenciador de la tecnología en la economía y en la sociedad —una comprensión que a menudo se atribuye a la influencia del legado filosófico de Francis Bacon, que tanto idealizó el papel de la tecnología en la mejora de las “capacidades prácticas” de quienes la poseen—, de ahí su énfasis en el conocimiento como poder (véase Leiss, 1994). Esto explica la prisa de aquellos que tenían “capital” para adquirir las máquinas y establecer el sistema de fábrica⁵⁴. En su estudio meticulosamente detallado de la Revolución Industrial del siglo XVIII, Mantoux (1928: 368) hizo la interesante observación de que los inventores (o innovadores) no formaban parte de la clase emergente de fabricantes y, como él mismo dijo, “uno podría esperar encontrar en esta primera generación de grandes fabricantes a los hombres que con sus inventos habían iniciado la Revolución Industrial. Pero no pasó nada de

eso”. Mantoux mencionó que había quizás dos excepciones, que incluían la empresa de James Watt, pero señaló que esta última “ciertamente le debía mucho a su socio Matthew Boulton [que era un hombre de negocios]”.

El hecho de que los primeros inventores permanecieran fuera y no se convirtieran en industriales era un indicio de la cultura que prevalecía durante este periodo. Los nuevos “capitanes de la industria” estaban ansiosos por conseguir cualquier máquina que les beneficiara mejorando sus medios de producción, y en esta prisa no podían preocuparse menos por los derechos de patente del inventor. Por el contrario, se comportaron como si todos los inventos y cualquier innovación al respecto estuvieran abiertos y fueran de libre uso para todos. Como escribe Mantoux (1928: 373):

[...] Siguiendo los dictados del interés propio trabajaron incansablemente para reducir a la nada los derechos legítimos del inventor. Esta conducta, cuestionable, aunque lo suficientemente humana, queda abundantemente ilustrada por el comportamiento de los hilanderos con Hargreaves y Crompton [que inventaron la hiladora *jenny* y la “mula”], de los ferrones con Henry Cort [que inventó pudelaje de hierro], y por los innumerables pleitos que Boulton y Watt tuvieron que entablar contra los que usaban sus motores.

Este periodo algo caótico, sin embargo, fue una bendición, ya que la Revolución Industrial no se habría desarrollado al ritmo que lo hizo si todos los inventos se hubieran mantenido en secreto y hubieran estado protegidos por estrictas patentes monopolísticas.

Como se mencionó anteriormente, aunque las principales innovaciones fueron emprendidas y financiadas por el Estado, con el auge del capitalismo de libre mercado la innovación tecnológica en sí se ha convertido en una actividad empresarial que atrae el interés de ricos empresarios y grandes corporaciones. Los inversionistas buscaron entonces no solo proteger sus productos (a través de licencias de uso), sino especialmente establecer la propiedad sobre la idea misma que está detrás de la innovación —de ahí el establecimiento de los derechos de

propiedad intelectual (DPI)—. Esto se ha hecho particularmente evidente en el capitalismo tardío, donde los derechos de propiedad de cada gran “innovación” están protegidos por leyes estándar universalmente reconocidas sobre la propiedad intelectual, con la excepción de unas pocas innovaciones de código abierto que caen en el dominio público. En este sentido, el conocimiento se ha convertido claramente en un valioso activo que otorga poder y ventajas económicas a su poseedor y que difícilmente puede ser considerado un bien público.

En particular, el acceso al conocimiento científico y a las tecnologías basadas en él no es gratuito, lo que explica en gran medida por qué quienes no pueden permitírselo permanecen en la parte inferior de la escala de progreso. También explica el retraso en el progreso, o al menos el lento progreso, hacia procesos y métodos más elevados para asegurar nuestros productos materiales, como por ejemplo a través de la energía limpia. La razón es, de hecho, bastante simple y ha sido explicada hace mucho tiempo por Michael Polanyi (1944: 62)⁵⁵, quien declaró que:

[...] El beneficio total del conocimiento solo se cosecha cuando su circulación es libre. Si es necesario poner a prueba su valor económico cobrando un precio por su uso, y por tanto limitar dicho uso, la sociedad se empobrece. El efecto es más severo, ya que este tipo de limitaciones restringen necesariamente el campo en el que una nueva técnica industrial se conoce en la práctica y, por lo tanto, amortiguan el estímulo que puede dar a un mayor desarrollo técnico.

Y argumentó además que:

[...] Está en la naturaleza del conocimiento —en contraste con los recursos materiales— que mientras más personas lo usan al mismo tiempo, más tiende a crecer y a beneficiar a cada uno de sus usuarios. La forma adecuada de asegurar que un invento será utilizado de la mejor manera posible es darle plena publicidad y permitir su libre aplicación por todos. Cualquier gestión propietaria de conocimiento útil es [...] tanto irracional como abierta a graves abusos (1944: 65).

En este excelente, pero ampliamente ignorado, estudio del sistema de

patentes, Michael Polanyi muestra de manera convincente que los derechos monopolísticos conferidos a los inventores y sus patrocinadores a través de las patentes van en contra de los mejores intereses de la sociedad. Mientras que los efectos nocivos de tales monopolios restrictivos son, hasta cierto punto, obvios y han sido estudiados por otros, el aspecto irracional del derecho de patentes enfatizado por Karl Polanyi (1944: 70-71) es particularmente perspicaz, por lo que estaría justificado citarlo aquí *in extenso*:

Creo que la ley es esencialmente deficiente, porque apunta a un propósito que no puede ser alcanzado racionalmente. Intenta dividir una corriente de pensamiento creativo en una serie de reivindicaciones distintas, cada una de las cuales debe constituir la base de un monopolio de propiedad separada. Pero el crecimiento del conocimiento humano no puede dividirse en fases tan marcadamente circunscritas. Las ideas suelen desarrollarse gradualmente por tonos de énfasis, e incluso cuando, de vez en cuando, las chispas del descubrimiento se encienden y revelan repentinamente una nueva comprensión, suele aparecer en un examen más detallado que la nueva idea había sido al menos parcialmente prefigurada en especulaciones anteriores. Además, el descubrimiento y la invención no progresan solo a lo largo de una secuencia de pensamiento, que tal vez podría dividirse de alguna manera en segmentos consecutivos. El progreso mental interactúa en cada etapa con toda la red de conocimientos humanos y se nutre en cada momento de los más variados y dispersos estímulos. La invención, y en particular la invención moderna que se basa cada vez más en un proceso sistemático de ensayo y error, es un drama que se representa en un escenario lleno de gente. Puede ser posible analizar sus diversas escenas y actos, y atribuir diferentes grados de mérito a los participantes; pero no es posible, en general, atribuir a ninguno de ellos una operación mental autónoma decisiva que pueda ser formulada en una afirmación definitiva.

Esta descripción aclara una de las muchas contradicciones sobre las que se construye la sociedad capitalista: si el conocimiento es necesariamente una actividad humana compartida que crece, se expande y mejora con la contribución de cada miembro de la sociedad, entonces

¿por qué una persona o un grupo de personas debe reclamar su posesión para sí misma? ¿Por qué el resto de la sociedad debería renunciar a su parte y contribución a lo que es un esfuerzo colectivo en beneficio de algunos individuos? Esto equivale a una expropiación *de facto* de un recurso producido colectivamente; similar a la expropiación de la tierra como un bien común natural, que se logró mediante las leyes de cercamientos (Karl Polanyi, 1944). Existe entonces una tensión obvia entre la realidad del conocimiento como un esfuerzo mental colectivo — un bien común intelectual— y la necesidad de transformar ese conocimiento en una mercancía pura que pueda ser poseída, comprada y vendida para beneficio personal (sobre este punto, véase también Stiglitz, 2006: 108). No es la primera vez en la historia de la economía de mercado que asistimos a un intento de mercantilizar algo que está fuera del mercado, algo que no se produce para la venta. En su estudio *La gran transformación*, Karl Polanyi demostró que la tierra, el trabajo y el dinero también han sufrido ese proceso.

Karl Polanyi (1944: 72) ha argumentado que la tierra, el trabajo y el dinero no son mercancías porque, a diferencia de las mercancías capitalistas, no se someten a un proceso de producción y, por lo tanto, no se fabrican para ser vendidas:

El trabajo no es más que otro nombre para una actividad humana que acompaña a la vida misma, que a su vez no se produce para la venta sino por razones completamente diferentes, y esa actividad no se puede separar del resto de la vida, ni almacenarse ni movilizarse; la tierra no es más que otro nombre para la naturaleza, que no es producida por el hombre; el dinero real, en fin, no es más que una muestra de poder adquisitivo que, por regla general, no se produce en absoluto, sino que nace por el mecanismo de la banca o de las finanzas estatales.

Al igual que la tierra, el trabajo y el dinero, el conocimiento también es una mercancía ficticia porque es un regalo de la naturaleza que viene con la vida misma y no se produce para la venta. De hecho, el conocimiento es solo otra forma de trabajo humano —el intelectual en contraposición al manual—, aunque no es posible separar las capacidades físicas y

cognitivas de la persona.

Sin embargo, ahora existen mercados que funcionan realmente para el trabajo, la tierra y el dinero; todos ellos han sido incluidos por la fuerza en el mecanismo del mercado a pesar de ser productos básicos ficticios. El conocimiento también es ahora un producto de gran valor comercial que se garantiza y se sanciona por ley a través del sistema de patentes y otros DPI⁵⁶. Académicos como Dean Baker (2004, 2005) han criticado fuertemente los monopolios de patentes otorgados a las compañías farmacéuticas y el sistema de derechos de autor por ser ineficientes y han argumentado que están diseñados para servir a poderosos intereses asociados. Además, Katari y Baker (2015: 1) mostraron que las compañías farmacéuticas “habían ocultado o tergiversado deliberadamente la evidencia sobre la seguridad del medicamento” que estaban vendiendo. Baker (2005) y Stiglitz (2006), entre otros, propusieron que los DPI se sustituyeran por un sistema de compensación a los inventores que va desde pagos directos en forma de subsidios o salarios hasta la concesión de premios, bajo el entendido de que los resultados se convertirían en una innovación abierta y de libre utilización para todos. Stiglitz (2006: 108, énfasis en el original) hizo hincapié en este punto argumentando que “la eficiencia económica significa que el conocimiento debe estar disponible libremente, pero el régimen de propiedad intelectual tiene como *objetivo* restringir el uso”.

La mercantilización del conocimiento es particularmente alarmante para aquellos que pierden el acceso a él porque el conocimiento tiene la doble característica de ser tanto un producto, una producción cuyo consumo puede mejorar el bienestar humano, como un medio de producción de otros productos, especialmente aquellos que han pasado a llamarse “productos basados en el conocimiento”, que adoptan la forma de avances tecnológicos que permiten importantes descubrimientos e innovaciones en diversos campos, desde la tecnología industrial hasta la biotecnología. Es aquí donde se puede ver claramente la importancia no solo de adquirir conocimientos sino de poseerlos y de excluir a otros de compartirlos, haciéndolos escasos para ellos. Es así como se ejerce el

poder del conocimiento. Quienes reciben el monopolio legal sobre “piezas de conocimiento separadas” a través de patentes y otros DPI acumulan poder y aseguran la dominación cobrando por la concesión de licencias y obteniendo superbeneficios por la venta de sus productos, como en el caso del sector farmacéutico y las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) (véase Baker, 2005). En este contexto, Leiss (1994: 121) señaló acertadamente que: “[...] Los avances en la tecnología aumentan claramente el poder de los grupos gobernantes dentro de las sociedades y en las relaciones entre las naciones; y mientras existan grandes disparidades en la distribución del poder entre los individuos, los grupos sociales y los Estados, la tecnología funcionará como un instrumento de dominación”⁵⁷.

Esta es otra de las razones por las que la elite arraigada está estableciendo activamente institutos de investigación privados, privatizando la educación y transformando las universidades y centros de investigación en corporaciones privadas. El objetivo es imponer la gobernanza y la gestión de todo el proceso, desde los programas de investigación iniciales hasta el producto final, garantizando así el cercamiento completo. En este contexto, los neoliberales sostienen que es natural que los empresarios obtengan recompensas por sus esfuerzos y que dichas recompensas sirvan como incentivos para estimular la investigación y la innovación. Pero como discutimos anteriormente, si la propiedad monopolística del conocimiento (inventos e innovaciones) es problemática y no puede equipararse a las mercancías capitalistas ordinarias, su recompensa a través de las patentes y otros DPI es aún más problemática. No solo crea y perpetúa las desigualdades en la sociedad del conocimiento al limitar el acceso a las invenciones, sino que también frena el progreso debido a las restricciones de los programas de investigación que a menudo tienden a centrarse en lo que ya se conoce y es rentable. Baker (2005), por ejemplo, ha argumentado que “las patentes de medicamentos también distorsionan la dirección de la investigación al empujarla hacia resultados patentables”. Por eso Stiglitz (2006: 124) sugirió que: “[...] Un sistema de premios, en el que se recompense a los

investigadores por el valor de sus innovaciones, movería los incentivos en la dirección correcta. Aquellos que hacen los descubrimientos realmente importantes —que, por ejemplo, abordan enfermedades sin cura conocida — obtendrían grandes recompensas”.

Además, debido a la naturaleza del alto riesgo e incertidumbre inherentes al negocio de la producción de conocimiento, la lógica de coste-beneficio que está en el corazón del emprendimiento capitalista dicta el retraso e, incluso, el descarte de los proyectos no rentables que de otra manera podrían lograr avances (véase Mazzucato, 2014). Por eso Michael Polanyi (1944: 65) sugirió que necesitamos la intervención del Estado para apoyar y mantener la producción de conocimiento colectivo en beneficio de todos los miembros de la sociedad y de todas las sociedades humanas. Como dijo: “Para que los inventos puedan ser usados libremente por todos, debemos aliviar a los inventores de la necesidad de ganar sus recompensas comercialmente y debemos concederles en cambio el derecho a ser recompensados del erario público”. Esto es lo que pretendía la Ley de Longitud y es lo que debería hacer también la actual política pública de I+D.

Nathan Myhrvold, cofundador de Microsoft Research, escribió un artículo en *Scientific American* en el que resume el debate con bastante claridad y honestidad.

Examine la historia detallada de casi cualquier descubrimiento científico o invento tecnológico icónico —la bombilla, el transistor, el ADN, incluso internet— y verá que los nombres famosos a los que se les atribuye el avance estaban solo unos pasos por delante de una manada de competidores. Recientemente, algunos escritores y funcionarios electos han utilizado este fenómeno, llamado innovación paralela, para argumentar en contra de la financiación pública de la investigación básica [...] Estos argumentos son peligrosamente erróneos. Sin el apoyo del Gobierno, la mayor parte de la investigación científica básica nunca se llevará a cabo [...] Incluso en campos aplicados, como la ciencia de los materiales y la informática, las empresas entienden ahora que la investigación básica es una forma de caridad —por lo que la evitan—.

Cuando creé Microsoft Research, uno de los mayores laboratorios de investigación industrial fundado en una generación, Bill Gates y yo teníamos muy

claro que la investigación básica no era nuestra misión. Sabíamos que a menos que nuestros investigadores se centraran estrechamente en las innovaciones que podríamos convertir en ingresos rápidamente, no podríamos justificar el presupuesto de I+D ante nuestros inversores. La lógica de negocios que funciona aquí no ha cambiado. Aquellos que creen que las empresas con ánimo de lucro pagarán altruistamente por la ciencia básica que tiene amplios beneficios —pero sobre todo para otros y no para una generación— son ingenuos.

Si el Gobierno dejara que el sector privado pagara la investigación básica, la mayor parte de la ciencia se detendría bruscamente. Las investigaciones que sobrevivieran se harían en gran parte en secreto, por temor a entregar la próxima gran idea a un rival. En esa situación, Einstein podría no haber sentido nunca la necesidad de terminar su mayor obra (Myhrvold, 2016).

4. CONCLUSIÓN

La mayoría de los académicos actuales están de acuerdo en que la innovación es la clave del progreso, pero si el progreso debe ser perseguido como un propósito superior de la vida y si debe beneficiar a todos los miembros de la sociedad, entonces no puede dejarse la innovación a los caprichos de los empresarios con fines de lucro. Los beneficios que la investigación científica y la innovación aportan a la sociedad son, en efecto, mayores cuando no se permite su retención y apropiación. Por esta razón, tanto la producción como la distribución o difusión del conocimiento debe ser una responsabilidad social, una tarea colectiva que, en la sociedad moderna, debe llevar a cabo el Estado soberano. En este capítulo se ha demostrado que, históricamente, el Estado ha desempeñado un papel central, no solo dando incentivos a los científicos e inventores, sino también llevando a cabo directamente la investigación básica y fundamental en los organismos públicos y departamentos gubernamentales. Varios estudios han documentado el hecho de que los grandes descubrimientos de la tecnología moderna son el resultado de una política industrial activa diseñada y financiada por el Estado. Esta propiedad pública y colectiva del conocimiento es coherente con el proyecto de socialización que busca anteponer las personas a los

beneficios y los trabajadores a cargo de sus propias empresas, en que la investigación y el desarrollo se realice en beneficio de toda la humanidad. La privatización del conocimiento y la innovación es un negocio arriesgado que está condenado a impedir el progreso y conducir al estancamiento.

BIBLIOGRAFÍA

- ASIMAKOU, T. (2009): *Innovation, Knowledge and Power in Organizations*, Nueva York, Routledge.
- BAKER, D. (2004): *Financing Drug Research: What Are the Issues?*, Washington, D. C., Center for Economic and Policy Research.
- (2005): “The Reform of Intellectual Property”, *Post-autistic Economics Review*, 32(5), disponible <https://bitly.ws/3dh9s>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- BREAKTHROUGH INSTITUTE (2010): *Where Good Technologies Come From: Case studies in American Innovation*, Oakland, Breakthrough Institute, disponible en <https://bitly.ws/3dhat>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- CLOWATER, G. B. (2012): “Canadian Science Policy and the Retreat from Transformative Politics: The Final Years of the Science Council of Canada, 1985-1992”, *Scientia Canadensis: Canadian Journal of the History of Science, Technology and Medicine*, 35(1-2), pp. 107-134.
- DE SANTILLANA, G. (1964): “The Role of Art in the Scientific Renaissance”, en L. M. Marsak (ed.), *The Rise of Science in Relation to Society*, Nueva York, The Macmillan Company.
- FOUCAULT, M. (1980): *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Nueva York, Pantheon Books.
- FRIEDMAN, M. (1962 [2002]): *Capitalism and Freedom*, Chicago, The University of Chicago Press.
- HALL, R. (1964): “The Scholar and the Craftsman in the Scientific Revolution”, en L. M. Marsak (ed.), *The Rise of Science in Relation to Society*, Nueva York, The Macmillan Company.
- JESSOP, B. (2007): “Knowledge as a Fictitious Commodity: Insights and Limits of a Polanyian Analysis”, en A. Bugra y K. Agartan (eds.), *Reading Karl Polanyi for the Twenty-First Century: Market Economy as a Political Project*, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 115-133.
- KATARI, R. y BANKER, D. (2015): *Patent Monopolies and the Costs of Mismarketing Drugs*, Washington, D. C., Center for Economic and Policy Research.
- LEISS, W. (1994): *The Domination of Nature*, Montreal, McGill-Queen’s University Press.

- LINK, A. N. y LINK, J. R. (2009): *Government as Entrepreneur*, Oxford, Oxford University Press.
- MADDISON, A. (2006): *The World Economy: Vol. 1 A Millennial Perspective, Vol. 2 Historical Statistics*, París, OECD.
- MADRICK, J. (2014): “Innovation: The Government was Crucial After All”, *The New York Review of Books*, disponible en <https://bitly.ws/3dhcr>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- MANTOUX, P. (1928 [1961]): *The Industrial Revolution in the Eighteenth Century*, Londres, University Paperbacks.
- MARSAK, L. M. (ed.) (1964): *The Rise of Science in Relation to Society*, Nueva York, The Macmillan Company.
- MAZZUCATO, M. (2014): *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*, Nueva York, Anthem Press.
- MCCLOSKEY, D. N. (2010): *Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World*, Chicago, The University of Chicago Press.
- MCCORMICK, A. L. (1998 [2014]): *The Industrial Revolution in the United States History*, Berkeley Heights, N. J. Enslow Publishers.
- MYHRVOLD, N. (2016): “Basic Science Can't Survive without Government Funding: Without government resources, basic science will grind to a halt”, *Scientific American*, <https://bitly.ws/3dhdf>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- NEOCLEOUS, M. (1997): *Fascism*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- NICHOLAS, T. (2011): “What Drives Innovation?”, *Antitrust Law Journal*, 77(3), pp. 787-809.
- PERROTTA, C. (2003): “The Legacy of the Past: Ancient Economic Thought on Wealth and Development”, *European Journal of History of Economic Thought*, 10(2), pp. 177-229
- POLANYI, M. (1944): “Patent Reform”, *The Review of Economic Studies*, 11(2), pp. 61-76.
- POLANYI, K. (1944): *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Boston, Beacon Press.
- POLLARD, S. (1968): *The Idea of Progress: History and Society*, Harmondsworth, Penguin Books.
- POMERANZ, K. (2000): *The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy*, Princeton, Princeton University Press.
- POTTER, V. R. (1962): “Bridge to the Future: The Concept of Human Progress”, *Land Economics*, 38(1), pp. 1-8.
- SCHUMPETER, J. (1943 [2003]): *Capitalism, Socialism and Democracy*, Nueva York, Routledge.
- SOBEL, D. (1995): *Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time*, Nueva York, Penguin Books.

- SPENCER, R. W. (2012): “Open Innovation in the Eighteenth Century: The Longitude Problem”, *Research-Technology Management*, pp. 39-43.
- SPIER, F. (2010): *Big History and the Future of Humanity*, Chichester, John Wiley & Sons, Ltd.
- STIGLITZ, J. E. (2006): *Making Globalization Work*, Nueva York, W. W. Norton & Company.
- VRIES, P. (2015): *State, Economy and the Great Divergence: Great Britain and China, 1680s-1850s*, Nueva York, Bloomsbury Academic.
- WRIGHT, R. (2004 [2011]): *A Short History of Progress*, Toronto, House of Anansi Press, Inc.
- (2008): *What is America? A Short History of the New World Order*, Toronto, Random House of Canada.
- WRIGLEY, E. A. (2010): *Energy and the English Industrial Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press.

CAPÍTULO 6

ATRASO INDUSTRIAL, COMERCIO INTERNACIONAL Y FINANZAS

“Mohamed Alí [gobernante de Egipto] inició una modernización de la economía y la sociedad egipcias dirigida por el Estado que solo puede compararse con las de Pedro el Grande en Rusia y el emperador Meiji en Japón [...] *En la década de 1830, Egipto era el segundo país con mayor capacidad industrial moderna después de Inglaterra*”.

“La autarquía centrada en el Estado de Mohamed Alí se había debilitado por la penetración comercial europea [...] Sin embargo, los descendientes de Mohamed Alí conservaron una riqueza y un poder considerables hasta su derrota política y militar a manos de los británicos. *De hecho, un nuevo y mucho más grave colapso de la economía moderna se produjo solo tras la toma del poder por parte de los británicos en 1880*”.

MARTIN BERNAL (1991: 246, 249)

1. INTRODUCCIÓN

La Revolución Industrial fue un momento decisivo en la historia de Europa, no solo por las transformaciones sociales y económicas internas a las que había contribuido. El desarrollo tecnológico también ha dado poder militar a los países europeos y ha redefinido sus relaciones con el resto del mundo a partir del siglo XIX hasta el presente. Aunque no se puede considerar que la tecnología en sí sea una causa de la expansión imperial, los historiadores han documentado el hecho de que el descubrimiento de armas de fuego y otras máquinas de matar desempeñó un papel clave en la conquista de África, Asia y las Américas (véase Headrick, 1981). En otras palabras, la tecnología no era necesariamente un motivo que fomentara el deseo de adquirir colonias, pero sí un medio eficaz que afirmaba la dominación y permitía la explotación de plantaciones, granjas, minas y bosques. Desde la época colonial, el

desarrollo tecnoindustrial apareció como una característica distintiva de la superioridad de “Occidente” sobre gran parte del “resto” —que inmediatamente se tradujo en un estado de atraso—.

El objetivo de este capítulo no es dar cuenta del retraso tecnológico en África y otras partes del mundo, sino más bien subrayar que este obedece a razones históricas, cuestión que ha sido estudiada en profundidad y documentada ampliamente por los historiadores económicos⁵⁸. La conclusión de estos estudios es que la hegemonía colonial determinó el patrón de comercio y desarrollo —es decir, quiénes llegan a importar y exportar qué— y, por lo tanto, el tipo de actividad “industrial” en la que las colonias tuvieron que especializarse (Amin, 1974).

Mientras David Ricardo y sus colegas se ocuparon de la formulación de la teoría de la ventaja comparativa, según la cual la especialización debería basarse en consideraciones de pura eficiencia económica, las potencias coloniales diseñaron, de acuerdo con sus intereses comerciales y políticos, lo que se convertiría en el “orden económico internacional” *de facto*, asignando a las colonias el papel de producir productos básicos y preservar la fabricación en los antiguos centros industriales (véase Nurkse, 1954)⁵⁹. Svedberg (1981) ha demostrado que los patrones tanto de comercio como de inversión fueron en realidad dictados e “impuestos” por las potencias coloniales y, por lo tanto, han girado aproximadamente en torno a esta división del trabajo, que hoy en día solo se ha alterado ligeramente. Hace unos años, el presidente estadounidense Obama (2016) lo expresó de manera descarada cuando enfatizó este punto al declarar sin ambigüedades que “Estados Unidos debería escribir las reglas. América debería tomar las decisiones. Otros países deberían jugar bajo las reglas que Estados Unidos y nuestros socios establecen, y no al revés”.

Obviamente, sería más informativo y más preciso estudiar el comercio y la inversión extranjera por país de origen, pero la intención aquí no es revelar la idiosincrasia del comportamiento de una potencia colonial en particular. Más bien, nuestro objetivo es discernir el patrón general de comercio e inversión durante la época colonial y examinar el papel que desempeñó en la divergencia entre Europa occidental y sus colonias. Una

explicación popular en la teoría económica del desarrollo en relación con la divergencia entre los países industrializados y subdesarrollados es el papel que desempeñan las instituciones.

Otros estudios destacan la importancia del régimen democrático en el proceso político y la prevalencia de los derechos de propiedad como factores clave que promueven la iniciativa empresarial privada, considerada como el motor de la industrialización y el crecimiento (véase McCloskey, 2010). Muchos de estos estudios afirman que África, por ejemplo, está subdesarrollada porque carece de estas instituciones: Acemoglu y Robinson (2012) han señalado la naturaleza totalitaria de los regímenes políticos en África y en la mayoría de los países subdesarrollados donde hay poco o ningún respeto por el debido proceso y el Estado de derecho, mientras que Radelet (2010) ha argumentado que el éxito en África requiere más democracia y una gobernanza responsable.

Sin embargo, los regímenes actuales no surgieron de un vacío y ciertamente no se desarrollaron independientemente de influencias externas. Los pioneros en el estudio del subdesarrollo han destacado la importancia de la explotación colonial a través de la esclavitud y el comercio atlántico (Gunder Frank, 1998, 1978; Wallerstein, 1974; Amin, 1974). Llevando este argumento más allá, Vries (2015) y Fields y Vernengo (2016), entre otros, han argumentado que los poderes militar y fiscal del Estado pueden haber desempeñado un papel central en el ascenso de la hegemonía de Europa occidental. Los regímenes actuales que prevalecen en el mundo subdesarrollado son el legado de un largo proceso de colonización durante el cual los europeos se encargaron de establecer las instituciones legales, económicas y políticas que ayudaron a asegurar la dominación y a hacer que las “colonias fueran políticamente sumisas y económicamente rentables para sus metrópolis europeas” (Headrick, 1981: 11). Con la notable excepción de los “nuevos” países, que fueron colonizados por europeos (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos), todas las “viejas” colonias fueron sometidas al patrón colonial de comercio e inversión a través de lo que Acemoglu, Johnson y

Robinson (2001) y Acemoglu y Johnson (2005) llamaron instituciones “extractivas”, que fueron diseñadas y utilizadas como herramientas para explotar a las poblaciones nativas y sus recursos⁶⁰. No es una sorpresa que los países menos desarrollados y no industriales sean hoy en día aquellos que son extremadamente ricos en todo tipo de recursos naturales. Canadá, Estados Unidos y los otros “nuevos” países también dependían de la exportación de recursos naturales, pero la diferencia es que estos países se beneficiaron inmediatamente, incluso durante el proceso de su creación, del apoyo europeo para financiar y desarrollar su base industrial y la infraestructura pública necesaria.

La idea de que los países fuera de Europa occidental simplemente no tuvieron una Revolución Industrial al mismo tiempo y no se desarrollaron al mismo ritmo que Gran Bretaña no es cierta. No olvidemos, por ejemplo, que hasta hace poco muchos historiadores europeos consideraban a China como un país atrasado y subdesarrollado, pero eso ha resultado ser un producto de su imaginación eurocéntrica y un cliché prejuiciado⁶¹. En este capítulo se argumenta que, independientemente del nivel de desarrollo industrial anterior a la colonización, la persistencia del atraso industrial en el siglo XXI tiene mucho que ver con la evolución de estas instituciones extractivas coloniales.

En cualquier caso, el problema actual, que ha preocupado a los intelectuales y a los responsables políticos durante mucho tiempo, es cómo romper este círculo vicioso de extracción y transferencia de valor cuyo objetivo y resultado han sido —y siguen siendo— la creación de riqueza para una elite arraigada y de pobreza para el resto de la población⁶². En el capítulo se propone una solución que puede ser útil para abordar lo que se consideran los dos aspectos clave de esta cuestión: la industrialización y la financiación internacional. El primero de ellos, que se trata en el siguiente apartado, se refiere a las formas de superar la limitación tecnológica mediante la construcción de una economía productiva capaz de inducir el desarrollo y de reducir la divergencia entre las economías industrial y no industrial. En el tercer apartado, reconociendo que estos últimos países también se enfrentan a una

limitación de financiación externa, examinamos métodos alternativos para asegurar la financiación de la industrialización mediante una reforma radical del sistema monetario internacional. Las observaciones finales se encuentran en el último apartado.

2. EL PESO DE LA HISTORIA, LA GRAN DIVERGENCIA Y LA POLÍTICA INDUSTRIAL

Desde la Edad de Piedra, los humanos han estado fabricando herramientas y utilizándolas para aumentar su capacidad de realizar ciertas tareas (para sobrevivir o para divertirse). La naturaleza de las herramientas, técnicas y procedimientos ha evolucionado para reflejar la mejora de las habilidades y los conocimientos acumulados a lo largo del tiempo (véase Maynard, Subrahmanyam y Greenfield, 2005). La tecnología, primitiva como era, viajaba libremente como las tribus, vagando por ahí, podían fácilmente prestar y tomar prestadas herramientas, copiarlas de las demás y adaptarlas a sus propias necesidades, a menudo resultando en una mejora y haciendo, así, el progreso tecnológico acumulativo. No había barreras a la difusión tecnológica y a veces, no había necesidad de reinventar la rueda ya que, como señaló Morgan (1877: 540): “Algunos de estos inventos fueron tomados prestados, no es extraño, de tribus en el estado medio, pues fue por este proceso constantemente repetido que las tribus más avanzadas levantaron a las que estaban por debajo de ellas, tan rápido como estas últimas fueron capaces de apreciar y apropiarse de los medios de progreso” (véase también De Gregori, 1968).

Con el advenimiento de la Revolución Industrial y el ascenso de la tribu europea, la difusión de la tecnología tomó un giro diferente. Las instituciones sociales que se desarrollaron con la llegada triunfal del capitalismo pusieron un gran énfasis en los derechos de propiedad privada, que incluían patentes para proteger los “inventos” tecnológicos. Aunque James Watt solo había mejorado una máquina de vapor ya existente, él y su socio Matthew Boulton se vieron envueltos en

numerosos pleitos sobre patentes, reclamando la originalidad y, por lo tanto, la propiedad intelectual de la máquina (véase Mantoux, 1928).

¿Qué hay sobre la difusión de la tecnología al resto del mundo? Los economistas de todas las orientaciones están de acuerdo en que la lógica del capital, definida aquí como dinero y tecnología, es aquella en que se pueden obtener beneficios. La inversión extranjera, entonces, fluirá a las áreas y países donde existen tales oportunidades. Sin embargo, como veremos más adelante, hay otras consideraciones importantes, particularmente cuando incluimos la inversión extranjera pública y patrocinada por el Estado. Una cartografía de la inversión extranjera europea durante la última parte del siglo XIX revela que la inversión de las potencias coloniales durante ese periodo fue particularmente sesgada, ya que, por ejemplo, la mayor parte de la inversión extranjera de Gran Bretaña se dirigió a los llamados “nuevos” países, que estaban poco poblados y a los que habían emigrado empresarios y trabajadores cualificados europeos (Canadá, EE UU, Nueva Zelanda, Australia). Como señala Nurkse (1954: 250, énfasis de HB), “el capital que llegó a estas regiones [...] se empleó sobre todo en la *construcción del costoso marco de servicios públicos*, incluyendo especialmente el transporte, que sentó las *bases para el desarrollo industrial nacional*, así como para la producción de materias primas para la exportación. Estas áreas son ahora, y lo han sido durante algún tiempo, predominantemente industriales”.

Por el contrario, en las “antiguas” colonias que tenían “civilizaciones antiguas propias”, la inversión se limitaba esencialmente a las industrias extractivas que producían materias primas y alimentos para los centros industriales y nunca se produjo tal “construcción del costoso marco de los servicios públicos”. Hirschman (1958) añadió que cuando se producían estas inversiones, a menudo carecían de eslabonamientos hacia atrás y hacia delante con el resto de la economía, por lo que no contribuían mucho al desarrollo industrial de las “antiguas” colonias. El patrón “colonial” de inversión exige explicaciones fuera del marco de los principios económicos dominantes. Tal vez necesitemos estudiar, entre otros aspectos, la psicología del colonialismo para comprender las

motivaciones y las aspiraciones de los colonizadores —entonces y ahora—.

El enfoque institucional del desarrollo económico —y la falta de este— proporciona un marco interesante para estudiar la estrategia de colonización y las consecuencias de lo que los colonizadores europeos hicieron a las poblaciones indígenas, durante lo que McCloskey (2010: 105) llamó “sus peregrinaciones fanáticas y provechosas”. Las expediciones europeas pueden haber parecido fortuitas en sus comienzos cuando los marineros viajaban en alta mar sin saber exactamente dónde podrían acabar, pero los que estaban detrás de las expediciones sabían lo que buscaban: la tierra y sus riquezas. El acceso a la tierra era una prioridad en la estrategia de colonización porque permitía el asentamiento inmediato y, por lo tanto, la expansión.

Los territorios poco poblados eran fáciles de conquistar y más propicios para la creación de “nuevos” países, que eran vástagos directos de la civilización europea y se consideraban meras extensiones de los territorios de las potencias coloniales: Nueva Francia, Nueva Inglaterra, Nueva Holanda, etc. (que más tarde se convirtieron en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda). Los países con “civilizaciones antiguas propias” obviamente presentaban riesgos: el proyecto de establecer un “nuevo” país europeo en una “vieja” colonia con sus “recalcitrantes millones” es problemático y puede tener pocas posibilidades de éxito como lo han demostrado las experiencias de Rodesia, Sudáfrica e Israel. Acemoglu Johnson y Robinson (2001) y Acemoglu y Johnson (2005) se refieren a esto como la “viabilidad de los asentamientos” que, en el caso de África, estaba limitada por factores como los altos riesgos de mortalidad para los europeos debido a “las enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla que habían convertido gran parte de África en el ‘cementerio del hombre blanco’ y que impedían a los europeos establecerse o incluso crear puestos de avanzada permanentes” (Acemoglu y Robinson, 2012: 260).

Ahora la imagen es más clara: dondequiera que los colonizadores pudieron establecer un nuevo país con una población europea

homogénea, la inversión extranjera “siguió la bandera” y el dinero y la tecnología se volcaron hacia allí. Nurkse (1954: 253) ha señalado que las inversiones en infraestructura pública —financiadas por los Gobiernos coloniales— en ferrocarriles, carreteras, puentes, hospitales y escuelas fueron en realidad “deliberadamente planificadas y construidas con *antelación*” para atraer a los migrantes europeos y facilitar su asentamiento. A partir de entonces, se establecieron rápidamente instituciones políticas y económicas inclusivas que favorecen el progreso y el desarrollo.

Por el contrario, los ferrocarriles indios, ya en 1914, “representaban menos de la décima parte del total de los valores ferroviarios de ultramar en poder de los inversores británicos”, según Nurkse (1954: 253). Por las mismas razones, Francia nunca construyó ese “costoso marco de servicios públicos”, base del desarrollo industrial, en ninguna de sus colonias africanas a pesar de que Argelia, por ejemplo, estuvo bajo dominio francés durante más de 130 años y fue considerada oficialmente un departamento francés durante gran parte de ese periodo. En las colonias africanas, los ferrocarriles y las redes de carreteras se limitaban estrictamente a las zonas declaradas “zonas útiles” para el transporte de productos primarios, destinados principalmente a la exportación: son enlaces directos entre las minas/plantas y los puertos marítimos. En otros casos, los ferrocarriles fueron establecidos por cálculos geoestratégicos durante la rivalidad colonial y la “lucha por África”⁶³.

Es importante destacar aquí que estas ventajas patrocinadas por el Estado que se conceden a los colonos (y no a las “antiguas” colonias) ejercen un fuerte impacto en las inversiones posteriores a través del conocido efecto de aglomeración y, por lo tanto, crean una dependencia del camino en el futuro desarrollo de las colonias⁶⁴. Esto explica por qué los “nuevos” países como Canadá y Estados Unidos, aunque también dependían de la exportación de productos primarios en sus primeras etapas de desarrollo han surgido, sin embargo, como países industriales en un periodo de tiempo muy corto; mientras que las “antiguas” colonias de África, por ejemplo, seguían siendo esencialmente “talladores de

madera y extractores de agua”. De hecho, tal como había previsto Cecil Rhodes, se convirtieron en proveedores de productos básicos a bajo precio y en consumidores de productos manufacturados importados de Europa, interactuando en un régimen que Maddison (2006: 27, 100) calificó de “imperialismo de libre comercio” y que ha desempeñado un papel importante en el desarrollo industrial de Europa occidental.

El imperialismo de libre comercio representaba en realidad un componente importante de la política industrial en Europa occidental y hasta hace poco fue defendido incluso por algunos economistas de mentalidad justa. Keynes (1941: 25-6), por ejemplo, escribió que

de las medidas especiales que podemos emplear, la más potente es utilizar la importancia del mercado británico para los productores de alimentos y materias primas en el extranjero como un incentivo para que hagan compras equivalentes de artículos manufacturados de nosotros. Argentina, por ejemplo, no puede esperar comercializar su trigo, maíz y carne [...] a menos que pueda vender cantidades sustanciales en Gran Bretaña. Es posible que tengamos que decirle que no estamos en una posición financiera para comprar estas cantidades sustanciales a menos que ella esté dispuesta a gastar los ingresos en tomar los textiles y productos de ingeniería de nosotros.

Para asegurar un flujo continuo de estos suministros, las potencias coloniales no se basaron únicamente en la negociación y la persuasión política. También recurrieron al uso de la fuerza y la violencia, y para ello necesitaban establecer instituciones extractivas, que adoptaron la forma de regímenes políticos represivos cuya misión era, y sigue siendo, mantener una estructura económica diseñada para servir a los intereses de la elite. La violencia y la represión contra las poblaciones indígenas de África, Asia y América son tan flagrantes y repugnantes que cualquier persona en su sano juicio se negaría a creer que los colonizadores europeos hayan cometido realmente esos crímenes. En palabras de Shakespeare, sus “cañones se inclinaban contra las cejas de cualquier pueblo que se resistiera” porque en su opinión estaban librando “guerras justas y caritativas” (*Rey Juan*, acto 2, escena 1). En lo que respecta a las

poblaciones de las “antiguas” colonias, estas instituciones son réplicas modernas del imperialismo romano, que “se basaba en el saqueo, la esclavitud y la capacidad de ejercer control mediante la fuerza militar” (Maddison, 2006: 52)⁶⁵. En su análisis de la situación actual, Amin (2004: 24) concluyó que “el orden económico ‘liberal’ globalizado requiere una guerra permanente —intervenciones militares que se suceden sin cesar— como único medio para someter a los pueblos de la periferia a sus demandas”. Polanyi y Levitt (2016) describen esta práctica recurrente desde los primeros tiempos coloniales como “comercio y conquista, intercambio y guerra, finanzas y operaciones militares” —todo lo cual es analizado con gran detalle por Amin (1974) en su libro *La acumulación a escala mundial*⁶⁶—.

Las instituciones represivas y extractivas pueden tener éxito en subyugar y explotar a la gente durante bastante tiempo, pero nunca pueden crear una atmósfera que conduzca al progreso, la estabilidad social y el crecimiento a largo plazo; porque la gente se subleva. Como muestra la historia, el Imperio romano se derrumbó y se desintegró y las “antiguas” colonias se encuentran ahora en un estado de esclerosis económica. Entre estos, los países que tuvieron un buen desempeño en la escala de desarrollo industrial son aquellos que pudieron romper la trampa colonial y construir sus propias instituciones con una clara estrategia de desarrollo. Algo que solo podían hacer a través de un Estado nacional fuerte, motivado por lo que podemos llamar las “aspiraciones democráticas” de la población para la prosperidad. ¿Pueden los países africanos tener una política industrial exitosa?

El interés por el desarrollo industrial o tecnológico se justifica por el hecho de que permite la difusión de la tecnología a zonas subdesarrolladas para vencer el atraso tecnológico mediante la absorción de los conocimientos más actualizados. El desarrollo industrial también es deseable porque tiene el potencial de crear oportunidades de crecimiento en la agricultura y otros sectores de la economía —como se ha demostrado históricamente— y, por lo tanto, de generar empleos bien remunerados que son esenciales en la lucha contra el desempleo y la

pobreza. Sin embargo, la industrialización no debe idealizarse ni considerarse una tarea difícil o imposible. Actualmente existen ejemplos de varios países que han alcanzado altos niveles de desarrollo tecnológico en menos de una generación. El único ingrediente esencial de este proceso es la adquisición de conocimiento científico, que se puede obtener mediante la provisión de una buena educación y la generalización de la enseñanza de las ciencias para ampliar la base de conocimientos de la economía, mejorando así las habilidades y el aprendizaje dentro de las unidades de producción (véase Greenwald y Stiglitz, 2013a). Gran parte de todo esto puede lograrse utilizando recursos nacionales y, por lo tanto, la moneda nacional. Sin embargo, a menudo existe la necesidad de tecnología extranjera cuya importación requiere divisas internacionales —principalmente el dólar estadounidense—. Los métodos tradicionales utilizados hasta ahora han sido obtener estas reservas a través de las exportaciones o tomarlas prestadas en los mercados internacionales. Los límites de estos dos métodos son bien conocidos ahora. La restricción de la financiación internacional es el tema del siguiente apartado, pero ocupémonos primero de la política industrial y examinemos las formas de superar la restricción tecnológica.

Los responsables de la formulación de políticas que se preocupan por el estado de subdesarrollo y el atraso industrial de sus países deberían aprender la lección crucial de que no hay ninguna economía en este planeta que funcione —o que haya funcionado alguna vez— de acuerdo con las fuerzas “puras” del mercado. No deben ser engañados para que piensen que la industrialización y el desarrollo ocurrirán si solo mejoran las instituciones y permiten que los mercados funcionen de manera eficiente (Storm, 2015). Históricamente, la industrialización y el desarrollo exitoso ocurrieron en países donde el Estado intervino activamente para crear y dar forma a los mercados, proporcionando el marco legal, la infraestructura pública y los servicios sociales, estableciendo normas y regulando las relaciones industriales y, sobre todo, actuando como empresario, particularmente en actividades de alto riesgo.

De hecho, todos los países desarrollados han dependido de la política industrial: como se ha señalado anteriormente, los países industrializados avanzados de Europa occidental y América del Norte han dependido sistemáticamente de una fuerte intervención estatal para su desarrollo a lo largo de su historia y siguen haciéndolo. Los recientes éxitos de las economías “milagrosas” de Asia oriental se han basado en la aplicación de políticas comerciales y de inversión cuidadosamente diseñadas (Amsden, 1996, 1997; Amsden y Chu, 2003; Wade, 2004). Lo mismo ocurre con Japón y, en cierta medida, con otros PRI (países recientemente industrializados). En todos estos casos, contrariamente a los tan celebrados principios del *laissez-faire*, el Estado planificó, subvencionó y protegió con aranceles o cuotas todos aquellos que consideró sectores vitales de la economía. Solo los ingenuos creen en las virtudes y poderes del libre mercado. Por lo tanto, el primer requisito para diseñar una política industrial exitosa es asegurarse de que el Estado no sea capturado por los intereses de aquellos que están detrás de la ideología del libre mercado.

Stiglitz (2015: 10) hizo la astuta observación de que “todos los Gobiernos, lo sepan o no, se dedican a la política industrial” —la cuestión es que, haga lo que haga o no haga un Gobierno, es decir, todas las (in)acciones del Gobierno reflejan necesariamente la opinión de los responsables políticos sobre cómo debería funcionar la economía y cómo debería desarrollarse la sociedad. Por ejemplo, cuando un Gobierno opta por privatizar la educación y la atención de la salud, por fomentar la creación de monopolios en el comercio, las finanzas, los seguros y los bienes inmuebles y por no invertir en infraestructura pública física, está optando por una política industrial concreta que trata de mantener un régimen basado en la extracción de rentas y cuyo objetivo es promover los intereses de una clase particular a expensas de la población en general (para un ejemplo típico, véase Saudi Gazette, 2016). Por el contrario, un Gobierno que se fija como objetivo la eliminación de las desigualdades sociales y económicas a través de esquemas de redistribución del ingreso y la riqueza, que pone énfasis en la ciencia y la tecnología subsidiando e

invirtiendo directamente en estas áreas, estaría optando, en cambio, por una política industrial inclusiva que tiene el potencial de generar crecimiento a largo plazo y crear riqueza para las masas. La elección de la política nunca es neutral. Las políticas económicas y sociales, de las que la política industrial es solo un componente, siempre tienen efectos concretos en nuestras vidas.

Si bien no existe un modelo de política industrial eficaz, hay rasgos y características reconocibles de experiencias exitosas pasadas y actuales que pueden inspirar a los encargados de la formulación de políticas de África y otros países que deseen emprender el camino de la industrialización. Consideremos, por ejemplo, el conocido caso de Corea del Sur. A principios de los años sesenta, Corea era uno de los países más pobres del mundo y su nivel de desarrollo industrial era comparable al de Egipto o Argentina, por citar solo esos dos ejemplos. Hoy en día, se destaca como un país altamente industrializado, capaz de fabricar los más sofisticados productos tecnológicos. Lo que hace que el modelo de industrialización coreano sea tan notable, y quizás digno de emulación, es que fue capaz de romper tres mitos relacionados que habían dominado durante mucho tiempo la formulación de políticas y la literatura sobre la economía del desarrollo: a) la supremacía de los mercados libres y sin restricciones en el proceso de crecimiento y desarrollo; b) solo una democracia liberal de tipo occidental es compatible con el crecimiento y el desarrollo; y c) el camino hacia el desarrollo es largo y sinuoso y el proceso de aprendizaje lento y complejo.

En efecto, desde principios de los años sesenta, el Estado —que se encargó de disciplinar el mercado sometiendo a las empresas privadas a normas de rendimiento— no era precisamente una democracia liberal, sino más bien una “dictadura política” que duró hasta 1987 (véase Cheon *et al.*, 2014). El Estado comenzó por esbozar los objetivos de la industrialización, enumerando los instrumentos que debían utilizarse y determinando el plazo para alcanzar esos objetivos, acciones que se formularon en planes coherentes a corto y largo plazo y que le valieron al Estado el adjetivo de “desarrollista”. Consciente del papel central de las

finanzas en el proceso de desarrollo, el Estado asumió inmediatamente el control del sistema bancario (véase Lim, 2013). Luego recurrió a la política del palo y la zanahoria, recompensando el desempeño de las empresas que cumplen con las normas establecidas y promoviendo nuevas industrias. La visión era clara: hacer de Corea un país industrializado en un corto periodo de tiempo. Una de las lecciones del éxito coreano es que los responsables de las políticas no descuidaron el papel crucial de la agricultura en el desarrollo. En la década de los setenta, Corea siguió una estrategia destinada a aumentar la producción agrícola y los ingresos de las comunidades rurales (el Saemaul Undong o Movimiento Nueva Comunidad), lo que contribuyó al aumento de la demanda interna y promovió aún más las innovaciones en las industrias agrícolas. En consecuencia, los instrumentos —o los medios para la transformación estructural— fueron elegidos cuidadosamente. Los siguientes ejemplos, que no son una lista exhaustiva, indican la coherencia de la estrategia:

1. La educación primaria y secundaria recibió una alta prioridad en el proceso de planificación temprana, con énfasis en el contenido técnico en un esfuerzo por aumentar el número de científicos e ingenieros.
2. Dado que el objetivo era desarrollar una industrialización propia, las autoridades coreanas no fomentaban la inversión extranjera directa. En cambio, se centraron en aumentar la base tecnológica local mediante la transferencia de tecnología extranjera a través de licencias e ingeniería inversa y, en una etapa posterior, mediante el fomento de la I+D.
3. Dado el pequeño tamaño del mercado coreano, se identificó la demanda externa como una solución y, por lo tanto, el programa de industrialización tuvo que basarse en una estrategia de crecimiento impulsado por las exportaciones. Para asegurarse de no permanecer en el fondo de la cadena de valor como proveedor de exportaciones de manufacturas baratas, Corea trató

de aumentar el contenido de valor añadido de sus exportaciones y alentó el paso a industrias más sofisticadas. Para ello se requiere una mano de obra altamente educada y capacitada, lo que se cumple con el instrumento i. *supra*.

Aunque Corea evolucionó dentro de una economía mundial globalizada en la que el acceso al comercio y a los mercados de capital era esencial para su desarrollo, los responsables de la formulación de políticas no dudaron en utilizar los aranceles y los subsidios para proteger los sectores y las industrias, ya sea porque eran estratégicos o porque se encontraban en su etapa “infantil” (Stiglitz, Lin y Monga, 2013). Además, las importaciones estaban vinculadas a las exportaciones de tal manera que los permisos de importación o las exenciones arancelarias se utilizaban de forma discriminatoria y se concedían a las empresas que alcanzaban los objetivos de exportación. La omnipresente participación del Gobierno en la economía permitió forjar alianzas estratégicas entre las empresas estatales y los conglomerados industriales, conocidos como *chaebol* y que ocupaban posiciones oligopólicas en la economía —no exactamente la imagen del mercado competitivo idealizada en los libros—. Este corporativismo permitió a las empresas estratégicas, aunque bajo requisitos de monitoreo y desempeño, beneficiarse de garantías estatales de préstamos extranjeros que les facilitaron el acceso a los mercados financieros internacionales.

Las deficiencias del modelo coreano son típicas de cualquier economía capitalista. Los objetivos de la política industrial se centraban principalmente en la promoción del crecimiento y no tanto en la redistribución y la eliminación de la desigualdad, y se preocupaban aún menos por el medioambiente. Los datos de la OCDE indican que la desigualdad en Corea se ha incrementado y que el tamaño de la clase de ingresos medios como proporción de la población total disminuyó sustancialmente de 75,4 % en 1990 a 67,5 % en 2010, mientras que el tamaño de la clase de ingresos bajos se ha incrementado (véase OCDE, 2014: 31, gráfico 15). Este cambio en la distribución del ingreso tuvo un

impacto directo en la pobreza del país y, como resultado, la pobreza relativa aumentó de alrededor del 8% a principios de la década de los noventa al 15% en 2010 (OCDE, 2014: 7, 31). Es interesante observar que el coeficiente de Gini siguió una curva en forma de U a medida que la desigualdad disminuyó en la fase inicial del programa de industrialización, debido a la mejora de los salarios y la creación de empleo, pero comenzó a aumentar a principios de la década de los noventa cuando Corea adoptó políticas neoliberales —una trayectoria que Cheon *et al.* (2014: 421) denominan la Gran Vuelta en U—.

Las políticas neoliberales tienen una larga historia en África, donde se han popularizado bajo el engañoso nombre de “programas de ajuste estructural” (PAE) y que han forzado un giro mucho peor de los acontecimientos. Los datos disponibles muestran que el proceso de industrialización, crecimiento y desarrollo en la mayor parte de África, y en particular en la región subsahariana, ha seguido en realidad una trayectoria en forma de V invertida. Inspirados por los principios de la Conferencia de Bandung (1955)⁶⁷, los líderes de los movimientos de liberación de África abogaron y persiguieron con firmeza una estrategia de desarrollo dirigida por el Estado en la era inmediatamente posterior a la independencia. A lo largo de las décadas de los sesenta y setenta, la mayoría de los gobiernos de África pusieron en práctica planes quinquenales y se produjo un aumento del crecimiento económico y de la industrialización (véase Storm, 2015; Heidhues y Obare, 2011). El punto de inflexión se produjo en 1980, cuando las instituciones internacionales, encabezadas por el Banco Mundial y el FMI, en un contexto de altas tasas de interés y un fuerte dólar estadounidense, impusieron PAE de carácter *contractivo*, que prácticamente abortaron cualquier proyecto de desarrollo serio. Para Amin (1997: 148), sin embargo, el “proyecto Bandung” estaba condenado al fracaso porque nunca buscó separarse de esa “gigantesca empresa de subcontratación” que es el capitalismo global.

El nuevo enfoque del desarrollo fue enunciado en un “libro blanco” del Banco Mundial (1981) titulado *Hacia un desarrollo acelerado en el África subsahariana*. Las recomendaciones básicas, que se convirtieron en

instrucciones, requerían específicamente un retorno a la especialización en la exportación de productos agrícolas y primarios, es decir, un retorno al “patrón colonial de comercio” y el retiro del Estado de todos los sectores vitales de la economía (liberalización, desregulación y privatización). Los préstamos y la asistencia financiera se condicionaron a dicha retirada (Loxley, 1983), se dirigieron específicamente al apoyo de las exportaciones primarias (minería y agricultura) y mostraron un claro prejuicio contra la industrialización (Amin, 1997). Además, como sostiene Chang (2015), el espacio de la política industrial se vio también, más tarde, gravemente limitado por la OMC y otros acuerdos de libre comercio.

El resultado neto de estas políticas es que el desarrollo en África no se “aceleró”, sino que se “detuvo” (Fieldhouse, 1986), lo que condujo a un proceso de desindustrialización (como lo documentan Stiglitz y Greenwald, 2014; Greenwald y Stiglitz, 2013b; Naciones Unidas, 1998), un crecimiento lento o negativo y una pobreza intolerable en la mayoría de los países africanos (Artadi y Sala-i-Martin, 2004). Si en 1970, uno de cada diez pobres del mundo vivía en África, en 2012 el número se acercaba más a uno de cada dos (véase Banco Mundial, 2016a). El Banco Mundial (2016b) también nos dice que desde 1990, el número de pobres en África ha aumentado por lo menos en 100 millones.

3. EL PODER DE LAS FINANZAS: ELIMINACIÓN DE LA RESTRICCIÓN EXTERNA

Si usted piensa que el sistema de comercio internacional ha sido manipulado y hecho para trabajar por el interés de las naciones poderosas y sus aliados sea, entonces, bienvenido al mundo de las finanzas. No olvidemos que el comercio y las finanzas están íntimamente ligados entre sí, ya que cada exportación/importación requiere un pago —un flujo de fondos—. Los vínculos entre las transacciones en el comercio y las finanzas internacionales suelen resumirse en un documento contable conocido como la balanza de pagos, que recoge las transacciones

comerciales y financieras de un país determinado con el resto del mundo, como se muestra en la tabla 6.1:

TABLA 6.1

PRESENTACIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS

CRÉDITOS (CRÉDITOS SOBRE EXTRANJEROS)	DÉBITOS (DEUDAS CON EXTRANJEROS)
1. Exportación de bienes y servicios	1. Importación de bienes y servicios
2. Ingresos por inversiones recibidos del extranjero	2. Ingresos por inversiones pagados a los extranjeros
3. Transferencias unilaterales recibidas del extranjero	3. Transferencias unilaterales a los extranjeros
4. Crédito a corto plazo que viene del extranjero	4. Crédito a corto plazo a los extranjeros
5. Inversión a largo plazo que viene del extranjero	5. Inversión a largo plazo en el extranjero
6. Variación de las reservas de divisas	

La diferencia entre los créditos y débitos de las líneas 1, 2 y 3 da el saldo de la cuenta corriente mientras que la de las líneas 4, 5 y 6 da el saldo de la cuenta de capital. Si la cuenta corriente es deficitaria, la cuenta de capital debe tener un superávit, lo que refleja las entradas o las fuentes de financiación. Cuando la relación de intercambio se deterioró tanto para los países en desarrollo que fueron crecientemente incapaces de comprar la misma cantidad de productos manufacturados con los mismos ingresos de sus exportaciones (mayor valor de la línea 1 en el lado de los débitos), como ocurrió durante los años sesenta y setenta, recibieron préstamos denominados en dólares de Estados Unidos (línea 4 en el lado de los créditos) por los que pagaron fuertes intereses (línea 2 en el lado de los débitos), con lo que aumentaron su déficit por cuenta corriente. A medida que se reducían los ingresos de las exportaciones, se necesitaban más préstamos para atender el servicio de los préstamos iniciales y financiar las importaciones, pero, curiosamente, no había muchas entradas en términos de inversiones a largo plazo (línea 5 del lado de los créditos) que pudieran financiar el desarrollo de capital y servir de base para la industrialización.

El deterioro de los términos de intercambio ha sido un argumento central de la escuela de la dependencia desde la década de los cincuenta

y fue recientemente reafirmado para todo el siglo XX en un estudio actualizado por un grupo de economistas de las Naciones Unidas (véase Ocampo y Parra, 2003; UNCTAD, 2005). De esta manera, la mayoría de los países en desarrollo se vieron atrapados en una espiral de préstamos-importaciones-préstamos que se rompió parcialmente, pero que no terminó con la infame crisis de la deuda de la década de los ochenta — con México como ejemplo notable—. Aunque el contexto es diferente, un escenario algo similar y quizás más trágico se repitió más recientemente con Grecia (véase Galbraith, 2016).

La misma ideología detrás de los “programas de ajuste estructural” continuó después de los años ochenta, con el FMI y el Banco Mundial aconsejando a los responsables políticos de los países en desarrollo que equilibraran sus presupuestos públicos mediante el recorte del gasto en cosas como la infraestructura pública y los servicios sociales (austeridad), mediante la venta de empresas públicas (privatización) y mediante el desmantelamiento de toda participación del Gobierno en los asuntos económicos (desregulación); en resumen, se les aconsejó que implementaran el modelo neoliberal de gestión económica. Hoy en día se reconoce ampliamente que tales políticas resultaron en una desindustrialización de ciertos países (Noman y Stiglitz, 2012) y en un empeoramiento de las finanzas de muchos más, lo que contribuyó a una serie de crisis bancarias y financieras como la crisis asiática (1997-8) y la argentina (2001-2), entre otras.

Cuando ciertos países no pudieron cumplir con sus excesivos pagos de intereses y trataron de vincularlos a las ganancias de sus exportaciones, como lo hizo México en la década de los ochenta, las agencias internacionales de calificación crediticia bajaron la calificación de estos países a “C” —por lo tanto, cortaron su acceso a los mercados financieros internacionales al señalar a los prestamistas internacionales que se trataba de países de alto riesgo y, tal vez, en bancarrota—. Esto nos lleva al núcleo del problema. ¿Por qué un país pobre y en desarrollo tiene que depender del préstamo de la moneda de un país desarrollado para financiar la importación de bienes y servicios que son esenciales para su

industrialización y desarrollo?

Bajo el sistema actual, una pequeña empresa incipiente en un área remota de cualquier país industrial, por ejemplo Estados Unidos, puede solicitar un préstamo y obtener los fondos necesarios para financiar la adquisición de la maquinaria y el equipo más sofisticados. En comparación, incluso la mayor empresa de un país en desarrollo se enfrenta a una limitación vinculante porque solo se aceptan algunas de las principales monedas de reserva para el pago en las transacciones internacionales, lo que se denomina pecado original (véase Eichengreen y Hausmann, 1999; Hausmann y Panizza, 2003). Dado que los prestamistas extranjeros suelen imponer normas de crédito estrictas a los prestatarios de los países en desarrollo, los proyectos de industrialización y desarrollo en general se frustran, se retrasan o se abandonan, una situación que explica, en gran medida el retraso del desarrollo y el atraso económico (véase Bougrine y Seccareccia, 2009-10). Si la respuesta a la pregunta anterior es: “Bueno, ¡ese es el sistema!”, entonces el sistema es defectuoso y necesita reformarse. Una reforma radical del sistema monetario internacional es necesaria para el éxito de la industrialización de los países pobres.

En una entrevista concedida a la Wharton School de la Universidad de Pensilvania el 3 de abril de 2012, se le preguntó a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, qué era lo que más le apasionaba y qué le gustaría que ocurriera en el FMI. Ella respondió:

Eso es complicado... ¡Mira!, esta es una institución muy fascinante porque es completamente anticíclica. Cuando el mundo alrededor del FMI va cuesta abajo, prosperamos. Nos volvemos extremadamente activos porque prestamos dinero, ganamos intereses y cargos y todo lo demás, y a la institución le va bien. Cuando el mundo va bien y hemos tenido años de crecimiento, como fue el caso en 2006 y 2007, al FMI no le va tan bien tanto financieramente como en otros aspectos.

Ahora bien, una institución *diseñada* para prosperar a partir de la miseria de los países pobres no es exactamente lo que necesita un mundo civilizado. En este sentido, el FMI es otra institución extractiva de las

finanzas internacionales. Por eso es urgente una reforma del sistema, como muchos han insistido⁶⁸. Mientras que la mayoría de estos académicos abogaron por el retorno al plan original de Keynes y la adopción de una unidad monetaria internacional como medio de pago para dar también a los países pobres acceso directo a la financiación internacional, otros como Mehrling (2016) consideraron que el plan era obsoleto y propusieron en su lugar la continua dependencia de las principales monedas nacionales existentes, con el dólar estadounidense en la cima de la pirámide y el FMI desempeñando el papel de bastón.

La historia detrás de la creación del FMI es, en efecto, “fascinante”, pero no por las razones mencionadas por Lagarde (2012). En 1942-3, justo antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, los aliados —liderados por Gran Bretaña y Estados Unidos— empezaron a prepararse para un nuevo orden económico de posguerra. El objetivo era desarrollar un sistema de pagos que garantizara la estabilidad y el crecimiento en todo el mundo, por lo que los debates se centraron en la creación de una moneda internacional, universalmente aceptada como medio de pago, con el fin de gestionar adecuadamente los problemas derivados de los desequilibrios en las transacciones internacionales de comercio y finanzas. El sistema que había prevalecido hasta entonces era fundamentalmente mercantilista en el sentido de que los pagos internacionales para la liquidación de las deudas se seguían basando en la transferencia de algunas monedas *de reserva* que se suponía que eran un depósito de valor representado en última instancia por el oro (véase De Cecco, 1979). En este sentido, las importaciones fueron inmisericordes, mientras que las exportaciones aumentaron la riqueza, ya que dieron lugar a la acumulación de reservas y a más oro. El acaparamiento de tales activos durante largos periodos de tiempo tuvo la consecuencia obvia de mantener los desequilibrios mundiales en el comercio y las finanzas y de sofocar la expansión económica y el crecimiento en todo el mundo, pero especialmente en los países deficitarios (véase Keynes, 1942; Hudson, 2010).

Aunque el sistema de Bretton Woods se había alejado notablemente

del plan original de Keynes, el periodo comprendido entre 1945 y 1971, conocido como la edad de oro del capitalismo, se caracterizó todavía por (a) tipos de cambio bastante estables, que eran fijos pero ajustables; (b) una extensa regulación y controles de capital, con la mayoría de los Gobiernos nacionales aplicando (c) políticas fiscales y monetarias expansivas internas. Sin embargo, poco después de que el sistema de Bretton Woods se derrumbara en 1971, los tipos de cambio empezaron a flotar de nuevo y la libre movilidad del capital volvió con toda su fuerza, ya que los defensores del libre mercado pidieron la eliminación de todas las barreras a los flujos de capital. Las dos décadas siguientes de los años ochenta y noventa se caracterizaron por un cambio general hacia el libre mercado y coinciden con el auge de las políticas neoliberales.

La nueva sabiduría para la formulación de políticas se presenta ahora en forma de un *trilema*: un país no puede tener al mismo tiempo i) una política monetaria independiente que se ocupe de las cuestiones internas; ii) tipos de cambio fijos; y iii) libre movilidad del capital, lo que implica que debe elegir como máximo dos de estas opciones. Pero el debate que rodeó la cuestión del trilema ha sido muy engañoso, porque si un país establece su soberanía monetaria y se propone aplicar políticas fiscales y monetarias expansivas al mismo tiempo que gestiona el valor de su moneda, entonces debe aplicar controles de capital (véase Epstein, 2010). Una evaluación empírica de los dos episodios posteriores a la Segunda Guerra Mundial la proporcionan Reinhart y Rogoff (2008: 23), quienes encuentran que el primer episodio (1945-71) de regulación y control de capitales se caracterizó por la calma y la estabilidad, mientras que después de 1971, la mayor movilidad de capitales se asoció con más crisis bancarias. En su estudio actualizado, Reinhart y Rogoff (2013: 4558, énfasis en el original) señalaron que “*desde principios de la década de los setenta, la liberalización de las cuentas financieras y de capital internacional echó raíces en todo el mundo. Así que, también, tenemos crisis bancarias*”.

Las discusiones teóricas previas a la conferencia de Bretton Woods de 1944 —que condujeron a la creación del FMI— se llevaron a cabo

principalmente entre Harry Dexter White, en representación de Estados Unidos, y John Maynard Keynes, en representación de Gran Bretaña y otras delegaciones⁶⁹. Las propuestas de reforma del sistema monetario internacional sugeridas inicialmente por White y Keynes eran algo similares, pero a medida que las negociaciones avanzaban, las diferencias se hacían más marcadas: Keynes defendía la utilización de una unidad monetaria internacional principalmente como medio de pago, mientras que White impulsaba la adopción de una *moneda* de reserva nacional — el dólar estadounidense — que también puede ser una reserva de valor (Amato y Fantacci, 2014). Como veremos más adelante, la diferencia entre ambas propuestas es enorme en cuanto al tipo de sistema monetario internacional que conlleva y a sus consecuencias para la economía mundial.

Los detalles históricos que rodean el rechazo del plan de Keynes y la adopción del dólar estadounidense como moneda internacional son, en efecto, intrigantes y fascinantes, pero demasiado largos para relatarlos aquí y han sido discutidos por otros, incluyendo Moggridge (1980), Rosenberg y Schiller (2012) y Steil (2013). Es importante recordar que Keynes no estuvo presente en las discusiones cuando se tomó la decisión de adoptar el dólar estadounidense como moneda internacional. Keynes se preocupó por la gestión de los procedimientos del Banco Mundial cuando White, en ausencia de Keynes, terminó abruptamente la discusión sobre la cuestión de la sustitución del oro por el dólar de Estados Unidos y declaró: “A menos que haya alguna objeción, esta cuestión se remitirá al comité especial. ¿Alguna objeción? Entonces pasamos al siguiente problema”, citado en Steil (2013: 216). Comentando este incidente, Amato y Fantacci (2014: 1435) escribieron que “en este sentido, la historia de Bretton Woods, con respecto a los objetivos que se suponía que debía lograr, es la historia de un fracaso: es la historia de cómo, en lugar de una unidad monetaria internacional, se estableció finalmente una moneda de reserva nacional como dinero internacional”.

Aun así, se necesita un breve resumen para apreciar la diferencia en la propuesta de Keynes para la historia de la economía mundial si hubiera

sido adoptada. En la década de los treinta, Keynes ya se había convertido en un feroz oponente del patrón oro y la conferencia de Bretton Woods fue una oportunidad para que presentara su teoría alternativa del dinero y propusiera una solución a lo que llamó el problema internacional *secular*, que ha plagado la balanza de pagos entre países desde la introducción del “dinero y las letras de cambio” como medio de pago (Keynes, 1941: 21). Keynes señaló que la economía mundial había estado en “un estado de desequilibrio extremo”, incluso antes de la guerra, y lo atribuyó a una sola razón: la transferencia de valor del país deudor a los países acreedores en un sistema que “arroja la principal carga del ajuste sobre el país que está en la posición deudora en la balanza de pagos internacional” y que por lo tanto buscaba “forzar los ajustes en la dirección más perturbadora del orden social, y arrojar la carga sobre los países menos capaces de soportarla, haciendo más pobres a los pobres” (ídem, p. 29). Habiendo identificado esta corriente obligatoria de fondos de capital que sale de los países deudores como la principal fuente de inestabilidad su solución fue, entonces, concebir un sistema que obligara tanto a los países deudores como a los acreedores a compartir la carga del ajuste. Ese sistema era lo que Keynes llamaba la Unión Internacional de Compensación.

La idea de una Unión Internacional de Compensación es bastante simple, pero tiene consecuencias de gran alcance. Se basa en la idea del papel de un banco comercial en un sistema cerrado. Como hemos visto en los capítulos 3 y 4, los bancos comerciales hoy en día crean dinero de la nada simplemente aceptando extender créditos a prestatarios solventes que luego usan estos créditos para pagar por bienes y servicios y para extinguir sus deudas. Si tanto los pagadores como los beneficiarios son clientes del mismo banco, entonces la liquidación de las deudas consiste simplemente en trasladar los créditos de una cuenta a la otra, registrando un “menos” en la cuenta del pagador y un “más” en la cuenta del beneficiario, y el banco nunca tendrá dificultades para pagar los cheques girados contra él. La Unión Internacional de Compensación funcionaría esencialmente de la misma manera y el “dinero internacional” se

trasladaría de la cuenta del país importador a la cuenta del país exportador. Sin embargo, hay algunas diferencias cruciales y estas son quizás las que hicieron que el brillante plan de Keynes fuera tan poco convencional que no fue adoptado —aunque ahora sabemos que el plan fue dejado de lado por la evasión y el engaño en lugar de por una argumentación intelectual honesta (véase Steil, 2013: capítulo 8)—.

El “dinero internacional”, que Keynes llamó *bancor*, se asemeja al dinero de los bancos comerciales en el sentido de que puede ser creado para acomodar las necesidades del comercio. Para ello, cada país miembro tendría una cuenta en la Unión de Compensación, con todas las cuentas fijadas inicialmente en cero *bancor*. Los países acordarían entre ellos “los valores iniciales de sus propias monedas en términos de *bancor* y también el valor de *bancor* en términos de oro” y estos valores, es decir, los tipos de cambio, permanecerían fijos y no podrían ser alterados sin el permiso del consejo de administración de la Unión de Compensación (Keynes, 1942: 172). Al igual que los ciudadanos particulares tienen acceso a una línea de crédito y pueden pedir prestados fondos en su dinero nacional a un banco local, todos los países miembros tienen acceso a un sobregiro con la Unión de Compensación, con un importe máximo designado como sus cuotas —la cuota de cada país es relativa a su peso en el comercio internacional—.

A diferencia del sistema actual, que requiere que los países importadores tengan un depósito previo de reservas, la Unión de Compensación permite que el país importador utilice su servicio de sobregiro y el pago se realice simplemente registrando un “menos” en la cuenta del importador y un “más” en la cuenta del exportador, haciendo así del *bancor* un dinero puramente escritural, que se crea cada vez que un país importador utiliza su servicio de sobregiro para pagar sus importaciones. Esto es de suma importancia para los países pobres y en desarrollo porque elimina eficazmente sus limitaciones externas al permitirles el acceso directo a la financiación de las importaciones de tecnología extranjera. Los países con un saldo negativo (positivo) estarían en una posición de déficit (superávit) con respecto a la Unión de

Compensación en su conjunto y *no* con respecto a otros países, lo que “significa que las facilidades de sobregiro, aunque son un alivio para algunos, no son una carga real para otros”. Sin embargo, el uso de las facilidades de sobregiro no es ilimitado ni gratuito. A un país deficitario se le permite una “cantidad definida” y un “intervalo de tiempo dentro del cual efectuar un balance en sus relaciones económicas con el resto del mundo” (Keynes, 1942: 176).

Dado que el principal objetivo de la Unión Internacional de Compensación es evitar la acumulación sistemática de desequilibrios duraderos, tanto los países deficitarios como los excedentarios están sujetos a ciertas condiciones que les obligan a tomar las medidas adecuadas para restablecer el equilibrio de sus balances internacionales⁷⁰. Para ello, la Unión de Compensación cobraría intereses tanto por los saldos negativos como por los positivos cuando estos alcancen un determinado porcentaje de la cuota del país. La idea de cobrar a los países con superávit un interés negativo o un “costo de arrastre” sobre sus saldos crediticios acumulados no encajaba bien con la ortodoxia, ya que estos saldos se irán agotando gradualmente con el tiempo. Pero desde la perspectiva keynesiana el punto es no penalizar a los países excedentarios por haber realizado transacciones exitosas en el comercio internacional. Más bien se trata de inducirlos a gastar estos créditos en lugar de retirarlos de la circulación y así forzar una “presión deflacionaria y contraccionista sobre el mundo entero, incluyendo al final al propio país acreedor” (Keynes, 1942: 177). Esta medida es coherente con el paradigma keynesiano general de poner la demanda en el centro de la expansión económica. Por eso no se puede permitir que los países acreedores acumulen sus excedentes indefinidamente. Por lo tanto, los países con superávit tendrán tres opciones:

- Gastar sus saldos crediticios en la compra de bienes y servicios, incluso de países deficitarios, contribuyendo así a la expansión del comercio mundial y a la vuelta al equilibrio.
- Invertir estos saldos a largo plazo en forma de inversiones

directas, según la línea 5 de la balanza de pagos que figura en la tabla 6. 1 (*supra*) y, por lo tanto, contribuir al desarrollo de capital de otros países, en particular los pobres y los países en desarrollo.

- Continuar manteniendo sus saldos en la Unión de Compensación, pero pagando los costes de mantenimiento que, como se ha señalado anteriormente, actúan como un impuesto que reduce gradualmente el importe pendiente de los saldos acreedores. Esta última opción debe ser la menos favorecida, lo que significa que el país acreedor no permanecerá pasivo y esa es la idea detrás del plan.

Amato y Fantacci (2014: 1445) señalaron que las disposiciones descritas anteriormente tienen la ventaja de fomentar la “circulación continua de dinero internacional” y evitar la “acumulación de saldos ociosos y la generación de rentas” con el fin de “asegurar una financiación adecuada para el comercio y la inversión internacionales”. Pero es interesante observar que el plan pone un énfasis particular en los movimientos de capital a largo plazo porque estos son considerados como la “genuina nueva inversión para el desarrollo de los recursos del mundo”, que ayudará a prevenir los desequilibrios del comercio mundial (Keynes, 1942: 186-7). En este contexto, los movimientos de capital a corto plazo se consideran, obviamente, una fuente de perturbación y, por lo tanto, no se permite a los países con superávit realizar transacciones especulativas, como la utilización de sus saldos bancarios para comprar valores financieros (véase Amato y Fantacci, 2014; De Cecco, 1979).

Hay muchas otras características interesantes del plan, pero las más relevantes para nosotros aquí son las que se refieren específicamente al acceso a la financiación internacional y al papel de esta en el desarrollo de capital de los países pobres. En este sentido, puede decirse que el objetivo primordial era crear condiciones favorables para que los Estados redujeran los efectos nocivos del capital especulativo y canalizaran la financiación hacia una transformación estructural de sus economías,

aplicando al mismo tiempo políticas de pleno empleo, tarea que era crucial para las estrategias de industrialización, como sostuvieron posteriormente los pioneros de la economía del desarrollo, como Raúl Prebisch, Albert Hirschman y Ragnar Nurkse, entre otros (véase Gallagher, 2014). A John Maynard Keynes se le debe reconocer el mérito de haber tenido la previsión de que la acumulación de recursos ociosos y la generación de rentas a través de los intereses y la especulación conduciría a un crecimiento desproporcionado de las finanzas y al divorcio entre estas y la economía real, que es una característica importante del capitalismo actual y una fuente de sus males.

4. CONCLUSIÓN

El patrón colonial de comercio e inversión que requería que las “viejas” colonias se especializaran en la producción y exportación de productos primarios y que importaran productos manufacturados de las metrópolis ha recibido recientemente un nuevo apoyo de los partidarios de la llamada economía posindustrial. Este argumento sugiere claramente que, dado que ahora vivimos en una economía del conocimiento, no tiene sentido que las antiguas colonias busquen la industrialización. Después de siglos de explotación colonial, el mensaje hoy parece ser que es demasiado tarde para construir la costosa infraestructura de las industrias manufactureras y seguir estrategias de desarrollo basadas en la industrialización. La política industrial activa se rechaza entonces de plano debido a lo que se denomina capacidad del Estado —un término conveniente para descalificar los poderes fiscales y administrativos del Estado para gestionar la economía—. El argumento subyacente es que el mercado, y no el Gobierno, es la fuerza motriz de la economía y, por lo tanto, no hay necesidad de intervención gubernamental, sobre todo cuando sabemos que dicha intervención requiere el uso de “fondos públicos”, que se supone que son escasos.

Si bien es cierto que la proporción de la manufactura en el PIB ha disminuido en la mayoría de los países industrializados, esto no significa

que estemos a punto de abandonar la producción material de tecnología, de la misma manera que nunca podremos detener la producción de alimentos debido al declive de la agricultura. De hecho, el declive de estos sectores y el auge del sector de los servicios se deben principalmente a los avances tecnológicos que han aumentado la productividad y liberado mano de obra de estas actividades primarias y secundarias. La industrialización es —y seguirá siendo— el principal motor del progreso y de la marcha hacia un nivel más alto de desarrollo humano. Sin embargo, los países pobres continúan enfrentándose a dos grandes limitaciones: el acceso a los conocimientos tecnológicos y la financiación internacional. En este capítulo se han ofrecido ideas sobre cómo superar estas limitaciones mediante la aplicación de estrategias de desarrollo bien diseñadas que incluyeran la lucha por la modernización del actual sistema monetario internacional.

BIBLIOGRAFÍA

- AMIN, S. (1974): *Accumulation on a World Scale*, Nueva York, Monthly Review Press.
- (1997 [2014]): *Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society*, Nueva York, Zed Books.
- (2004): *The Liberal Virus: Permanent War and the Americanization of the World*, Nueva York, Monthly Review Press.
- (2009): *Eurocentrism: Modernity, Religion, and Democracy A Critique of Eurocentrism and Culturalism*, Nueva York, Monthly Review Press.
- ACEMOGLU, D. y JOHNSON, S. (2005): “Unbundling Institutions”, *Journal of Political Economy*, 113(5), pp. 949-995.
- ACEMOGLU, D. y ROBINSON, J. A. (2012): *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, Londres, Profile Boos Ltd.
- ACEMOGLU, D.; JOHNSON, S. y ROBINSON, J. A. (2001): “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”, *American Economic Review*, 91(5), pp. 1369-1401.
- AMATO, M. y FANTACCI, L. (2014): “Back to Which Bretton Woods? Liquidity and Clearing as Alternative Principles for Reforming International Money”, *Cambridge Journal of Economics*, vol. 38, pp. 1431-1452.
- AMSDEN, A. (1996): “A Strategic Policy Approach to Government Intervention in Late Industrialization” en A. Solimano (ed.), *Road Maps to Prosperity: Essays on Growth and*

- Development*, Ann Arbor, University of Michigan Press, pp. 119-141.
- (1997): “South Korea: Enterprising Groups and Entrepreneurial Government”, en A. Chandler, F. Amatori y T. Hikino (eds.), *Big Business and the Wealth of Nations*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 336-367.
- AMSDEN, A. y CHU, W. (2003): *Beyond Late Development: Taiwan’s Upgrading Policies*, Cambridge, MIT Press.
- ARTADI, E. V. y SALA-I-MARTIN, X. (2004): “The Economic Tragedy of the Twentieth Century: Growth in Africa”, en E. Hernández-Catá, K. Schwab y A. Lopez-Claros (eds.), *The Africa Competitiveness Report 2004*, Ginebra, World Economic Forum, pp. 1-18.
- BANCO MUNDIAL (1981): *Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: an Agenda for Action*, Washington, D. C., The World Bank, disponible en <https://bitly.ws/3dmD3>, consultado el 5 de mayo de 2016.
- (2016a): *Poverty: Overview*, disponible en <https://bitly.ws/3dmDf>, consultado el 5 de mayo de 2016.
- (2016b): *Poverty in a Rising Africa: Africa Poverty Report*, Washington, D. C., The World Bank.
- BERNAL, M. (1991): *Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization*, Londres, Vintage.
- BOUGRINE, H. y SECCARECCIA, M. (2009-10): “Financing development: removing the external constraint”, *International Journal of Political Economy*, 38(4), pp. 44-65.
- BRAUDEL, F. (2016): *El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, México, FCE, versión electrónica.
- COMISIÓN DE EXPERTOS DE LA ONU (2009): *The Commission of Experts on Reforms of the International Monetary and Financial System*, <https://bitly.ws/3dmny>, consultada el 5 de mayo de 2016.
- CHANG, H. J. (2015): “Is Industrial Policy Necessary and Feasible in Africa?: Theoretical Considerations and Historical Lessons” in A. Noman y J. E. Stiglitz (eds.), *Industrial Policy and Economic Transformation in Africa*, Nueva York, Columbia University Press.
- CHEON, B. Y. *et al.* (2014): “Korea: ‘The Great U-Turn in Inequality and the Need for Social Security Provisions’”, en B. Nolan *et al.*, *Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Thirty Countries’ Experiences*, Oxford, Oxford University Press.
- DE CECCO, M. (1979): “Origins of the post-war payments system”, *Cambridge Journal of Economics*, vol. 3, pp. 49-61.
- DE GREGORI, R. T. (1968): “Foreign Investment and Technological Diffusion: The Case of British Colonial Africa”, *Journal of Economic Issues*, 2(4), pp. 403-415.
- DONALDSON, D. y HORNBECK, R. (2016): “Railroads and American Economic Growth: A ‘Market Access’ Approach”, *The Quarterly Journal of Economics*, 131(2), pp. 799-858.

- DUTT, A. K. (1992): “The Origins of Uneven Development: The Indian Subcontinent”, *American Economic Review*, 82(2), pp. 146-150.
- EICHENGREEN, B. y HAUSMANN, R. (1999): “Exchange Rates and Financial Fragility”, *NBER*, working paper, n° 7418.
- EPSTEIN, G. (2010): “Financial Flows Must be Regulated” en H. Bougrine y M. Seccareccia (eds.), *Macroeconomic Analysis: Issues, Questions, and Competing Views*, Toronto, Emond Montgomery Publications.
- FIELDHOUSE, D. K. (1986): *Black Africa 1945-1980: Economic Decolonization and Arrested Development*, Londres, Allen and Unwin.
- FIELDS, D. y VERNENGO, M. (2016): “DisORIENT: Money, Technological Development and the Rise of the West”, ASSA.
- GALBRAITH, J. K. (2016): *Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future of Europe*, New Haven, Yale University Press.
- GALLAGHER, K. (2014): “The Economics of Regulating Cross-border Finance: Two New Views”, *Review of Political Economy*, 26(4), pp. 594-617.
- GREENWALD, B. C. y STIGLITZ, J. E. (2013a): “Industrial Policies, The Creation of a Learning Society, and Economic Development”, en J. E. Stiglitz y J. Y. Lin (eds.), *The Industrial Policy Revolution I: The Role of Government Beyond Ideology*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- (2013b): “Learning and Industrial Policy: Implications for Africa” en J. E. Stiglitz, J. L. Yifu y E. Patel (eds.), *The Industrial Policy Revolution II: Africa in the 21st Century*, Houndmills, Palgrave Macmillan.
- GUNDER FRANK, A. (1978): *World Accumulation 1492-1789*, Nueva York, Monthly Review Press.
- (1998): *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*, Berkeley, University of California Press.
- HAUSMANN, R. y PANIZZA, U. (2003): “On the determinants of Original Sin: an empirical investigation”, *Journal of International Money and Finance*, vol. 22, pp. 957-990.
- HEADRICK, D. R. (1981): *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century*, Oxford, Oxford University Press.
- HEIDHUES, F. y OBARE, G. (2011): “Lessons From Structural Adjustment Programmes and Their Effects in Africa”, *Quarterly Journal of International Agriculture*, 50(1), pp. 55-64.
- HIRSCHMAN, A. O. (1958): *The Strategy of Economic Development*, New Haven, Yale University Press.
- HUDSON, D. (2010): “Financing for Development and the Post Keynesian Case for a New Global Reserve Currency”, *Journal of International Development*, vol. 22, pp. 772-787.
- JEDWAB, R.; KERBY, E. y MORADI, A. (2015): “History, Path Dependence and Development: Evidence from Colonial Railroads, Settlers and Cities in Kenya”, *The*

- Economic Journal*, 127(603), pp. 1467-1494.
- KEYNES, J. M. (1941 [1942]): *The Collected Writings of John Maynard Keynes*, vol. XXV, edición de 1980, Nueva York, Macmillan.
- LAGARDE, C. (2012): “Emerging Market Nations Will Get More Power in the IMF”, disponible en <https://bitly.ws/3dhTP>, consultada el 5 de mayo de 2016.
- LIM, W. (2013): “The *Chaebol* and Industrial Policy in Korea” en J. E. Stiglitz y J. Y. Lin (eds.), *The Industrial Policy Revolution I: The Role of Government Beyond Ideology*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- LOXLEY, J. (1983): “The Berg Report and the Model of Accumulation in Sub-Saharan Africa”, *Review of African Political Economy*, n° 27/28, pp. 197-204.
- MADDISON, A. (2006): *The World Economy: A Millennial Perspective*, Paris, OECD Development Center Studies.
- MANTOUX, P. (1928 [1961]): *The Industrial Revolution in the Eighteenth Century*, Londres, University Paperbacks.
- MAYNARD, A. E.; SUBRAHMANYAM, K. y GREENFIELD, P. M. (2005): “Technology and the Development of Intelligence: From the Loom to the Computer” en R. J. Sternberg y D. D. Preiss (eds.), *Intelligence and Technology: The Impact of Tools on the Nature and Development of Human Abilities*, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
- MCCLOSKEY, D. N. (2010): *Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World*, Chicago, The University of Chicago Press.
- MEHRLING, P. (2016): “Beyond Bancor”, *Challenge*, 59(1), pp. 22-34.
- MOKYR, J. (1990): *The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress*, Oxford, Oxford University Press.
- MORGAN, L. H. (1877): *Ancient Society: Or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization*, Nueva York, Holt & Co., disponible en <https://bitly.ws/3cZDB>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- NACIONES UNIDAS (1998): *African Industrialization Tops UNIDO's Agenda*, disponible en <https://bitly.ws/3dmoj>, consultada el 5 de mayo de 2016.
- NOMAN, A. y STIGLITZ, J. E. (2012): “Strategies for African Development”, en A. Noman *et al.* (eds.), *Good Growth and Governance for Africa: Rethinking Development Strategies*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 3-47.
- NURKSE, R. (1954 [2009]): *Ragnar Nurkse: Trade and Development*, edición de R. Kattel, J. A. Kregel y E. S. Reinert (eds.), Nueva York, Anthem Press.
- OBAMA, B. (2016), “The TPP Would Let America, Not China, Lead the Way on Global Trade”, *The Washington Post*, disponible en <https://bitly.ws/3dhXP>, consultada el 3 de mayo de 2016.
- OCAMPO, J. A. y PARRA, M. A. (2003): “The Terms of Trade for Commodities in the Twentieth Century”, *CEPAL Review*, 79, pp. 7-35.

- OCDE (2014): *OECD Economic Surveys: Korea*, París, OECD.
- POLANYI-LEVITT, K. (2016): “Economics, Development and Ideology in Historical Perspective”, *Canadian Economics Association meeting*, Ottawa, 2-5 de junio de 2016.
- PONTING, C. (2007): *A New Green History of the World: The Environment and the Collapse of Great Civilizations*, Nueva York, Penguin Books, p. 197.
- RADELET, S. (2010): *Emerging Africa: How 17 Countries Are Leading the Way*, Washington, D. C., Centre for Global Development.
- REINHART, C. M. y ROGOFF, K. S. (2008): “Banking Crises: An Equal Opportunity Menace”, *National Bureau of Economic Research*, documento de trabajo n° 14587, disponible en <https://bitly.ws/3dmjn>, consultada el 20 de mayo de 2016.
- (2013): “Banking Crises: An Equal Opportunity Menace”, *Journal of Banking & Finance*, 37(11), pp. 4557- 4573.
- RODNEY, W. (1972): *How Europe Underdeveloped Africa*, Londres, Bogle-L'Ouverture.
- ROSENBERG, A. y SCHULER, K. (eds.) (2012): *The Bretton Woods Transcripts*, Nueva York, Center for Financial Stability.
- ROSSI, S. (2015): “Structural Reforms in Payment Systems to Avoid Another Systemic Crisis”, *Review of Keynesian Economics*, 3(2), pp. 213-225.
- SAUDI GAZETTE (2016): *Saudi Arabia's Vision 2030*, disponible en <https://bitly.ws/3dmk9>, consultada el 5 de mayo de 2016.
- SMITHIN, J. (2001): “International Monetary Arrangements” en R. P. F. Holt y S. Pressman (eds.), *A New Guide to Post Keynesian Economics*, Nueva York, Routledge.
- STEIL, B. (2013): *The Battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the Making of a New World Order*, Princeton, Princeton University Press.
- STIGLITZ, J. E. (2015): “Industrial policy, Learning, and Development”, *WIDER*, working paper 2015/149, disponible en <https://bitly.ws/3dmmo>, consultada el 8 de mayo de 2016.
- STIGLITZ, J. E. y GREENWALD, B. C. (2010): “Towards A New Global Reserve System”, *Journal of Globalization and Development*, 1(10), pp. 1-24.
- (2014): *Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress*, Nueva York, Columbia University Press.
- STIGLITZ, J. E.; LIN, J. Y. y MONGA, C. (2013): “Introduction: The Rejuvenation of Industrial Policy”, en J. E. Stiglitz y J. Y. Lin (eds.), *The Industrial Policy Revolution I: The Role of Government Beyond Ideology*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- STORM, S. (2015): “Structural Change”, *Development and Change*, 46(4), pp. 666-699.
- STUDER, R. (2015): *The Great Divergence Reconsidered: Europe, India, and the Rise to Global Economic Power*, Cambridge, Cambridge University Press.
- SVEDBERG, P. (1981): “Colonial Enforcement of Foreign Direct Investment”, *The Manchester School*, 49(1), pp. 21-38.
- UNCTAD (2005): “Evolution in the Terms of Trade and Its Impact on Developing

- Countries”, *Trade and Development Report, 2005*, Nueva York, United Nations, disponible en <https://bitly.ws/3dmnT>, consultada el 5 de mayo de 2016.
- (2009): *Trade and Development Report, 2009*, Nueva York, United Nations.
- VRIES, P. (2015): *State, Economy and the Great Divergence: Great Britain and China, 1680s-1850s*, Nueva York, Bloomsbury Academic.
- WADE, R. (2004): *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*, Princeton, Princeton University Press.
- WALLERSTEIN, I. (1974): *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*, Nueva York y Londres, Academic Press.

CAPÍTULO 7

LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA CRISIS ECOLÓGICA

“Hemos adornado la tierra con todo lo que en ella hay para probarles y ver quién de ellos es el que mejor se porta”.

CORÁN (18:7).

1. INTRODUCCIÓN

La preocupación por el medioambiente es un asunto personal, para todos y cada uno. Comienza con la calidad del aire que respiramos diariamente, el agua contaminada en los lagos y en los mares, lo mismo que con las sustancias químicas que ingerimos en nuestros alimentos. Los contaminantes tóxicos son a menudo subproductos “no deseados” de la actividad industrial cuando se fabrican bienes y servicios o se extraen recursos del subsuelo mediante métodos como el *fracking*. Estos contaminantes se denominan externalidades y quienes las producen a menudo no quieren que se les exija responsabilidad alguna: rechazan cualquier compromiso, argumentando que las externalidades deben considerarse parte de la vida y ser ignoradas o aceptadas como tales, lo que las convierte en un costo para la sociedad, mientras que los beneficios obtenidos durante el proceso que las genera siguen siendo privados. Esta contradicción por sí sola debería despertar el interés por los problemas ecológicos, incluso entre los escépticos del cambio climático.

Algunos economistas sostienen que tales externalidades son un fallo del mercado que sigue sin resolverse debido a la ausencia de derechos de propiedad privada sobre el aire, el espacio, el agua y otras esferas de la naturaleza (véase Bator, 1958; Coase, 1960) y sugieren que los problemas ecológicos son el resultado del hecho que el capitalismo no ha sido

todavía implementado plenamente (véase Kula, 1998)⁷¹. Pero los productos químicos tóxicos también se utilizan a menudo de forma intencionada para mejorar la productividad y la rentabilidad cuando se busca, por ejemplo, aumentar el rendimiento de los cultivos agrícolas. En este caso, dichos productos químicos son insumos directos y pasan a formar parte del proceso de producción y, por lo tanto, no pueden considerarse como “externalidades”. Sin embargo, los productores quieren que se acepten y a menudo están dispuestos a proporcionar los datos “científicos” para demostrar que son seguros⁷².

En el capítulo 5 demostramos que la Revolución Industrial desempeñó un papel crucial en el rápido progreso económico de Occidente. En este caso, argumentamos que la Revolución Industrial en sí misma no se habría producido al ritmo que lo hizo sin una revolución energética, que marcó el paso de una economía basada en gran medida en la energía humana y animal a otra basada en la energía del vapor. Esta fue la transición de una economía orgánica preindustrial a una economía *fósil*⁷³. Wrigley (2010) ha señalado que, en la última etapa de las economías preindustriales orgánicas, la energía mecánica fue complementada por el viento y el agua, pero la quema de madera y carbón vegetal seguía siendo la principal fuente de energía. Mantoux (1928: 280-281) apuntó que el desarrollo de la manufactura en Gran Bretaña hacia mediados del siglo XVIII dependía tanto del uso de la madera que había desaparecido bosques enteros y la madera se hizo escasa, incluso para uso doméstico, lo que motivó la promulgación por parte del Gobierno de varias leyes que buscaban limitar “el número de herrerías que se permitía establecer en ciertos condados”.

Esta falta de combustible aceleró el punto de inflexión en la historia de Gran Bretaña —y en la historia de la humanidad— que se produjo cuando la quema de carbón se convirtió en la fuente alternativa y primaria de energía térmica (calor) y mecánica (movimiento). A principios del siglo XIX, las máquinas de vapor se utilizaron ampliamente en la industria y el transporte en Gran Bretaña y se extendieron rápidamente al resto de Europa occidental. Impulsadas por el carbón, estas “fascinantes”

máquinas hicieron maravillas. Wrigley (2010: 28) citó al historiador francés Levasseur (1889), quien estimó que “un caballo de vapor realizaba un trabajo equivalente a 21 obreros”. Pero lo realmente importante es que estas máquinas, a diferencia de los trabajadores humanos, podían trabajar continuamente y no *quejarse* (a menos que se averíen) mientras se les siguiera alimentando con carbón⁷⁴. El carbón era sucio, pero efectivo: servía para aumentar el poder y la capacidad de producir cosas y de moverlas. Incluso el espacio parecía reducirse a medida que se acortaba el tiempo para viajar y transportar mercancías mediante el movimiento de trenes impulsados por carbón. Esta fue la Revolución Industrial y la máquina de vapor lo cambió todo⁷⁵.

La nueva economía tenía hambre de energía y sus fábricas engullían mucho carbón. Las chimeneas empezaron a brotar a un ritmo rápido y el paisaje cambió rápidamente. El humo espeso literalmente “envenenó la atmósfera” y contaminó los ríos, tanto los cercanos como los lejanos. Los daños y perjuicios inmediatos se mostraron en forma de aumentos en el número de muertes y enfermedades sufridas por los trabajadores, pero un peligro mucho mayor se avecinaba: una crisis ecológica que afectaba al futuro de la humanidad y a la evolución biológica a medida que avanzábamos rápidamente hacia el siglo XXI y más allá. La ciencia del cambio climático, aunque todavía es cuestionada por algunos, ha documentado la extinción de varias especies animales y proyecta que el calentamiento global, resultado de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono (CO₂), continuará causando más sequías, hambrunas, inundaciones y guerras. El número de víctimas mortales procedentes de estas calamidades, individuales o combinadas, suele ser de millones y afecta no solo a los seres humanos, sino también a otras especies de los ecosistemas de la Tierra (Organización Mundial de la Salud, 2015; Naciones Unidas, 2014), lo que nos lleva a cuestionar la naturaleza y los méritos del progreso que hemos logrado hasta ahora.

Actualmente existe un acuerdo general entre los científicos del clima de que la industrialización convencional basada en los combustibles

fósiles, es decir, el carbón, el petróleo y el gas, ha causado un grave daño al medioambiente. Se reconoce, asimismo, que está disminuyendo constantemente la calidad de vida debido a los costes que impone en términos de contaminación, congestión, estrés y destrucción del “capital natural”. Algunas estimaciones más crudas y realistas sugieren que si se tuvieran en cuenta esos costes, ni siquiera las industrias de mayor rendimiento serían rentables, lo que enmarcaría toda la cuestión de la degradación ambiental y el cambio climático en términos puramente económicos. Pero este estrecho enfoque en los costes y beneficios es engañoso porque, por lo que sabemos, no puede haber precios significativos para los beneficios de un medioambiente saludable ni para los costes de los daños a este (Ackerman, 2008). En este análisis también detectamos la suposición implícita, todavía popular en la economía del cambio climático, de que si estas industrias se vuelven rentables, entonces la preocupación por el medioambiente debería desaparecer y no sería necesario tomar ninguna medida para proteger el medioambiente, excepto quizás un pequeño impuesto sobre el carbono que podría desalentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Acemoglu *et al.* (2016), por ejemplo, consideran que depender solo de los impuestos sobre el carbono resultará en costes de bienestar y, por lo tanto, abogan por el uso adicional de subsidios para fomentar la I+D y acelerar la transición a una tecnología limpia. Sin embargo, sostenemos aquí que la preocupación por el medioambiente va más allá de las cuestiones de rentabilidad y de las ganancias o pérdidas pecuniarias, y puede ser considerada como una cuestión moral, ya que busca preservar la biodiversidad protegiendo la vida (humana y animal) en su hábitat natural.

Dado que estos gases son responsables del calentamiento global, como ha demostrado la ciencia, la escala de la amenaza a la biodiversidad requiere respuestas políticas inmediatas. Se argumenta aquí que, dados los avances y los conocimientos acumulados desde la Revolución Industrial, las sociedades modernas han alcanzado un grado de madurez que hace no solo deseable, sino también necesario, efectuar finalmente el cambio de la economía fósil a la economía *verde* y empezar a construir la

infraestructura necesaria para facilitar la transición invirtiendo cada vez más en tecnologías que no dañen el sistema ecológico. Además, el capítulo demuestra que la alternativa de una economía verde es factible, viable y económicamente más eficiente que el sistema actual basado en los combustibles fósiles. También muestra que la industrialización verde es buena para el empleo y para un desarrollo socialmente sostenible. Obviamente, se espera que el Estado democrático desempeñe un papel crucial para que todo esto ocurra, apoyando la economía ecológica mediante iniciativas de políticas públicas que se integren en la estrategia general de desarrollo.

2. LA ECONOMÍA FÓSIL Y EL AUGE DE LA INDUSTRIALIZACIÓN CAPITALISTA

Por razones obvias, la larga historia de la humanidad se acorta a menudo a los últimos 10.000 años, más o menos, lo que marca el comienzo de nuestra civilización —un periodo que los científicos llaman la era del Holoceno⁷⁶— y que el físico y premio nobel Burton Richter (2014: 46) describió como “un periodo de tiempo tan corto que es solo un parpadeo de un ojo geológico”. La perspectiva geológica es útil porque nos informa que otros cambios climáticos han ocurrido en el pasado y han transformado drásticamente la vida en la Tierra: las edades de hielo, el calentamiento global y las extinciones masivas. Como dijo Richter (2014: 45), “nuestro planeta Tierra tiene 4.500 millones de años, y a lo largo de su vida se han producido cambios en la temperatura, la concentración de gases de efecto invernadero y el nivel del mar que empequeñecen cualquiera de los cambios que se están discutiendo ahora”. Sin embargo, el rápido y sin precedentes aumento de la población humana y del tamaño de su actividad económica desde el comienzo de la era industrial ha hecho que la historia sea aún más corta y que la atención se centre ahora principalmente en los últimos 300 años. Como se ha mencionado anteriormente, se han dado diferentes relatos de la Revolución Industrial, pero todos parecen estar de acuerdo en que fue, como dijo Wrigley (2010:

2), “una de las dos mayores transformaciones de la sociedad humana desde los días de los cazadores-recolectores” —la primera fue la revolución agrícola del Neolítico—.

La Revolución Industrial ha transformado, en efecto, enormemente la sociedad humana de muchas maneras y ha tenido éxito en la construcción de una civilización completamente nueva; una que se basa en la ciencia dura y el progreso tecnológico y que ha hecho a un lado las explicaciones espirituales del universo y de cómo los humanos deben relacionarse entre sí y con su entorno. No es exagerado decir que los primeros monumentos de esta nueva civilización fueron las chimeneas y las fábricas que cambiaron el paisaje de Gran Bretaña y, más tarde, de Europa occidental y del resto del mundo. Antes del sistema fabril, el empresario capitalista asignaba *tareas* a los trabajadores que las realizaban en sus propios hogares y lo hacían a su propio ritmo, lo que les permitía también cuidar de sus hijos y otros miembros de la familia.

Bajo el nuevo sistema de producción en la fábrica, el capitalista asignaba *los trabajadores* a las tareas que debían completarse en un plazo determinado. Obligado a competir contra las máquinas de operación continua y contra sus compañeros, el trabajador ahora debía mostrar diligencia y obediencia para mantener el trabajo y recibir el salario. Fue el comienzo de la mecanización y la racionalización del trabajo, el preludio del fordismo y el taylorismo, cuyos efectos discutimos en el capítulo 5. Los trabajadores autónomos y los artesanos que antes eran trabajadores independientes se convirtieron en asalariados y necesitaban pasar largas horas en la fábrica —una nueva rutina que tenía importantes implicaciones para la estructura de la economía, la familia, el sistema educativo y muchas otras nuevas instituciones que se hicieron necesarias para construir la nueva civilización—.

Nell (1998) ha caracterizado esta fase en el desarrollo del capitalismo como el cambio de una “economía basada en la artesanía” a la “producción en masa”, un sistema que requiere grandes reservas de mano de obra y la concentración de la gente en pueblos y ciudades. A su vez, el rápido crecimiento de estas aglomeraciones significó la necesidad y el

desarrollo de nuevos servicios, desde el cuidado de los niños hasta la escolarización, el transporte, la vivienda, los servicios públicos y una serie de otros servicios urbanos. Escribiendo en medio de estos cambios, Barnett y Barnett (1895: 138) observaron que: “A veces la madre soltera [...] trata honestamente de conseguir trabajo en la fabricación de sacos, como obrera en la fábrica o cualquier cosa que le permita mantener a su pequeño cerca de ella; pero es una tarea difícil, y casi imposible. El cuidado del niño impide el trabajo, por lo que hay que llevarlo a la guardería diariamente”.

Sin embargo, en esa época ya habían aparecido nuevas divisiones del trabajo y la mayoría de las funciones económicas de la familia se perdieron rápidamente. Paralelamente, como señala Nell (1998), se produjo un aumento drástico del papel del Estado, que se amplió mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria y de las instituciones apropiadas requeridas para gestionar la nueva economía y los cambios sociales que esta conlleva.

Por otra parte, Wrigley (2010) lleva a cabo una de las mejores caracterizaciones de la Revolución Industrial, a la que consideró principalmente como una revolución energética. Wrigley coincide con otros estudios en que los factores sociales, políticos, culturales e institucionales desempeñaron un papel importante en la Revolución Industrial, pero sostiene que es importante considerar también los factores físicos y biológicos. Wrigley (2010: 9, 14) defiende que la capacidad productiva de una economía y su potencial de crecimiento dependen de manera crucial de la cantidad y el tipo de energía disponible para su uso. Las economías orgánicas, argumenta, dependían de la energía que se derivaba esencialmente de la energía humana y animal, de las ruedas hidráulicas y de la fotosíntesis de las plantas, es decir, de la quema de madera y carbón vegetal, cuyo alcance limitado es fácilmente reconocible y bien conocido en la actualidad⁷⁷. Estas limitaciones físicas y biológicas impidieron el crecimiento y, en el largo plazo, condenaron a estas economías a una perpetua reproducción simple, si no a la decadencia. Para poner las cosas en perspectiva, Wrigley (2010:

249) hace la siguiente comparación: “El tipo de inversión infraestructural que asegura una amplia gama de actividades que tienen lugar en las sociedades modernas no podría haberse dado en la era orgánica. Esto es fácilmente demostrable en algunos contextos. La cantidad de hierro y acero necesaria para construir una red ferroviaria o para construir buques graneleros, por ejemplo, no se podría haber producido, aunque toda la tierra boscosa hubiera sido despojada de madera”.

Por el contrario, el uso del carbón como fuente alternativa de energía amplió los poderes de la industria para producir cosas suministrando a la nueva economía energía abundante —y eso proporcionó un escape de las limitaciones de la economía orgánica—. Puede que no haya sido una razón suficiente, pero era necesario para que la Revolución Industrial despegara. Una vez descubiertos los beneficios del carbón, su uso en Gran Bretaña creció tan rápidamente que se cuadruplicó con creces entre 1800 y 1859, representando más de nueve décimos del consumo total, mientras que el uso de otras fuentes (viento, agua, energía humana) solo aumentó o disminuyó marginalmente, como en el caso de la leña (véase Wrigley, 2010: tabla 4.2). La cantidad de energía necesaria para sostener todas las actividades de la nueva economía (industrias y consumo doméstico) era mucho más de lo que la economía orgánica podía suministrar. La energía del carbón liberó efectivamente a la industria de las restricciones y limitaciones impuestas por las fuentes tradicionales y *eso* abrió nuevos horizontes para un crecimiento y una expansión sin precedentes. Es en este sentido que la Revolución Industrial fue realmente una revolución en el uso de la energía.

La búsqueda de nuevas fuentes de energía continuó sin cesar y hacia finales del siglo XIX el carbón ya se complementaba con el petróleo y a principios del siglo XX con el gas. Hoy en día, la economía mundial funciona literalmente gracias a este trío —aproximadamente, carbón para la generación de electricidad, petróleo para el transporte y gas para la calefacción—. En efecto, la vida en la sociedad moderna depende de manera crucial del uso de la energía, ya que se trata de algo indispensable para todas las actividades de nuestra vida cotidiana:

calentar, cocinar, iluminar, transportar, comunicar y producir bienes y males. A este respecto, Richter (2014: 11) comentó con razón que “aunque los poetas y los escritores de canciones dicen que es el amor lo que hace girar el mundo, y los banqueros dicen que es el dinero, en realidad es la energía lo que hace girar el mundo”. La gran dependencia de estos combustibles fósiles como fuentes de energía ha servido ciertamente a la humanidad en el sentido de que ha mantenido el crecimiento y la expansión durante varias generaciones, pero también ha traído consigo graves peligros ambientales, de los que el más mencionado es el calentamiento global.

¿Qué es el cambio climático y por qué debemos preocuparnos por él? La explicación científica básica del cambio climático —en la que los científicos están de acuerdo— es que la vida en el planeta Tierra es posible porque la temperatura es la adecuada —ni demasiado caliente, ni demasiado fría (y la comparación aquí es con otros planetas como Venus y Marte; véase, entre otros, Richter, 2014)—. La Tierra recibe casi todo su calor o energía del Sol. Una vez que este calor llega a la superficie de la Tierra es irradiado de nuevo al espacio, pero parte de este calor es atrapado por los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera —muchos de los cuales se forman naturalmente como, por ejemplo, la vaporización del agua y otros gases—. La cantidad de calor atrapado de esta manera en la atmósfera sobre nosotros es lo que asegura que la temperatura en la Tierra sea la que es⁷⁸. La quema de combustibles fósiles para generar energía para nuestro uso diario libera más gases en la atmósfera, lo cual atrapa más calor e impide que se escape al espacio, causando así un aumento de la temperatura en la Tierra, es decir, el calentamiento global.

Ahora bien, la preocupación es que si esta actividad continúa sin control alterará el equilibrio natural y provocará un cambio en las condiciones climáticas que hasta ahora han permitido que la civilización humana prospere. Los datos disponibles (véase Hansen *et al.*, 2016) indican que tales cambios en el clima ya están ocurriendo y tomando la forma de prolongadas sequías y desertificación en algunas partes del

planeta, el derretimiento de los glaciares y el hielo en el Ártico, el aumento del nivel del mar y las graves inundaciones, todo lo cual perturba la estabilidad histórica de los asentamientos humanos en la Tierra —conduciendo, como lo hizo (véase IPCC, 2014), al actual drama de éxodos masivos, hambrunas y guerras por los recursos que son tan necesarios para la vida, ya sea la tierra fértil, el agua u otras fuentes de energía como el petróleo y el gas—. Otras prácticas como el uso de fertilizantes en la agricultura y la deforestación agravan la situación, pero según Richter (2014: 105), estas son responsables de solo alrededor del 30% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el resto se atribuye a la quema de combustibles fósiles.

Como se ha señalado anteriormente, desde que la revolución energética reveló la conexión entre el uso de la energía y la creación de riqueza, los países industrializados han estado en una abierta y voraz —incluso despiadada— competencia de compras, adquiriendo y quemando tanto combustible fósil como parece ser necesario para impulsar su crecimiento económico. Aparte de las complicadas y enrevesadas formas de financiación, la energía ha demostrado ser hasta ahora la fuente indiscutible de creación de riqueza y el enorme aumento de su demanda en todo el mundo está impulsado por lo que ahora es un hecho evidente: los países con mayor consumo de energía per cápita son también los que disfrutan de los mayores ingresos per cápita, una medida estándar de bienestar⁷⁹. Algunos podrían discutir sobre esta interpretación de la causalidad y no estar de acuerdo con que los niveles de consumo de energía lo harían a uno rico o pobre, pero podemos pensarlo de esta manera: todo el mundo necesita una cierta cantidad de energía solo para mantenerse con vida, y cuanta más energía, mejor. Hoy en día, los más pobres de los pobres no tienen acceso a la iluminación, refrigeración o cualquier otro tipo de energía comercial, aunque muchos de ellos viven en países ricos en recursos. Como señaló Richter (2014), cualquier política que permita a los pobres el acceso directo a estas fuentes de energía mejorará enormemente su nivel de vida, un tema sobre el que volveremos en el siguiente apartado.

FIGURA 7.1

EL STOCK DE EMISIONES DE CARBONO SE DUPLICÓ DESDE MEDIADOS DE LOS AÑOS OCHENTA



Fuente: Elaborado con base en datos proporcionados por el Departamento de Energía de Estados Unidos (2015).

En cualquier caso, la carrera hacia un mayor consumo de energía ha conducido a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos (2015), la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera está creciendo tan rápidamente que la reserva mundial de emisiones desde 1750 se ha duplicado en los últimos 30 años (véase la figura 7.1 más abajo; véase también IPCC, 2014). Richter (2014: tabla 8.1) estima que el carbón viejo y sucio sigue contribuyendo con un 40% al nivel actual de emisiones de CO₂ en el mundo, mientras que el petróleo contribuye con un 40% y el gas con un 20%.

¿Cuál es el problema si se produce tanta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera? En 2014, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático⁸⁰ publicó su quinto informe de evaluación (IPCC, 2014), que denominó “la evaluación más exhaustiva del conocimiento científico sobre el cambio climático”. El informe afirmaba tres cosas principales, que la comunidad científica considera como hechos:

- Que el cambio climático es inequívoco y que la atmósfera y el océano son, en efecto, más calientes ahora de “lo que han sido en los últimos 1.400 años”, que las cantidades de nieve y hielo han disminuido y que el nivel del mar ha aumentado.

- Que la influencia humana en el cambio climático es clara y que las emisiones antropogénicas, o inducidas por el hombre, de gases de efecto invernadero son la principal causa del calentamiento global.
- Que los cambios en el clima han tenido impactos tanto en los sistemas naturales como en los humanos.

Lo que nos preocupa aquí directamente es el impacto en los sistemas naturales y humanos. El informe del IPCC (2014) puso especial énfasis en los impactos del cambio climático en los sistemas naturales y señaló que, además de la acidificación de los océanos, los sistemas hidrológicos se han visto alterados en muchas regiones y que, como consecuencia, “muchas especies terrestres, de agua dulce y marina han cambiado su área de distribución geográfica, actividades estacionales, patrones de migración, abundancias e interacciones de especies en respuesta al cambio climático en curso”. Además, el informe también hizo hincapié en los cambios extremos en todos los componentes del sistema climático, que provocan olas de calor graves y sequías prolongadas, escasez de agua, ciclones e inundaciones, todo lo cual tiene graves repercusiones en los sistemas humanos porque afectan directamente a las zonas de producción de alimentos y obligan al desplazamiento de personas, aumentando así la vulnerabilidad de los pobres y provocando más tensiones y conflictos violentos.

Aunque la ciencia parece haber descubierto recientemente los vínculos entre los cambios en los sistemas naturales y los sistemas humanos, esto ha sido una verdad establecida, durante siglos y quizás milenios, en la sabiduría de los ancianos en muchas civilizaciones alrededor del mundo. De hecho, antes de la prevalencia de la visión actual del mundo, que se basa en lo que antes denominábamos progreso tecnológico y ciencia dura, las actitudes humanas hacia la madre naturaleza se caracterizaban en gran medida por el miedo, el respeto e incluso la reverencia, algo que todavía se encuentra en los restos de las “viejas” civilizaciones en vías de desaparición. A este respecto puede

decirse que a lo largo de su historia el ser humano siempre ha buscado comprender su entorno natural, y que todo el progreso alcanzado por la humanidad puede definirse, de hecho, como una mejor comprensión de las fuerzas de la naturaleza como resultado del avance de los conocimientos derivados de la física, la química y otras ciencias. Sin embargo, irónicamente, a medida que este conocimiento mejoraba, los humanos se sintieron empoderados y comenzaron a buscar dominar la naturaleza y a traer a todos sus constituyentes a su dominio a fin de poder explotarlos egoístamente, satisfacer sus deseos y mejorar su bienestar (véase Leiss, 1994). La lógica de la explotación capitalista proporcionó la justificación filosófica y la Revolución Industrial fue el comienzo de una nueva era que marcó una ruptura en la relación entre los seres humanos y la naturaleza (véase Magdoff y Bellamy Foster, 2011).

Los científicos tienen otro nombre para esa ruptura. Le llaman el Antropoceno (véase Crutzen, 2002). El término fue acuñado a principios del siglo XXI y se utiliza para marcar el fin de la era del Holoceno y el comienzo de una nueva época geológica en la que las actividades humanas están desempeñando un papel importante, y quizás decisivo, para forzar cambios ecológicos y geológicos (véase Clark, 2015; Steffen, Crutzen y McNeil, 2007). Tal como se ha mencionado, este proceso coincide aproximadamente con la Revolución Industrial, pero se ha intensificado en fechas recientes con una “gran aceleración” (véase la figura 7.1) debido al rápido progreso de la capacidad tecnológica y a la gran dependencia del uso de combustibles fósiles como fuente de energía (véase Bellamy Foster, Clark y York 2011). El término Antropoceno se refiere entonces a todos los impactos de los seres humanos sobre el sistema terrestre, como los que se han discutido anteriormente y que han resultado en el cambio climático y la destrucción ambiental relacionada, y tiene la clara intención de enfatizar el hecho de que la humanidad se ha convertido en —y seguirá siendo— una fuerza ambiental importante.

3. LA ECONOMÍA VERDE COMO ALTERNATIVA

La opinión predominante es que el mayor poder de los humanos para explotar los recursos de la naturaleza ha beneficiado enormemente a la humanidad y que no hay nada de qué preocuparse, lo que sugiere que simplemente hay que ignorar los peligros del cambio climático y continuar con el negocio como de costumbre (*business as usual*). Sin embargo, si examinamos la evolución de la humanidad desde la perspectiva de un ojo geológico y la preocupación de los científicos, nos damos cuenta de que la agenda del *business as usual* no es sostenible por varias razones. La más obvia es que la cantidad de combustibles fósiles es finita y no renovable, lo que exige la necesidad de fuentes de energía alternativas. La segunda razón, que preocupa a los científicos del clima y a los ambientalistas en general, es inherente al proceso de extracción de energía en sí, ya que la quema de estos fósiles libera gases a la atmósfera y provoca el tan comentado cambio climático. La acumulación de estos gases (la mayoría de los cuales tienen una vida muy larga) ha llevado a algunos científicos a hablar de la existencia de “puntos de inflexión” más allá de los cuales ya no se podrían evitar los peligros ambientales. Otros ecologistas, como los autores del informe del Club de Roma, abogaron por un cambio en la agenda del *business as usual* y pidieron que se *limitara el crecimiento* (véase Meadows *et al.*, 1972; Meadows, Randers y Meadows, 2005), mientras que Daly (1977, 1996) abogó por una *economía de estado estable* como alternativa a la “manía del crecimiento”, cuyos *costes* no deben subestimarse (Mishan, 1967). Una buena reseña de la literatura económica sobre la cuestión ambiental la ofrece Kula (1998) en su *History of Environmental Economic Thought*.

La crisis ecológica es obviamente un fenómeno planetario y los efectos negativos de la actividad industrial en un rincón del planeta se sienten en todas partes. Pero ¿qué culpa tiene un pobre agricultor africano que utiliza sus músculos para arar su campo de hortalizas? Miles de millones de personas en los países más pobres no utilizan energía fósil y, por lo tanto, no tienen ninguna responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático. Según el Banco Mundial, hoy día hay unos 3.000 millones de personas —o el 40% de la

población mundial— que todavía dependen de la leña y el carbón vegetal para cocinar y calentarse⁸¹, y casi 2.000 millones de personas no tienen acceso a ningún tipo de energía comercial. Como resultado, el consumo de energía per cápita en los países menos desarrollados es inferior a la décima parte del de los países de la OCDE⁸².

La búsqueda del crecimiento y el desarrollo industrial a través de la explotación masiva de combustibles fósiles durante más de dos siglos ha dado como resultado la creación de una riqueza y plenitud sin precedentes, pero los beneficios están lejos de ser universales: la riqueza está altamente concentrada en las manos de una minoría de individuos superricos que supervisan la reproducción del sistema capitalista y la perpetuación de sus principios individualistas. Mientras tanto, algunos de los países más pobres de África, como Ghana, se han convertido en notorios vertederos de residuos tóxicos electrónicos de las naciones más industrializadas⁸³. La gran desigualdad en la distribución de estos beneficios y la pobreza generalizada plantean otra objeción a la sostenibilidad de la agenda del *business as usual*.

Sin embargo, la objeción más condenatoria a la agenda del *business as usual* es la crítica que se hace a la idea del progreso logrado por la humanidad durante todos estos años, es decir, durante milenios. Una vez más, mirar la historia humana desde una perspectiva geológica es esclarecedor. Varios miles de años después de que los humanos descubrieran la agricultura y la ganadería, apareció una deforestación y erosión del suelo generalizadas como resultado de la aplicación de nuevas técnicas para intensificar la producción y proporcionar un mayor rendimiento en favor de una población en constante crecimiento. Las primeras civilizaciones como la sumeria tuvieron éxito en aumentar el rendimiento de sus cultivos y crear prosperidad durante un tiempo gracias a su progreso, pero no pudieron mantenerlo porque las nuevas técnicas causaron la degradación del suelo. Atrapadas entre el daño ambiental causado por ellas mismas y la restricción externa de la energía orgánica, estas civilizaciones agotaron su potencial de crecimiento y llegaron a su destino lógico: el colapso. Esta fue una de las primeras

trampas del progreso de la humanidad (véase Wright, 2004)⁸⁴. Avanzando rápidamente hacia la era del Antropoceno, los paralelismos están ahí para aquellos que quieran verlos. Nuestra civilización industrial, basada como está en la energía de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, está perturbando la inusual estabilidad climática dentro de la cual se desarrolló y la próxima trampa de progreso está por delante, tal vez no muy lejos, si la agenda del *business as usual* continúa sin restricciones.

Los ecologistas, incluidos los científicos, han desarrollado un cierto sentido de fatalismo sobre la llegada de la economía verde, viéndola como la sucesión lógica del anterior cambio de la economía orgánica a la economía fósil. Los filósofos y pensadores espirituales han iniciado un debate sobre el papel del progreso científico y tecnológico en la sociedad y han conjeturado que ya es hora de que los humanos se reconecten espiritualmente con la madre naturaleza, argumentando que es mejor dejar algunas tecnologías sin desarrollar —señalando las muchas trampas del progreso, desde la destrucción de las fuentes de alimentos (por ejemplo, la acidificación del océano, la degradación del suelo) hasta la bomba atómica—. La población en general parece haberse tomado en serio el consejo y ha comenzado a comportarse de manera ecológicamente correcta. Los Gobiernos han promulgado leyes para proteger el medioambiente y han impuesto objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los capitalistas astutos han respondido etiquetando sus productos como “respetuosos con el medioambiente” y los bioproductos y los negocios “verdes” han aparecido como un nicho rentable. Incluso las grandes compañías petroleras se han subido a bordo y han llevado a cabo agresivas campañas de *marketing* presentándose como líderes del cambio hacia una economía verde.

Con la excepción de algunos escépticos (véase Moran, 2015; Zehner, 2012), existe ahora lo que parece ser un acuerdo universal sobre la sabiduría de la transición a una economía verde. El IPCC, que es la principal organización internacional que proporciona explicaciones científicas y recomendaciones sobre el cambio climático, tiene más países

miembros (195) que las Naciones Unidas (193). Sin embargo, debajo de este aparente acuerdo hay algunas serias contradicciones y conflictos sobre cómo lograr este objetivo. Para empezar, a nivel oficial observamos que, por ejemplo, los Gobiernos de los países menos desarrollados argumentan que el cambio climático no es culpa de ellos y acusan a los países ricos de quitar la escalera, pero solo después de haber dependido de la energía de los combustibles fósiles durante siglos para lograr el tipo de prosperidad que ahora disfrutan. Estas reclamaciones forman parte de lo que se denomina deuda climática o deuda ecológica, que los países industrializados deben pagar por los daños que han infligido a todos los demás. El auge de algunos PRI como China, la India o Brasil, con su fuerte consumo de combustibles fósiles para impulsar su industrialización, está reforzando la veracidad de esta afirmación e incitando a todos los demás a seguir su camino —haciendo así que los acuerdos sobre el cambio climático, desde Kioto (1997) hasta París (2015), parezcan más bien promesas diplomáticas—. De hecho, Canadá se retiró del protocolo de Kioto en diciembre de 2011 y el Gobierno estadounidense se retiró del acuerdo de París en junio de 2017 porque, como representantes del capital monopolista mundial y del internacionalismo corporativo, consideran que estos protocolos son impedimentos costosos e innecesarios para los acuerdos comerciales.

La revolución energética solo merecerá plenamente su nombre si logra superar los combustibles fósiles y crear una economía basada en la justicia social y económica. La primera posibilidad se ha convertido ahora en claramente factible y alcanzable en un plazo relativamente corto, pero las probabilidades existentes indican que el problema de la distribución desigual seguirá siendo una característica de la nueva economía —ahora llamada capitalismo “verde”—. Por esta razón, muchos ambientalistas moderados —pero con influencia en la elaboración de políticas— están dispuestos a ir a un ritmo más lento y, por lo tanto, aceptan una “mezcla energética” que comprendería los combustibles fósiles por un tiempo aún largo, a menudo con la condición adicional de que se aumente la eficiencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La

apuesta aquí es hacer que los combustibles fósiles sean “tan verdes como sea posible” y eventualmente libres de emisiones por el poder de la tecnología; de ahí el retraso en la transición a la economía verde. Si se profundiza un poco más, se revelan algunas de las fuerzas ocultas de la inercia:

- Los capitalistas necesitan agotar sus ganancias en las inversiones de capital existentes en energía fósil y eso puede tomar décadas, e incluso más tiempo, particularmente cuando consideramos la constante necesidad de inversiones en nueva tecnología para mantenerse al ritmo de la competencia en la industria.
- Como se argumenta en el capítulo 5, las empresas privadas, por su naturaleza, son reacias a participar en investigaciones básicas o aventurarse en proyectos pioneros que podrían acelerar los descubrimientos y las mejoras en la aplicación de la energía verde. Se basan en la investigación financiada por el Gobierno, como sucede en otras áreas.
- El lento proceso permite a las corporaciones privadas evitar el alto riesgo y los altos costes de capital, y luego se trasladan de manera segura solo cuando la tecnología verde ha madurado.

Los intereses creados de los superricos —revelados a través de sus diversas iniciativas verdes (Branson, Buffet, Bloomberg, Gates)⁸⁵ — no solo despiertan sospechas, sino que también nos alertan sobre los verdaderos objetivos de su filantropía y la pretensión de salvar la tierra y sus ecosistemas. Un examen cuidadoso de las propuestas y proyectos ecológicos actuales revela que la transición hacia una economía ecológica está enmarcada dentro del mismo sistema socioeconómico y que se están desplegando esfuerzos para asegurar que el cambio se contenga y que la transición no conduzca a la apertura de una caja de Pandora. A tal efecto, por ejemplo, los inversores privados acaban de construir en el sur de Marruecos lo que se ha llamado la mayor planta solar del mundo,

financiada por el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales. El proyecto es propiedad y está gestionado por la Agencia Marroquí de Energía Solar, conocida como MASEN, una asociación público-privada que incluye al grupo saudí ACWA Power International. El MASEN también recibió importantes subvenciones en especie (tierras comunales y públicas) y se le permitió adquirir cualquier activo inmobiliario que considerara necesario para sus operaciones, incluso mediante la expropiación. La electricidad es producida por ACWA Power International y vendida a MASEN a un precio fijo de 1,6 dirhams por KWH, que es superior al precio de mercado. MASEN revende entonces la electricidad con pérdidas al Office National de l'Électricité (ONE), que la distribuye a la población en general a través de empresas privadas, y la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta está subvencionada por un préstamo del Banco Mundial y garantizada por el Gobierno marroquí⁸⁶. Suena como un esquema complicado, pero esto es el capitalismo “verde” en acción: crear riqueza para los ricos.

La transición a una economía verde es realmente inspiradora y tiene el potencial de ser transformadora. Inspiradora porque trae consigo un cúmulo de ideas nuevas y emocionantes, y transformadora porque puede cambiar las relaciones socioeconómicas existentes. Las nuevas tecnologías inspiradas en la economía verde conducirán sin duda a la creación de nuevos sectores y actividades que atraerán recursos de los antiguos y conducirán a una “destrucción creativa”. La energía de los combustibles fósiles dio poder a la naciente clase capitalista y destruyó las antiguas formas de poder y autoridad aristocrática. La transición a una economía verde es una oportunidad para acabar con algunos de los males de nuestro actual sistema capitalista desigual, pero la sociedad igualitaria no surgirá como un simple subproducto de esa transición. La nueva economía verde necesita nuevas instituciones. La historia del capitalismo muestra claramente que la clase capitalista tuvo éxito en forjar un cambio “adquiriendo un poder de acción desde el interior del nuevo sistema

energético” —y esa es una lección para el movimiento anticapitalista (Mitchell, 2011: 12)—. Los partidarios del crecimiento cero o del decrecimiento, por ejemplo, no van necesariamente tras una economía que no crece. Su preocupación está motivada por dos problemas interrelacionados: la distribución desigual de los beneficios del crecimiento y el impacto de este último en el cambio climático, es decir, buscan un crecimiento que sea coherente con la eliminación de las emisiones de gases pero, también, con una distribución igualitaria (véase Victor, 2008; Jackson y Victor, 2016). En *Greening the Global Economy*, Pollin (2015a) detalló una agenda política que puede realmente lograr ambos objetivos. Como sostiene Pollin (2015a, 2015b), una de las fortalezas de la energía verde es que puede ser intensiva en mano de obra y, por lo tanto, tiene el potencial de crear más puestos de trabajo, un componente esencial del proyecto de una economía igualitaria.

Desde nuestra perspectiva, y en línea con la tesis de este libro, la solución ideal es un cambio de sistema y no solo un cambio de la fuente de la que extraemos la energía para alimentarlo. De lo contrario, las plantas solares que generan energía limpia simplemente reemplazarán lo que entonces parecería un monumento abandonado de carbón y petróleo sucio, pero cumplirán la misma función. Por lo tanto, la alternativa es un sistema cooperativo basado en la justicia socioeconómica y el respeto por el medioambiente —un sistema que elimina la pobreza y garantiza el pleno empleo— mientras persigue la búsqueda y el desarrollo de lo que Ishida y Furukawa (2013: 124) llaman *tecnología de la naturaleza*, es decir, una tecnología que está diseñada para “aprovechar de manera inteligente los asombrosos poderes de la naturaleza” y para “apoyar un nuevo estilo de vida que sea a la vez ambientalmente sano y espiritualmente edificante”. En los capítulos anteriores, argumentamos que la lucha por la democracia económica y social se ha convertido, ahora más que nunca, en una necesidad absoluta; una condición previa para el cumplimiento de los ideales humanos de alegría y felicidad. Todos nosotros, como individuos, rechazamos instintivamente la desigualdad si el resultado afecta negativamente a nuestras vidas porque eso nos hace

infelices⁸⁷. Si nos mantenemos sobrios y adoptamos este comportamiento en todas nuestras relaciones con otros humanos, el resultado lógico y óptimo es la construcción de una comunidad en la que, observa Morgan (1877: 552), “los intereses de la sociedad son primordiales para los intereses individuales, y [en la que] ambos deben ser llevados a una relación justa y armoniosa”. El establecimiento de empresas propiedad de los trabajadores y gestionadas por ellos, que funcionan con energía verde —descrito en el capítulo 4— es quizás la mejor encarnación de dicha sociedad, la cual requiere necesariamente la eliminación de las desigualdades económicas y sociales entre todos sus miembros.

Sin embargo, debido a que vivimos de acuerdo con la ideología de la clase dominante, se nos ha enseñado que es racional ser egoísta. Hemos sido condicionados a rechazar la igualdad en el ámbito social como algo antinatural, ilusorio y utópico. En consecuencia, hemos construido una sociedad competitiva que no se preocupa por aquellos que no pueden sobrevivir a la competencia y terminan quedando al margen. Como dijo Graeber (2016), “hoy estamos viendo los efectos de una guerra implacable contra la idea misma de la política de la clase trabajadora o la comunidad de la clase trabajadora” y que “generaciones de manipulación política han convertido finalmente ese sentido de solidaridad en un flagelo”. Hemos desarrollado un sistema económico cuya dinámica requiere la explotación de otros seres humanos (así como de los animales y la naturaleza) y cuya ética acepta y justifica la exclusión.

Aquellos que se benefician de tal sistema obviamente esperan que dure para siempre. La clase dominante tiene un miedo persistente a perder su posición privilegiada, así que naturalmente se resiste a cualquier cambio (del orden social) que tenga el potencial de erosionar su poder y dominación. Los ideólogos escriben libros para convencernos de que el capitalismo y su democracia son el fin de la *historia* —lo que significa que esto es lo mejor que la humanidad puede conseguir (véase Fukuyama, 1992)⁸⁸—. Por ello, el reordenamiento de las relaciones sociales es un proceso lento y arduo. Requiere un cambio de cultura y mentalidad, un cambio de ideología y estrategia. Pero, como suele ocurrir,

solo cuando la injusticia se vuelve demasiado intolerable para nuestra capacidad de resistir, la necesidad de cambio entra en la psique social.

Mientras tanto, sin embargo, hay importantes medidas que pueden adoptarse inmediatamente para reducir el impacto negativo sobre el medioambiente. La reducción de la huella ecológica es algo positivo, aunque la reducción de las emisiones sea marginal. Los beneficios adicionales de un comportamiento ecológicamente correcto se derivan de la mayor conciencia de la población, que fomenta la necesidad y el desarrollo de tecnologías ecológicas alternativas para el suministro de energía a los hogares, el transporte, etc. La democracia en el Gobierno — porque da más poder al pueblo — es quizás la palanca más importante en este proceso de transformación. El Estado democrático que surja de tal proceso político (véase el capítulo 2) impondrá restricciones vinculantes a las emisiones de gases de efecto invernadero, utilizará los impuestos de manera inteligente para eliminar gradualmente las industrias contaminantes y fomentará un comportamiento armonioso con la naturaleza preparando así, gradualmente, el camino hacia el objetivo final de cambiar el actual régimen de acumulación capitalista.

4. CONCLUSIÓN

En los últimos años, el cambio climático se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los científicos, los responsables políticos y los ciudadanos de a pie. La mayoría de los ecologistas están dispuestos a renunciar al crecimiento económico y buscar en su lugar un desarrollo sostenible. Esta estrategia es coherente con el objetivo a largo plazo de la transición de una economía basada en los combustibles fósiles a una economía ecológica. Sin embargo, los críticos del actual régimen de acumulación capitalista argumentan que cambiar la fuente de energía no contribuirá en nada a resolver el pernicioso problema de la distribución desigual de la riqueza y los ingresos y, por lo tanto, abogan por la creación de un sistema alternativo basado en la justicia social y económica que pueda florecer en una relación armoniosa con la naturaleza. El

razonamiento de esta propuesta se basa en la idea de que la esencia de la existencia humana es simplemente la realización de vidas plenas, que dan alegría y felicidad a los individuos que conscientemente expresan un fuerte sentido de pertenencia a su comunidad y a la naturaleza. La ideología conservadora está tratando de socavar la confianza en cualquier otra cosa que no sea el capitalismo como una forma de organizar la economía y la sociedad, pero un mundo diferente y mejor es ciertamente posible. La transición hacia la economía verde es una oportunidad para trabajar por ese cambio y hacer que se produzca.

BIBLIOGRAFÍA

- ACEMOGLU, D. *et al.* (2016): “Transition to Clean Technology”, *Journal of Political Economy*, 124(1), pp. 52-104.
- ACKERMAN, F. (2008): “Climate Economics in Four Easy Pieces”, *Development*, vol. 51, pp. 325-331.
- BANCO MUNDIAL (2016): *Poverty in a Rising Africa: Africa Poverty Report*, Washington, D. C., The World Bank.
- BARNETT, S. A. y BARNETT, H. (1895): *Practicable Socialism: Essays on Social Reform*, Londres, Longmans.
- BATOR, M. F. (1958): “The Anatomy of Market Failure”, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 7, pp. 351-79.
- BELLAMY FOSTER, J.; CLARK, B. y YORK, R. (2011): *The Ecological Rift: Capitalism’s War on Earth*, Nueva York, Monthly Review Press.
- CLARK, T. (2015): *Ecocriticism on the Edge: The Anthropocene as a Threshold Concept*, Londres, Bloomsbury Academic.
- COASE, R. (1960): “The Problem of Social Cost”, *Journal of Law and Economics*, vol. 3, pp. 1-44.
- CRUTZEN, P. J. (2002): “Geology of Mankind: The Anthropocene”, *Nature*, vol. 415, p. 23.
- DALY, H. E. (1977 [1991]): *Steady-State Economics*, Washington, D. C., Island Press.
- (1996): *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*, Boston, Beacon Press.
- DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE ESTADOS UNIDOS (2015): *Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO₂ Emissions*, Oak Ridge, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory.
- EINSTEIN, A. (1949 [1984]): *The World As I See It*, Nueva York, Citadel Press.
- FUKUYAMA, F. (1992): *The End of History and the Last Man*, Nueva York, Free Press.

- GRAEBER, D. (2016): “Caring too much. That’s the curse of the working classes”, disponible en <https://bitly.ws/3dnKR>, consultada el 16 de mayo de 2016.
- HANSEN, J. *et al.* (2016): “Ice Melt, Sea Level Rise and Superstorms: Evidence from Paleoclimate Data, Climate Modeling, and Modern Observations that 2°C Global Warming Could be Dangerous”, *Atmospheric Chemistry and Physics*, 16(6), pp. 3761-3812.
- IPCC (2014): *Climate Change 2014: Synthesis Report*, Ginebra, Intergovernmental Panel on Climate Change, disponible en [c](#), consultada el 5 de febrero de 2016.
- ISHIDA, E. H. y FURUKAWA, R. (2013): *Nature Technology: Creating a Fresh Approach to Technology and Lifestyle*, Tokyo, Springer.
- JACKSON, T. y VICTOR, P. A. (2016): “Does Slow Growth Lead to Rising Inequality? Some Theoretical Reflections and Numerical Simulations”, *Ecological Economics*, vol. 121, pp. 206-219.
- KLEIN, N. (2014): *This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate*, Nueva York, Simon and Schuster Paperbacks.
- KULA, E. (1998): *History of Environmental Economic Thought*, Nueva York, Routledge.
- LEISS, W. (1990): *Under Technology’s Thumb*, Montreal y Kingston, McGill-Queen’s University Press.
- (1994): *The Domination of Nature*, Montreal, McGill-Queen’s University Press.
- LEVASSEUR, E. (1889): *La population française*, París, Rousseau.
- MAGDOFF, F. y BELLAMY FOSTER, J. (2011): *What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism: A Citizen’s Guide to Capitalism and the Environment*, Nueva York, Monthly Review Press.
- MALM, A. (2016): *Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming*, Londres, Verso.
- MANTOUX, P. (1928 [1961]): *The Industrial Revolution in the Eighteenth Century*, Londres, University Paperbacks.
- MEADOWS, D. H. *et al.* (1972): *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome Project on the Predicament of Mankind*, Nueva York, Universe Books.
- MEADOWS, D. H.; RANDERS, J. y MEADOWS, D. L. (2005): *Limits to Growth: The 30- Year Update*, Londres, Earthscan.
- MISHAN, E. J. (1967): *The Costs of Economic Growth*, Harmondsworth, Penguin Books Ltd.
- MITCHELL, T. (2011): *Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil*, Londres, Verso.
- MOKYR, J. (1999) (ed.): *The British Industrial Revolution: An Economic Perspective*, Boulder, Co. Westview Press.
- MORAN, A. (2015) (ed.): *Climate Change: The Facts*, Woodsville, Stockade Books.
- MORGAN, L. H. (1877): *Ancient Society: Or Researches in the Lines of Human Progress*

from Savagery through Barbarism to Civilization, Nueva York, Holt & Co., disponible en <https://bitly.ws/3cZDB>, consultada el 20 de marzo de 2016.

NACIONES UNIDAS (2014): “7 million premature deaths annually linked to air pollution”, *The UN and Climate Change*, <https://bitly.ws/3dnLi>, consultada el 20 de mayo de 2016.

NELL, E. J. (1998): *The General Theory of Transformational Growth: Keynes After Sraffa*, Cambridge, Cambridge University Press.

NORDHAUS, W. D. (2013): *The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World*, New Haven, Yale University Press.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2015): *Climate Change and Health*, reporte de datos n° 266, disponible en <https://bitly.ws/3dnLk>, consultada el 20 de mayo de 2016.

POLLIN, R. (2015a): *Greening the Global Economy*, Boston, MIT Press.

— (2015b): “Think We Can’t Stabilize the Climate While Fostering Growth? Think Again”, *The Nation*, disponible en <https://bitly.ws/3dnL5>, consultada el 20 de marzo de 2016.

PRESSMAN, S. (2016): *Understanding Piketty’s Capital in the Twenty-First Century*, Londres, Routledge.

RICHTER, B. (2014): *Beyond Smoke and Mirrors: Climate Change and Energy in the 21st Century*, Cambridge, Cambridge University Press.

STEFFEN, W.; CRUTZEN, P. J. y MCNEIL, J. R. (2007): “The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature”, *Ambio*, 36(8), pp. 614-621.

ToxiCity (2016), disponible en <https://bitly.ws/3dnLe>, consultada el 30 de marzo de 2016.

VICTOR, P. A. (2008): *Managing Without Growth*, Cheltenham, Edward Elgar.

WRIGHT, R. (2004 [2011]): *A Short History of Progress*, Toronto, House of Anansi Press, Inc.

WRIGLEY, E. A. (2010): *Energy and the English Industrial Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press.

ZEHNER, O. (2012) (ed.): *Green Illusions: The Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism*, Lincoln, University of Nebraska Press.

SOBRE EL AUTOR

Hassan Bougrine es doctor en Economía por la Universidad de Ottawa (Canadá) y profesor en la Laurentian University (Canadá), en la que actualmente es director del Departamento de Economía. Ha sido, asimismo, profesor visitante e investigador en varias instituciones de Europa, África y América Latina, como la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Guadalajara (México).

COLECCIÓN ECONOMÍA INCLUSIVA

La profundización de la crisis ecosocial reclama un paradigma inclusivo capaz de combinar las perspectivas de la economía política, la economía ecológica y la economía feminista ofreciendo una mirada compleja e integradora. La colección de Economía Inclusiva responde a este reto asumiendo el desafío de construir un paradigma integrador de las distintas corrientes críticas que enlace el análisis y tratamiento de los problemas actuales con las transiciones imprescindibles y urgentes hacia una forma alternativa de producir, intercambiar y distribuir los bienes y servicios necesarios para una existencia socialmente justa y ambientalmente sostenible. En esta línea, el propósito de la colección es acoger materiales teóricos y empíricos, analíticos y propositivos, españoles e internacionales, que traten de entender el tiempo que vivimos y de hacer posibles los procesos de cambio que necesitamos.

Colección Economía Inclusiva

1. Fundamentos para una economía ecológica y social

Clive L. Spash

2. Economía política feminista

Astrid Agenjo Calderón

3. Bioeconomía para el siglo XXI

Luis Arenas, José Manuel Naredo y Jorge Riechmann (eds.)

4. Desigualdades insostenibles

Lucas Chancel

5. El papel del Estado en la economía

Luis Buendía García (ed.)

6. Crisis del modo de vida imperial y transiciones ecosociales

Ulrich Brand

NOTAS

- 1 . Nelson Mandela señaló que “como la esclavitud y el *apartheid*, la pobreza no es natural. Está hecha por el hombre y puede ser superada y erradicada por las acciones de los seres humanos”. Disponible en <https://bitly.ws/3cYIL>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- 2 . Véase Banco Mundial (2022, anexo al capítulo 1, tabla 1C.1, panel c, p. 11).
- 3 . Como se ha declarado oficialmente, estos objetivos son: i) para 2030, erradicar la extrema pobreza de todas las personas en todas partes, medida actualmente como las personas que viven con menos de 1,25 dólares al día, y ii) reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales. Véase <https://bitly.ws/3cYRD>, consultado el 20 de marzo de 2016.
- 4 . La práctica de la asistencia mutua a través de la mano de obra gratuita se encuentra todavía hoy en día (2015) en las comunidades tribales del norte de África, como en Marruecos, donde los miembros de tribus normalmente cercanas geográficamente se ayudan entre sí durante las temporadas de siembra y cosecha (una práctica llamada *twiza*). El intercambio de bienes se produce en un mercado todavía semanal, aunque estas transacciones se monetizan en la actualidad.
- 5 . Esta evidencia contradice las opiniones que aseguran que el comportamiento humano innato se basa en el principio de menor esfuerzo. Véase, por ejemplo, George Zipf (1949).
- 6 . Un popular adagio mexicano dice: “Quien parte y comparte, se queda con la mayor parte”, lo que significa que “Quien divide y distribuye, se queda con la mayor parte (para sí mismo)”.
- 7 . La evidencia arqueológica de Perú y Mesoamérica indica que las viviendas de alto estatus y las residencias de elite fueron quemadas o destruidas por la población de bajo estatus en varias ocasiones (véase Haas, 1981: 91-95).
- 8 . Hayek hablaba a menudo de la necesidad de una estrategia. La creación de la Sociedad Mont Pelerin (MPS, por sus siglas en inglés) fue un medio eficaz para conseguir apoyo ideológico y financiero para la causa neoliberal.

- 9 . Por ejemplo, Friedman (1962: 177) escribe que “el sentimiento humanitario e igualitario que ayudó a producir el impuesto sobre la renta individual fuertemente graduado también ha producido una serie de otras medidas dirigidas a promover el ‘bienestar’ de grupos particulares. El conjunto de medidas más importante es el paquete etiquetado engañosamente como ‘seguridad social’. Otros son la vivienda pública, las leyes de salario mínimo, el apoyo a los precios agrícolas, la atención médica para grupos particulares, los programas de ayuda especial, etc.”.
- 10 . Connell (2010: 23) comentó que, en este sentido, “podemos decir con certeza que los neoliberales han tenido un éxito sorprendente en la creación de mercados para cosas cuya mercantilización fue una vez inimaginable: el agua potable, las partes del cuerpo y el bienestar social entre ellas”.
- 11 . Véase el estudio de McDonald y Smith (2004) sobre la implacable privatización en la Sudáfrica posterior al *apartheid*. Asimismo, el libro de Saul y Bond (2014) en el que informan sobre la masacre de Marikana. El 16 de agosto de 2012, los medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre lo que se conoció como la masacre de Marikana, en la que la policía sudafricana intervino en un conflicto laboral entre los trabajadores y los propietarios de la mina de platino Marikana (perteneciente a la British Lonmin, Inc., con sede en Londres). Los mineros en huelga exigieron un aumento salarial, pero la tragedia terminó con la policía disparando a los huelguistas, matando a 34 mineros, hiriendo a docenas y arrestando a más de 200, después de lo cual la empresa ofreció un aumento de unos 75 euros al mes. Mientras que la empresa dio un ultimátum a los trabajadores para que volvieran a trabajar, el presidente sudafricano Jacob Zuma solo pudo declarar una semana de luto nacional por los que fueron asesinados. Véase <https://bitly.ws/3d2kJ>. Tragedias similares son bastante comunes en todo el continente africano, en países como Mauritania, el Congo, Nigeria, etc.
- 12 . Véase Milton y Rose Friedman (1998: 398). Chossudovsky (2003: 21) relata que en el momento del golpe militar en Chile era profesor visitante en la Universidad Católica y que apenas una semana después del golpe, varios de sus colegas de los Chicago Boys del Departamento de Economía fueron nombrados en puestos clave del Gobierno militar.
- 13 . El uso de la violencia estatal para alcanzar los objetivos neoliberales es muy importante en los países en desarrollo de Asia y África. Por ejemplo, en su libro *Capitalism: A Ghost Story* (2014), Roy informa que la privatización en la India va acompañada de niveles espantosos de diferentes tipos de violencia corporativa y estatal contra los pobres y los vulnerables de la sociedad. En el caso de Ucrania, Chossudovsky (2014: 1-2) señaló que la implementación de la agenda neoliberal fue llevada a cabo por grupos neonazis que tienen estrechos vínculos con las instituciones internacionales. Escribió que “para alcanzar sus objetivos no expresados, el FMI y el Banco Mundial —a menudo en consulta con el Tesoro de EE UU y el Departamento de Estado— ejercerán el control sobre los nombramientos clave, incluyendo el ministro de Finanzas, el gobernador del banco central, así como los altos funcionarios a cargo del programa de privatización del país. Estos nombramientos clave requerirán la aprobación (extraoficial) del Consenso de Washington antes de que se lleven a cabo las negociaciones relativas a un

acuerdo de rescate multimillonario del FMI”.

- 14 . Cuadros estadísticos disponibles en <https://bitly.ws/3d5qg>.
- 15 . Los primeros filósofos de la Ilustración, como John Locke, eran más críticos con la autoridad política cuando esta contradecía la “ley de la naturaleza”, precisamente por su profunda creencia en el cristianismo. Comentando las opiniones de Locke, Bristow (2011: 9) escribió que, según Locke (1690), “la ley de la naturaleza ‘enseña a toda la humanidad [...] que, siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones [y que] [l]a ley de la naturaleza es una regla eterna para todos los hombres’. Por consiguiente, cuando el poder político establecido viola esa ley, el pueblo está justificado para derrocarlo”.
- 16 . Sartre debió leer sin duda alguna el libro de Víctor Hugo (1883: 179) *L’homme qui rit*, donde Hugo escribió que “c’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches”, es decir, “el paraíso de los ricos está hecho del infierno de los pobres”.
- 17 . Es interesante observar aquí que, en un estudio empírico, Galbraith (2012: 108-9) encuentra que los Estados comunistas tienen menos desigualdad que otros tipos de regímenes.
- 18 . En efecto, en la contraportada del libro de Hansen (1991) se lee: “La democracia ateniense de los siglos V y IV a. C. es el ejemplo más famoso y quizás el más casi perfecto de democracia directa”.
- 19 . En el siglo XIX, Henry George (1879: 161-162) resumió mejor esta situación cuando escribió: “Tomemos ahora [...] a un hombre de negocios testarudo, que no tiene teorías, pero que sabe cómo hacer dinero. Dígale: ‘Aquí hay un pequeño pueblo; en diez años será una gran ciudad —en diez años el ferrocarril habrá tomado el lugar de la diligencia, la luz eléctrica de la vela; abundarán la maquinaria y las mejoras que multiplican enormemente el poder efectivo del trabajo. En diez años, ¿el interés será mayor?’. Él te dirá, ‘¡No!’ ‘¿Acaso serán más altos los salarios del trabajo común’. Él te dirá: ‘No, el salario del trabajo común no será más alto...’ ‘¿Qué será entonces más alto?’. ‘La renta, el valor de la tierra. Ve, consíguete un trozo de tierra y mantén la posesión’. Y si, bajo tales circunstancias, sigues su consejo, no necesitas hacer nada más. Puedes sentarte a fumar tu pipa [...] y sin hacer un solo trabajo, sin añadir un ápice de riqueza a la comunidad, en diez años serás rico”.
- 20 . Sobre la privatización bajo el neoliberalismo en África, véase Saul y Bond (2014) y Evers Seagle y Keijtenburg (2013); para la India véase, entre otros, Roy (2014).
- 21 . Polanyi (1944: 35) describió la situación de la siguiente manera: “Los cercamientos han sido llamados apropiadamente una revolución de los ricos contra los pobres. Los señores y nobles estaban alterando el orden social, rompiendo las antiguas leyes y costumbres, a veces con violencia, a menudo con presiones e intimidaciones. Estaban literalmente robando a los pobres su parte en el común, derribando las casas que, por la fuerza de la costumbre hasta entonces inquebrantable, los pobres habían considerado durante mucho tiempo como suyas y de sus

herederos. El tejido de la sociedad se estaba alterando [...] poniendo en peligro las defensas del país [...] acosando a su gente y convirtiéndola de decentes campesinos en una turba de mendigos y ladrones”.

22 . Wray (2011) ofrece un análisis exhaustivo de los acuerdos fraudulentos en torno a la crisis de las hipotecas de alto riesgo y se refiere a toda la situación como la “madre de todos los fraudes”.

23 . Amartya Sen, premio nobel de economía en 1998, también fue galardonado con el Premio John Maynard Keynes de Charleston-EFG en 2015. En esa ocasión comentó: “El mundo en el que vivimos hoy en día se ha hecho mucho más seguro gracias a la sabiduría económica que Keynes nos trajo durante los oscuros días de la Gran Depresión. Cuando esa sabiduría es ignorada en parte o totalmente en la elaboración de la política económica, se hace sufrir innecesariamente a un gran número de personas: me temo que hemos visto varios ejemplos deprimentes de ello en los últimos años, especialmente en Europa, con un enorme costo humano”. Véase <https://bitly.ws/3d6KH>, consultado el 10 de febrero de 2015.

24 . Tocqueville (1840: 1141) apuntó, sin embargo, que “si América alguna vez experimenta grandes revoluciones, estas se producirán por la presencia de los negros en el territorio de Estados Unidos: es decir, que no será la igualdad de condiciones sino, por el contrario, la desigualdad de condiciones la que las produzca”.

25 . Luego de estos comentarios, que suscitaron controversia e indignación, Mahfouz Saber se vio obligado a dimitir el 11 de mayo de 2015. Es irónico que el actual Gobierno reclame haber llegado al poder mediante el levantamiento popular de 2011 cuyos objetivos declarados son la democracia y la justicia social. Véase <https://bitly.ws/3d7eJ>, consultado el 20 de marzo de 2016.

26 . Véase Smithin (2016a, 2016b); Rochon y Rossi (2007, 2013); Parguez y Seccareccia (2000); Moore (1988); Lavoie (1985).

27 . Tal como señalan Godley y Lavoie (2007: 28), y Lavoie en un comentario privado, este resultado no se mantiene si las empresas, por ejemplo, evalúan sus pasivos emitidos según su costo histórico, es decir, “al precio pagado *en el momento en que tales activos y pasivos fueron adquiridos*”, mientras que los hogares evalúan sus correspondientes derechos (activos) a los precios corrientes del mercado.

28 . Discurso de Mervyn King, discurso número 613 del 23 de octubre de 2012 (p. 3), disponible en <https://bitly.ws/3d7qB>, consultado el 20 de marzo de 2016.

29 . Entrevista en el programa de la CBS *60 minutos*, respondiendo a la pregunta de Scott Pelley. Citado en Mosler (2010: 15).

30 . En respuesta a las preguntas del Comité Permanente de la Cámara de los Comunes sobre Banca y Comercio. En las *Actas del Comité Permanente de la Cámara de los Comunes sobre*

Banca y Comercio, Ottawa, Edmond Cloutier, 1945, p. 1051.

- 31 . En respuesta a las preguntas de los miembros del Comité de Banca y Moneda de la Cámara de Representantes que querían saber cómo paga el Gobierno sus gastos. En la *Audiencia ante el Comité de Banca y Moneda de la Cámara de Representantes*, Octavo Congreso, Washington, D. C., United States Government Printing Office, 1947, p. 52.
- 32 . Los bancos comerciales pueden convertir parte de sus reservas en efectivo para satisfacer la demanda de sus clientes de este tipo de tenencia de dinero, la cual es a menudo necesaria para transacciones más pequeñas o en situaciones en las que el sistema de pagos no está plenamente desarrollado.
- 33 . Como se explicó anteriormente en los capítulos 1 y 2, la posición del Estado como agente subordinado y aliado de la clase económicamente dominante es una característica de la mayoría de los tipos de organizaciones económicas y sociales. Ya en los años treinta, el historiador Gaetano Salvemini (1936: 416) criticó la economía fascista señalando que “en la Italia fascista el Estado paga por los errores de la empresa privada [...] El beneficio es privado e individual. La pérdida es pública y social”.
- 34 . En su *Informe sobre la mano de obra del presidente*, John F. Kennedy (1963: 245) insistió en que “el desempleo es nuestro problema económico número uno. Desperdicia la vida de hombres y mujeres, privándolos a ellos y a la nación”.
- 35 . La institución del mercado es tan impersonal y lo que dicta se presenta como un resultado natural. También es más difícil rebelarse contra un sistema que contra una persona. Sin embargo, el uso de la fuerza y la violencia por parte del Estado para suprimir la disidencia y la oposición también es común en las democracias modernas.
- 36 . Esto no tiene nada que ver con la historia apócrifa del trueque generalizado, ya que las transacciones económicas en estas sociedades eran meramente expresiones de obligaciones sociales bajo la forma de mutuo intercambio de obsequios, sin expectativas de ganancia personal. En su trabajo pionero sobre las economías primitivas, el antropólogo Thurnwald (1938: 13) observa que “la característica distintiva de las economías primitivas es la ausencia de cualquier deseo de obtener beneficio alguno de la producción o el intercambio [...] Los regalos generosos eran incuestionablemente recibidos con gratitud, aunque esta prodigalidad era generalmente obsequiada con la correspondiente esplendidez”.
- 37 . Las figuras 1.1 y 1.2 del capítulo 1 muestran quién obtiene qué y proporcionan evidencia del crecimiento de la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza en muchos países.
- 38 . Las sugerencias de Veblen (1899) sobre el comportamiento emulativo pueden no materializarse a menos que exista un mínimo de poder adquisitivo. En efecto, Veblen (1899) consideraba la exclusión de las clases bajas como un medio para garantizar el poder y mantener el estatus social de lo que llamaba la “clase ociosa”, ya que es a través de esta relación de poder que la riqueza es realmente valorada. Impedir que las clases bajas tengan

acceso a un aumento del consumo y de la riqueza y mantener a esta última concentrada en manos de la clase ociosa es crucial para el proceso de valorización de la riqueza.

- 39 . La idea de que la riqueza debería ser compartida equitativamente fue defendida también por economistas clásicos como Adam Smith (1997: 138), quien consideraba que la distribución desigual de la riqueza constituye “la mayor y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales”. Argumenta que, puesto que los trabajadores son el principal factor de producción, deberían disponer de una parte justa: “Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Es, además, equitativo que quienes alimentan, visten y albergan al pueblo entero participen del tal modo en el producto de su propia labor que ellos también se encuentren razonablemente alimentados, vestidos y alojados (Smith: 1979: 77).
- 40 . De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), había 60 millones de personas desplazadas por la fuerza a finales de 2014; sin embargo, el número debe ser mucho más alto en la actualidad. La información a la fecha puede verse en <https://bitly.ws/3dfJe>.
- 41 . En palabras de Quirrell a Harry: “El bien y el mal no existen, sino solamente el poder y aquellos que son suficientemente débiles para buscarlo” Rowling (1998: 291).
- 42 . La expresión es empleada por Boniface (2011) para describir a los intelectuales comprometidos con la propagación de “verdades falsas”.
- 43 . Entre los galardonados con esta distinción se encuentran Noam Chomsky, Eduard S. Herman y Juliet Schor.
- 44 . Véase la base de datos del US Bureau of Labour Statistics en <https://bitly.ws/3dfRw>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- 45 . Este doble lenguaje ha molestado a muchos economistas, incluyendo al premio nobel William Vickery (1994), quien se sintió obligado a regresar a la definición ofrecida anteriormente por William Beveridge de conformidad con la cual el pleno empleo significa que “debe haber, cuando menos, tantos puestos de trabajo vacantes, como gente desocupada buscando trabajo”. De este modo, Vickery redefine el concepto como “empleo repleto” (*chock full employment*)—situación en la cual una persona “puede encontrar trabajo con un salario digno en 48 horas” (1994: 40)—.
- 46 . Por ejemplo, Field (2012) concluye que, durante más de un siglo, los datos macroeconómicos de EE UU indican que existe una relación estable entre desempleo y productividad, por lo cual una baja del desempleo del 1% está asociada con 0,9% de incremento en la tasa de crecimiento anual, y viceversa.
- 47 . Guérin (1945: 320) observa que “el [fascismo] ciertamente pone de rodillas a las masas bajo su yugo, pero igualmente hace de ellas un medio de apoyo”.

- 48 . Stuart White (2008: 1) en la *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, editada por Edward N. Salta, define el mínimo social como “el paquete de recursos suficientes, bajo las circunstancias de una sociedad dada, capaces de permitir a alguien alcanzar un mínimo de vida decente. Definimos un ‘régimen de política social mínima’ como un conjunto de políticas e instituciones que sirven para asegurar un acceso razonable a este mínimo social a todos los miembros de la sociedad”. Disponible en <https://bitly.ws/3dg3d>, consultada el 20 de marzo de 2016.
- 49 . Véase Mosler (2010); Wray (1998b); Bougrine y Seccareccia (2002); Smithin (2003-4).
- 50 . Tal como lo planteó Kalecki (1943: 325): “Esto proporciona a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental. Cualquier cosa que pueda sacudir el estado de confianza debe ser cuidadosamente evitada porque puede causar una crisis económica. Pero una vez que el Gobierno aprende el truco de elevar el empleo a través de sus propias compras, este poderoso dispositivo de control pierde su eficacia”.
- 51 . El término puede entenderse como “inventores” o “manipuladores creativos” [n. del t.].
- 52 . Wright (2008), por ejemplo, señaló que, si los europeos no hubieran conquistado las Américas, hubieran utilizado esclavos africanos y hubieran adaptado los cultivos altamente productivos del Nuevo Mundo para su uso en las granjas europeas, la Revolución Industrial habría sido mucho más lenta. Wrigley (2010: 34) añadió que “sin los sorprendentes aumentos en la productividad de la mano de obra en la agricultura que tuvieron lugar en la Inglaterra moderna temprana es muy dudoso que la Revolución Industrial hubiera ocurrido”. En su libro *Great Divergence: China and Europe*, Pomeranz (2000: 264) argumentó que “Europa occidental fue capaz de escapar del callejón sin salida protoindustrial y transferir trabajadores artesanales a las industrias modernas a medida que la tecnología estaba disponible”. Podría hacerlo, en gran parte, porque la explotación del Nuevo Mundo hizo innecesaria la movilización de una enorme cantidad de trabajadores adicionales que se habrían necesitado para utilizar la propia tierra de Europa de manera mucho más intensiva y ecológicamente sostenible”.
- 53 . Señalando que el conocimiento es la “búsqueda de la verdad”, Foucault (1980: 131-132) escribió que “en sociedades como la nuestra, [la verdad] se produce y se transmite bajo el control, dominante, si no exclusivo, de unos pocos grandes aparatos políticos y económicos (universidad, Ejército, escritura, medios de comunicación); [...] es la cuestión de todo un debate político y una confrontación social (luchas ‘ideológicas’)”.
- 54 . Mantoux (1928: 365-366) señaló que estos eran “terratenientes, banqueros y comerciantes: salvo algunas excepciones, todo ejemplo de capitalismo anterior a la Revolución Industrial puede clasificarse bajo una u otra de estas tres cabezas”.
- 55 . Michael Polanyi es hermano de Karl Polanyi, aunque en esta publicación en particular el nombre se escribe de forma diferente.
- 56 . Este éxito, que coincide con el triunfo de la ideología del libre mercado, requirió algunas transformaciones profundas en la sociedad para convertirla en una sociedad de mercado, y no

está exento de desafíos. Como señaló Karl Polanyi (1944), y posteriormente enfatizó Jessop (2007), ha llevado a algunos “contramovimientos protectores” sociales que buscan preservar la naturaleza y mantener el conocimiento dentro del ámbito público. Por ejemplo, como reacción contra la proliferación de los derechos de propiedad intelectual, existen actualmente algunos movimientos fuertes que abogan por el OA (*open access*, “acceso abierto”) a la ciencia, como Sci-Hub, el *software* libre [Ubuntu, n. del t.] y de código abierto (FOSS), el desarrollo abierto en biotecnología (OpenBio) o la última iniciativa de ciencia abierta de la UE que da acceso libre a los documentos científicos a partir del año 2020.

57 . Si el progreso significa una mayor riqueza que se traduce en un mayor consumo de nuevos bienes que son posibles gracias a técnicas y procesos innovadores, Perrotta (2003) ha demostrado que, de hecho, a lo largo de la historia de la humanidad desde la antigüedad, el consumo de nuevos bienes ha sido siempre un privilegio de las clases sociales más altas y que solo con el tiempo estos bienes se vuelven disponibles para las clases medias y luego para las más bajas. Esto siguió siendo cierto en las sociedades capitalistas modernas, donde el uso de las nuevas tecnologías se concentra esencialmente en las naciones ricas.

58 . Véase Rodney (1972); Maddison (2006); Vries (2015); Studer (2015).

59 . En el caso de la India, Dutt (1992: 147) señaló que “cuando los británicos comenzaron su colonización, la India era un exportador de bienes industriales y un importador de bienes primarios e intermedios. Antes de 1800, la India era el principal proveedor de textiles de algodón y seda (ropa fina y de uso cotidiano para las masas) en los mercados internacionales, incluyendo Europa; los textiles indios eran considerablemente más baratos que las lanas británicas debido a los salarios más bajos y a las ventajas técnicas de la India”. Pero “el patrón de comercio de India cambió drásticamente después de unas pocas décadas de dominio colonial [...]”, ya que “las industrias artesanales indias se vieron afectadas negativamente [...]” y los artesanos fueron sometidos a “azotes, encarcelamiento y cosas peores (se ha documentado el corte de los pulgares de las bobinadoras de seda cruda)”.

60 . Para aquellos que tienen algunas dudas acerca de los objetivos e intenciones del colonialismo, Cecil Rhodes, el “fundador” de la ex Rodesia, actualmente Zimbabwe, descaradamente los resumió de la manera siguiente: “Debemos encontrar nuevos territorios de los cuales podamos obtener materias primas fácilmente y, al mismo tiempo, explotar la mano de obra esclava barata que se encuentra disponible en los nativos de las colonias. Las colonias deben, también, ser un vertedero de los excedentes de mercancías producidos en nuestras fábricas”. Citado en Ponting (2007).

61 . Véase Vries (2015: 1-2); Maddison (2006: 119); Amin (2009); Mokyr (1990: capítulo 9). Fernand Braudel denuncia la visión eurocentrista en la que han incurrido no pocos historiadores y científicos sociales mediante el epígrafe empleado en su célebre texto *El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II* (2016): “Hasta nuestros días no se ha descubierto en el Nuevo Mundo ningún Mediterráneo como el que hay entre Europa, Asia y África [...]” [n. del t.].

- 62 . Por ejemplo, según el Banco Mundial, en 2009 más del 76% de la población de Nigeria vivía con menos de 3,10 dólares al día. Nigeria es uno de los principales productores de petróleo del mundo, con un promedio de 2,5 millones de barriles diarios.
- 63 . Por ejemplo, para asegurar su control sobre el nacimiento del río Nilo, Gran Bretaña construyó una línea de ferrocarril que va desde la costa a través de Kenia hasta la región de los Grandes Lagos de África central. Jedwab, Kerby y Moradi (2015: 3) muestran que este ferrocarril en Kenia “tuvo un fuerte impacto en el asentamiento europeo, estableciendo ciudades desde las que los colonos europeos gestionaban sus granjas comerciales y se especializaban en actividades urbanas”.
- 64 . Donaldson y Hornbeck (2016), entre otros, han documentado el importante impacto de los ferrocarriles del siglo XIX en el crecimiento económico de Estados Unidos.
- 65 . El saqueo y la violencia no son cuentos de tiempos pasados. Durante los primeros 15 años del siglo XXI, hemos sido testigos de las invasiones militares y la destrucción bárbara de varios países y sus antiguas civilizaciones (Irak, Libia, Siria, etc.) por parte de Estados Unidos y sus aliados con el fin de asegurar el acceso a recursos vitales como el petróleo y el gas. En una clara referencia a la conquista de Julio César, quien declaró *veni, vidi, vici* (“vinimos, vimos, conquistamos”), la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, que estaba en Libia para supervisar el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011, imitó al emperador romano y lo anunció con malicia en la televisión: “Vinimos, vimos, murió”, disponible en <https://bitly.ws/3dhGX>, consultado el 20 de marzo de 2016. Es irónico que en medio de una permanente y salvaje guerra que se ha venido desarrollando desde el cambio de siglo y a pesar de toda la destrucción y pérdida de vidas que se ha producido, Barack Obama declarara que estamos “viviendo en la época más pacífica, más próspera y más progresiva de la historia de la humanidad”: <https://bitly.ws/3dhHR>, consultado el 25 de abril de 2016.
- 66 . Existe traducción al español de Siglo XXI [n. del t.].
- 67 . La Conferencia de Bandung (1955) pidió poner fin al colonialismo y alentó a los nuevos países independientes de África y Asia a emprender la industrialización y el desarrollo mediante la intervención del Estado, la negociación de acuerdos comerciales más justos y un sistema financiero internacional favorable mediante, entre otras cosas, el establecimiento de un fondo especial de las Naciones Unidas para el desarrollo. Véase el comunicado completo aquí <https://bitly.ws/3dmNW>, consultado el 5 de mayo de 2016.
- 68 . Véase, entre otros, Smithin (2001); Comisión de Expertos de la ONU (2009); UNCTAD (2009); Stiglitz y Greenwald (2010); Hudson (2010); Rossi (2015).
- 69 . En los primeros días de los preparativos para la negociación de un nuevo sistema monetario internacional, Keynes (1942: 152) se mostró reacio a participar en un “bloque angloamericano” y quiso incluir el mayor número posible de delegaciones (por ejemplo, Rusia, los Dominios británicos, el resto de Europa) en la formulación del plan para que tuviera un

“carácter internacional”, pero, por razones prácticas, estuvo de acuerdo en que “la constitución real de los planes particulares debe ser acordada y establecida por el menor número de cocineros posible, con los demás invitados a la mesa después de haber oído el caldo”. Irónicamente, incluso la posición británica, representada por J. M. Keynes, fue dejada de lado por la delegación de Estados Unidos (véase Rosenberg y Schuler, 2012).

70 . Keynes (1942: 169) afirmó muy claramente que “necesitamos un sistema que posea un mecanismo de estabilización interna, mediante el cual se ejerza presión sobre cualquier país cuya balanza de pagos con el resto del mundo se esté desviando del equilibrio en cualquier dirección, a fin de evitar movimientos que deban crear para sus vecinos una falta de equilibrio igual pero opuesta”.

71 . En este contexto, cabe señalar que los derechos de propiedad se extienden ahora al espacio ultraterrestre. El Congreso y el Senado de Estados Unidos aprobaron la llamada Ley del Espacio (H.R.2262) en 2015, que fue firmada por el presidente y que permite a las empresas estadounidenses “dedicadas a la recuperación comercial de fragmentos de asteroides o de restos espaciales tener derecho a cualquier componente de asteroides o recurso espacial obtenido, incluso para poseerlo, transportarlo, utilizarlo y venderlo de acuerdo con la legislación aplicable [...]”. Véase los detalles de la ley en el sitio web del Congreso: <https://bitly.ws/3dnh2>, consultado el 20 de mayo de 2016.

72 . Existen muchas controversias relacionadas con productos industriales y químicos que son dañinos para la salud humana, el bienestar de otras especies y los ecosistemas. Un caso notorio es el de un plaguicida producido por Monsanto y autorizado para su uso en Canadá en 1969. Más tarde se determinó que presentaba un riesgo inaceptable para la salud de los seres humanos y fue prohibido en 1985, pero Monsanto apeló la decisión y presentó pruebas suministradas por Industrial Bio-Test Laboratories, que fue una empresa privada que realizaba análisis de laboratorio por contrato. La decisión fue revocada y el pesticida volvió al mercado. Para más detalles, véase Leiss (1990: 145).

73 . La palabra “orgánico” se utiliza comúnmente para designar productos o procesos respetuosos con el medioambiente, pero ese no es necesariamente el significado que se le da a una “economía orgánica”. En una economía orgánica, la energía se deriva principalmente de la fotosíntesis de las plantas, que se basa en la quema de una gran cantidad de bosques —y eso puede llevar a la deforestación—. Por el contrario, una “economía fósil” obtiene su energía del uso de combustibles fósiles excavándolos del subsuelo y el consumo de estos combustibles fósiles, a saber, carbón, petróleo y gas natural, produce emisiones de dióxido de carbono y otros gases que han sido vinculados al llamado efecto invernadero y, por ello, causantes del cambio climático (véase Malm, 2016).

74 . Levasseur (1889: 74) consideraba que las máquinas de vapor eran “verdaderos esclavos, los más sobrios, dóciles e incansables que uno pueda imaginar” (*de véritables esclaves, les plus sobres, les plus dociles, les plus infatigables que l’imagination puisse rêver*), también citado en Wrigley (2010: 28).

- 75 . Mokyr (1999: 20) piensa que la máquina de vapor fue “conceptualmente uno de los inventos más radicales jamás realizados”.
- 76 . Los científicos climáticos están de acuerdo en que ha habido una estabilidad climática inusual durante este periodo. Nordhaus (2013) ha hecho la interesante observación de que el surgimiento de nuestra civilización coincide con esta estabilidad climática y que cualquier cambio dramático en el clima —como el que se produzca por el calentamiento global— traerá consigo el caos y la inestabilidad, lo que puede amenazar no solo a la civilización, sino también al florecimiento de la vida y a la existencia de la propia humanidad.
- 77 . Wrigley (2010: 242) estima que “la tasa de crecimiento del consumo de carbón solo varió ligeramente durante todo el periodo [1560-1850], con un promedio de alrededor del 1,3% anual, lo que implica una duplicación aproximadamente cada medio siglo. Con las materias primas orgánicas, una tasa de crecimiento tan alta como esta causaría muy pronto una presión intolerable sobre la tierra y un fuerte aumento de los precios. Si, por ejemplo, el uso de la madera aumentara a un ritmo similar, sería necesario dedicar 16 veces más terreno a los bosques después de dos siglos de crecimiento que el que se había necesitado al principio del periodo, ya que duplicar cada medio siglo implica esta escala de expansión. En las economías orgánicas este tipo de crecimiento es físicamente imposible”.
- 78 . Richter (2014: 20) ha resumido este proceso de la siguiente manera: “La temperatura media de nuestro planeta está determinada por un equilibrio que se establece entre la energía procedente del Sol y la energía irradiada hacia el espacio. Lo que entra depende de la temperatura del Sol, y lo que sale depende de la temperatura de la superficie de la Tierra y de los obstáculos en la atmósfera que bloquean partes de la radiación”. El autor añade que “A lo largo de la historia de la Tierra, la temperatura media ha variado considerablemente a medida que la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha cambiado y a medida que la radiación del Sol ha cambiado. Hoy en día, la preocupación por el calentamiento global se centra en la actividad humana que causa un aumento de algunos gases de efecto invernadero. La lógica es simple: se sabe que los gases de efecto invernadero aumentan la temperatura, y si añadimos más de aquello que aumenta la temperatura, aumentaremos más la temperatura. Cuánto más, es la pregunta que miles de científicos están tratando de responder” (ibíd., pp. 25-26).
- 79 . Véase Indicadores de Desarrollo Mundial, <https://bitly.ws/3dnwA>.
- 80 . El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente y la Organización Meteorológica Mundial en 1988, se ha convertido en la principal organización internacional que ofrece explicaciones científicas sobre el cambio climático y sus repercusiones ecológicas y socioeconómicas. Según su sitio web, el IPCC cuenta con 195 países como miembros y miles de científicos de todo el mundo contribuyen a su trabajo: <http://www.ipcc.ch/>, consultado el 20 de marzo de 2016.

81 . Aunque la tala de árboles y arbustos para obtener combustible es una actividad de mera supervivencia, en África, por ejemplo, es uno de los factores graves que contribuyen a la degradación de la tierra y a la desertificación.

82 . Disponible en <https://bitly.ws/3dnEv>, consultado el 20 de marzo de 2016.

83 . Véase el documental *ToxiCity* (2016), disponible en <https://bitly.ws/3dnEK>.

84 . Wright (2004: 5), quien señala muchas trampas del progreso e invita a los humanos a aprender de su pasado, escribió: “El progreso tiene una lógica interna que, más allá de la razón, puede llevar a la catástrofe. Una seductora estela de éxitos puede terminar en una trampa. Tomemos las armas, por ejemplo. Desde que los chinos inventaron la pólvora, se han producido grandes avances en la fabricación de explosivos: desde el petardo hasta el cañón, desde el petardo hasta el proyectil de alto poder explosivo. Y justo cuando los altos explosivos estaban alcanzando un estado de perfección, el progreso encontró la explosión infinitamente más grande en el átomo. Pero cuando el estallido que podemos hacer puede volar nuestro mundo por los aires, hemos progresado demasiado”. A este respecto, es importante señalar que Albert Einstein, uno de los inventores de la bomba atómica, se opuso firmemente a ella y a la guerra en general, advirtiendo de la catástrofe y abogando por la destrucción de esta arma (véase Einstein, 1949: 6-7).

85 . Varios multimillonarios tomaron iniciativas supuestamente ecológicas, pero, de hecho, diseñadas para impulsar la rentabilidad de sus negocios. Véase Klein (2014: capítulo 7). La última iniciativa de Bill Gates, denominada *the breakthrough energy coalition*, incluye a otros multimillonarios cuya misión es suministrar al mundo “energía fiable, asequible y que no produzca carbono”. Véase <https://bitly.ws/3dnJ4>, consultada el 20 de marzo de 2016.

86 . Los detalles están disponibles en el sitio web de la Agencia Francesa de Desarrollo: <https://bitly.ws/3dnKi>, consultado el 20 de marzo de 2016.

87 . Los psicólogos han realizado experimentos dando a dos individuos una cantidad fija de dinero para que la dividan entre ellos. Las reglas son tales que una persona propone una división y la segunda puede aceptarla o rechazarla. Si la división es aceptada, entonces cada individuo obtiene la parte propuesta. Si la división es rechazada, entonces se les quita el dinero y nadie recibe nada. Como dice el adagio mexicano, se espera que el que divide y distribuye se quede con la mayor parte para sí mismo, digamos 9 de 10, mientras que se espera que la segunda persona acepte lo poco que se le dé, digamos 1, porque es gratis y mejor que nada. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que la mayoría de las personas rechazan tales divisiones desiguales sobre la base del principio de equidad: la segunda persona obviamente aceptaría una división de 5-5 pero, en su defecto, la mayoría de las personas optan por 0-0 en lugar de 9-1 (véase Pressman, 2016: 42 y las referencias en el mismo).

88 . Wright (2004: 6) señaló que “el ingenuo triunfalismo de Fukuyama fortaleció la creencia, principalmente en la derecha política, de que aquellos que no han elegido el verdadero camino

a seguir deben hacerlo por su propio bien —por la fuerza, si es necesario—. Esta es la filosofía de los neoconservadores que utilizan el poder militar para invadir países y destruir sistemáticamente sus civilizaciones milenarias, con el pretexto de ayudarles a adoptar valores democráticos (por ejemplo, Irak, Siria, Libia, etc.).